

# **PROPUESTAS CORRELACIONADAS CON LA LEY DE AMPARO VIGENTE**

## **TOMO III**

### **COMISION DE ANALISIS DE PROPUESTAS PARA UNA NUEVA LEY DE AMPARO**

Coordinador General

Ministro Humberto Román Palacios  
Ministro Juan N. Silva Meza  
Germán Fernández Aguirre  
José Ramón Cossío Díaz  
Cesar Esquinca Muñoa  
Héctor Fix-Zamudio  
Javier Quijano Baz  
Manuel Ernesto Saloma Vera  
Arturo F. Zaldivar Lelo de Larrea



*Centro de Consulta de  
Información Jurídica*

**Publicada**

*Febrero-2000*



**PROPUESTAS CORRELACIONADAS CON LA LEY DE AMPARO  
VIGENTE**

**I N D I C E**

**TOMO III**

Página

**TITULO SEGUNDO**

**DEL JUICIO DE AMPARO ANTE LOS JUZGADOS DE  
DISTRITO**

**Capítulo I**

**De los actos materia del juicio**

Artículo 114.....	1410
Artículo 115.....	1485

**Capítulo II**

**De la demanda**

Artículo 116.....	1487
Artículo 116 bis.....	1518
Artículo 117.....	1519
Artículo 118.....	1526
Artículo 119.....	1528
Artículo 120.....	1529
Artículo 121.....	1532

Capítulo III

De la suspensión del acto reclamado

Artículo 122.....	1533
Artículo 123.....	1547
Artículo 124.....	1591
Artículo 124 bis.....	1632
Artículo 125.....	1658
Artículo 126.....	1662
Artículo 127.....	1664
Artículo 128.....	1665
Artículo 129.....	1666
Artículo 130.....	1668
Artículo 131.....	1677
Artículo 132.....	1702
Artículo 133.....	1707
Artículo 134.....	1709
Artículo 135.....	1710
Artículo 136.....	1717
Artículo 137.....	1748
Artículo 138.....	1750
Artículo 139.....	1796
Artículo 140.....	1809
Artículo 141.....	1812
Artículo 142.....	1813
Artículo 143.....	1814
Artículo 144.....	1821



Capítulo IV

De la substanciación del juicio

Artículo 145.....	1822
Artículo 146.....	1825
Artículo 147.....	1842
Artículo 148.....	1851
Artículo 149.....	1853
Artículo 150.....	1872
Artículo 151.....	1880
Artículo 152.....	1907
Artículo 153.....	1914
Artículo 154.....	1916
Artículo 155.....	1917
Artículo 156.....	1948
Artículo 157.....	1953



## **TITULO SEGUNDO**

### **DEL JUICIO DE AMPARO ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO**

#### **Capítulo I**

#### **De los actos materia del juicio**

**Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de distrito:**

**I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso;**

#### **PROPUESTAS**

El Poder Judicial Federal, es el organo de control constitucional en el sistema juridico mexicano Esa función, básicamente se lleva a cabo por los jueces de distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los Tribunales Colegiados y los Unitarios, participan minimamente en esa

función. Su principal cometido es el control de legalidad. Las anteriores afirmaciones pueden discutirse, sin embargo, las objeciones se reducen, en tanto se estipule como control constitucional la función de revisar la validez de las leyes, entendidas tanto formal, como materialmente. Es decir, el control constitucional es una función de revisión de las leyes, en tanto que la violación a los artículos 14 y 16 constitucionales tiene normalmente como criterio de apreciación, el cumplimiento de las leyes ordinarias.

No hay duda de que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como nuestro máximo tribunal, debe corresponderle la función señalada, sin embargo, lo que ya no queda tan claro, es por qué los jueces de distrito participan de esa tarea; sobre todo, si se atiende a que no son los únicos órganos federales.

Por otro lado, parece un hecho el que la mayoría de los titulares de tales Juzgados de Distrito son de reciente ingreso a la titularidad. Gran número de ellos surgieron a partir de los recientes concursos abiertos por el Consejo de la Judicatura. Y los titulares que provienen de Tribunales Colegiados debieron tener participación en un número muy limitado de amparo contra leyes, a no ser que se tratara de juicios de amparo directos en los que se discutiera la validez de las disposiciones legales aplicadas en la sentencia definitiva o el acto que dio origen al juicio ordinario. Los propios magistrados conocemos de un número mínimo de esos asuntos. Y por lo tanto, la experiencia actual para resolver los asuntos que envíe la Suprema Corte por declinación de conocimiento quizá no sea suficiente.

Actualmente, las decisiones de un órgano unitario, el juez de distrito, en la función constitucional, según los términos precisados, es decir, en amparo contra leyes, son revisadas por un órgano colegiado, los once ministros que integran el Pleno de la Corte, y eventualmente por cinco ministros, que corresponden a las Salas. Antes, la desproporción entre quien resolvía en primera instancia era mucho mayor, cuando la decisión del juez era revisada por 21 ministros.

En otro orden de ideas, las decisiones de los jueces de distrito, en materia de impugnación de leyes, son revisadas por la Corte y eventualmente, por los Tribunales Colegiados, cuando también involucran cuestiones de legalidad, de manera que estos asuntos se solucionan con el agotamiento de tres instancias, la del juez de distrito, la de la Suprema Corte y la del propio Tribunal Colegiado. Así es común, que el amparo biinstancial, normalmente sea un amparo triinstancial. Es claro que a esta observación se le pueden oponer objeciones de carácter técnico o formal, pero el hecho es que en la resolución de estos asuntos participen tres clases de tribunales

No es fácil imaginarse por qué los jueces de distrito constituyen la primera instancia en esta clase de juicios, si se atiende a su complejidad e importancia. La única explicación que encuentro, deriva de la costumbre. Entiendo que por la ausencia de Tribunales Colegiados, históricamente los jueces de Distrito se avocaron al conocimiento de estos asuntos. Sin embargo, el que dichos órganos judiciales continúen conociendo de los amparos contra leyes, sólo puede explicarse por el afán de que la justicia

federal esté cerca de los afectados y evitar los gastos de traslado a lugares diversos a los que habitan, es decir, por razones de acceso a la justicia.

Sin embargo, si se advierte que actualmente los titulares de los Juzgados de Distrito tienen poca experiencia en la función, que sin perjuicio de esto, los integrantes de Tribunales Colegiados, poseen, por el contrario, mayor experiencia, la que incluye la obtenida durante el desempeño como juez, y por lo tanto, un relativo conocimiento de los amparos contra leyes; que ya hay Tribunales Colegiados en prácticamente todo el país; que la propia carrera judicial exige una experiencia en cualquier tipo de asuntos; y, sobre todo de aquéllos donde se ejerce realmente el control constitucional, me parece que es necesario, para una mayor seguridad del justiciable, que sean los Tribunales Colegiados quienes deban conocer de los juicios de amparo contra leyes. Ya el mero hecho de que en la solución de estos asuntos, de suyo complejos, participe más de una sola persona, es una ventaja. En la doctrina se aduce que el juez ordinario no es lo suficientemente capaz para resolver problemas de constitucionalidad, según esto, porque se requiere cierto tipo de sensibilidad y experiencia en el manejo de nociones muy abstractas. Quizá la participación en la resolución de ambos tipos de asuntos supla la deficiencia señalada. Se trata por lo demás de una situación ya presente en la Suprema Corte de Justicia cuando simultáneamente realizaba funciones de control constitucional y de legalidad. Además de las ventajas ya señaladas, hay otra más: si el conocimiento del amparo contra leyes se reserva en primera instancia a los Tribunales Colegiados, dejaría de ser triinstancial en los casos ya señalados, porque las cuestiones de legalidad, ya no serían revisables por otros órganos diversos. Y en muchas ocasiones, se

convertirían en amparos uniinstanciales, facilitando las labores de la Corte, cuando ya existiera jurisprudencia, con las consiguientes ventajas en tiempo de los justiciables y el mejor provecho de la administración de justicia. El incremento de las cargas de trabajo es insustancial pues de cualquier manera se trata de asuntos de los que conocerán los Tribunales Colegiados por declinación de competencia de la Corte. Sólo se eliminaría una instancia. **(Mario Alberto Cantú Barajas, Tomo I, páginas 689 a 692)**

---

Respecto a la fracción I referente al amparo contra leyes, en lugar de mencionar los diversos tipos de ordenamientos generales, sería mejor y más sencillo hablar del Amparo en contra de normas generales y abstractas. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1656)**

---

**II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.**

**En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.**

### **PROPUESTAS**

En relación a la fracción II creo que es mejor decir en contra de qué autoridades procede la demanda, las administrativas, y no señalarlas por exclusión. También sería importante indicar que cuando el acto administrativo emanara de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo se promovería en contra de la última resolución, a menos que durante el procedimiento se diera un agravio irreparable, pues en ese caso a partir de éste, previa tramitación de los medios ordinarios de defensa, procedería el amparo indirecto. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1657)



**EN MATERIA ADMINISTRATIVA**, se considera que el recurso de revisión fiscal no es compatible con la función tradicional que le ha correspondido a los tribunales judiciales que se convierten en un tribunal de alzada para resolver un recurso planteado por la Administración Pública; por tanto, se propone devolver la competencia para conocer de este recurso a un tribunal administrativo, como lo es el Tribunal Fiscal de la Federación, para que resuelva en pleno o la sección correspondiente de la Sala Superior. (José Luis Arellano Pita, Tomo IV, página 2694).

**III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.**

Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.

Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.

## **PROPUESTAS**

**"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:** Siendo nuestra constitución la fuente de las garantías individuales, o sea, el ordenamiento en el cual éstas se consagran, formando, por ende, parte de la ley fundamental, es lógico y evidente que están investidas de los principios esenciales que caracterizan el cuerpo normativo supremo respecto de la legislación secundaria.

Por consiguiente, las garantías individuales participan del principio de supremacía constitucional, consignado en el artículo 133 de nuestra ley suprema. Por otra parte, las garantías individuales que forman parte integrante de la constitución, están, como ésta, investidas del principio de rigidez constitucional, en el sentido de que no pueden ser modificadas o reformadas por el poder legislativo ordinario ( o sea por el Congreso de la Unión como órgano legislativo federal y para el distrito federal, y por las legislaturas de los estados), sino por un poder extraordinario integrado en los términos del artículo 135 de la ley fundamental. Para efectos de las reformas concernientes a la ley de amparo vigente, no debe perderse de vista las garantías de igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica, consagradas eminentemente en los artículos 14 y 16 constitucionales, respetando sobre todas las cosas la vida, libertad, propiedad, posesión, derechos, así como a la persona, familia, domicilio, papeles y sobre todas las cosas la concurrencia de las fundamentaciones y motivaciones que nuestra carta magna profesa.

## DEL JUICIO DE AMPARO ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. DE LOS ACTOS MATERIA DEL JUICIO.

Artículo 114 de la Ley de Amparo: Se propone la desaparición del final de la fracción III el artículo 114 de la Ley de Amparo, debido a: Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia, no está en condiciones de estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría las deficiencias de la quejas, en un caso no permitido legal ni constitucionalmente sino se está en lo que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado de la constitución federal y los dos últimos párrafos del artículo 76 también reformado de la ley de amparo, cuando el acto reclamado no se funda en las leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrara que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, ni menos que se tratara de un caso de materia penal y que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable.

El remate es, según la propia ley, un acto después de concluido el juicio, ya que si fuera de otra manera se habría regulado no precisamente en la que alude a los actos emitidos, después de concluido el juicio de referencia.

Por lo anterior expuesto, queda robustecido por el segundo párrafo de la fracción en estudio, la cual se hace mención también a los actos ejecutados en vía del cumplimiento de la sentencia, por lo que interpretando

sistemáticamente a esta fracción (III) se concluye que los actos de ejecución de sentencia son actos que se presentarán después de concluido el juicio. Concluyendo: si se desobedeciere esta disposición, quienes infrinjan deben hacerse acreedores a una sanción pecuniaria.(Reynaldo Herrera Aké, Tomo II, páginas 1280 a 1282)

---

La fracción III se refiere al amparo indirecto en contra de actos fuera de juicio o concluido, pero en sus párrafos segundo y tercero añade que en casos de ejecución de sentencias o de remate, como si éste no fuera un acto en ejecución de la sentencia, el amparo sólo procederá en contra de la última resolución dictada.

El problema que se ha suscitado es determinar cuál es la última resolución en la ejecución, sin que los tribunales, incluso los de amparo sean coincidentes en cual es la última resolución, por lo que la procedencia o no de esta clases de amparo dependerá del criterio que cada juez tenga, lo que da lugar a un estado de incertidumbre jurídica, por lo que sería bueno que en la reforma en la medida de lo posible se aclarara que se entiende por última resolución en ejecución, sobre todo tomando en cuenta que la ejecución de una sentencia puede tener varias etapas que aunque relacionadas son es independientes v. gr.: una es la etapa de liquidación, otra es la de embargo y una más la de remate, pero todas se dan en ejecución de sentencia (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1657 y 1658)

LA FRACCIÓN TERCERA DEL REFERIDO ARTÍCULO, AL HABLAR DE ACTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, DA LA APARIENCIA DE QUE ÚNICAMENTE ES EL DEMANDADO QUIEN PUEDE ACUDIR VÍA AMPARO, SIN EMBARGO, ES CLARO QUE DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, LAS PROVIDENCIAS Y ACUERDOS QUE SE DICTAN CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO EL REMATE DE LOS BIENES EMBARGADOS O LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SENTENCIA O LAUDO, PUEDEN SER IMPUGNADOS TAMBIÉN POR LA PARTE ACTORA, EVENTO EN EL CUAL, LA LEY NO DISTINGUE.

ENTONCES, SE DEBE PRECISAR QUE LOS ACTOS EMITIDOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SON SUSCEPTIBLES DE IMPUGNAR VÍA JUICIO BI-INSTANCIAL, SIN TENER QUE ESPERAR A QUE SE DICTE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO. TAL ES EL CASO, POR EJEMPLO EN MATERIA LABORAL, CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ IMPROCEDENTE LA REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR (José Francisco Becerril Mendoza, Tomo III, páginas 2052 y 2053)

---

#### **IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;**

La fracción IV contempla el supuesto del amparo indirecto en contra de actos en el juicio que tengan una imposible reparación. Al respecto el problema que nuevamente se ha replanteado consiste en saber cuáles son

los actos irreparables y sobre este tema me adhiero a las ideas del magistrado Leonel Castillo quién después de hacer un estudio analítico e histórico llegó a la conclusión desde mi punto de vista acertada, que los agravios irreparables cometidos durante el procedimiento esencialmente son aquéllos que trascienden el ámbito del derecho procesal y afectan derechos sustantivos de alguna de las partes. Sin embargo este criterio que aunque fue ratificado en contradicción de tesis, en realidad quedo debilitado ya que la resolución de contradicción es bastante mala, lo que creo que dio lugar a nuevas tesis sobre todo de esta última época que se han ido apartando del criterio sustentado por el magistrado Castillo, pero que ciertamente han creado nuevamente cierta incertidumbre sobre que debe entenderse por agravio irreparable. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1658)

---

EN MATERIA PENAL, es claro que tienen que seguir vigentes las normas que regulan el ejercicio de la acción de amparo cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal.

Ahora bien, tratándose de actos emanados de un procedimiento judicial penal, el amparo indirecto procederá contra la orden de aprehensión o el auto de formal prisión, sólo en aquellos casos en que el inculpado, conforme a la legislación aplicable, no tenga derecho al beneficio de la libertad bajo caución. También procederá el amparo indirecto en esta materia cuando, de concederse, ello traerá como consecuencia que se

alcance la libertad del quejoso estando detenido, como por ejemplo, cuando se impugna la resolución que niega aquel beneficio, la que declara infundado el incidente de desvanecimiento de datos, etc.

En esta materia penal, la vía de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, de cualquier fuero, sólo en aquellos casos en que el sentenciado no alcance ningún beneficio que le permita dejar de compurgar la sanción corporal impuesta, ya sea por sus circunstancias personales o por la naturaleza del hecho delictuoso. (José Luis Arellano Pita, Tomo IV, páginas 2693 y 2694).

---

**V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercera;**

### **PROPUESTAS**

**ART. 114 FRACCIÓN V.- CONTRA ACTOS EJECUTADOS DENTRO O FUERA DE JUICIO, QUE AFECTEN A PERSONAS EXTRAÑAS A ÉL, CUANDO LA LEY NO ESTABLEZCA A FAVOR DEL AFECTADO ALGÚN RECURSO ORDINARIO O MEDIO DE DEFENSA QUE PUEDA TENER**

POR EFECTO MODIFICARLOS O REVOCARLOS, SIEMPRE QUE NO SE TRATE DEL JUICIO DE TERCERÍA;...

Enmienda.

DEROGAR LA PARTE DONDE DICE:...CUANDO LA LEY NO ESTABLEZCA A FAVOR DEL AFECTADO ALGÚN RECURSO ORDINARIO O MEDIO DE DEFENSA QUE PUEDA TENER POR EFECTO MODIFICARLOS O REVOCARLOS, SIEMPRE QUE NO SE TRATE DEL JUICIO DE TERCERÍA...".

Motivos.

RESULTA FRANCAMENTE VIOLATORIO DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, OBLIGAR A UN EXTRAÑO AL JUICIO, PARA QUE AGOTE LOS RECURSOS ORDINARIOS CONCEDIDOS DENTRO DEL MISMO, PORQUE RESPECTO DE TAL EXTRAÑO, NO TUVO LA OPORTUNIDAD DE HACER VALER SUS DERECHOS DESDE EL INICIO DE ESE JUICIO, NO PUDO PREPARAR SU DEFENSA, OFRECER PRUEBAS, EN SUMA, NO SE CUMPLIERON LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO RESPECTO DEL MISMO, POR LO QUE RESULTA VIOLATORIO DE SUS DERECHOS SUBJETIVOS PÚBLICOS, OBLIGARLO A INTERPONER LOS RECURSOS ORDINARIOS EN TALES CONDICIONES. TAMBIÉN RESULTA CONFUSO Y ATENTATORIO, EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO, RESPECTO DE TERCEROS EXTRAÑOS A JUICIO.



**DEBE MANTENERSE LA HIPÓTESIS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO HACIENDO REFERENCIA A LAS PERSONAS EXTRAÑAS A JUICIO. (Fidencio Ramírez y Fidel Herrera Beltrán , Tomo II, páginas 1158 y 1159)**

---

**VI. Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1°. de esta ley.**

### **PROPUESTAS**

Expuesto todo lo anterior se tiene, por un lado, que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis de Jurisprudencia por Contradicción invocada al principio de este estudio, sustentó el criterio de que las violaciones procesales por regla general son impugnables en amparo directo y que sólo por excepción son impugnables en amparo indirecto, en los casos ya señalados, y por otro lado se tiene que, para que éste tipo de infracciones pueda impugnarse en amparo directo deben encuadrar en materia civil en alguna de las diez primeras fracciones del artículo 159 y en materia penal en alguna de las dieciséis primeras fracciones del artículo 160, y que de no ser así sin embargo si existe analogía con cualquiera de ellas, la violación procesal puede reclamarse en la vía directa.

De todo lo anterior, yo advierto que así como lo entiende la tesis jurisprudencial no existe armonía entre los artículos 107 fracción III inciso a) de la Constitución, 158 primer párrafo, 114 fracciones III, IV y V y los artículos 159 y 160 de la Ley de amparo porque mientras conforme a los tres primeros la regla general es que las infracciones al procedimiento deben impugnarse en amparo directo y sólo por excepción en indirecto; conforme a los segundos 159 y 160 de la Ley de Amparo sólo son impugnables en esta vía las violaciones procesales que se indican y las que con ellas guardan analogía.

En otras palabras, encuentro que si atendemos a lo señalado por los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo sólo son impugnables en amparo directo las violaciones procesales que encuadren expresamente en cualquiera de las fracciones de los preceptos señalados o bien analógicamente, y en caso de no ser así no serían impugnables en tal vía. Así incluso lo entendieron originalmente los Tribunales Federales tanto así, que se razonaba la analogía, y ahora se tiene que, conforme al criterio jurisprudencial mencionado las violaciones al procedimiento generalmente son impugnables en amparo directo y sólo por excepción lo son en la vía indirecta en los casos que señala el artículo 114 fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo.

En la forma últimamente referida se abre más la puerta de las violaciones procesales que pueden impugnarse en amparo, y así va a proliferar aún más este juicio y los Tribunales Federales encargados de su conocimiento, y eso al parecer es lo que se trata de evitar. (Jesús R. Sandoval Pinzón, Tomo I, páginas 393 y 394)

---

La Ley de Amparo, que en el mismo artículo 107 de la Constitución es señalada como su ley reglamentaria, en ninguna parte alude al Tribunal Unitario de Circuito respecto a su competencia en los casos que de esa fracción VII le corresponde, pues el artículo 114 de dicha ley, refiriéndose a tales casos, señala únicamente al juez de distrito ante quien se pedirá el amparo, y en cuanto a la tramitación del juicio, que también indica la propia fracción VII, que se reglamenta en los numerales 151 al 155 de la Ley de Amparo, también aluden sólo al juez de distrito, pero en ningún precepto de esta ley, de los que reglamentan esa clase de juicios biinstanciales, menciona a los Tribunales Unitarios de Circuito, todos se refieren al juez de distrito.

Es el artículo 29, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es el único que da las atribuciones correspondientes a los Tribunales Unitarios de Circuito, del modo siguiente:

"Art. 29 - Los tribunales unitarios de circuito conocerán: 1.- De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado".

En mi particular punto de vista, estimo que esa sola reglamentación a manera de atribución a los tribunales unitarios de circuito para conocer de los juicios de amparo indirecto de su competencia, no es suficiente, menos aun, que se encuentra introducida sólo en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, atendiendo además, y fundamentalmente, a que por principios constitucionales correspondía estar específicamente determinada su regulación en la Ley de Amparo, que es la reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la propia Carta Magna, como incluso se indica en el segundo de esos preceptos, y la Ley Orgánica no es reglamentaria, ya que su función legal esta inmersa en su propia denominación.

Por lo anterior resumido estimo que existe una deficiente regulación legal del amparo indirecto de la competencia de los Tribunales Unitarios de Circuito, pues hasta podría aventurarse a pensar que saldría de la constitucionalidad, y debiera corregirse tal deficiencia, en mi concepto, agregándose en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal y en los artículos 114 y 151 a 155, así como en los demás que corresponda de la Ley de Amparo

Sin otro particular, y esperando no estar equivocado, de que el tema expuesto pudiera tener algún interés real, jurídico y constitucional en la institución del amparo, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. (Adolfo Olguín García, Tomo I, páginas 530 a 532)

---

Planteamiento del problema.

---

El juicio de amparo nació como un medio para tutelar la Constitución de las posibles violaciones que cometan las autoridades del estado, en las diversas hipótesis de procedencia establecidas en el artículo 103 constitucional.

Ahora bien, en nuestro régimen dicha finalidad del juicio de amparo se ha ampliado no solamente a tutelar directamente la Constitución, sino que a través de la garantía de legalidad, consagrada en los artículos 14 y 16, se extiende a los ordenamientos legales secundarios; mismo que se puede combatir tanto en vía directa o indirecta, según las diversas hipótesis que prevén los artículos 114 y 158 de la Ley de Amparo.

Como se puede ver, el amparo de legalidad puede tramitarse en la vía indirecta, cuyo procedimiento consta de dos instancias, o en la vía directa, en el que el conocimiento del acto se hace en una sola instancia; es aquí donde surge la iniquidad en el juicio de amparo en materia judicial, pues un mismo caso y según las circunstancias en que se pronuncie el mismo puede ser visto en una u otra vía, una, la indirecta que es más lenta, y otra, la directa que es más ágil; siendo en ese punto donde surge la propuesta de que sea eliminado el juicio de amparo indirecto judicial y sea resuelto en forma directa que en términos de economía procesal es más expedito.

#### **Desarrollo del Tema.**

El amparo es un proceso constitucional autónomo, entendiéndose por proceso un conjunto de actos procedimentales de las partes y los tribunales

que culminan con la resolución, donde se discute si la actuación de la autoridad responsable violó o no las garantías individuales del gobernado.

El juicio de amparo promovido ante juez de Distrito se entiende que es juicio, toda vez que se siguen todos los actos procedimentales que culminan con la sentencia, sin embargo, el juicio de amparo directo se ha entendido como un recurso, ello en virtud del control de la legalidad, tomando en consideración las violaciones indirectas a la Constitución, en donde el tribunal de amparo se convierte en un tribunal revisor porque analiza las violaciones a las leyes ordinarias o secundarias, de ahí que se habla de su semejanza con el recurso de casación y en donde la sentencia que se dicta determina la inconstitucionalidad del acto reclamado y, si se cometieron violaciones al procedimiento, se repondrá éste a partir del momento en que se incurrió en la violación.

Con base en lo anterior, se podría sostener que en el juicio de amparo indirecto, de manera natural se ven las violaciones directas a la Constitución y, en el directo, que es propiamente un recurso extraordinario de legalidad, se analizan las violaciones indirectas. Pero lo anterior no es así, ya que encontramos en algunas hipótesis de procedencia del amparo indirecto, específicamente las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, que en ellas se contemplan cuestiones específicas de legalidad, pues se pueden impugnar en estos casos, actos dictados fuera de juicio o después de concluido, así como aquéllos que son dictados dentro del mismo, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, analizándose en éstos si las normas específicas en que se fundan son las exactamente aplicables al caso que se resolvió;

como puede ser, cuando se analiza la personalidad, la procedencia de la vía, un auto de formal prisión, la sentencia que confirma un remate, el auto que desecha parcialmente una demanda y otras que serían innecesario mencionar.

Ahora bien, podemos advertir que algunos de los ejemplos que enunciamos en el párrafo anterior, pueden ser analizados no sólo en la vía indirecta sino también, en la directa, cuando se dan determinadas condiciones. Así tenemos que en materia de personalidad la resolución que la desestima se combate en forma indirecta, y la que tiene por no acreditada la personalidad del actor, como ya se considera que es una resolución que puso fin a juicio, es impugnabile por la vía directa; como ese caso podríamos enumerar muchos, como el desechamiento total de una demanda que es directo, y el desechamiento parcial es indirecto, etc.

Como podemos advertir, el juicio de amparo en materia de legalidad no es congruente, pues para un mismo caso establece dos vías distintas según las circunstancias del mismo, pues en uno se abre una instrucción para reunir pruebas y se sigue el procedimiento y formalidades para dejar el asunto en estado de sentencia, como lo es en el amparo indirecto, en el otro, que es el amparo directo no. Surgiendo la duda, por qué en un caso es necesario abrir una instancia para que se agote la instrucción, como lo serían las resoluciones que tienen por reconocida la personalidad al actor; y en esa misma hipótesis de personalidad pero cuando se desconoce la misma, se acude directamente al juicio de amparo. ¿Qué no en las dos se analizó la personalidad, a través de las normas que la rigen?, entonces ¿era necesario abrir un juicio a prueba y dejarlo en estado de resolución? La

respuesta a la primera interrogante es SI, es el mismo problema, y a la segunda NO, pues no se considera necesario, dado que las constancias ya estaban integradas; por ende se propone que el amparo judicial de legalidad que contemplan las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo sean trasladadas a las hipótesis de procedencia que contempla el artículo 158 de la misma ley, para que estas sean analizadas en la vía directa y así resolver el juicio en forma más ágil y menos engorrosa, y con las siguientes ventajas:

c) Cuando se reclame una ley, no será necesario llamar a juicio a las autoridades que la emitieron.

d) La autoridad judicial responsable ya no estará legitimada para interponer revisión, lo cual estaría acorde con los criterios jurisprudenciales que en ese sentido se han pronunciado.

Al ser más ágil el proceso se provocaría que ya no fuera utilizado para entorpecer los juicios, y que los hacen largos y tediosos.

Adviértase que no se hace referencia a la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues en ésta se habla del tercero extraño o cuando la ley o acto reclamado no establezcan ningún recurso, pues en estos casos, generalmente estamos ante violaciones directas a la Constitución, por ende, en estas hipótesis es necesario que el procedimiento de amparo se vea en forma de juicio, por ende, la vía indirecta es la adecuada. En este caso también hay que contemplar al tercero extraño por equiparación.



Finalmente, para redondear lo anterior se haría necesario, para evitar la proliferación de juicios de amparo directo, se estableciera el amparo uniinstancial adhesivo, para que así en una misma resolución se pudieran analizar todos los aspectos del litigio. (José Manuel de Alba de Alba, Tomo I, páginas 628 a 632)

---

El amparo ante un Juez de Distrito.

El artículo 114, como prácticamente todos los artículos de la ley, debe ser aligerado, pues se le ha recargado de conceptos, por ejemplo, su fracción I, enumera las leyes, los reglamentos, los tratados pretendiendo ser exhaustiva; pero esa redacción es excesiva pues bastaría decir "que el amparo procede contra las normas generales dictadas por los órganos del Estado, cualquiera que sea su naturaleza, que causen agravio al entrar en vigor o con motivo del primer acto de aplicación". De esta manera se hace menos denso el precepto.

No ignoro que no faltará quien pregunte ¿cuáles son esas normas? y la respuesta debe ser: estudia.

Y esta respuesta debe darse, porque la ley procesal es una ley técnica, que supone el conocimiento y manejo de esa técnica, bien entendido que una ley no es un tratado de derecho.

Las fracciones II y III se refieren a tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, redacción que debe abandonarse y sustituirse por lo que tiene

la fracción III, inciso a), del actual artículo 5° que habla de juicios o controversias, con lo que se elimina una enumeración farragosa.

En la fracción II debe eliminarse la frase "a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia", porque a esa hipótesis se refiere la fracción V, por lo que es inútil la repetición.

El párrafo final de la fracción III, que se refiere a los remates limita la procedencia del amparo exclusivamente a la resolución que los apruebe o desapruebe; pero no se refiere a que determinadas leyes permiten remates en bolsa, que por no ser judiciales no son aprobados ni desaprobados por la autoridad judicial; por tanto considero que después de la palabra remates, podría introducirse la palabra "judiciales", para evitar aplicaciones indebidas y los remates no judiciales, en bolsa, son actos de imposible reparación. Y la redacción original es lógica, porque no había remates en bolsa para pagar al acreedor.

La fracción V sólo debe decir: "contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él". El resto de la fracción es inútil porque se refiere al principio de definitividad, cuya violación se sanciona en el artículo 73, fracciones XIII, XIV y XV. (Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1065 y 1066)

---

Enmienda

Incorporar la fracción séptima

CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO NEGÁNDOSE A EJERCITAR LA ACCIÓN PENAL, DESISTIÉNDOSE DEL EJERCICIO DE LA MISMA O FORMULANDO CONCLUSIONES INACUSATORIAS, ESTANDO PROBADOS EL CUERPO DEL DELITO Y LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD O LA RESPONSABILIDAD PENAL EN SU CASO, DEL INDICIADO O DEL PROCESADO.

**Motivos.**

LA INCLUSIÓN DEL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL, QUE RESPONDE A UN CLAMOR NACIONAL EN CUANTO AL MONOPOLIO ABSOLUTO QUE TUVO ANTES DE DICHA ENMIENDA, LA INSTITUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL; CON EL OTORGAMIENTO A FAVOR DE LOS GOBERNADOS DEL DERECHO DE IMPUGNAR POR LA VÍA JURISDICCIONAL LAS DETERMINACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD SOBRE EL NO EJERCICIO Y DESISTIMIENTO DE LA MENCIONADA ACCIÓN, CREA LA NECESIDAD DE PLASMAR EN LA LEY DE AMPARO EN FORMA AUTÓNOMA, LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN ESTA HIPÓTESIS.

LO ANTERIOR SE DERIVA DE DOS RAZONES FUNDAMENTALES: SURGE UN NUEVO PRESUPUESTO JURÍDICO, CUYO CONTENIDO ES ESENCIALMENTE DISTINTO A LAS SEIS HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO Y, SE TRATA DE UNA ALTÍSIMA PRIORIDAD, CUAL ES LA DEFENSA DE LA SOCIEDAD. (Fidencio Ramírez y Fidel Herrera Beltrán , Tomo II, páginas 1159 y 1160)

---

En el afán de evitar que se establezcan criterios contradictorios por los encargados de aplicar la Ley de Amparo, es conveniente especificar en ella, de manera general en aquellos en que se señalan las circunstancias o caso de sentencia de tribunales judiciales, administrativos o laborales, agregar "agrarios".

En el artículo 114 de la ley de amparo fracción segunda, al final del primer párrafo, deberá especificarse: ni del Tribunal Superior Agrario. Esto se justifica, por que de no especificarse tal prohibición se admitiría una cuarta instancia. Al excluirse a las sentencias del Tribunal Superior Agrario, se aceptarían las de los tribunales unitarios contra los que no opera el recurso de revisión.

Además deberá adicionarse la fracción VII. Contra sentencias definitivas de los tribunales unitarios agrarios en los casos que se cometan violaciones al dictarse la sentencia o durante el procedimiento, si por virtud de estas los sujetos agrarios hubieren quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley agraria les concede. (Andrea Bocanegra Quiroz, Tomo II, página 1290)

---

Artículo 114, deberá adicionarse con la siguiente fracción:

"VII.- Contra las resoluciones de archivo o no Ejercicio de la acción penal, que pronuncie el Ministerio Público Federal o Local".

Todos los candidatos a la Presidencia de la República han reiterado su ofrecimiento de acabar con la corrupción en la administración de justicia y han destacado la conducta en ese sentido del Ministerio Público.

Son miles los casos en los que por ignorancia, por soborno o para quitarse trabajo, los Ministerios Públicos pronuncian resoluciones de archivo o no ejercicio de la acción penal.

Los agentes del Ministerio Público, engreídos, más que prepotentes, alegan que ellos tienen, en los términos del artículo 21 Constitucional, el monopolio de la persecución de los delitos.

Una gran mayoría de los que he tratado son incompetentes y flojos y ante estas actitudes el denunciante queda desprotegido.

La única forma pues de que el ofendido pueda probar la improcedencia, mala fe o reflexión de la resolución que de archivo o no ejercicio de la acción penal pronuncie el Ministerio Público, es el derecho al amparo; ley que lo reglamenta y que es una de las mejores legislaciones del mundo. (Félix Galindo D. B., Tomo II, páginas 1370 y 1371)

---

VI.- EXPOSICION DE MOTIVOS - Considero que la siguiente propuesta es con el fin de proporcionar un medio de defensa mas adecuado a las personas que como ya se ha dicho, carecen de algunas características

personales, que pudieran lesionar su ámbito constitucional, y quedar desprotegidas frente al resto de la población.

#### ARTICULO 114

PROYECTO.- (se propone adicionar una fracción al artículo citado)  
Fracción VII.- Contra leyes o actos de autoridad que vulneren los derechos o intereses familiares o personales de cualquiera de las personas señaladas en el artículo 7 de esta Ley, afectando el interés supremo de esas personas, afectando el ejercicio de la patria potestad, la tutoría, la guarda y custodia o cualquier depósito de la persona, poniendo en grave riesgo su desarrollo físico o mental.(Alejandro V. Pintos Romero, Tomo II, página 1377)

---

La propuesta es para ajustar al texto del art. 29, fracción I de la LOPJF.

#### TEXTO CON MODIFICACIÓN

ARTICULO 114.- El amparo se pedirá ante el juez de distrito, salvo los casos en que se traten de actos atribuidos a un tribunal unitario de circuito que es competencia exclusiva de otro tribunal de la misma categoría, cuando:

I.- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en

vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso;

II.- Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.

III.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.

Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso

Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.

IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;

V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería;

VI.- Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1°. de esta ley. (María Simona Ramos Ruvalcaba, Tomo II, páginas 1434 a 1438)

---

El Juicio de Amparo tiene como propósito la protección de las garantías individuales cuando estas son violadas por algún acto de autoridad y le causan perjuicio al gobernado.

En diciembre de 1840, en Yucatán, Manuel Crescencio Rejón, presentó el Proyecto de Constitución, mismo que fue aprobado el 31 de marzo de 1841, en el por vez primera se establece en una Constitución, particularmente en su artículo 53, la obligación de la Suprema Corte de Justicia del estado de "Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección contra las Leyes y Decretos de la Legislatura que sean contrarios a la Constitución, o contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo reunido, cuando en ellas se hubiera infringido el Código



Fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte que éstas o la Constitución, hubiesen sido violadas".

En el Acta de Reformas de 1847, en su artículo 25, el Juicio de Amparo se establece en nuestro país al influjo de las ideas de Mariano Otero. Desde entonces y hasta nuestros días dicho Juicio de Garantías ha permeado en la conciencia de los mexicanos como un instrumento de defensa ante los ataques de los órganos del poder público. En las Constituciones de 1857 y 1917 se establece de nueva cuenta el Juicio de Amparo con las características fundamentales que hasta la fecha tiene.

El contenido del artículo 21 en el texto original de la Constitución de 1917, otorgó al Ministerio Público la facultad de ser el titular del monopolio del ejercicio de la Acción Penal, lo cual significaba que sus resoluciones sobre el ejercicio o no de la acción penal, no eran susceptibles de ser recurridas.

El Constituyente Permanente aprobó en diciembre de 1994 adiciones y reformas a diferentes artículos de nuestra Norma Fundamental, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de ese año. En particular se adicionó un párrafo cuarto al artículo 21 constitucional que establece: "Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la Ley".

Es el caso, que desde diciembre de 1994 hasta esta fecha el Congreso de la Unión no ha efectuado las adecuaciones jurídicas

necesarias en la Norma Secundaria, para el efecto de que esta garantía individual tenga pleno cumplimiento.

Por tanto, teniendo hasta antes de la Reforma Constitucional supradicha el Ministerio Público el monopolio del ejercicio de la acción penal, sus resoluciones eran inimpugnables, por establecer dicha improcedencia del Juicio de Garantías tanto la Norma Fundamental, como la Jurisprudencia del Poder Judicial Federal.

El presente trabajo propone la adición de una fracción VII, al artículo 114 de la Ley de Amparo, para el efecto de que los particulares que sufren la comisión de un delito puedan inconformarse vía Juicio de Amparo en contra de las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal.

Es pertinente destacar que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo de 1996, establece un recurso de Control Interno que se inicia, desarrolla y concluye dentro de la misma Institución, el Ministerio Público es quien resuelve en el caso de que consulte el no ejercicio de la acción penal o la formulación de conclusiones no acusatorias. Cuenta con quince días el ofendido, a partir de la notificación de la determinación inacusatoria, para desvirtuar y combatir la inercia del Ministerio Público. En el caso que el Procurador resuelva confirmar la resolución de su inferior jerárquico, el asunto queda definitivamente concluido. En la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal existe disposición análoga a la de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Más sin embargo, resulta incuestionable la necesidad de que exista un Procedimiento Jurisdiccional para revisar y revocar, en su caso, las resoluciones del Ministerio Público, cuando éste se niegue a ejercitar la acción penal o cuando se desista de ella, sobre todo por formar parte el artículo 21 constitucional del Título Primero, Capítulo Primero de la Constitución, en el cual se establecen las garantías individuales, la violación que a éstas se den, son susceptibles de repararse a través del Juicio de Amparo. Se trata con la propuesta de que exista concordancia entre la Norma Primaria y la Norma Secundaria. Al efecto estimamos pertinente recordar el antecedente de la primera sentencia de amparo dictada en nuestro país.

El 13 de agosto de 1849, don Pedro Zámano, juez de distrito en San Luis Potosí por ausencia del Propietario, establece en su sentencia: "Visto el antecedente Dictamen y teniendo presente que el artículo 25 de la Acta de Reformas, impone al juzgado de mi cargo la obligación de amparar a cualquier ciudadano contra los ataques violentos, ya sea de los supremos poderes de la nación, ya de los estados: que la circunstancia de no haberse reglamentado el modo y términos en que tal protección debe dispensarse, no es ni puede ser un obstáculo para cumplir con ese sagrado deber, porque a nadie puede ocultarse el modo de sustanciar un expediente y que, de no dar cumplimiento al citado artículo, resultaría una contravención del objeto y fin que los legisladores se propusieron, no menos que una muy notable infracción, que inconcusamente haría responsable al que la cometiera; que una ley desde el momento que se publica debe ser obligatoria; no expresándose en ella lo contrario, como dice muy bien el

asesor, y que por lo mismo no se ha podido ni puede dejar de cumplir con la referida disposición constitucional, ..." .

Es pertinente destacar que la jurisprudencia establecida por el Poder Judicial de la Federación en su Novena Epoca, ha establecido la procedibilidad del Juicio de Garantías en el caso que nos ocupa, aun en ausencia de la disposición expresa en la Norma Secundaria, por tratarse de una violación directa a lo dispuesto por el párrafo cuarto, del artículo 21 constitucional.

VII.- Contra las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal. (Roberto Aguirre Navar, Tomo III, páginas 1713 a 1717)

---

El presente trabajo tiene relación con el artículo 114 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponiendo adicionar una fracción VIII.

## CONSIDERACIONES

En diverso trabajo se propone adicionar una fracción VII al artículo 114 de la Ley de Amparo, en la que, se establece la procedencia del juicio de garantías "contra las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal". Por lo que, en este trabajo se propone otra adición bajo la fracción VIII, con el objeto de que el juicio de

garantías prospere contra reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se modifiquen derechos fundamentales.

Es de todos sabido que el Juicio de Amparo tiene como misión fundamental proteger a las personas, ya sean físicas o morales contra actos de Autoridad que violen o vulneren las garantías individuales, sin embargo se han dado gravísimos casos en los que Autoridad como el Constituyente Permanente, no sólo han violado o vulnerado garantías individuales, sino que las han hecho desaparecer del texto de la Constitución General de la República y aún cuando ha habido opiniones en contrario ha prevalecido el criterio de que, desaparecida la garantía individual de la Constitución, las Autoridades Judiciales Federales no tienen la posibilidad de proteger ese bien jurídico que es precisamente la garantía individual que desaparece, se modifica o se vulnera por el Constituyente Permanente. Los argumentos para apoyar la teoría de que el Constituyente Permanente no puede ser autoridad responsable, ni que pueden ser objeto del Juicio de Garantías las modificaciones, ya sean por adición o por reforma que el Constituyente introduzca a la Constitución, entre otros la circunstancia de que el Poder Judicial se convirtiera en Legislativo, que tendría facultades que pudiesen anular la labor del Constituyente Permanente y otros múltiples argumentos, el propósito sin embargo es valioso, porque lo que se pretende proteger son las garantías individuales existentes

Ahora bien, desde nuestro especial punto de vista, no existe ningún impedimento legal para que las Autoridades Federales conocieran de juicios de amparo en contra de las reformas a la Constitución realizadas por el Constituyente, por la sencilla razón de que en concordancia con el artículo

103 de la Constitución y el artículo 1º de la Ley de Amparo, establecen que el propósito o el objeto del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de Autoridad que violen las garantías individuales.

Ahora bien ¿Qué es la Constitución?, evidentemente la Constitución es una Ley, y si la Constitución nos concede una garantía individual la reforma a la Constitución, que es una Ley evidentemente puede ser objeto del Juicio de Amparo, si dentro de la misma se violaron garantías individuales.

La cuestión es muy compleja, porque tendremos que responder a los interrogantes ¿Qué es la Constitución?, ¿Qué disposiciones son parte imprescindible de la Constitución?, ¿Qué es lo que puede ser reformado de la Constitución?, ¿Son inmutables las garantías individuales?, y otras más, sin embargo independientemente de cuales sean las respuestas que se den a esos interrogantes, es evidente que en la Constitución o que a la Constitución se han introducido por el Constituyente, toda una serie de principios que deberían estar en leyes secundarias, no en la Constitución, pero que el Legislador Constituyente Ponente ha considerado que si las introduce en el texto de la Constitución, las sacraliza y por esta virtud van a ser obedecidas sin más, pero se equivoca, puesto que la Constitución al igual que cualquier Ley es violentada, por ello el propósito de introducir a la Constitución disposiciones secundarias, es inútil, pero colma a nuestra Constitución de principios que no pueden ser tocados por el Juicio de Garantías, restringiendo terriblemente la esfera de libertad de seguridad jurídica e igualdad a favor de los Ciudadanos. Tomemos el ejemplo el

artículo 3º Constitucional, ha tenido tantas reformas que la garantía que tenemos todos los ciudadanos, como padres de familia de enviar a nuestros hijos a la escuela que nos plazca, esta totalmente encubierta, cuando se piense en el artículo 3º de la Constitución nos viene a la mente las características que deberá tener la educación que imparta el Estado, al carácter obligatorio de la educación primaria, sus características, etc., pero la garantía esta oculta. Otro ejemplo es el artículo 10 que consignaba la garantía individual de poseer en los domicilios de los particulares las armas necesarias para su protección y legítima defensa que fue restringida primero, cuando se añadió: Que para portarlas en las poblaciones se requería el permiso de la Autoridad Administrativa y posteriormente la garantía desapareció cuando en el texto Constitucional se estableció el principio o salvedad a la posibilidad de poseer armas en su domicilio "excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, -y se agregó-, la Ley Federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrán autorizar a los habitantes la portación de armas.

No somos partidarios de la violencia y mucho menos de la portación de armas de fuego, creemos que el Estado Mexicano tiene la obligación de proporcionar seguridad pública a todos, de forma tal de que nadie necesite poseer y mucho menos portar armas, y también creemos que quienes mejor manejan las armas son los expertos que en este caso debe ser nuestro Glorioso Ejército y nuestros Policías, pero resulta de que también hay expertos entre la gente de mal vivir que con facilidad pueden someter a cualquier integrante de la Población con armas que sirven como instrumento principal de sus propósitos criminales y no existe todavía la debida

protección por parte de la Autoridad de salvaguardar la integridad física de las personas, ni la inviolabilidad de los domicilios, por ello, las reformas al artículo 10 a que nos hemos referido y la prohibición en la Ley de Armas de Fuego y en los demás ordenamientos que señalan cuales son las armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional y las prohibidas a los particulares reducen a éstos a una condición lastimosa frente a los delincuentes, pues no es posible poseer armas efectivas que permitan la defensa que la garantía Constitucional pretende, puesto que posiblemente sea más efectivo un buen palo o la lanza que una pistola de menor calibre, y si a eso aunamos que es casi imposible que en forma legítima o ilegítima los Ciudadanos obtengan de las Autoridades competentes el permiso para portar armas, el estado de indefensión se torna dramático, y desesperante, puesto que al que porte armas, no solamente se le decomisan como parte de la pena, sino que es sometido a un proceso penal, y no se diga cuando se trate de las armas prohibidas que al parecer son las más eficaces. Resumiendo lo que queremos decir, es que la garantía desapareció, y al desaparecer las garantías, los ciudadanos fuimos despojados de algo que teníamos con anterioridad a la reforma y que estamos en manos de Constituyente Permanente que en ocasiones dicho esto con todo respeto, puede actuar influenciado por las corrientes políticas imperantes o por factores de poder extraconstitucionales que no vale la pena analizar, por ello, proponemos se adicione con una fracción el artículo 1º Constitucional o bien, se modifique el texto de cualquiera de ellos, para que quedaran perfectamente comprendidos como actos contra los que puede pedirse el amparo, los del Constituyente Permanente, la redacción que se propone es la siguiente:



Artículo 114.- ....

I ...

II ...

III ...

IV ...

V ...**Contra el Constituyente Permanente por derogación o modificación a las garantías fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Roberto Aguirre Navar, Tomo III, páginas 1720 a 1725)**

---

Restricción de la Procedencia del Juicio de Amparo por Cuantía, Pena y Trascendencia o Importancia de la Causa. Una idea empieza a permear en el medio: debe limitarse la procedencia del juicio de amparo a casos que tengan tal importancia, que justifiquen, en términos de costos, echar a andar la maquinaria judicial. Conforme a esta noción, cada juicio de amparo que se tramita ante los juzgados y tribunales tiene un costo económico para el Estado que no se justifica erogar cuando, por ejemplo, la cuestión de fondo en el litigio no asciende a un monto mayor a cierta cantidad de pesos, mucho menor al costo que significa para el erario, así, según esta opinión, la procedencia del amparo debe restringirse y sólo permitir su interposición cuando la cuantía sea mayor, peculiaridad que lo distinga. Esta propuesta no debe ser admitida, dado que en el juicio de garantías no se controvierten simples derechos privados, sino cuestiones eminentes públicas: la violación de los derechos del hombre protegidos por la Constitución. (Julio César Vázquez Meliando García, Tomo III, páginas 1774 y 1775)

---

Los juzgados de distrito especializados en materia de amparo, conocerán de la demanda de garantías únicamente en tratándose de violaciones a los preceptos relativos al capítulo i de las garantías individuales de la constitución general de la república. (Jesús González Moreno, Tomo III, página 1808)

---

#### Amparo ordinario

Se designa con este nombre al que, a través de un procedimiento ágil, sumario, sin complicaciones técnicas, esté al alcance de cualquier persona sin una preparación técnica especializada, en los casos en que no se reclamen actos provenientes de autoridades jurisdiccionales, reivindique los propósitos y finalidades originales del juicio de amparo, ideales y aspiraciones que se encuentran muy bien reflejados en la definición de amparo que hace más de cien años formuló el jurista jalisciense Ignacio L. Vallarta en su obra El juicio de amparo y el write of habeas corpus, publicado por primera vez en 1881, en el que expone:

"El amparo puede definirse diciendo que es el proceso legal intentado para recuperar sumariamente cualquiera de los derechos del hombre consignados en la Constitución y atacados por una autoridad de cualquier categoría que sea, o para eximirse de la obediencia de una ley o mandato de autoridad que ha invadido la esfera federal o local respectivamente."

Creo que como punto de partida para la elaboración del procedimiento ordinario de amparo podría tomarse la ley de amparo de 1882, con las modificaciones y adiciones que aconsejen la experiencia de más de cien años de su práctica, pero cuidando su sencillez y agilidad. Volver al origen, regresar al punto de partida, pero con la experiencia que da saber dónde y por qué se perdió el rumbo en el primer trayecto de recorrido. Desandar lo andado para volver a andarlo bien.

#### Amparo barandilla

En otro ensayo también propuse un tipo de procedimiento para los casos de urgencia, aquellos que, por su naturaleza, lo más importante sea la rapidez y oportunidad de la decisión que el elaborado y puntilloso discurso en que ésta se funde. Se propone un amparo sumarísimo que incluso opere por comparecencia, al cual he llamado amparo de barandilla. Éste obedece a la necesidad de llevar o trasladar los principios humanos y jurídicos que inspiran a la justicia de paz al ámbito federal de la protección de las garantías individuales, también llamadas derechos humanos por nuestra Constitución. Quizá en este tipo de procedimiento de amparo lo aconsejable sea que no exista recurso alguno, pero esto habría que discutirlo.

Son innumerables los casos en materia administrativa que en beneficio de la sociedad, no sólo del quejoso, requieren una solución judicial rápida, inmediata, con base en la cual puedan protegerse de modo legítimo los derechos individuales, pero también los sociales, pues al quedar determinado por una autoridad judicial que en el caso concreto el acto de

autoridad estuvo ajustado a la Constitución, y que, en consecuencia no viola garantías individuales, propicia el uso legítimo de la fuerza pública, es decir, de que el Estado ejerza su facultad coactiva en beneficio de la sociedad, para hacer cumplir una determinación cuya legalidad quedó plenamente confirmada con la negativa del amparo.

### **Amparo contra leyes**

En cierta ocasión expuse estas ideas al doctor José Luis Soberanes y él sugirió la conveniencia de establecer otro tipo de procedimiento diferenciado de amparo: el amparo contra leyes. La idea me pareció hizo muy interesante pues, creo que debe distinguirse entre el amparo contra actos y el amparo contra leyes, y es necesario iniciar la discusión de qué principios se sustraen al amparo contra actos para darle un tratamiento distinto en el amparo contra leyes. Considero que el tema reviste gran importancia.

Se ha hablado con insistencia de la conveniencia de dar al amparo contra leyes efectos erga omnes. En efecto, algunos distinguidos juristas, entre quienes sobresale Héctor Fix Zamudio, en un intento de finalizar con las graves inequidades, que atribuyen al principio de relatividad de la sentencia en el amparo contra leyes, propusieron que se diera efectos erga omnes a la sentencia en el amparo contra leyes.

Establecer que una vez que se siente Jurisprudencia de la Suprema Corte al declarar la inconstitucionalidad de algún precepto, éste, en forma automática y en la medida en que la Corte lo considere contrario a la Carta

Magna, sea abrogado o derogado, según sea el caso. Esto equivaldría a otorgar a la Suprema Corte facultades legislativas de carácter negativo.

Entre los inconvenientes aducidos, se encuentra el del carácter retroactivo que hoy se considera inherente a la sentencia que concede el amparo; por ejemplo, supongamos que se concede el amparo por considerar inconstitucional un tributo, si la sentencia tiene efectos erga omnes, el fisco tendría que devolver todo lo que cobró por ese tributo, no sólo al quejoso que ganó el amparo sino a todo causante que lo haya pagado, lo cual podría conducir al fisco a una grave situación financiera que revertiría en perjuicio de la sociedad misma. Esta situación podría ser superada de manera fácil con una disposición semejante a la que establece el artículo 105 constitucional:

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia.

De no aceptarse este sistema, podría optarse por otro más moderado, menos radical, consistente en modificar el artículo 71 constitucional para otorgar a la Suprema Corte el derecho de iniciar leyes. Entiendo que ya hay alguna proposición para facultarla para presentar iniciativas de las leyes que le competan en forma directa (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley de Amparo, Código Federal de Procedimientos Civiles); sin embargo, mi sugerencia es que ese derecho de iniciar leyes también incluya la derogación o abrogación, según sea el caso, de aquellas sobre cuya

inconstitucionalidad se haya pronunciado el más Alto Tribunal, aunque sean criterios que no constituyan jurisprudencia. De esta manera se establecerá un diálogo entre el Legislativo, federal o local, y la Suprema Corte, que tal vez dé como resultado la derogación o abrogación de la ley o, también, que ante los argumentos de los legisladores, este Alto Tribunal cambie su criterio, y si ya se había integrado Jurisprudencia al declarar la inconstitucionalidad de una ley, la interrumpa, y entonces las autoridades continúen con la aplicación de la ley. Me inclino por este último sistema.

Ambos sistemas tienen ventajas y desventajas. La ponderación de las mismas durante la discusión que se realice en el Congreso Nacional de Juristas determinará qué termine que sistema debe adoptarse. De lo que estoy convencido es que el amparo contra leyes no puede subsistir con su regulación actual.

Estas son las reflexiones en lo que concierne a la estructura y límites del juicio de amparo. A continuación expongo mis inquietudes respecto a otros aspectos que pienso deben someterse a discusión. (José de Jesús Gudiño Pelayo, Tomo III, páginas 1863 a 1867)

---

ARTICULO 113.- Se pedirá amparo ante los Juzgados de Distrito :

I.- Con texto igual al señalado en la fracción I del vigente artículo 114.

II.- Contra actos que no provengan de los Tribunales Judiciales, administrativos o del trabajo. Si éstos emanan de un procedimiento seguido

en forma de juicio, sólo podrá promoverse amparo contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en ella o durante el procedimiento, siempre que por virtud de ésta última hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña.

Tratándose de actos dictados en averiguación previa, el amparo se promoverá contra la autorización de reserva o la resolución emitida en la revisión de autorización al no ejercicio de la acción penal, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento que les antecede. En ambos supuestos también se podrá formular demanda contra los actos que antecedan a las determinaciones de referencia siempre que tengan sobre las personas o cosas una ejecución de imposible reparación.

III.- Contra los actos provenientes de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo. Si se trata de actos dictados fuera de juicio, o después de concluido éste, la demanda se formulará contra la última resolución dictada en el respectivo procedimiento. Si el acto reclamado se dicta dentro del juicio, sólo procederá el amparo contra aquellos que tengan sobre las personas o cosas una ejecución de imposible reparación; procedencia que también será extensiva a los dictados fuera de juicio y después de concluido éste.

Tratándose de remates, sólo se promoverá el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desapruében ;

IV.- Texto igual al vigente de la fracción V.

**MOTIVOS.-** Se introduce la procedencia del amparo contra el acuerdo de reserva y determinaciones de no ejercicio de la acción penal, con el ánimo de perfeccionar la magnífica reforma del artículo 21 Constitucional que prevé la posibilidad de combatir jurisdiccionalmente las determinaciones de no ejercicio de la acción penal acabando con ello con un renglón de impunidad atribuido a deficiencias técnicas del Ministerio Público e inclusive a conductas de auténtica corrupción. De ahí que, siendo ejemplo esa reforma, se pretenda combatir determinaciones del titular de la acción penal que indudablemente causan agravio a la víctima u ofendido con el delito tan olvidado en el sistema jurídico penal mexicano.

Al mismo tiempo, se aprovecha los criterios jurisdiccionales dictados con motivo de la vigente fracción IV del artículo 114, para hacerla extensiva a los actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido y finalmente, se deroga la fracción VI, del vigente precepto, por la reforma propuesta en el artículo 1º. (David Ancira Martínez, Tomo III, páginas 1924 y 1925)

---

La figura jurídica de la ampliación de la demanda de amparo no se encuentra regulada en la Ley reglamentaria, no obstante ser procedente de acuerdo con los criterios jurisprudencias emitidos por la Corte.

Por tal razón se estima conveniente que si en la práctica se da la ampliación de la demanda de amparo se legisle en tal sentido, con reglas claras y precisas respecto de los supuestos jurídicos en los que puede ampliarse la demanda de garantías, para con ello facilitar tanto a la



autoridad responsable como al quejoso el conocimiento preciso respecto de lo que puede ser materia de ampliación y en qué momento puede darse. (Olga Hernández Espíndola, Tomo III, página 2070)

---

Reformar la ley de amparo, para modificar el amparo directo e indirecto, y dividirlo en amparo contra cuestiones de legalidad y contra leyes que se estimen inconstitucionales.

**TEXTO ACTUAL.** A efecto de ser más breves, omitimos la transcripción de los artículos que regulan el amparo directo e indirecto.

**JUSTIFICACIÓN.** Consideramos que el propósito fundamental de la reforma es hacer del juicio de amparo una institución que proteja las garantías individuales. El juicio de amparo ha originado severos problemas, por razones que estimamos poco trascendentes argumentar para efectos de la propuesta, podríamos mencionar como ejemplos el incumplimiento de sentencias de amparo por las autoridades responsables, demandas de amparo para dilatar los procedimientos de origen por parte de los quejosos y distintos criterios jurisprudenciales contradictorios.

La propuesta tiene como finalidad evitar la proliferación de juicios innecesarios, facultando al particular alegar cuestiones solamente de legalidad en el amparo indirecto, es decir violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, y únicamente cuestiones de constitucionalidad de leyes en el amparo directo, al final de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio.

Se propone que el amparo indirecto sea ante el juez de Distrito, y solamente su procedencia en los casos en que se aleguen cuestiones de legalidad, se trate de actos dictados en juicio o bien en procedimientos seguidos en forma de juicio. El amparo directo solo procedería contra leyes, ya sean heteroaplicativas o contra el último acto de aplicación. Por tanto todas las disposiciones de la ley de amparo que hablen de legalidad formarán parte del amparo indirecto.

El amparo directo se sustanciaría en forma sucinta, en audiencia pública y sólo procedería el sobreseimiento si la demanda no es presentada en tiempo o cuando haya sido impugnada con anterioridad.

Desde luego la reforma implicaría que las actuales disposiciones del amparo indirecto que se refieran a cuestiones de constitucionalidad de leyes se reubiquen en el amparo directo, y las cuestiones de legalidad del amparo directo se reubiquen en el amparo indirecto.

Si bien es cierto que un quejoso debería presentar dos demandas, una por constitucionalidad la otra por legalidad, la primera sería la única que debería presentar.

La reforma propuesta tendría como efecto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de los recursos por resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito y éstos por resoluciones de los Jueces de Distrito.

## TEXTOS PROPUESTOS.

ARTICULO 114.- El amparo se pedirá ante el juez de distrito:

I.- Contra las sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias laudos o resoluciones indicados.

Para los efectos de esta fracción, sólo será procedente el juicio de amparo cuando las sentencias definitivas o laudos y resoluciones sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a sus principios generales de Derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.

II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.

III.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.

Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.

IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;

V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercera;

## DE LA DEMANDA

ARTICULO 115.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

I.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;

**II.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado;**

**III.- La autoridad o autoridades responsables;**

**IV.- El acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación;**

**V.- Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones;**

**VI.- La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicarse, cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de las leyes de fondo. Lo mismo se observará cuando la sentencia se funde en los principios generales de derecho.**

**Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, deberá cumplirse con esta prescripción en párrafos separados y numerados.**

### **TITULO TERCERO. DE LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO ANTE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO**

ARTICULO \_\_\_\_.- El juicio de amparo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones \_ y \_ del artículo 107 constitucional:

I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del último acto de aplicación, se estimen inconstitucionales.

Se considera el último acto de aplicación las sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, o contra las resolución definitiva cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, siempre que no proceda algún recurso ordinario que pueda modificarlo o nulificarlo

II. Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1o. de esta ley.

## DE LA DEMANDA

ARTICULO 166.- La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

I.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre;

II.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado;

III.- La autoridad o autoridades responsables;

IV.- La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la resolución definitiva en un procedimiento seguido en forma de juicio, que constituya el último acto, a no ser que la demanda se promueva contra la entrada en vigor de la ley.

V.- La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio o al procedimiento seguido en forma de juicio, o la fecha en que haya tenido conocimiento el quejoso de la resolución recurrida;

VI.- Las leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general y los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o conceptos de la misma violación, y los documentos que acrediten la aplicación de las disposiciones reclamadas.

VII.- Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida. (Luis Orlando Hernández, Tomo III, páginas 2083 a 2090)

---

PROPUESTA. Otra solución para evitar la proliferación innecesaria de juicios podría ser que se apliquen las mismas reglas a los procedimientos seguidos en forma de juicio que en el amparo directo en materia civil.

Asimismo, que se de seguridad jurídica a la parte quejosa para impugnar por una sola vez la inconstitucionalidad de leyes, ya que el actual criterio es que el primer acto de aplicación debe causarle perjuicio, es decir se vincula la constitucionalidad de leyes a los aspectos de legalidad, cuando consideramos que es suficiente agravio el que se aplique una ley a la parte quejosa que estima es inconstitucional. Pero además, en un procedimiento seguido en forma de juicio, se pueden aplicar distintos preceptos de una ley en distintos momentos, por lo que daría lugar a diversos juicios de amparo por el primer acto de aplicación, bajo el riesgo de que no hacerlo, al dictarse sentencia definitiva y reclamar la inconstitucionalidad de diversos artículos se sobresea bajo el criterio de ser actos consentidos.

A este problema se le agrega otro, en el sentido de que además la ley se debió aplicar en perjuicio de la quejosa, ya que aún cuando se aplique la ley, solo puede reclamar aquellos preceptos que le causen perjuicio a la



parte quejosa, criterio que es totalmente distinto al amparo contra leyes heteroaplicativas. Por ello proponemos que una vez concluido el juicio o el procedimiento seguido en forma de juicio, el quejoso pueda impugnar la inconstitucionalidad de todos los preceptos que le fueron aplicados.

114.- El amparo se pedirá ante el juez de distrito:

I.- Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y que el acto reclamado no provenga de un procedimiento seguido en forma de juicio.

II. Contra actos promovidos por persona extraña a una controversia.

III.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.

Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.

IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;

V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de terceraía;

ARTICULO 158.- El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede:

I.- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo el primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso.

II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva, respecto de la cual no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda.

III. Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias laudos o resoluciones indicados.

Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a sus principios generales de Derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o solución que pongan fin al juicio o resolución dictada que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que ponga fin al procedimiento seguido en forma de juicio.

VI. - Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1o. de esta ley.

**ARTICULO 159.-** En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, o en los procedimientos seguidos en forma de juicio que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso:

I.- Cuando no se le cite al juicio o al procedimiento seguido en forma de juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;

II.- Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio o en el procedimiento seguido en forma de juicio de que se trate;

III.- Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley;

IV.- Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado,

V.- Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;

VI.- Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley;

VII.- Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos;

VIII.- Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera que no pueda alegar sobre ellos;

IX.- Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes substanciales de procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo;

X.- Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando el juez, magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente para proceder;

XI.- En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda

Hacer una ley que facilite su aplicación mediante un texto menos complejo y más fácil de comprender y, en la medida de lo posible, menos interpretable. (Luis Orlando Hernández, Tomo III, páginas 2094 a 2100)

---

Una de las principales demandas de la sociedad mexicana es la falta de una adecuada impartición y procuración de justicia, principalmente cuando la autoridad encargada de ello, el Ministerio Público, deja de cumplir

con sus funciones, dejando al gobernado en estado de indefensión, toda vez que hasta antes de la última reforma al artículo 21 de la Constitución General de la República, dicha Representación Social ejercía el monopolio de la acción penal, sin que en contra de sus resoluciones que negara o desistiera dicha acción se pudiera entablar impugnación alguna, lo que significaba que el denunciante o querellante no pudiese inconformarse en contra de una actitud ilegal de la autoridad investigadora, lo que ocasionaba en muchos casos, la existencia de impunidad.

Sin embargo, con la citada reforma se dejó abierta la posibilidad de impugnar dichas resoluciones por vía jurisdiccional en los términos que establezca la Ley, misma que a juicio del que propone debe ser la de Amparo, pues el Constituyente no especificó en que Ley se debería regular dicha vía jurisdiccional.

Sobre este tema se han expuesto diferentes criterios: hay quienes afirman que debería establecerse una nueva instancia jurisdiccional que resuelva estos casos, lo que traería consigo la incorporación de una nueva institución innecesaria

Tomando en cuenta que la Ley de Amparo es la vía por la cual los ciudadanos pueden hacer valer sus garantías individuales, cuando estas han sido violadas por la autoridad, y que además sirve para llevar el control constitucional y la legalidad de los actos del gobernante, se considera que a través de ella debe de impugnarse las actuaciones del Ministerio Público que tiendan a negar o desistir la acción penal. Con ello quedaría garantizado para la víctima del delito la no-impunidad de los hechos

delictuosos, ya que incluso, el prestigio del Poder Judicial de la Federación, generaría una plena confianza de la sociedad en la impartición de justicia.

Con esta propuesta no existe la necesidad de crear nuevos procedimientos e instancias que incrementen la burocracia judicial, toda vez que con el procedimiento y las instancias establecidos en la Ley de Amparo se puede cumplir cabalmente con la citada última reforma al artículo 21 Constitucional.

La intención de la presente propuesta es incorporar en el artículo 114 de la Ley de Amparo una fracción que establezca que el amparo indirecto se pida ante el juez de Distrito, contra las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, dejando con esto en claro la vía jurisdiccional a que se refiere el artículo 21 de nuestra Carta Magna. (Gabriel R. Zapata Bello, Tomo III, páginas 2134 a 2136)

---

**ARTÍCULO 114.** El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso;

II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos, del trabajo o de árbitros.

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia;

III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.

Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso siempre y cuando trascienda al resultado del fallo.

Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;

IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;



V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercera; y

VI. Contra leyes o actos de la autoridad federal, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios en los casos de las fracciones II y III del artículo 1o. de esta ley. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2217 y 2218)

---

La intención del presente es plasmar alguna posible propuesta que sea viable y conduzca a crear, modificar y, en su caso, derogar disposiciones a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar el abuso del juicio de amparo INDIRECTO TRATÁNDOSE DE ACTOS PROVENIENTES DE TRIBUNALES JUDICIALES ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO y, a su vez, permita a los jueces de Distrito, cumplir su función jurídica de emitir resoluciones más apegada a los principios establecidos en el normativo 17 de la ley suprema del país, esto acorde con la constante evolución económica, política y social de la Nación; por ende, huelga hablar de la vital e irrefragable necesidad de la existencia del juicio de amparo y su sublime esencia

La trayectoria existencial del juicio constitucional indirecto evidencia el aumento excesivo en la tramitación de estos juicios, y que para hacer frente a este fenómeno, se ha tomado como medida la fórmula siguiente: a

mayor promoción de amparos indirectos, creación de más juzgados de Distrito; pero esa misma trayectoria existencial prueba la ineficacia de la medida por insuficiente, pues desde los puntos de vista económico y presupuestal, no es factible, sano y conveniente la creación constante y en gran número de juzgados, en tanto que, desde la óptica social, se requiere que tal medida se concatene con otros mecanismos legales conductores a que los fallos de amparo no se alejen de los principios rectores del citado precepto 17 de nuestra Carta Magna.

Por lo expuesto, es clara la necesidad de buscar nuevos métodos jurídicos que permitan al Poder Judicial de la Federación, a través de los jueces federales, cumplir con la noble tarea de impartir justicia constitucional de manera pronta y expedita, la cual, por antonomasia, es social y se impetra a través del juicio de amparo, pero que, a su vez esas medidas no atenten su asequibilidad.

No se puede soslayar que la historia de las sentencias de los juicios de amparo indirecto, en buen número de ellas, muestran el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia de la Unión y su eficacia para que las autoridades ciñan sus actos a la constitución federal; sin embargo, datos estadísticos oficiales revelan que en su mayoría, se gestionan a pesar de su improcedencia, abusando de su promoción, en cuyos casos, generalmente se persigue el fin de obtener la suspensión de los actos reclamados, con el único objeto de retardar la ejecución y cumplimiento de resoluciones judiciales, tanto para ganar tiempo, como para la obtención de beneficio económico de abogados que se prestan y recomiendan tales acciones, provocando el retardo en la impartición de la justicia en general.

Pese a ello, de ninguna manera y desde ningún punto de vista se considera inadecuada la existencia de la figura jurídica de la suspensión del acto reclamado, al contrario, la misma ha sido uno de los logros de mayor importancia para nuestro sistema de enjuiciamiento constitucional.

No obstante, y como se estableció, la anterior circunstancia ha dado lugar a que algunos particulares, bajo el asesoramiento de abogados con conducta poco ética, obtengan la citada institución jurídica suspensiva, para retardar la ejecución de resoluciones jurisdiccionales, sabiendo de antemano, que en el fondo, no les asiste razón legal ni jurídica en sus pretensiones; lo cual viene acaeciendo hasta la fecha, entre otras cosas, porque se aprovechan de la conformación del actual sistema normativo de tramitación del amparo bi-instancial. En otras palabras, la Ley de Amparo establece, en lo que aquí interesa, por un lado, que la demanda condigna se presente directamente ante el juzgado de Distrito (Oficialía de partes), sin necesidad, comúnmente, de acompañar constancia o instrumento alguno y, por el otro, que si ésta es clara, satisface los requisitos de sus artículos 116 y 120 y algunos otros, se debe proveer en cuanto a su admisión y, en su caso, se resuelva sobre suspensión provisional.

Y es aquí de donde, a criterio del suscrito surge, en gran parte, el aprovechamiento para tramitar amparos indirectos a la sazón improcedentes y, en muchos casos, logrando la obtención de la paralización en la ejecución de resoluciones judiciales a través de su suspensión; es decir, aprovechando que la demanda debe presentarse directamente ante el juez de Distrito, y de que éste únicamente cuenta con lo expuesto en la

demanda de garantías para proveer lo conducente, escrito de demanda en el cual, valiéndose de esas condiciones de su presentación, se promueven con fines alejados al espíritu de la Constitución General y la Ley, asentando en ella muchas veces hechos inexactos u omitiendo otros trascendentales para una determinación correcta sobre esos aspectos inmediatos a resolver, verbigracia, al señalar fecha diferente a la del real conocimiento del acto reclamado; no señalándola; también cuando se omite indicar que el acto reclamado se dictó en estricto acatamiento a una ejecutoria de amparo; soslayando indicar que frente al propio acto reclamado ya promovió otro juicio de garantías, pasando por alto exponer que frente al acto reclamado ya promovió o se encuentra tramitando un recurso o medio ordinario de defensa; ostentándose tercero extraño a la controversia cuando en realidad es parte o compareció a juicio; casos que se señalan a manera ilustrativa y no limitativa, pues son más los que en la actualidad se presentan.

Esto conduce a reflexionar sobre qué medidas pueden adoptarse para evitar, entre otras, las eventualidades mencionadas, pretensión de este escrito, y que conducen a la necesidad de que el juzgador del amparo tenga conocimiento de ellas al recibir la demanda constitucional, lo cual considero se puede lograr, si se establece en la mencionada Ley Reglamentaria, que determinadas demandas de amparo indirecto, en las cuales se reclame acto emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se presenten ante la autoridad responsable, imponiéndole, entre otras obligaciones, la de remitirla con su informe al juzgador de garantías y como justificación del mismo, copias certificadas legibles del juicio del cual provenga el acto reclamado, para que así, el juzgador de amparo las pueda, con pleno conocimiento y en vista de las actuaciones remitidas en fotocopias

autenticadas, admitir o desechar la demanda, obteniéndose lo primero, cuando realmente se advierta su procedencia y, lo segundo, cuando con esas documentales advierta que se dan alguna de las hipótesis citadas o algunas otras, que permitan arribar a la conclusión de su notoria e indudable improcedencia, para ello y bajo este contexto, reiterándose además que únicamente se esta hablando de actos derivados de procedimientos de carácter jurisdiccional, me permito formular excluyentes entre sí, las siguientes

### PROPUESTAS :

1.- Que cuando se reclame alguno de los actos comprendidos en el artículo 114 fracciones I, excepto cuando la norma tildada de inconstitucional no se haya aplicado en un procedimiento de carácter jurisdiccional, III y IV, de la Ley de Amparo, la demanda de garantías deberá presentarse ante la autoridad responsable de carácter judicial, administrativa o del trabajo que conozca del procedimiento en el cual se emitió u ordenó el acto de molestia, o se aplicó el precepto tildado de inconstitucional; en tanto que, en los casos contemplados en las demás fracciones del numeral en cita, y cuando se reclamen ordenes de aprehensión, se presente directamente ante el Juez de Distrito competente.

2.- Idéntica a la anterior, pero en el supuesto establecido en la fracción V, del citado precepto 114 (personas extrañas a juicio), la demanda de amparo deba presentarse ante el Organo Jurisdiccional que vaya a ejecutar, trate de ejecutar, ejecute o haya ejecutado el acto de molestia

reclamado, sea o no ordenadora, esto con el objeto de ajustarse a lo ordenado en el numeral 36 de la Ley de Amparo.

El proceder de la autoridad responsable que reciba la demanda de garantías en los casos antes especificados, puede instrumentarse de cualquiera de las formas siguientes:

A.- Que sólo se le encomiende la recepción de la demandada de amparo, con la obligación de remitirla de inmediato al juez de Distrito competente, conjuntamente con el o los informes y copia certificada legibles de la totalidad de las constancias integrantes del procedimiento en el cual se emitió el acto de molestia reclamado o se aplicó la ley impugnada de inconstitucionalidad, salvo que se trate de actuaciones totalmente concluidas, pues en tal caso, deberá remitir el expediente original, para que éste último, con vista en dichas constancias resuelva lo conducente en cuanto a su admisión y, en su caso, lo relativo a la suspensión provisional, conforme a la Ley de Amparo.

B.- O bien, que la propia autoridad ante la cual se presente la demanda, proceda en forma similar a la establecida para la substanciación e integración de los juicios de amparo directos, siguiendo en general las reglas apuntadas por los artículos 163, 164, 165, 167, 168, 169, 170, 173 y demás relativos de dicha ley; y resolviendo sobre suspensión en vista de las constancias con que cuente, en cuyo caso, cabría realizar algunas adecuaciones a saber:

a).- En los casos en que el quejoso se ostente tercero extraño al juicio de origen, la autoridad responsable no tendrá la obligación de hacer la certificación a que alude el artículo 163 de la Ley de Amparo, solamente se hará constar la fecha en que se presentó la demanda de garantías.

b).- En la diligencia en la cual se realice el emplazamiento de los terceros perjudicados, el funcionario que la practique les hará del conocimiento sobre la existencia de la promoción del juicio de amparo, y los requerirá tanto para que comparezca ante el Juez de Distrito a quien corresponda conocer de la demanda de garantías, para los efectos de imponerse de la fecha y hora que se señale para la celebración de la audiencia constitucional, y puedan hacer valer los derechos que a su parte corresponda, como para que señalen, en el lugar de residencia del Juez de Distrito competente, domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal que deban hacerseles, bajo el apercibimiento de no hacerlo, éstas se le practicarán por medio de lista.

c) - Con su informe las autoridades responsables deberán acompañar como justificación del mismo, copias certificadas legibles de la totalidad de las constancias integrantes del juicio de donde deriva el acto reclamado, quedando en su poder el expediente original

d).- Que frente a la resolución sobre suspensión emitida por la autoridad responsable, procederá el recurso de queja, en los mismos términos de lo dispuesto por el artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Amparo, pudiéndose establecer que el conocimiento y resolución del citado medio de impugnación, corresponda al Juez de Distrito que corresponda

conocer del amparo, y en contra de lo que éste resuelva proceda la queja de queja ante el Tribunal Colegiado en Turno que ejerza su jurisdicción sobre el Juez de Distrito antes citado, o también que frente a lo resulto por la responsable sobre suspensión, conozca directamente el referido Tribunal Colegiado siguiendo los lineamientos planteados en los numerales 97, 99, 100 y demás relativos del mismo cuerpo de leyes invocado con antelación.

e).- El señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo deberá hacer el Juez de Distrito competente, dentro de los quince días siguientes a la que reciba la demanda de amparo, con lo cual se brinda oportunidad a las partes para que acudan a defender sus derechos, ofrezcan las pruebas que a su parte corresponda y señalen domicilio para recibir notificaciones personales.

f).- En los casos en que no le sea posible a la autoridad responsable emplazar a uno o varios terceros perjudicados, después de haber agotado todos los medios a su alcance para tal efecto, levantará una certificación en ese sentido y remitirá la demanda de amparo y demás constancias ante el Juez de Distrito que deba conocer de la misma, quien acordará lo que conforme a derecho estime procedente sobre la imposibilidad de emplazamiento de los terceros perjudicados de mérito.

g).- Debe permitirse al Juez de Distrito que al recepcionar la demanda de amparo junto con los informes justificados de las autoridades responsables y teniendo a la vista las copias certificadas de las constancias integrantes del juicio de donde deriva el acto reclamado, pueda desechar de plano la demanda de amparo, invocando cualquiera de las causales de



improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo; eliminando con ello las trabas que para desechar de plano una demanda de amparo se encuentran establecidas en algunas tesis de jurisprudencia, tales como cuando se trata del agotamiento del principio de definitividad.

EN AMBOS CASOS, SE SUGIERE, que en el artículo 116, antes invocado, se incluya como requisito de la demanda, que fuera de los casos del numeral 13 y del en que se promueva por propio derecho, se exhiba documento que acredite el carácter o personalidad con la cual se comparece.

## **CONSIDERACIONES FINALES**

De lograrse reformar en el sentido antes indicado, se lograría que en una parte, de la amplia gama de los supuestos de procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta (cuando se reclaman actos derivados de procedimientos de carácter jurisdiccional, sean partes o terceros extraños al mismo), se pueda disminuir en forma considerable la promoción de juicios de garantías en donde únicamente interesa al promovente obtener la suspensión del acto reclamado, para de esa manera retardar la ejecución de la resolución que no le es favorable a los intereses del amparista, y sabe de antemano que no le será concedida la protección constitucional solicitada, por no asistirle la razón en sus aseveraciones; lo cual repercutirá en la disminución del trámite de este tipo de juicios en los Juzgados de Distrito y como consecuencia de ello, reducir la necesidad de la creación de nuevos Organos de Control constitucional.

Lo anterior es así, pues al recibir la autoridad responsable la demanda de amparo respectiva, y teniendo a la vista las constancias del juicio de donde emana el acto reclamado, podrá apreciar de una mejor manera el asunto, como actualmente no le es accesible al Juez de Distrito; la propuesta es con la finalidad de que se resuelva sobre la procedencia o no de la suspensión de la resolución reclamada, con vista a las constancias procesales.

Además, al ser enviado junto con la demanda de amparo, el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables y las copias certificadas de las constancias integrantes del juicio de origen, tal circunstancia origina que al Juez de Distrito competente, solamente le queda señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, dando únicamente margen a las partes para que puedan comparecer a hacer valer sus derechos; de tal suerte que con ello se presentaría la posibilidad de que el expediente de amparo quedará más rápidamente integrado para emitir la sentencia constitucional, lo cual se traduce en una pronta impartición de justicia ordenada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sucede que en practica cotidiana un gran porcentaje de los diferimientos de la celebración de las audiencias constitucionales en los juicios de amparo, se realizan bajo las razones de faltar terceros perjudicados por emplazar, de no obrar en autos el informe justificado de las autoridades responsables ni el acuse de recibo del oficio en donde le fue notificado el auto en el cual se le solicitó el mismo, para de esa manera presumir cierto el acto atribuido y/o de no obrar la totalidad de las constancias integrantes del juicio de origen,

las cuales son necesarias para emitir la sentencia constitucional correspondiente.

En caso de hacerse realidad la reforma que se ha venido comentando, la misma no implicaría la necesidad de una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, pues dicha fracción se encuentra redactada en los mismos términos a la fracción V, del citado numeral de nuestra Carta Magna, que se refiere a la promoción del juicio de amparo en la vía directa, el cual como es sabido, la demanda de amparo es presentada ante la propia autoridad responsable, lo que ahora se propone en el presente trabajo en una parte de la amplia gama de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta o bi-instancial.

Finalmente, con la reforma propuesta con antelación, en forma alguna se afecta la asequibilidad del juicio de amparo para todo gobernado que considere que un acto de autoridad le vulnera alguna de sus garantías individuales consagradas en la parte dogmática de nuestra Carta Magna, por el contrario, la reforma en cita, beneficia a los gobernados que reclamen actos de autoridades que tiene su sede en poblaciones en las cuales no reside el Juzgado de Distrito que ejerce jurisdicción territorial en esa parte del territorio nacional, pues con ello evitarán trasladarse hasta la ciudad en la cual se encuentra establecido este último para la presentación de la demanda de amparo correspondiente; además, lo anterior también es beneficio si se toma en cuenta que en la mayoría de los casos, son las autoridades locales en donde reside el quejoso, quienes realizan los actos que aquél considera como violatorios de sus garantías individuales y que en

su momento lo orillan a promover la acción de amparo en su contra, por lo que de la manera propuesta se evita los costos del traslado respectivo a la residencia del Juez de Distrito competente para presentar la demanda respectiva, dando una mayor accesibilidad a todo gobernado al juicio de garantías.(Moisés Duarte Briz, Tomo IV, páginas 2365 a 2375).

---

EN MATERIA CIVIL del orden común o tratándose de juicios mercantiles, no procederá la acción constitucional en la vía de amparo indirecto, con las únicas excepciones consistentes en que el quejoso alegue inaudición o se trate de órdenes de arresto, esto último por tratarse de actos que restringen la libertad personal.

En la vía de amparo directo en materia común o cuando se trate de juicios mercantiles, la acción de garantías procederá contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, siempre y cuando el interés del negocio exceda de 1000 (mil) veces el salario mínimo o se afecte o puedan afectarse derechos de menores o incapaces.

La acción constitucional en esta materia civil, en caso de competencia federal, seguirá como se encuentra actualmente, sea en la vía directa o indirecta.

Como se advierte, un buen número de decisiones en la materia de su legislación, quedará en estos casos a la consideración de los tribunales de los Estados, sin posibilidad de que intervenga ya la autoridad judicial federal. (José Luis Arellano Pita, Tomo IV, páginas 2692 y 2693).

---

Se adicione un artículo que disponga sobre los requisitos de procedencia del juicio de amparo, ante los Tribunales Unitarios de Circuito, ya que el artículo 114 señala contra que actos de autoridad se pedirá el amparo, ante el juez de Distrito, únicamente. (Josefina Mondragón Lerma, Tomo V, página 38)

**Artículo 115.** Salvo los casos a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el juicio de amparo sólo podrá promoverse, contra resoluciones judiciales del orden civil, cuando la resolución reclamada sea contraria a la ley aplicable al caso o a su interpretación jurídica.

### **PROPUESTAS**

El artículo 115 puede eliminarse sin que haya ninguna consecuencia, porque los amparos siempre tienen conceptos de violación, en los cuales se establece una violación a la ley aplicable o a su interpretación jurídica, sea real o sea supuesta, y si no los tienen, lo que sólo puede examinarse en la sentencia; se sobreseerá el juicio. (Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1066 y 1067)

---

El artículo 115 de la Ley de Amparo me parece absurdo, pues el amparo indirecto en materia judicial siempre será porque la responsable dejó de aplicar la ley o lo hizo indebidamente. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1658)

---

Se propone su derogación por estimarse innecesaria la limitación que en el se impone. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1926)

---

**ARTÍCULO 115.** Salvo los casos a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el juicio de amparo sólo podrá promoverse, contra resoluciones judiciales del orden civil, cuando la resolución reclamada sea contraria a la ley aplicable al caso o a su interpretación jurídica. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2218)

---

**Artículo 115 bis.** Los Tribunales Unitarios de Circuito por excepción, conocerán de los amparos indirectos promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios de Circuito, que no constituyan sentencias definitivas respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante un Juez de Distrito. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2218)

## **Capítulo II**

### **De la demanda**

**Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:**

**I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;**

**II. El nombre y domicilio del tercero perjudicado;**

**III. La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes;**

### **PROPUESTAS**

Del artículo 116, lo único que hay que hacer es revisar la redacción para quitar frase inútiles, como por ejemplo en la fracción III: "el quejoso deberá señalar a los titulares de los organismos del Estado etc, cuando se trata de amparos contra leyes" y digo que hay que quitar esa frase, porque en tratándose de la ley, las autoridades responsables son el legislativo que la expide, el ejecutivo que la promulga y quienes tienen a su cargo su



publicación, porque la ley es un acto complejo, en el que intervienen diversas autoridades. (Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1067)

---

**IV. La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación;**

**V. Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1° de esta ley;**

### **PROPUESTAS**

Los preceptos Constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de violación.

- Se propone reformar esta fracción para excluir la referencia que se hace a la fracción I del artículo 1° de la Ley. De igual forma se propone derogar la fracción VI del vigente precepto por las razones expuestas en la propuesta al artículo 1°. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1926)

---

Sobre este precepto el artículo 4º de la ley dice "El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la Ley, Tratado Internacional, el Reglamento cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta Ley lo permita expresamente; y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor."

El artículo antes mencionado no señala que deba ser un Licenciado en Derecho quien promueva el Juicio de Garantías, por lo que no resulta necesario que el artículo 116 mencione que se deban expresar los preceptos constitucionales violados; ya que cualquier persona puede ocurrir a solicitar la Protección de la Justicia Federal, aún no teniendo nociones de derecho, máxime que se trata de un juicio en el que se busca la protección del individuo atropellado en sus derechos, para que estos no se vulneren.

Asimismo el artículo 6º de la ley dice "El menor de edad podrá pedir Amparo sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente o impedido; pero en tal caso, el Juez, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes; le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio."

Es así que los artículo 4º y 6º, mencionan que cualquier persona, por sí misma y el menor de edad pueden solicitar el Amparo de la Justicia Federal, lo que nos hace entender que no necesitan ser conocedores del derecho y sobre todo del Juicio de Amparo.

En conclusión se estima que la fracción V del artículo 116 de la ley debe ser derogada del mismo, ya que existen lo siguientes principios latinos jura novit curia que significa que el juez conoce el derecho y se usa para afirmar que el derecho no está sujeto a prueba; el otro principio es Jus novit curia, narra mihi factum, dabo tibi jus que significa que a los jueces se les debe narrar los hechos y estos le darán el derecho al demandante.

Por lo que en materia de Amparo únicamente deben narrarse los hechos constitutivos de la violación sufrida por el individuo y el juez quien si es conocedor de la materia deberá determinar si efectivamente fueron violadas sus garantías individuales y en caso de otorgar el Amparo mencionar que preceptos constitucionales fueron violados. (Juan Angel Martínez Acuña, Tomo III, páginas 1983 a 1985)

---

**VI. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General**

de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida.

### **PROPUESTAS**

Respecto de la anterior tesis, opinamos que tanto la Ley de Amparo, como la jurisprudencia del Poder Judicial Federal, deben armonizarse con la legislación fiscal, ya que existe suplencia de la queja obligatoria u oficiosa, en el supuesto del artículo 212, segundo párrafo, del Código Fiscal, en el sentido de que cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio contencioso administrativo no fuese señalada por el actor como demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en el plazo de 45 días.

Por lo antes expuesto, consideramos muy acertad y justa la siguiente tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.- Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz

administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si señala o no como responsable a la referida autoridad y, de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición.

2ª. XXIV/96

Amparo en revisión 340/96 - Transportes Aguascalientes, S.A. de C.V.- 15 de marzo de 1996 - Cuatro votos - Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, por estar integrando la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, en virtud de la designación del Tribunal Pleno.- En su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Genaro David Góngora Pimentel.- Secretaria: Adela Domínguez Salazar

Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, abril de 1996, pp. 204 y 205. (Gregorio Sánchez León, Tomo I, páginas 14 y 15)

---

ADICIONAR UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

"ARTICULO 116 .....

....."

En todo caso, el quejoso deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, que los actos reclamados en la demanda, no han sido motivo de otro Juicio de Amparo "

#### MOTIVO

Evitar que los quejosos promueven nuevos juicio de Amparo en contra de los mismos actos reclamados que hayan sido materia de otro juicio, y en caso de que así sea, sancionar a los promoventes en los términos de la propuesta relativa a la Fracción I, del Artículo 211. (Armando Díaz Olivares, Tomo I, página 93)

---

1.- De todos los que de una forma u otra están relacionados con el trámite del amparo, es de sobra conocido la importancia y trascendencia que tiene el incidente de suspensión.

Bástame decir que a un alto porcentaje de quejosos lo único que les interesa al promover los juicios de garantías no es obtener el otorgamiento de la protección federal (de antemano saben que les será negado), sino la concesión de la suspensión ya provisional ya definitiva.

Justo por tal relevancia es que resulta absurdo que el incidente respectivo se inicie con un escrito sin firma; ocuso que no deja de ser una verdadera demanda incidental.

Efectivamente, la generalidad de los abogados postulantes acostumbran pedir a sus clientes que les firmen sólo el original de la demanda de garantías, comenzándose así la tramitación del incidente de suspensión con copias, por duplicado, de dicho libelo, pero, increíblemente, sin tener el respaldo de la firma del promovente.

Debido quizás a la urgencia del agraviado en la obtención de la medida, así como a la falta de costumbre del juzgador o para evitarse éste problemas, se ha accedido a dar curso a las peticiones, mas incorrectamente.

Tal como se encuentra redactada la ley de la materia (que no contempla a la firma del quejoso como uno de los requisitos de la demanda de amparo directo o indirecto), la única forma de dar respuesta a esas promociones sin respaldo, sería denegando el trámite del incidente hasta que se subsanara la omisión de la firma, mas lo conveniente sería incluir a la firma como elemento tanto de la demanda principal como de la incidental,

para lo cual deberían adicionarse los artículos 116, 124 y 166 de la ley referida, con una fracción mas. (Jorge Figueroa Cacho, Tomo I, páginas 397 y 398)

---

III.- Así mismo, y tomando en cuenta que en múltiples ocasiones los quejosos en los juicios de amparo contra resoluciones jurisdiccionales en materia penal no solamente promueven un solo juicio de garantías sino que en ocasiones promueven dos o más según les convenga a su propósito de retardar los procesos, no obstante que antes de hacer el señalamiento a que se refiere el Artículo 116 de la Ley de Amparo protestan decir verdad, se hace necesario adicionar una fracción más a dicho artículo para que los quejosos manifiesten si tienen promovido diverso juicio de amparo relacionado con el juicio penal contra el cual ya hicieron valer una demanda de garantías para así evitar que se entorpezcan dichos juicios y a la vez ahorrar trabajo a los juzgados de amparo.

Para tal efecto, dicha fracción quedaría redactada en la siguiente forma:

Artículo 116.-

Fracción VII. Si el quejoso tiene promovido diverso juicio de garantías en que haya señalado el mismo acto reclamado y contra las mismas autoridades. (José Antonio Sam López, Tomo II, páginas 794 y 795)



Deben reformarse a su vez los artículos 76 Bis y 116, de la Ley de Amparo, a fin de hacer más sencilla la formación de la demanda de amparo y no dar lugar a que por defectos de ésta, o de la queja, se niegue al quejoso el amparo y protección de la justicia federal, cuando a éste le han sido violadas las garantías individuales

Para simplificar la demanda de amparo, el artículo 116 de la Ley de Amparo, bien podría adicionarse con lo siguiente: "En caso de que el quejoso desconozca la existencia de tercero perjudicado, o por cualquier causa omitiere mencionar su nombre y domicilio, la autoridad responsable bajo su más estricta responsabilidad, estará obligada a proporcionar con su informe justificado el nombre y domicilio de éste". "En caso de que el quejoso omita señalar las garantías violadas y los conceptos de violación, o lo hiciere equivocadamente, probándose la existencia del acto reclamado y siendo éste violatorio de garantías individuales, las autoridades que conozcan de él, deberán suplir esa deficiencia en la sentencia que en su caso se dicte." (Jorge Arellano Medina, Tomo II, páginas 812 y 813)

---

#### **ANÁLISIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU PROMOCIÓN EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, TRIBUNALES Y JUZGADOS.**

En los capítulos anteriores hemos explicado ampliamente las herramientas y servicios que Internet maneja, así como la importancia y aplicación de estos servicios dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunales Colegiados y Juzgados; así como las ventajas que

implica el tener acceso a esta 'red' y el interés por el gobernado de conocer y tener más opciones para la Presentación de la Demanda de Amparo y su Promoción.

Al utilizar Internet como una opción más ayudará a realizar avances tecnológicos en materia informática-jurídica, más estructurada y difundida en el que los usuarios (gobernados) tendrán una participación activa. Para los juzgados y Tribunales Mexicanos, la internet representa una poderosa herramienta para acercar a los Ministros, Magistrados, Jueces y Gobernados con las Instituciones con su cúmulo de información reciente, estimulando su interés hacia los medios modernos de comunicación, buscando con esto una mayor eficacia en el trámite de presentación de documentos ante las Instituciones encargadas de la impartición de la justicia.

El uso de una red resulta, hasta este momento, ya accesible, Cuando en los años sesenta la Internet fue creada, con el propósito de intercambiar la libre información.

Desgraciadamente, en nuestro país no ocurre así. Las causas principales son:

El desconocimiento del potencial de una red.

La poca disponibilidad hacia los medios de comunicación

El porcentaje de gente interesada para conocer la red no llega al 1%. A nivel medio superior, y básico es nulo.

Desde un punto de vista meramente nacional, este dato podría parecer poco significativo, ya que podría argüirse la novedad de la red.

Sin embargo, deben tomarse en cuenta otros factores. En los Estados Unidos se encuentran conectadas a la red de Instituciones como universidades, primarias, bibliotecas, radiodifusoras, hospitales, iglesias, centros de espectáculos, revistas y hasta reclusorios, entre otros.

Podría pensarse el potencial económico de ese país, que le permite realizar inversiones tales que hacen posibles conectar cualquier tipo de Institución e incluso particulares

La infraestructura para crear un medio de Presentación de la Demanda de Amparo y su Promoción, no resulta realmente costosa, debido a los beneficios que se pueden obtener de ella, la inversión se recupera en muy poco tiempo. Independientemente de que el Poder Judicial Federal Tiene esa infraestructura, ya que tan sólo requeriría de algunas adaptaciones como por ejemplo un soporte de mayor capacidad para la entrega de un acuse de recibo en el caso del correo electrónico (e-mail).

La Suprema Corte esta encargada de proveer el servicio a Juzgados y Tribunales y al público en general. Y crea documentos de interés jurídico, todo esto, para una más rápida integración del gobernado al uso del sistema; las instituciones que cuentan con este servicio otorgan cuentas de

acceso a investigadores y profesionales de las Leyes, pero dejan fuera a la mayor parte de la población.

El objetivo primario de Internet y muy en especial del correo electrónico (e-mail), es convertirse en un vehículo para la emisión de información a nivel masivo, propósito que no se cumple en México. Sólo unos cuantos gozan de este beneficio, resulta verdaderamente triste, ya que abogados, peritos y otros más, están prácticamente marginados de los avances tecnológicos que están presentando dentro del Poder Judicial Federal y a los grandes avances en infraestructura de Redes de Computo que se encuentran actualmente en la Suprema Corte de Justicia. (Ver anexo F)

Con esto, hay que tener en cuenta un aspecto aún más importante: la tan buscada integración en materia de Informática-Jurídica, que puede comenzar, mediante la conexión vía esta red entre los principales órganos el Poder Judicial Federal a nivel Nacional, ya que los regionalismos desaparecerán al convertirse en usuario de una red común.

Nada permanece estático, así que el próximo paso sería conoectar a todo el sistema educativo nacional público y privado, lo que desarrollaría en los individuos una cultura computacional, una actitud investigadora y una conciencia humanista

Para lograr estos objetivos es necesario llevar a cabo una serie de acciones: Difundir los alcances, servicios y beneficios de Internet en el Poder Judicial Federal, La Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe

darle la importancia debida a la red jurídica para despertar el interés en las comunidades computacionales, científicas, universitarias y en el usuario individual.

Pensar en un cambio tan profundo en la perspectiva jurídica mexicana, no deja de ser una idea con tintes ingenuos.

Sin embargo, tiene mucho de realidad. Con estudio cuidadoso y una estrategia de penetración, se podría enlazar primero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación del país, acto seguido al nivel de tribunales y Juzgados y por último hacia los gobernados.

¿Por qué la importancia de conectar primero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Los cambios más importantes en las corrientes de la informática-jurídica se da en el Poder Judicial Federal.

Esto es debido al ambiente que priva en el Consejo de la Judicatura Federal, al impulso existente hacia los proyectos de los abogados y al impulso creador del que se hace gala en estos años de la Internet. La impartición de justicia en México ganará mucho al descubrir los inmensos beneficios que esta red jurídica nos proveerá, ya que contiene los elementos más importantes para atraer la atención de los estudiosos del derecho:

ES FUENTE DE INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE, EL CORREO ELECTRÓNICO, PÁGINA WEB, LA INTERNET Y LA INTRANET, PARA UN PUNTO DE ENCUENTRO DE IDEOLOGÍAS Y LO MÁS IMPORTANTE UN

LUGAR DETERMINADO PARA LOGRAR EL ACCESO A LA RED JURÍDICA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA QUE NO SEA ELITÍSTA, SERÁ NECESARIA UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A NIVEL JURÍDICO.

Se debe mostrar tanto al abogado, al juez y al gobernado en particular que este servicio es su derecho y que deberá exigirlo ya sea en un bufete, o por una conexión privada. La presentación de la demanda de amparo y su promoción, es una oportunidad para todos, no es un lujo para unos cuantos.

El impulsar esta propuesta es una necesidad y una nueva herramienta jurídica, corresponderá tanto al Poder Judicial Federal como al Consejo de la Judicatura Federal y sobre todo al Poder Legislativo, la legislación de este tan importante tema, que veremos posteriormente dentro de esta tesis, todo esto en acorde a la idiosincrasia nacional y la apertura de grupos de discusión con temas de interés nacional, esta debe ser la primera meta a lograrse a través de la red jurídica, lo cual se desea impulsar creando este proyecto de tesis, introducir al Abogado, Juez, Magistrado, y Gobernado en General, y muy especial al de nuestro máximo Tribunal de Justicia en todas las posibilidades que ofrece INTERNET.

Internet es una estupenda oportunidad para México y una solución viable y factible para resolver un problema que ha frenado a nuestro país en sus intentos de crecimiento y desarrollo en el aspecto jurídico; la deficiencia en la impartición de justicia por obsolescencia y falta de ética.

La conexión a esta red jurídica esta ahí y fácilmente puede ser absorbida y distribuida equitativamente entre Justicia y Gobernado y los órganos Institucionales de Impartición de Justicia, con esto, nuestro Juicio de Amparo será aún más sólido que nunca.

## **PROPUESTAS**

**PRIMERA.-** En atención al carácter eminentemente dinámico que ostenta el derecho y muy especial el juicio de amparo, puesto que se halla en estado constante de evolución, la suprema corte de justicia de la nación, como un órgano institucionalmente autónomo, y como vigilante del medio de preservación de las garantías del gobernado y, en general de todo orden jurídico, es fundamental utilizar la ciencia y la tecnología de vanguardia en la informática-jurídica existente en esta institución, de aquí que nuestro interés se encuentre enfocado en su estructura, para realizar, como propuesta de implementación de la presentación de la demanda de amparo y su promoción 'vía Internet' en el poder judicial federal.

**SEGUNDA.-** La proyección de la informática a la documentación jurídica representa un aspecto de las proyecciones sociales del desarrollo tecnológico. Un desarrollo que se haya hoy definido y condicionado por el protagonismo de la información, así como por las posibilidades para su almacenamiento, proceso y difusión, anteriormente insospechadas. La racionalidad técnica de estos avances garantiza su objetividad, aparentemente indiscutible, pero, el propio tiempo, con ello descalifica cualquier tentativa de resistencia. De ahí que sea necesario proceder

continuamente a una valoración de la tecnología, o sea, a constantes juicios valorativos de los riesgos y ventajas de cada una de las innovaciones de la tecnología; por tanto, también de la tecnología jurídica.

TERCERA.- El habeas corpus y el habeas data representan, dos garantías procesales de aspectos diferentes de la libertad. Así mientras el primero se circunscribe a la dimensión física y externa de la libertad, el segundo tiende a proteger prioritariamente aspectos internos de la libertad: la identidad de la persona, su autodeterminación, su intimidad si bien, no debe soslayarse que, en las sociedades de informatizadas actuales, también la libre actuación pública de los ciudadanos se halla condicionada por sus posibilidades de acceso a la información, es necesario tener más opciones en la presentación de la demanda de amparo y sus promociones y no estar limitados, ya que no esta rebasando la tecnología moderna en el aspecto Informático, en México.

CUARTA.- La informática es una de las herramientas más importantes que ha desarrollado la inteligencia humana durante los últimos tiempos, pero que no deja de ser mero instrumento, pese a que algunos piensan, lamentablemente, que ha llegado a ser el rector del pensamiento humano. Lo anterior, no significa, de manera alguna, que intente restarle importancia al uso de la informática, sino que es nuestro deber normarla, sujetarla al derecho, para evitar que se convierta, más que en un instrumento, en una imposición absurda.

QUINTA.- En el futuro próximo será difícil llevar una vida normal, en cualquiera de las actividades sin tener un permanente contacto con las



computadoras y con otros dispositivos similares. Las personas que carezcan de conocimientos aun elementales, sobre estos equipos, serán consideradas como analfabetas, en las Instituciones, el personal que no domine el uso de tales equipos será personal inútil.

De hecho, se ha iniciado en todos los países un nuevo proceso de alfabetización, que arranca desde los niveles elementales de la enseñanza, parece redundante mencionar que la informática tiene una gran influencia y a veces define las posibilidades en los campos de las telecomunicaciones. Con el auxilio de las computadoras, es posible también, apoyar al ciudadano por lejos que se encuentre de una población.

SEXTA.- Es indudable que veremos en los próximos años a los gobiernos y a las más grandes empresas de los países desarrollados pugnar por el control de los mercados de la información en todo el mundo. La información es más que un mero instrumento que influye en la eficiencia de los procesos productivos y en el desarrollo de la ciencia y de sus aplicaciones, como lo es en este caso, que es para ampliar las oportunidades de presentar documentos oficiales ante cualquier Institución, el fenómeno Informático afecta de muy diversas maneras a toda la sociedad moderna y sin lugar a dudas, será componente definitorio en la civilización futura.

SÉPTIMA.- La Informática Jurídica ganará mucho al descubrir los inmensos beneficios que la red jurídica del Poder Judicial Federal proveerá, ya que contiene los elementos más importantes para atraer la atención de los gobernados en general: es fuente de información, correo electrónico,

foro de discusión, revista electrónica, depósito de actividades punto de encuentro de ideologías y los más importante un lugar para la investigación y la libre expresión en el aspecto jurídico, es por eso de suma importancia el impulso existente hacia los proyectos de la Informática-Jurídica, en las Universidades, para un profundo conocimiento del Derecho aplicado a la Informática, como un Futuro de las Leyes en México.

OCTAVA.- Las Universidades y proveedores privados del servicio de Internet, deben darle la importancia debida a la red jurídica, para despertar el interés en las comunidades computacionales, científicas, estudiantiles y en el usuario individual. Las instituciones de educación superior debe estudiar su conexión a corto plazo a la red informática del Poder Judicial Federal, para ofrecer este servicio a las Universidades integrándolas y haciéndolos partícipes activos del desarrollo mundial en todos los ámbitos del saber humano, la educación en México no puede ser pasiva, autoritaria o estática. El momento del cambio que se vive actualmente exige acciones para la incorporación de los gobernados conjuntamente con los profesionales del derecho a fuentes más versátil, dinámica e interactiva del conocimiento, el objetivo primario de internet es convertirse en un vehículo para la transmisión de información a nivel masivo, propósito que no se cumple en México. Solo unos cuantos gozan de este servicio y lo utilizan de manera limitada. El hecho es verdaderamente triste, ya que siendo una de las principales ciudades del mundo, los estudiantes universitarios estamos prácticamente marginados de los avances tecnológicos de la informática.

NOVENA - De lo anterior, cobra una gran significación la posibilidad de actualizar la legislación concerniente a la Demanda de Amparo y su

presentación en materia de informática, y dado el contexto predominantemente económico, hacer reformas pertinentes, actualizando este instrumento jurídico, acorde con la realidad del nuevo desafío que nos presenta la apertura jurídica en informática existente y dejar delimitado el campo de acción en cada una de las áreas de disciplina jurídica y que permitan el licenciado en derecho tener las herramientas necesarias para una mejor comprensión de estos instrumentos jurídicos que son indispensables en su formación, pues con los requerimientos de la apertura comercial globalizada se tendrá a una mayor interacción en la informática-jurídica. Es indispensable que el legislador elabore un proyecto de actualización para la Informática-Jurídica, para que la presentación de la demanda de amparo y su promoción sea congruente con el momento por el cual atraviesa esta figura jurídica, ya que ha sido rebasada en su contexto por otros mecanismos del quehacer profesional limitándose a poco menos que actos sin relevancia en torno a nuestra actual situación jurídica en materia de Amparo.

DÉCIMA.- Es necesario también que el legislador, estudie la posibilidad de otorgar mayor facilidades para que la Informática-Jurídica, en materia de Amparo, las personas que por diversos motivos no tienen recursos las cuales cubrir el pago por una demanda de amparo, tengan la posibilidad de poder llevarla a cabo sin intermediarios, dando la autorización al Poder Judicial Federal, para dar no solamente facilidad económica sino accesoria en lo concerniente al trámite administrativo y legal de dicha demanda de amparo, haciéndose así un beneficio social a favor de quien por diversas circunstancias no tiene a su alcance esta posibilidad. (José Antonio García, Tomo II, páginas 999 a 1009)

---

Los requisitos de la demanda previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo me parecen correctos con excepción de la fracción VI de ese ordenamiento, ya que es repetitiva pues lo que se pide que se haga en esa fracción es objeto del concepto de violación cuya formulación se exige en la fracción V del citado precepto. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1658 y 1659)**

---

Artículo 116, 166, 149, 131 y 149. Que se establezca en la ley la posibilidad de presentar demandas de amparo, informes con justificación, informes previos o notificaciones, por medio de correo electrónico, más ahora que ella está legitimada la firma digital, acompañando las copias de los actos por este medio (scanner). **(Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, página 1793)**

---

**AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA.** Se hace necesario llevar a texto expreso de la ley la jurisprudencia establecida en el sentido de que se puede ampliar el escrito inicial de demanda, por las causas que en la misma se señalan, como son entre otras, que haya hechos nuevos, que la demanda inicial contengan un principio de información sobre los hechos y el derecho que se introduce al juicio. Asimismo para los casos del amparo por derecho de petición, en que si del informe con justificación resulta un agravio para la quejosa, que ella lo pueda ampliar, como sucede en materia fiscal. **(Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, páginas 1793 y 1794)**

---

**PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO CONTRA RESOLUCIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.** En el caso de autoridades administrativas que dicten resoluciones en procedimientos administrativos en forma de juicio contra su resolución, procede el juicio de amparo directo.

Este sería el caso de los procedimientos de la Comisión, tanto de prácticas monopólicas como de concentraciones, porque en este último caso en el recurso administrativo los agentes económicos pueden ser oídos y con ellos excepcionarse y probar en su defensa.

Esto se justifica, porque tanto las resoluciones de los Tribunales Contenciosos Administrativos, como del Trabajo, procede el amparo directo contra sus resoluciones y la única diferencia es la naturaleza formal de la autoridad. Así también cuando la PROFECO, el IMPI y las Comisiones Bancarias resuelven arbitrajes, que no son judiciales, debiera proceder este tipo de amparo. Esta propuesta se justifica toda vez que el procedimiento seguido en forma de juicio es sustancialmente igual que un juicio ante tribunales, cuya diferencia radica en que lo resuelve la autoridad administrativa, pero materialmente es también un proceso jurisdiccional.

**AMPARO DIRECTO.** Las audiencias deberían ser públicas, como en la mayoría de los juicios. (Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, páginas 1796 y 1797)

---

Segundo.- resulta obligado determinar e instituir las leyes y procedimientos que permitan el acceso de los gobernados al juicio de amparo, de manera expedita, eficaz y cabal, en congruencia, tanto con el grado de instrucción de gran número de gobernados, como de su limitadísima capacidad económica y su estado de salud y edad; así proponemos, la adición del artículo 116 bis de la ley de amparo en los siguientes términos:

"artículo 116 bis.- en tratándose de menores de edad, incapacitados, ejidatarios, comuneros, pensionados, jubilados y trabajadores con percepciones hasta de tres salarios mínimos, la demanda de amparo podrá formularse en forma verbal por comparecencia judicial del quejoso". (Jesús González Moreno, Tomo III, página 1805)

---

"Artículo 116 - la demanda de amparo deberá formularse por escrito, o verbalmente en los casos establecidos en el artículo 116 bis, en la que se expresarán:

i.- ...

ii.- ...

iii.- ...

iv.- ...

v.- ...

vi.- ...

vii.- las pruebas conducentes a demostrar la existencia y la

inconstitucionalidad del acto reclamado". (Jesús González Moreno, Tomo III, página 1814)

---

**ARTÍCULO 116.** La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán:

I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;

II. El nombre y domicilio del tercero perjudicado si lo hubiere.

III. La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes;

IV. La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación;

V. Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de esta ley;

VI. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados, o la esfera de competencia del Distrito Federal o de alguno de los Municipios que haya sido invadida por la autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2219)**

---

Toda vez que el amparo fue creado para proteger al gobernado de los actos arbitrarios de las autoridades, y debe estar al alcance de cualquier persona, la ley debe de dar facilidades para que en las demandas de amparo indirecto en cualquier materia no se exijan más requisitos que el de señalar a groso modo los actos que se reclamen, las autoridades responsables y los hechos en que apoyen su demanda, no obstante no señalar concepto de violación, y sin importar la fecha del conocimiento de tales actos, en cuyo caso no deberá de actualizarse causa de importancia alguna de improcedencia por no promoverse dentro de cierto tiempo, ya que es bien sabido que la mayoría de la población campesina, obrera, indígenas o de las clases más necesitadas poco tienen acceso a este medio de defensa constitucional cuando es a ellos a quien más debe proteger. Por lo tanto, el juicio deberá ser más oficioso, aún en cuanto a recabar pruebas se refiere, sin tantas trabas jurídica y procurando siempre la búsqueda de la verdad. **(Jaqueline Velázquez Ramírez, Tomo IV, páginas 2795 y 2796).**

---



**ARTÍCULO 116.-** La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán:

I.- El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre.

II.- El nombre y domicilio del tercero perjudicado. \_

III.- La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes;

IV.- La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación;

V.- Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de esta ley;

VI.- Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o. de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal, y si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el

precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida.

VII.- Con la demanda, el agraviado deberá acompañar todas las pruebas documentales necesarias para evidenciar la inconstitucionalidad de facto o en caso de imposibilidad legal, indicar el lugar en donde se encuentran, para que el juez de Distrito tome las medidas correspondientes, en relación con la admisión de la demanda, salvo en los casos en los cuales se reclamen actos privativos de la libertad personal y en materia agraria a favor de las personas a que se refiere el artículo 212 de esta ley. (Salvador Bravo Gómez, Tomo V, páginas 26 y 27)

---

Concretamente le digo que con el sistema que se tiene de hacer notificaciones personales por medio de los actuarios, se gasta mucho tiempo y esfuerzo, pues da el caso de que en múltiples ocasiones los actuarios dan varias vueltas para poder hacer una notificación personal, a más del tiempo que gastan en su traslado, y a sitios muy distantes unos de otros.

De ahí que le sugiero lo siguiente:

a) Que cada Abogado litigante, o cada particular al iniciar un procedimiento ante los tribunales federales, al darle entrada en oficialía de partes a su escrito inicial, se le confiera un número confidencial y secreto. Para los abogados litigantes ese número sería permanente.

b) Ya con ese número en su poder, las notificaciones que debieran ser hechas personalmente, se podrían hacer por Internet, y el así notificado con su número confidencial, haría saber a la central, que había quedado enterado del acuerdo del caso.

c) Se dirá que se podría prestar para "chicanas" de parte de abogados deshonestos, 31 no avisar que se les había notificado; para salvar esa posibilidad, si pasados tres días no se hubiera recibido el aviso del caso en la misma Internet, se emplearía el actual y anticuado sistema de la notificación por medio del actuario.

d) Este procedimiento que le propongo, entiendo que ameritaría una modificación al Código Federal de Procedimientos Civiles, y a los demás ordenamientos similares, pero aún con la dificultad que anoto en el inciso anterior, estimo se obtendría un óptimo resultado que, bajaría en un 60 o 70% las notificaciones que hoy se hacen por medio de actuario, y ello significaría un gran ahorro de esfuerzo y tiempo.

e) Por otra parte, también se mantendría el sistema de notificación personal por actuario, respecto de aquellas personas que no tuvieran Internet.

f) Se reduciría también el trabajo físico de los actuarios, y se les podría emplear directamente en actividades dentro del tribunal al que estén adscritos.

Esto que le digo es sólo una idea inicial, que se meditaría por los expertos en la materia de ordenación (computación) y creo que los beneficios que se puedan obtener, serán mucho mayores que las posibles desventajas, que de cualquiera manera se buscaría eliminarlas, y sin duda los expertos tienen capacidad para ello.

Ojalá que encuentre interesante la propuesta, y entre otros muchos de sus aciertos quedara éste con otros, que ayuden a modernizar la impartición de justicia. (Ernesto Gutiérrez y González, Tomo V, páginas 224 y 225)

---

7.- Adicionar un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 116, en los siguientes términos:

"Art. 116.- ... cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial, pericial o inspección ocular para acreditar algún hecho, deberán anunciarla en la misma demanda, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, o el cuestionario para los peritos. El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho; lo anterior sin perjuicio de que el quejoso pudiera anunciar con posterioridad las refendas probanzas en los casos en que se pretendan probar hechos que haya conocido con motivo de los informes justificados que rindan las responsables, pues en este supuesto deberán anunciarse dentro de los tres días siguientes contados a partir del siguiente al en que le

**fueron legalmente notificados" (Gustavo Aquiles Gasca, Tomo V, páginas 240 y 241)**

---

**ARTICULO 116-A.**

**COMENTARIO**

Se propone regular sobre la ampliación de la demanda en los casos en que el quejoso desconozca diversas cuestiones que son vertidas por la autoridad responsable al rendir sus informes justificados.

reforma

**ARTICULO 116-A.** Se podrá ampliar la demanda de amparo cuando de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se advierta:

La existencia de un nuevo acto.

La intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado.

El fundamento jurídico y motivo que sustentan el acto.

En todo caso, la presentación de la ampliación de la demanda deberá realizarse atendiendo a los plazos y requisitos que establece esta Ley respecto a la demanda principal. (Juan José Paullada Figueroa, Tomo V, páginas 273 y 274)

---

ARTICULO 116-B.

COMENTARIO

En caso de ampliación de la demanda, se le otorga la posibilidad a las autoridades de que rindan sus informes de ley.

reforma

ARTICULO 116-B. Las autoridades responsables rendirán sus informes previos y justificados relativos a la ampliación de la demanda, dentro de los términos que establecen los artículos 131 y 149 de esta Ley, debiendo en su caso, acompañar al informe con justificación la copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. (Juan José Paullada Figueroa, Tomo V, página 274)

**Artículo 116 Bis. Derogado.**

**Artículo 117.** Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará, para la admisión de la demanda, que se exprese en ella el acto reclamado; la autoridad que lo hubiese ordenado, si fuere posible al promovente; el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el juez.

### **PROPUESTAS**

Más de 180 juzgados de Distrito en la República Mexicana ocupan casi la mitad de su tiempo y de sus recursos humanos y materiales en el trámite de juicios de amparo promovidos contra órdenes de detención o de aprehensión atribuidas a autoridades no judiciales como son, entre otros, los procuradores de justicia, los agentes del Ministerio Público y los directores de policía, así como la ejecución de tales órdenes que con frecuencia se reclaman de decenas de cuerpos policiacos.

Este trabajo implica, como en todos los juicios de amparo, la recepción, registro y análisis de la demanda, la formación del expediente principal y del incidente de suspensión, el dictado y notificación de cinco o



más acuerdos que deben hacerse del conocimiento, de una considerable cantidad de autoridades, sobre todo en lugares donde la zona metropolitana está formada con varios municipios, como los casos de Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, entre otros.

Sin embargo, rara vez encontraremos una demanda con la que se persiga realmente una seria declaración de inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues en casi la totalidad de los casos a los promoventes no les interesa una sentencia que generalmente es de sobreseimiento, ni la resolución interlocutoria en la que casi siempre se niega la suspensión definitiva de los actos. Lo único que pretenden es obtener una "protección rápida", a través de la suspensión de los actos reclamados, con la esperanza de que esa situación perdure el mayor tiempo posible.

#### SOLUCIÓN QUE SE PROPONE:

Las reformas al artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal y de los artículos 123 y 146 de la Ley de Amparo, fundamentalmente, así como del 39, 89 y 117 para precisarlos, aclararlos o adecuarlos.

Estas reformas darian lugar a lo siguiente:

A).- ELIMINACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SOLO ENTRATÁNDOSE DE LOS ACTOS ALUDIDOS. Para ello se sugiere decretar la suspensión de plano, oficiosamente, en el auto inicial, tomando las medidas de aseguramiento del quejoso, toda vez que el artículo 130 de la Ley de Amparo establece en su último párrafo la obligación de conceder

la suspensión provisional siempre que se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, sin que dicho precepto exija el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 124; por tanto no existe obstáculo para decretarla oficiosamente. Además, el mismo hecho de presentar una demanda contra éste tipo de actos genera la presunción de que implícitamente se pide la suspensión.

B).- LA ELIMINACIÓN DE LA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO Y DE LA DECLARACION DE EJECUTORIA EN ESTOS CASOS. Pues es sabido de todos los juzgadores federales, que resultan ser trámites inútiles, ya que a ninguna de las partes les interesan y sí, en cambio, ocasionan junto con el incidente, un gran gasto de recursos humanos, materiales y económicos que pueden emplearse mejor en los trámites y resoluciones que sí sean importantes.

Para esto se propone que antes de la admisión de la demanda se abra y registre un expediente auxiliar y se dicte un acuerdo decretando oficiosamente la suspensión, en el mismo auto se requerirá a las responsables y al promovente para que en el plazo de cinco días aquéllas informen solo sobre la existencia o inexistencia de los actos y en el mismo plazo el promovente podrá aportar prueba documental o el testimonio de dos personas para acreditarlo. Si se acredita la existencia del acto se admitirá la demanda, si no, se tendrá por no interpuesta.

C).- IRRECURREBILIDAD DEL AUTO INICIAL EN COMENTO. Sugiero que no se reformen los artículos 83 y 95 ni los relativos a éstos, ya que el auto a que se refiere el inciso anterior deberá ser irrecurable, pues su

naturaleza y la transitoriedad del mismo hacen impráctico un medio de defensa en su contra. En cambio, el promovente presentará nuevamente su demanda cuando realmente existan los actos que reclama. (José Luis Rodríguez Santillán, Tomo I, páginas 590 a 592)

---

## **MOTIVOS**

Se adecua el precepto a las demás reformas propuestas, pues en los casos de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, que se traducen en órdenes de aprehensión dictadas por autoridades no judiciales, no bastan el señalamiento de actos y autoridades para admitir la demanda, sino que es necesario determinar previamente la certeza de tales actos, conforme al propuesto artículo 146 bis.

## **REFORMA PROPUESTA**

**ARTÍCULO 117.-** Cuando se trate de actos que Importen peligro de privación de la vida, ( ) deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará, para la admisión de la demanda, que se exprese en ella el acto reclamado; si fuere posible al promovente; el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto.

En los casos de ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial. Además del cumplimiento de los requisitos señalados en el párrafo anterior. será necesaria, para la admisión de la

demanda, la previa determinación de la certeza de los actos. Conforme al artículo 146 bis de esta ley.

En estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el juez. (José Luis Rodríguez Santillan, Tomo I, páginas 607 y 608)

---

DE LA DEMANDA. Los Jueces de Distrito tienen la obligación legal de proteger al gobernado que es la víctima de atropellos y abusos por parte de las autoridades por lo que proponemos que la demanda inicial ya sea por escrito, por comparecencia o vía telegráfica y que cumpla con los requisitos mínimos tratándose de actos que señala el artículo 22 constitucional se aplique la suplencia de la queja a favor del quejoso y no se le hagan prevenciones que retarden la protección de la justicia federal que solicita. Por lo que respecta al artículo 117 se propone reformar el último párrafo, que la demanda pueda formularse por comparecencia ante cualquier funcionario del juzgado y no únicamente ante el juez sin menoscabo de su autoridad, esto es, con la finalidad de hacer más rápida y expedita la protección de la justicia federal a favor de quien lo solicita en comparecencia y no cargarle el trabajo al juez, de igual forma se deben plantear los requisitos y efectos que deba contener la comparecencia. Cabe señalar que también proponemos adicionar el artículo 118 solicitando que se utilicen los medios modernos de comunicación independientemente del telégrafo como son: el fax, el correo electrónico, los cuales harían más rápida la pronta y eficaz protección de la justicia federal a favor del

gobernado toda vez que los tiempos modernos así lo requieren. (Reynaldo Herrera Aké, Tomo II, páginas 1282)

---

4.- Dentro de las excepciones previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo a los requisitos de la demanda de garantías, deben incluirse los actos judiciales que importen peligro de privación de la libertad, deportación, incorporación forzosa al ejército, Armada o Fuerza Aérea, ya que en todos ellos la libertad de la persona es atacada y no existe razón para que en algunos casos cuando se ataque la libertad del individuo se pidan menos requisitos en la demanda y en otros casos a pesar de ser análogos no se quiten esos requisitos. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1659)

---

ARTÍCULO 117. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará, para la admisión de la demanda, que se exprese en ella el acto reclamado, la autoridad que lo hubiese ordenado, si fuere posible al promovente; el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el Juez. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2220)

---

Por lo que respecta al incomunicado, debe de instrumentarse un sistema más eficaz ya que en ocasiones las responsables niegan tener al quejoso como detenido, con el fin de hacerle nugatoria la impartición de justicia constitucional. También que base que se le ubique en el lugar donde se encuentre privado de su libertad, para que surta efectos la suspensión de oficio, ya que actualmente la ley establece que el quejoso debiera estar de acuerdo con la presentación de tal demanda de garantías, que la formuló otra persona en su nombre y representación por encontrarse impedido para hacerlo personalmente, precisamente por estar privado de su libertad personal. Se propone entonces también una flexibilización del principio de instancia de parte, ya que es lógico que el agraviado se encuentra afectado anímica, moral y cognocitivamente, por lo tanto no es dable, ni posible que pueda discernir y entender natural y normalmente sus actos. (Román Díaz Vázquez, Tomo III, página 2291)

**Artículo 118.** En casos que no admitan demora, la petición del amparo y de la suspensión del acto pueden hacerse al juez de Distrito aun por telégrafo, siempre que el actor encuentre algún inconveniente en la justicia local. La demanda cubrirá los requisitos que le corresponda, como si se entablare por escrito, y el peticionario deberá ratificarla, también por escrito, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que hizo la petición por telégrafo.

### **PROPUESTAS**

**DE LA DEMANDA.** Los Jueces de Distrito tienen la obligación legal de proteger al gobernado que es la víctima de atropellos y abusos por parte de las autoridades por lo que proponemos que la demanda inicial ya sea por escrito, por comparecencia o via telegráfica y que cumpla con los requisitos mínimos tratándose de actos que señala el artículo 22 constitucional se aplique la suplencia de la queja a favor del quejoso y no se le hagan prevenciones que retarden la protección de la justicia federal que solicita. Por lo que respecta al artículo 117 se propone reformar el último párrafo, que la demanda pueda formularse por comparecencia ante cualquier funcionario del juzgado y no únicamente ante el juez sin menoscabo de su autoridad, esto es, con la finalidad de hacer más rápida y expedita la protección de la justicia federal a favor de quien lo solicita en comparecencia y no cargarle el trabajo al juez, de igual forma se deben plantear los requisitos y efectos que deba contener la comparecencia. Cabe

señalar que también proponemos adicionar el artículo 118 solicitando que se utilicen los medios modernos de comunicación independientemente del telégrafo como son: el fax, el correo electrónico, los cuales harían más rápida la pronta y eficaz protección de la justicia federal a favor del gobernado toda vez que los tiempos modernos así lo requieren. **(Reynaldo Herrera Aké, Tomo II, páginas 1282)**

---

Se propone derogar las disposiciones contenidas en los artículos 118 y 119 vigente, al haberse fortalecido la competencia auxiliar , pero sobre todo por que a la fecha el sistema de telégrafos resulta más tardado que la propia presentación de la demanda ante el Juzgado de Distrito. **(David Ancira Martínez, Tomo III, página 1926)**

---

**ARTÍCULO 118.** En casos que no admitan demora, la petición del amparo y de la suspensión del acto pueden hacerse al Juez de Distrito aun por telégrafo, siempre que el actor encuentre algún inconveniente en la justicia local. La demanda cubrirá los requisitos que le corresponda, como si se entablare por escrito, y el peticionario deberá ratificarla, también por escrito, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que hizo la petición por telégrafo. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2220)**



**Artículo 119.** Transcurrido dicho término sin que se haya presentado la ratificación expresada, se tendrá por no interpuesta la demanda; quedarán sin efecto las providencias decretadas y se impondrá una multa de tres a treinta días de salario al interesado, a su abogado o representante, o a ambos, con excepción de los casos previstos en el artículo 17 de esta ley, en los cuales se procederá conforme lo establece el artículo 18 de la misma.

### **PROPUESTAS**

Se propone derogar las disposiciones contenidas en los artículos 118 y 119 vigente, al haberse fortalecido la competencia auxiliar , pero sobre todo por que a la fecha el sistema de telégrafos resulta más tardado que la propia presentación de la demanda ante el Juzgado de Distrito. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1926)

**Artículo 120.** Con la demanda se exhibirán sendas copias para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público, y dos para el incidente de suspensión si se pidiere ésta y no tuviera que concederse de plano conforme a esta ley.

### **PROPUESTAS**

Derogar los artículos 120 y 121. (Sergio Pallares y Lara, Tomo I, página 493)

---

**ARTÍCULO 120.** Con la demanda se exhibirán sendas copias para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público, y dos para el incidente de suspensión si se pidiere ésta y no tuviera que concederse de oficio conforme a esta ley. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2220 y 2221)

### **JUSTIFICACIÓN**

Con esta propuesta se evitará dejar en estado de indefensión a las autoridades responsables, toda vez que al contar con los anexos (pruebas documentales o constancia del acto reclamado), se estará en posibilidad inmediata de rendir los informes previo y justificado, dentro del término legal (veinticuatro horas y cinco días, respectivamente).

### TEXTO QUE SE PROPONE

Artículo 120.- Con la Demanda de amparo se exhibirán sendas copias de la misma y de los anexos que se le acompañen, para correr traslado a cada una de las autoridades responsables, al tercero perjudicado si lo hubiere y al Ministerio Público; además de otras dos sin copia de los anexos para el incidente de suspensión si se pidiera ésta y no tuviera que concederse de plano conforme a esta ley. (Manuel Fuentes Muñiz, Tomo V, páginas 171 y 172)

---

Con la presente reforma, se busca evitar que la autoridad responsable se encuentre en completo estado de indefensión, puesto que al momento de ser emplazada la autoridad responsable desconoce ciertos elementos que permitan una defensa del acto de manera eficiente.

### Reforma

ARTICULO 120. El quejoso deberá anexar a su demanda de garantías:

Una copia de la misma, así como de los anexos que hubiere ofrecido para cada una de las autoridades responsables, para el tercero perjudicado si lo hubiere, para el Ministerio Público y dos más para el incidente de suspensión si este se hubiere solicitado, siempre que no tuviere que concederse de plano la misma conforme a esta Ley.

El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida en la forma que determine la ley que rige la materia de la que emane el acto reclamado.

En su caso, el documento donde conste el acto reclamado y constancia de su notificación , excepto cuando el demandante declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando hubiera sido por correo. Si la notificación fue por edictos deberá señalar la fecha de la última publicación y el nombre del órgano en que ésta se hizo. (Juan José Paullada Figueroa, Tomo V, páginas 274 y 275)

**Artículo 121.** Cuando el amparo se pida en comparecencia, el juez de Distrito, o la autoridad ante quien se haya promovido, mandará expedir las copias a que se contrae el artículo anterior.

**CUARTA PROPUESTA DE REFORMA:** Derogar los artículos 120 y 121.

Artículo 120. Con la demanda se exhibirán sendas copias para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público, y dos para el incidente de suspensión si se pidiera ésta y no tuviera que concederse de plano conforme a esta ley.

Artículo 121. Cuando el amparo se pida en comparecencia, el juez de Distrito, o la autoridad ante quien se haya promovido, mandará expedir las copias a que se contrae el artículo anterior. (Sergio Pallares y Lara, Tomo I, páginas 492 y 493)

**ARTÍCULO 121.** Cuando el amparo se pida por comparecencia o por vía telegráfica, el Juez de Distrito, o la autoridad ante quien se haya promovido, mandará expedir las copias a que se contrae el artículo anterior.

Además, también mandará expedir las copias que correspondan al incidente de suspensión si este procede de oficio y no se hubiesen presentado. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2221)

### **Capítulo III**

#### **De la suspensión del acto reclamado**

**Artículo 122.** En los casos de la competencia de los jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada, con arreglo a las disposiciones relativas de este Capítulo.

**SEGUNDO PARRAFO.** Procede desechar el incidente de suspensión, cuando sea notoriamente improcedente la medida cautelar solicitada, sin perjuicio de que proceda por causa superveniente.

En la actualidad se ha desvirtuado la naturaleza dinámica del juicio de amparo, que es el restituir al quejoso lo más pronto posible en el uso y disfrute de la garantía constitucional violada, volviendo la situación al estado que tenía antes de la violación de garantías, haciéndolo cada vez más complejo y lento, por la gran cantidad de formalismos y tecnicismos que se han ido introduciendo en la ley de la materia, implícitamente con ello también se ha abusado de la medida cautelar consagrada en la misma ley de amparo, que tiene fundamento en la fracción X del artículo 107 Constitucional y artículos 124, y siguientes de la Ley de Amparo, toda vez que el objeto principal de la suspensión es evitar que el acto reclamado se ejecute, de manera que si éste no se ha producido, no nazca y, si ya se inició, no prosiga, no continúe, que se detenga temporalmente, que se paraliquen sus consecuencias o resultados, que se evite que éstos se realicen.

En tal virtud, muchos quejosos acuden al Juicio de Amparo no en busca de la protección de la justicia federal, sino tratando de suspender el acto reclamado, a sabiendas de que muy probablemente no obtengan la razón en el fondo del negocio, de tal suerte que, no es por demás de que a la suspensión se le considere el alma en los juicios de garantías, y se abuse de tal medida cautelar por parte de los promoventes del amparo. Por ejemplo: un transportista que circula en el País con vehículo de procedencia extranjera, sin el permiso legal correspondiente; solicita el amparo y protección de la justicia federal, así como la suspensión del acto reclamado para el efecto de que su vehículo no sea decomisado o asegurado y señala cien autoridades como responsables. Es evidente la improcedencia de la medida cautelar solicitada por no reunirse un presupuesto del artículo 124 de la Ley de Amparo. Sin embargo, se pone en movimiento el aparato judicial de la Federación, se señala fecha para la audiencia incidental, y se piden a las autoridades señaladas como responsables cien informes previos, no obstante que se negó la suspensión provisional, inclusive si en la fecha de la audiencia incidental falta el acuse de recibo y el informe previo de una autoridad; se difiere la audiencia expidiéndose cien oficios de diferimiento.

En consecuencia, si la naturaleza del acto reclamado no tiene visos de que se produjo o está produciendo consecuencias jurídicas positivas o que puede producirlas, ya sea de manera directa o indirecta, resulta improcedente la suspensión del acto reclamado.

Ahora bien, no pueden soslayarse las repercusiones que tiene la solicitud de la suspensión, en los casos que es notoriamente improcedente, que en términos prácticos se traduce en la pérdida de tiempo y recursos materiales para el propio Poder Judicial de la Federación, además de que se pone en movimiento a la autoridad responsable lo cual tiene implicaciones tales como tiempo, recursos y desgaste en la autoridad responsable, para centrar su atención en la función que desarrollo; de donde, se estima que en beneficio de la impartición de justicia, pronta y expedita, acorde a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, resulta útil desechar el incidente de suspensión, sólo cuando sea notoriamente improcedente, verbigracia, en tratándose de actos consumados o actos negativos sin efectos positivos. Todo lo anterior, sin perjuicio de que cuando apareciera un hecho superveniente, hiciere procedente al incidente de suspensión, ya que la ley prevé la posibilidad de conceder la suspensión por hecho superveniente en el artículo 140, de la Ley de Amparo.

Concomitentemente con lo anterior, es preciso conceder al quejoso un recurso o medio de defensa contra la determinación del Juez de desechar de plano el incidente de suspensión solicitado, la cual por economía procesal deberá determinarse en el auto que admite la demanda, como en el supuesto previsto en la ley para el caso de la procedencia de la suspensión oficiosa, prevista en el artículo 123 de la Ley de Amparo; para tal efecto se propone adicionar el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo, con el objeto de que el agraviado cuente con un recurso pronto y expedito que solucione la ilegalidad cometida.

#### REFORMA PLANTEADA.



1. Sin formar incidente en el mismo auto en donde se admita la demanda de amparo desechar de plano el incidente de suspensión cuando éste sea notoriamente improcedente.

2. Conceder al quejoso un medio de impugnación contra dicha determinación, a saber el recurso de queja contenido en el artículo 95, fracción XI de la Ley de Amparo.

#### **PRESUPUESTOS DE LA REFORMA.**

Que lo solicite el quejoso; y

Que sea notoriamente improcedente la suspensión.

Es preciso que la suspensión sea solicitada a petición de parte, porque la ley de amparo establece ese requisito, salvo los casos de excepción cuando procede de oficio, pero ello se justifica sólo en los casos en que procede la suspensión; por tanto, es evidente que cuando la suspensión es notoriamente improcedente, tal desechariento, el Juez no puede hacerlo de oficio.

Sólo puede desecharse el incidente de suspensión, cuando de la naturaleza del acto reclamado en la demanda de garantías, se advierta que es notoriamente improcedente; es decir, que se evidencie su improcedencia, de la demanda y probanzas que se anexen a ella; sin que sea necesario tramitar incidente de suspensión, pedir el informe previo a la autoridad responsable o señalar fecha para la audiencia incidental.

## ALGUNOS SUPUESTOS EN QUE LA SUSPENSIÓN ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE.

- a). Actos negativos, ejemplo cuando se reclama derecho de petición, pues no se puede suspender lo inexistente.
- b). Actos consumados como cuando se reclama la expedición y promulgación de una ley, cuando tales actos ya se llevaron a cabo.
- c). Cuando es evidente que se controvierte el interés social, y no procede la suspensión acorde a lo dispuesto en la fracción II, del artículo 124 de la Ley de Amparo.
- d). Cuando se reclaman sentencias absolutorias.
- e). Cuando se niega la admisión de un recurso.
- f). Cuando se reclaman actos que tenga por objeto el cumplimiento de una ejecutoria de amparo.
- g). Cuando se reclamen sentencias ejecutorias.
- h). Cuando se reclama la admisión de la apelación.

Independientemente de lo anterior, no se soslaya que en la práctica pueden presentarse algunos otros casos que hagan notoria la improcedencia de la suspensión. (Martín Ángel Rubio Padilla, Tomo I, páginas 186 a 190)

2.- Muchos jueces de Distrito mandan aclarar las demandas de amparo por cuestiones que sólo tienen que ver con aspectos relacionados con el incidente de suspensión, lo que es objetivamente correcto, pero lo indebido es que aperciben al promovente con tener la demanda por no interpuesta para el caso de incumplimiento. Nada más injusto.

Ejemplo: el juez apercibe al quejoso con no admitir el libelo para el caso de que éste no exprese el monto de las pensiones rentísticas, lo que, dice aquél, servirá para poder fijar la garantía para la suspensión en caso de que proceda.

Afirmo que es incorrecto el proceder del juzgador porque más valdría al quejoso no solicitar la medida si lo único que pasaría sería, en el peor de los casos, que se le lanzara del inmueble, pero si obtuviera en el fondo se le restituiría en la posesión. Esto es, podría llegar a serle favorable la sentencia aun sin incidente de suspensión.

Así, pues, debería existir un artículo en el capítulo de la suspensión que estableciera que cuando se ordena la aclaración de una demanda de amparo por cuestiones referentes a dicha medida, no se abrirá el incidente respectivo, mas no tener a aquélla por no interpuesta.

Corroboran lo que afirmo las dos tesis visibles en la novena época del semanario citado, la primera en el tomo III, abril, página 377, y la segunda en el tomo VIII, septiembre, página 1157, que en su orden dicen:

"DEMANDA DE AMPARO DESECHAMIENTO DE LA. NO DEBE LLEVARSE A CABO SI EL QUEJOSO NO CUMPLE CON EL APERCIBIMIENTO QUE SE LE HAGA, A FIN DE QUE PRECISE PARA QUE EFECTOS SOLICITA LA SUSPENSIÓN - El artículo 146, de la Ley de Amparo, en modo alguno sanciona que debe tenerse por no interpuesta la demanda de garantías, cuando la parte quejosa, no establezca en la misma, en forma clara y precisa cuestiones relativas tanto de la suspensión

provisional como de la definitiva, pues es claro que tales cuestiones de manera alguna se encuentran enunciadas en los artículos 116 y 146 de la ley de la materia; cuenta habida de que tampoco incide en la precisión del acto reclamado, y menos aún respecto a las copias que señala el artículo 120 de la Ley de Amparo, hipótesis éstas a que se refiere el artículo 146 del ordenamiento legal en cita" y, "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA DEFICIENCIA DE ALGUN DATO RELACIONADO CON EL INCIDENTE DE SUSPENSION, NO ES MOTIVO PARA TENERLA POR NO INTERPUESTA SI EL QUEJOSO NO CUMPLIO CON LA ACLARACION - De la lectura de los artículos 116, 120 y 146 de la Ley de Amparo, no se advierte que la deficiencia de algún dato para solicitar la suspensión del acto reclamado sea uno de los requisitos formales e indispensables de la demanda de garantías. Es por ello que si un Juez de Distrito requiere al promovente para que aclare su libelo respecto de datos que tienen que ver con dicha medida al no ser éstos de trascendencia, aquél no debe tener por no interpuesto el referido libelo". (Jorge Figueroa Cacho, Tomo I, páginas 398 y 399)

5.- De la lectura de la tesis jurisprudencial 92/97, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, diciembre, página 20, de la voz: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSION. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO", se desprende que, dadas las reglas existentes en la Ley de Amparo para la propuesta de medios de convicción en esos diversos expedientes (principal e incidente), para que aquéllos sean tomados en cuenta en uno, estando agregados en el otro, es necesario que se solicite la compulsas respectivas, o bien que se pidan copias certificadas para que el

interesado, una vez obtenidas, las lleve al otro expediente; e igualmente se deduce de dicha tesis que el único caso en que es viable analizar La misma probanza para "ambos cuadernos", es al momento de resolverse sobre la suspensión provisional, ya que el juzgador está obligado a apreciar las pruebas que se acompañaron a aquélla" (a la demanda).

Me pregunto ¿en cuántas ocasiones promueve en el incidente de suspensión el autorizado para recibir notificaciones, ofreciendo pruebas por ejemplo, y el acuerdo relativo a su aceptación como tal se encuentra en el juicio principal? ¿qué acaso para proveer a la solicitud respectiva el juez de Distrito no se "asoma", por decirlo así, a dicho expediente principal?.

Aunque la audiencia incidental casi nunca se fila dentro de las setenta y dos horas siguientes a la admisión de la demanda, generalmente se señala para un día anterior a la fecha designada para la celebración de la audiencia constitucional.

Y como es usual que las autoridades responsables rinden conjuntamente los informes previo y justificado, sucede que casi siempre se acuerda sobre su llegada en autos de la misma fecha aunque, claro está, en sus respectivos expedientes.

Es más, hasta hay veces en que las referidas audiencias se celebran el mismo día con diferencia de minutos.

No es posible, entonces, ignorar que el juzgador está consciente de lo que está sucediendo al mismo tiempo en ambos cuadernos, ni que aquél provee en el incidente con vista en las actuaciones del juicio principal.

Si la Suprema Corte ha determinado, según lo puse de relieve, que las pruebas deben exhibirse directamente en cada uno de los expedientes, o solicitarse su compulsión, ¿por qué entonces cuando el amparo es promovido por un representante legal, habiendo quedado glosada al juicio principal la constancia que justifica tal carácter, de todas suertes se falla el incidente teniéndose por implícitamente reconocida tal personalidad aun cuando en dicho incidente no se hubiera allegado copia certificada de la referida constancia?

Si todo eso hacemos, pues, los juzgadores federales, creo que no se puede continuar actuando de esa manera, es decir, para algunos casos ser estrictos en cuanto a que como ambos expedientes se tramitan en forma independiente, debe solicitarse la compulsión cuando se ofrezcan pruebas en uno de ellos y éstas se encuentren materialmente en el otro, en tanto que en diversos asuntos se hace uno ignorante y accede a acordar sin dejar de tener presente las constancias del otro expediente.

Pienso que la forma de lograr una solución, cuando menos aparente, sería la de incorporar a la legislación de amparo o bien adicionando alguno de los existentes, un artículo que estableciera que el incidente de suspensión no se tramitará por cuerda separada del principal, sino en la misma pieza de autos. (Jorge Figueroa Cacho, Tomo I, páginas 402 a 404)

Debido a que ésta es la institución procesal para lograr que el acto de autoridad no se ejecute hasta en tanto no se resuelva en definitiva el fondo del planteamiento constitucional, considero que debe haber modificaciones importantes en su regulación.

1.- Conforme a la reglamentación vigente la suspensión sólo puede otorgarse y surtir efectos para que las cosas se queden en el estado en que se encuentran al momento de concederse dicha mediada, por lo que si el acto reclamado se ejecutó previamente, la suspensión no surtirá efectos, pues se dice que a diferencia de la sentencia de amparo, ese auto no tiene efectos restitutorios.

Este criterio se ha ido matizando pues hay algunos casos en que se permite que surta efectos aunque ya se haya iniciado la ejecución del acto reclamado, como por ejemplo cuando se está ante la presencia de un acto de tracto sucesivo, que son aquéllos que se realizan a través del tiempo con una pluralidad de conductas e intenciones, por lo que su culminación no es inmediata, razón por la cual se estima que si esto es así el acto puede suspenderse efectivamente. Hay otros casos en los que aunque el acto ya se ha consumado, la jurisprudencia de la Corte ha estimado que la suspensión y sus efectos procedan, tal es el caso de clausuras temporales ejecutadas o ejecución de órdenes de aprehensión que han quedado consumadas, siempre y cuando no se trate de delitos graves.

Creo que aprovechando la reforma o la nueva ley que se pretende elaborar, debe replantearse la institución de la suspensión, pues como dice

el dicho popular, claro está entre quienes conocen la materia, "no hay amparo sin suspensión", ya que los daños que se causan con la ejecución del acto reclamado en algunas ocasiones son prácticamente irreparables, piénsese el amparo en contra de una clausura definitiva en el que el procedimiento haya durado aproximadamente un año, es muy difícil que un negocio sobreviva después de estar tanto tiempo cerrado, por lo que aunque gane el amparo de poco le va a servir. Por ello considero que a la suspensión deben dársele efectos restitutorios, tomando en cuenta que el juicio de garantías es un medio de protección de las garantías individuales del gobernado, pero algunas veces parece que más bien pretende preservar el acto de autoridad.

Por otro lado, ya en algún proyecto anterior se planteó la posibilidad de que la suspensión se otorgará siempre de oficio, a menos que el juez estimara que con su concesión se alterara el orden público o el interés social. El criterio es acertado, pues de esta manera con la suspensión se preserva de facto y no sólo de iure, como en muchas ocasiones sucede en la actualidad, la materia del juicio de garantías. En todo caso el tribunal federal podría negar la suspensión de oficio cuando después de analizar su procedencia estimara que de concederla se afectaría realmente y no sólo teóricamente la estabilidad de la sociedad, en el entendido de que si las responsables, el Ministerio Público o los terceros perjudicados no estuvieran de acuerdo con ella por considerar que dicha medida afecta realmente a la sociedad, podría proceder un recurso de queja de 24 horas para su interposición y de 48 horas para su resolución, similar al previsto en la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo, pues de esta manera rápidamente se podría resolver en definitiva por el tribunal revisor si habría



sido correcto o no conceder la suspensión de oficio, es decir si con su concesión se afectaba o no en la realidad a la estabilidad social.

Bajo estas condiciones debería eliminarse la contra garantía prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, a menos que se tratase de un amparo judicial, en el que el tercero perjudicado demostrare que de no ejecutarse el acto reclamado, existiera peligro real de la desaparición del quejoso o dilapidación de sus bienes, pero en todo caso tendría que exhibir la contra garantía respectiva. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1668 a 1871)

ARTÍCULO 122. Tratándose del juicio de amparo indirecto, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de la parte agraviada, con arreglo a las disposiciones relativas de este capítulo. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2221)

1.- Proponemos que se reformen los artículos 122 y 124 de la Ley de Amparo los cuales se encuentran dentro del capítulo tercero, título segundo libro primero.

Por lo que hace al primero de los preceptos jurídicos se le adicionaría una frase para quedar de la siguiente manera.

Artículo 122.- En los casos de la competencia de los jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará a petición de parte agraviada, la cual podrá concederse con efectos restitutorios, con arreglo a

las disposiciones relativas de este capítulo. (Fidel Ortega Escobedo, Tomo IV, página 2714).

**Artículo 123. Procede la suspensión de oficio:**

**I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal;**

**II. Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegere (sic) a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.**

**La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley.**

**Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados.**

**Artículo 123. Procede la suspensión de oficio:**

**I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal;**

**II. Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegere (sic) a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.**

**La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley.**

**Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados.**

## **PROPUESTAS**

Más de 180 juzgados de Distrito en la República Mexicana ocupan casi la mitad de su tiempo y de sus recursos humanos y materiales en el trámite de juicios de amparo promovidos contra órdenes de detención o de aprehensión atribuidas a autoridades no judiciales como son, entre otros, los procuradores de justicia, los agentes del Ministerio Público y los directores de policía, así como la ejecución de tales órdenes que con frecuencia se reclaman de decenas de cuerpos policíacos.

Este trabajo implica, como en todos los juicios de amparo, la recepción, registro y análisis de la demanda, la formación del expediente principal y del incidente de suspensión, el dictado y notificación de cinco o más acuerdos que deben hacerse del conocimiento, de una considerable cantidad de autoridades, sobre todo en lugares donde la zona metropolitana está formada con varios municipios, como los casos de Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, entre otros.

Sin embargo, rara vez encontraremos una demanda con la que se persiga realmente una seria declaración de inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues en casi la totalidad de los casos a los promoventes no les interesa una sentencia que generalmente es de sobreseimiento, ni la resolución interlocutoria en la que casi siempre se niega la suspensión definitiva de los actos. Lo único que pretenden es obtener una "protección rápida", a través de la suspensión de los actos reclamados, con la esperanza de que esa situación perdure el mayor tiempo posible.

## SOLUCIÓN QUE SE PROPONE:

Las reformas al artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal y de los artículos 123 y 146 de la Ley de Amparo, fundamentalmente, así como del 39, 89 y 117 para precisarlos, aclararlos o adecuarlos.

Estas reformas darían lugar a lo siguiente:

A).- ELIMINACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SOLO ENTRATÁNDOSE DE LOS ACTOS ALUDIDOS. Para ello se sugiere decretar la suspensión de plano, oficiosamente, en el auto inicial, tomando las medidas de aseguramiento del quejoso, toda vez que el artículo 130 de la Ley de Amparo establece en su último párrafo la obligación de conceder la suspensión provisional siempre que se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, sin que dicho precepto exija el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 124; por tanto no existe obstáculo para decretarla oficiosamente. Además, el mismo hecho de presentar una demanda contra éste tipo de actos genera la presunción de que implícitamente se pide la suspensión.

B).- LA ELIMINACIÓN DE LA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO Y DE LA DECLARACION DE EJECUTORIA EN ESTOS CASOS. Pues es sabido de todos los juzgadores federales, que resultan ser trámites inútiles, ya que a ninguna de las partes les interesan y sí, en cambio, ocasionan junto con el incidente, un gran gasto de recursos humanos, materiales y económicos que pueden emplearse mejor en los trámites y resoluciones que si sean importantes.

Para esto se propone que antes de la admisión de la demanda se abra y registre un expediente auxiliar y se dicte un acuerdo decretando oficiosamente la suspensión, en el mismo auto se requerirá a las responsables y al promovente para que en el plazo de cinco días aquéllas informen solo sobre la existencia o inexistencia de los actos y en el mismo plazo el promovente podrá aportar prueba documental o el testimonio de dos personas para acreditarlo. Si se acredita la existencia del acto se admitirá la demanda; si no, se tendrá por no interpuesta.

**C).- IRRECURREBILIDAD DEL AUTO INICIAL EN COMENTO.**  
Sugiero que no se reformen los artículos 83 y 95 ni los relativos a éstos, ya que el auto a que se refiere el inciso anterior deberá ser irrecurrible, pues su naturaleza y la transitoriedad del mismo hacen impráctico un medio de defensa en su contra. En cambio, el promovente presentará nuevamente su demanda cuando realmente existan los actos que reclama. (José Luis Rodríguez Santillán, Tomo I, páginas 590 a 592)

---

Se incluye en la procedencia de la suspensión oficiosa la de los actos consistentes en la privación de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, se señala el momento en que ha de decretarse y se precisan sus efectos.

## **REFORMA PROPUESTA**

**ARTÍCULO 123 - Procede la suspensión de oficio:**

1.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial; deportación...

**II.- Cuando se trate ...**

La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley.

En el caso de órdenes detención o de aprehensión reclamadas de autoridades no judiciales, la suspensión de plano se decretará en el auto inicial en que se tenga por recibida la demanda y se pida informe sobre la certeza de los actos, conforme al artículo 146 bis de esta ley.

Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, que no se prive al quejoso de su libertad personal sin orden de autoridad judicial sin perjuicio de que se haga la consignación correspondiente, que no se permita la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución. (José Luis Rodríguez Santillán, Tomo I, páginas 597 a 599)



Se proponen algunas reformas, las que se precisan en el apartado siguiente. No sin antes poner de manifiesto que todo lo anterior no es simplemente "Un ideal de justicia" o "Un sueño imposible", ya que la Política Criminal se ha encargado de hacer creer a la opinión pública que en la medida de la dureza de las penas habrá disminución del delito. Lo que visto a la luz de la realidad queda descubierto como falso. Yo se que esta propuesta, en principio y dada la creencia popular ya mencionada, se antoja descabellada y absurda porque surgirían las siguientes preguntas:

¿No se incrementará en progresión geométrica la delincuencia? ¿Qué sucederá con la opinión pública? ¿Cuántas críticas se recibirán? etc. No obstante, ésta, que se antoja una simplísima propuesta, abriría realmente el camino hacia un derecho verdaderamente humano y auténticamente racional, despojado de la contaminación de la mencionada Política Criminal que obedece más a intereses de cúpulas Gubernamentales que a los fines de Derecho. Y en relación al resultado de poner en práctica la presente propuesta, seguramente, y muy lejos de las expectativas mencionadas, no pasaría nada. Es decir, ni se incrementaría la delincuencia, ni tampoco aumentaría la impunidad y mucho menos habría un caos social, porque ciertamente los Índices delincuenciales se han incrementado gracias precisamente al pésimo sistema que se tiene de impartición de justicia, el que propicia que los indiciados que están siendo procesados se contaminen con los sentenciados y aunado a las familias de aquellos que caen en conductas antisociales dado que se va desarrollando un odio, un rencor y un desprecio hacia la sociedad. Demostrar mi aserto implicaría un estudio de campo de un costo muy elevado y de mucho

tiempo. Sin embargo, valdría la pena el detenerse, al menos un poco en mi propuesta y sus consecuencias para que mi objetivo estuviera cumplido. Es decir, estaría satisfecho con saber que hay intentos por crear legislación acorde con nuestros avances tecnológicos. Y si una vez estudiada mi propuesta no se aplicara a la nueva Ley de amparo, estaría convencido de que todavía nuestra sociedad no está preparada para estar bajo un Derecho Humano. (Luis Angel Sánchez Albarrán, Tomo II, páginas 1126 y 1127)

---

C) REDACCIÓN QUE SE PROPONE:

Art. 123.- A éste artículo se le agregaría:

“ataques a la libertad personal” para quedar como sigue:

Artículo 123. Procede la suspensión de oficio:

I.- Cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal, deportación, etc.

Nótese que se propone eliminar “peligro de privación de la vida” porque ya no tiene razón de ser dada la legislación actual que no contempla la pena de muerte.

Y en el último párrafo de este artículo y para que la reforma sea armónica se propone que quede de la siguiente manera:

Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente ataquen la libertad personal, permitan la deportación, etc.

Como se puede apreciar de la redacción precedente. Se propone también eliminar la locución: "pongan en peligro la vida", por las razones esgrimidas a propósito de la reforma a la fracción primera del mismo precepto. (Luis Ángel Sánchez Albarrán, Tomo II, página 1128)

---

En cualquier régimen social del ecúmene, el derecho es el "deber ser" y en torno a él pulula el respeto o el menoscabo a la esfera individual del hombre.

Ahora bien, suele acontecer que aun y cuando lo jurídico denota cumplimiento sin excusa, no siempre tal cumplimiento a la Ley se efectúa; entonces, en este punto, nos situamos en el marco de lo que es, no "debiendo ser". Y este es el gran dilema al que se ha tenido que enfrentar la humanidad en su devenir histórico. Así por ejemplo, se ha matado al prójimo, sabiendo que existe una ley que lo prohíbe; se hurta, se adultera, se injunia y se amenaza entendiendo que esa conducta no la avala la norma. Consecutivamente pues, el hombre no siempre se amolda al mandamiento de la ley de motu proprio, sino que es necesario que exista un órgano investido de facultades para hacerla respetar, incluso contra su voluntad. Así se explica que no bastó que en Francia, en el año de 1789, se haya emitido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,

para que en todos los regímenes del orbe hayan acatado sus disposiciones; ni tampoco en México fue suficiente la conocidísima, entre nosotros, Constitución de Apatzingán, obra de Don José María Morelos y Pavón, de fecha 22 veintidós de octubre de 1814, en la que se consignan una importante declaración de derechos del hombre, y que incluso se considera el primer documento jurídico antecesor de las garantías de seguridad jurídica de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. Esto relata que la existencia de la Ley en sí misma no garantiza su cumplimiento.

El legislador y la colectividad están conscientes de esta realidad histórica, tanto que por esa razón se ha dado cabida al Derecho Procedimental y a la Institucionalización de los Tribunales encargados de aplicar los dos tipos de leyes que conocemos: la sustantivas y las adjetivas. En efecto, sin este último tipo de legislación que se cita, solamente tenderíamos una serie de derechos declarados que seguramente jamás se cumplirían por el hombre; verbigracia, es cierto que en materia civil existe un precepto legal que establece que los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos; pero habrá algunos que no cumplan con ese deber jurídico. Cuando esto ocurre, el catálogo procesal y los tribunales cobran importancia, porque a través del primer instrumento el particular ejercita su derecho ante el órgano estatal, que asumiendo una actitud imparcial debe condenar al desobligado al cumplimiento de su obligación y que se traduce en proporcionar los alimentos a sus hijos.

Del mismo modo, de poco serviría que en la Constitución General de la República se establezcan una serie de prerrogativas a favor del

gobernado si no existiera el juicio de amparo como instrumento o medio con que hacerlas respetar. Luego, ante esa consideración, es normal y entendible que el artículo 133 no asuma su función de autocontrol constitucional. Empero, el incumplimiento de las garantías individuales tiene una característica peculiar, en razón de que quien incumple con el mandato de la Ley Suprema, lo es precisamente el órgano o funcionario estatal encargado de velar por la legalidad. De esta guisa, cuando por ejemplo un policía con su arma detiene una persona sin existir flagrancia, orden de aprehensión o detención, está actuando de la misma manera en que se conduce un salteador de caminos; y más aún, en el mismo momento de su arbitrariedad tiene a su favor el respaldo aparente de la Ley, porque ante él no se puede discutir ni resolver la aplicación del derecho, ya que esto es propio de los tribunales judiciales. Es verdad que en este caso, el tribunal puede, a posteriori, resolver que existió una violación a las garantías individuales en perjuicio de la persona dolida; y cuando esto suceda podrá haber una reparación formal, pero jamás material. Si a todo lo anterior, aunamos que en países como México existen grandes zonas marginadas que no tienen acceso a la impartición de justicia, y que incluso no cualquier tribunal está facultado para resolver los asuntos sobre violación de garantías individuales, concluiríamos que en este país simplemente no existe un respeto espontáneo e inmediato a éstas.

A decir verdad, la vida social nos muestra cómo a diario en las ciudades y en los lugares alejados de los medios de comunicación donde impera la pobreza y la ignorancia, los cuerpos policiacos civiles o militares, llevan a cabo la violación a garantías individuales, y la mayoría de esos

casos quedan en anonimato, por no tener un instrumento jurídico eficaz que detenga tanta arbitrariedad.

Es claro que jamás podremos cambiar esa realidad, pero por lo que sí podemos luchar, quienes sabemos una letra, es por la modernización de la institución jurídica del juicio de amparo, como medio idóneo para garantizar la libertad personal en forma inmediata.

**II. LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL COLOCA A QUIEN LA SUFRE EN LA INMINENCIA DE SER VÍCTIMA DE ALGUNA VIOLACIÓN MÁS EN SUS GARANTÍAS.**

Prescindiendo de las causas del delito y evocándonos sólo a sus efectos, por ser esta la exigencia natural del trabajo que me ocupa, es válido establecer que un hecho ilícito del orden penal atenta contra la integridad social, al crear desorden, caos, incertidumbre, y sobre todo, constituye una fuerza bruta que reta a la preeminencia del poder público encargado de vigilar el orden. La delincuencia es un mal reprobable que es necesario erradicar con toda la energía del Estado, porque en la medida que crece su continuación aumenta la posibilidad de que cada quien se haga justicia por su propia mano quid pro quo al estado primitivo del hombre.

Por eso, al ser el delito un mal grave que padece la sociedad, ya que trastoca el orden jurídico preestablecido, debe ser abatido con la potencialidad del poder público. Ahora bien, en vista de que éste

fundamenta su existencia en la Ley, es razonable también que el combate frontal a este padecimiento social se lleve a cabo dentro del marco del derecho, porque si se exagera en este rumbo y se ataca a la fuerza zafia al margen de la legalidad se caerá en un estado de barbarie que hace mucho tiempo fue superado por la humanidad.

Para enfrentar en México al criminal individual y colectivo con apego a la Ley, se requiere de policías eficientes y de auténticos Agentes Investigadores del Ministerio Público que concluyan satisfactoriamente todas la pesquisas que se les encomienden; debiendo tener, previo al desempeño de su cargo, una capacitación sobre los métodos de la investigación de los delitos y de la importancia que tienen los Derechos Humanos y las Garantías Individuales dentro de una indagatoria, lo cual les permitirá aquilatar y concientizar su función social.

Obviamente que para lograr tan loable fin se necesitan escuelas, academias, instructores técnicos, catedráticos, conferencistas nacionales y extranjeros , así como el acceso a la tecnología de vanguardia. Pero para todo esto es indispensable el dinero, y desgraciadamente en México, lo mismo que en otros países en vías de desarrollo, no existe una asignación pecuniaria asaz para presupuesto de ese rubro. Sin embargo, a pesar de esas carencias, al policía y al agente del Ministerio Público se le exige trabajo y resultados prácticos que conlleven a la investigación de los delitos y detención de las personas involucradas en ellos.

Y bien, ante esa realidad, el funcionario público encargado de la persecución de los delitos tiene que recurrir a técnicas de investigación

poco ortodoxas, tales como las detenciones ilegales, la intimidación y la tortura, principalmente, a fin de obtener resultados inmediatos, que en más de la veces son ineficaces; lo único que ganan con esta actitud es el rechazo de la sociedad.

El cargo de policía y de agente investigador es una actividad meritoria en cualquier parte del mundo porque su misión es la guarda del orden social; pero en México eso no acontece, debido al método de investigación que se sigue, el cual casi siempre se funda en detenciones ilegales y en la tortura, que representan la máscara de la ineptitud.

Por lo tanto, cada vez que se detiene a una persona sin orden de aprehensión, se tiene la zozobra de que allá en los separos se le está intimidando, torturando, injuriando, lesionado, injuriando, lesionado, y que incluso corre el riesgo de perder la vida. Evidentemente que con este método de investigación denigrante, el detenido puede confesar que robó "la bomba atómica" y proporcionar los nombres de sus cómplices, aun y cuando jamás haya existido tal en este país. Y como dijera el insigne L. Vallarta, "quien crea que en estos temores hay exageración",<sup>46</sup> basta con ver la manera, en que hoy en día, algunos policías y agentes del Ministerio Público llevan a cabo la investigación de los delitos. De esa manera, cuando una persona es privada ilegalmente de su libertad personal, es factible que se vea lesionada también en la propiedad, la vida, posesiones, derechos, familia, papeles, etcétera, etcétera; pues un detenido así, queda a merced de la arbitrariedad y cualquier cosa puede esperarse.

---

<sup>46</sup> Votos. Tomo I, pág. 71



### III. LA SENTENCIA DE AMPARO ES OBSOLEScente ANTE ESTE TIPO DE VIOLACIÓN

Creo que cualquier mexicano conoce esa realidad que he descrito en el subcapítulo que precede; tan es así, que el propio legislador ha plasmado en la Ley de Amparo diversas disposiciones que tiene como finalidad sanear esa objetividad.

De ese modo, cuando se reclama a una autoridad la restricción a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, existen a favor del agraviado un conjunto de concesiones que le permiten agilizar el trámite del Juicio de Garantías. Así, por ejemplo, en relación a la demanda, se permite que pueda formularse por comparecencia, señalando únicamente el acto reclamado, la autoridad responsable, el lugar en que se encuentra el quejoso y la autoridad o agente que trate de ejecutar el acto, e incluso también puede solicitarse el amparo por telégrafo (artículos 3°, 117 y 118); se puede presentar por cualquier persona en su nombre, inclusive un menor, en cuyo caso debe lograr se la comparecencia del agraviado para su ratificación (artículos 17 y 18); se puede presentar en cualquier tiempo, incluyendo cualesquier día y cualquiera hora del día o de la noche (artículos 22 fracción II y 23 párrafo segundo)

Las autoridades jurisdiccionales que también pueden conocer de este tipo de amparos (aunque sea en forma restringida), además de las del Poder Judicial Federal, son los superiores del Tribunal que haya cometido la violación (artículo 37); los jueces de primera instancia, en cuyo supuesto

están facultados para recibir la demanda de amparo y ordenar la suspensión del acto reclamado hasta por un término de setenta y dos horas, ordenando que se rindan los informes justificados y previos al Juez de Distrito (artículos 38 y 39); y, cualquier autoridad judicial que ejerza jurisdicción en el lugar, en el caso de que el amparo se promueva contra un juez de primera instancia y no haya en el lugar otro de la misma categoría, o cuando reclamándose de otras autoridades no exista tal juez o no pueda ser localizado, debiéndose proceder en este supuesto, como si la demanda se hubiera promovido ante la autoridad judicial de primera instancia (artículo 40).

Finalmente, en relación al procedimiento de amparo, se establece que se puede alegar verbalmente en la audiencia del juicio, asentando el juez en autos extractos de tales argumentos, si así se solicita (artículo 155); el informe debe remitirse en un término de tres días y no de cinco como ocurre en relación a otro tipo de actos reclamados; y, queda a cargo del Ministerio Público Federal vigilar que los amparos que versen sobre este tipo de asuntos nunca queden paralizados (artículo 157).

Estas consideraciones de índole legal, hacen perceptible que cuando se reclama una cortapisa a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, el juicio de amparo adquiere un matiz sui generis en relación a su instancia y substanciación, que atiende primordialmente a las características y a la gravedad que implica tal merma.

Sin embargo, de nada sirve que la solicitud y la tramitación de este juicio de garantías tenga notas peculiares que lo diferencien de los

demás en que se reclaman otro tipo de actos; pues- el objeto de la sentencia, que es lo medular en estos asuntos, sigue consistiendo en restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, una vez que se agote el juicio, después de conocer y fallar según las pruebas, lo cual no es correcto en modo alguno, debido a que cuando se reclama una detención fuera del procedimiento judicial emanada del juez o el Ministerio Público en los casos de urgencia; y en ambas hipótesis puede justificarse ipso facto la violación a las garantías individuales, sin necesidad de esperar la sentencia, que en la mayoría de los casos se pronuncia tardíamente y equivale a una justicia denegada.

Esto corrobora, pues, que el juicio de amparo en lo principal y la sentencia misma de éste, resultan ineficaces para preservar la libertad personal fuera del procedimiento judicial, aun cuando benignamente la legislación reglamentaria contemple facilidades, según se ha visto.

#### **IV. EFECTOS RESTITUTORIOS MATERIALES DE LA SUSPENSIÓN FRENTE A LOS ACTOS RESTRICATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y RESPECTO DE LOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL**

En razón de las características intrínsecas y principalmente a la eficacia de sus efectos en ciertos casos, la suspensión con justicia puede

ser identificada también como providencia precautoria o medida cautelar, análoga a la institución procesal que se conoce en el derecho común con ese nombre. Pues partiendo de la base de que una providencia cautelar tiene como finalidad evitar la consumación de un hecho o situación jurídica determinada, que facilita el cumplimiento de la sentencia definitiva que llegue a dictarse en el procedimiento de que se trate, constituyendo además una "anticipación provisoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar el retardo de la misma,"<sup>47</sup> se infiere que la suspensión en el juicio de amparo, en ciertos casos, no sólo evita la consumación del acto reclamado, sino que va más allá: restituye al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada aun antes de dictarse sentencia.

En ese sentido, es atinado el raciocinio del maestro Héctor Fix Zamudio al afirmar:

"es indudable que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar, por cuanto que significa una apreciación preliminar de la existencia de un derecho con el objeto de anticipar provisionalmente algunos efectos de la protección definitiva y por este motivo, no tiene eficacia puramente conservativa, sino que también puede asumir el carácter de una providencia constitutiva, o parcial y provisionalmente restitutoria, cuando tales efectos sean necesarios para

---

<sup>47</sup> Calamandrei Piero. Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, trad. De Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires. Editorial Bibliográfica Argentina, p. 45. Cita evocada por José Ovalle Faveia en su obra Derecho Procesal Civil, segunda edición, editorial Harla, pág. 32.

conservar la materia del litigio o impedir perjuicio irreparables a los interesados.”<sup>48</sup>

Esta idea expuesta con anterioridad y que es compartida también por los juristas Alfonso Noriega y Ricardo Couto, parece ser confutada por el no menos insigne Ignacio Burgoa Orihuela al sostener:

“La tendencia a imputar a la suspensión efectos “constitutivos y restitutorios” entraña al desconocimiento de lo que implica esencialmente el fenómeno suspensivo. “Suspender” equivale a “frenar”, “paralizar”, “detener” o “evitar” la causación de algún hecho, su continuación o la persistencia de una determinada situación. Nunca pueden atribuirse a dicho fenómeno los caracteres de una medida o providencia cautelar “constitutiva o restitutoria” sin negar su misma implicación substancial. La “constitución” o “creación” de algo evidentemente no es “suspensión”, como tampoco significa “suspender” el acto restitutorio o invalidatorio. Ante un concepto de meridiana claridad lógica, gramatical y jurídica como es el de “suspensión”, no tiene ninguna explicación racional la aludida tendencia, que en sí misma involucra un patente absurdo. Si se pretende instituir dentro del proceso o juicio de amparo alguna providencia cautelar “que anticipe provisionalmente algunos efectos de la protección definitiva ” como lo propugna Fix Zamudio apoyándose en el pensamiento de Ricardo Couto y haciéndolo suyo, es decir, si se quiere crear alguna medida procesal “constitutiva o restitutoria” a semejanza de las que existen en el proceso civil, el concepto y la denominación de la correspondiente institución adjetiva de ninguna manera

---

<sup>48</sup>El Juicio de Amparo, pág. 277 y 287. Cita formulada por Ignacio Burgoa Orihuela en su obra *El Juicio de Amparo* pág. 711, Edit. Porrúa, vigesimosexta edición.

entrañarían el fenómeno suspensivo ni la idea ni el nombre de suspensión.<sup>49</sup>

Pero a pesar de los argumentos de este connotado constitucionalista, tendientes a desechar las ideas de sus oponentes, no logra tal fin, porque la realidad práctica de la suspensión en el juicio de amparo no coincide con su preconización teórica que atiende principalmente a cuestiones lingüísticas y de doctrina, más que a la Ley.

En efecto, veamos cómo actúa la suspensión en el juicio de garantías a la par de la Ley y en relación a los actos que afectan la libertad personal fuera del procedimiento judicial y respecto de los que transgreden el artículo 22 constitucional.

Así, es principio básico de la suspensión que para decretarse se tiene que tomar en cuenta la naturaleza de violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que puedan sufrir el quejoso, el tercero perjudicado y el interés público con la ejecución del acto reclamado y el interés público con la ejecución del acto reclamado. Su efecto genérico consiste en mantener las cosas en el estado en que se encuentran; y, si así estuviera concebida para todos los casos que brinda la vida diaria, con sobrada razón estaríamos de acuerdo con el pensamiento de Ignacio Burgoa. Pero suele acontecer que cuando en una demanda de garantías se reclaman violaciones al artículo 22 de la Constitución Federal, el efecto debe constituir en ordenar que cesen de inmediato los actos que

---

<sup>49</sup> El juicio de amparo Pág. 712. Edit. Porrúa. vigesimosexta edición.

directamente ponen en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro, o la ejecución de algunos de esos actos prohibidos por el artículo en mención; y entonces, cuando esto ocurre, nos encontramos con que la suspensión ya no tiene meros efectos de "detención de hechos o situaciones jurídicas", sino restitutorios. Lo mismo ocurre cuando se reclaman la detención en flagrancia de una autoridad distinta a la del Ministerio Público, el efecto debe consistir en ordenar que aquélla le remita a éste al indiciado, quien en todo caso sólo podrá retenerlo por un término de cuarenta y ocho delincente particular u organizado; asimismo, si lo que se reclama es la detención mediante orden escrita en caso de urgencia, la autoridad de amparo debe ordena que se proceda en los mismos términos legales anteriormente apuntados. En ambos casos, dentro del incidente de suspensión, se debe de poner en libertad al indiciado se del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan con las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia. He aquí la segunda manera en que la suspensión opera con efectos restitutorios.

Pero no sólo los actos de naturaleza penal que atentan contra la libertad personal fuera del procedimiento judicial o los prohibidos por el artículo 22 constitucional obtienen el beneficio de la suspensión con efectos restitutorios, sino también los que se suspenden a petición de parte según lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en cuyo caso, sin dejar de observar los requisitos del mencionado precepto, se puede hacer una apreciación provisional de la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo cual reafirma la realidad de que la suspensión ya opera entre nosotros con "efectos restitutorios provisionales ", pero que restablecen el orden constitucional al fin y al cabo. Esta aseveración encuentra sustento legal en

las siguientes jurisprudencias sostenidas recientemente por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integradas por contradicción de tesis, las cuales transcribo íntegramente para su corroboración:

**\*SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.** La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen se encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensiva deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su



trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que puede sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.<sup>50</sup>

"SUSPENSION. PROCEDENCIA EN LOS CASOS DE CLAUSURA EJECUTADA POR TIEMPO INDEFINIDO. El artículo 107, fracción X de la Constitución General de la República, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado en el amparo, el de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho

---

<sup>50</sup> Contradicción de tesis 3/95 Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo del Sexto Circuito 14 de marzo de 1996. Unanimidad de nueve votos Ausentes Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios por estar desempeñando un encargo extraordinario Ponente Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas Secretario Marco Antonio Rodríguez Barajas

del solicitante, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues el hecho de que anticipe la probable solución de fondo del juicio principal, es un adelanto provisional, sólo para efectos de la suspensión. Tal anticipación es posible porque la suspensión se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque es evidente que está caracterizada por diferencias que la perfilan de manera singular y concreta. Sin embargo le son aplicables las reglas de tales medidas, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. En este aspecto cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho y 2) Peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad, sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales.

Consecuentemente, si toda medida cautelar descansa en los principios de verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora, el juez de Distrito puede analizar esos elementos en presencia de una clausura ejecutada por tiempo indefinido, y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que implican no

una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional; así, el efecto de la suspensión será interrumpir el estado de clausura mientras se resuelve el fondo del asunto, sin perjuicio de que si se niega el amparo, porque la "apariencia del buen derecho" sea equivocada, la autoridad puede reanudar la clausura hasta su total cumplimiento. Lo expuesto anteriormente se sustenta en la fracción X del dispositivo constitucional citado, que establece que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesionan el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver la sensibilidad del Juez de Distrito, ante la realidad del acto reclamado, pues si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que puede sufrir el quejoso, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado." <sup>51</sup>

**V. LA SUSPENSION CON EFECTOS  
RESTITUTORIOS INMEDIATOS; REMEDIO  
PARA LAS DETENCIONES ILEGALES  
Y EL ABUSO DE AUTORIDAD.**

---

<sup>51</sup> Contradicción de tesis 12/90 Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Primer Circuito 14 de marzo de 1996. Unanimidad de nueve votos Ausentes Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios por estar desempeñando un encargo extraordinario Ponente Guillermo I. Ortiz.

### A) Ideas Generales

En uno de los subcapítulos anteriores afirmé que cuando se reclaman restricciones a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, la Ley de Amparo es generosa con las personas de tales supuestos, al brindarles facilidades para lograr una justicia pronta en ese sentido; y que, no obstante ello, el procedimiento y la sentencia misma de amparo resultaban ineficaces. En efecto, así ocurre, porque aun y cuando de conformidad a lo establecido en el artículo 16 constitucional se exija que en los casos de delito flagrante el detenido debe ser puesto a disposición del Ministerio Público, suele acontecer en la práctica, que cuando esa detención se realiza por agentes de la policía judicial o por elementos del ejército, existen detenciones prolongadas sin que sean remitidos los indiciados con la prontitud requerida ante aquél; y en tales casos, el agente policiaco subrepticamente puede señalar a su arbitrio la hora en que ocurre la detención, en tanto que el Ministerio Público tendrá por cierta esa manifestación al decretar la retención; incluso, puede suceder que a pesar de existir ésta el indiciado se encuentre a disposición de los agentes policiales todavía.<sup>52</sup>

Igualmente, es común y de dominio popular, encontrarse con casos en que tratándose de delitos graves, los agentes policiales realicen la captura de las personas sin existir flagrancia o urgencia así determinada por escrito, en cuyo caso, al ocurrir la detención, el agente del Ministerio Público

---

<sup>52</sup> Véase subtema III de este capítulo

elabora ipso facto la orden de detención, o bien, la elabora dentro del término de las cuarenta y ocho o noventa y seis horas; convirtiéndose, de ese modo, en cómplice de los policías al dejar aparentemente incólume el orden constitucional.

Por lo tanto, en esos casos en que es permisible que se detenga a las personas sin orden de aprehensión (flagrancia y urgencia), no debe dejarse ningún resquicio al arbitrio de los órganos encargados de la persecución de los delitos, porque la buena fe que de ellos se preconiza, les facilita el quebranto de la Ley. Por eso, existe hoy en día la necesidad de que determinadamente se regule cada paso de tales funcionarios, estableciendo un instrumento jurídico realmente eficaz que proporcione tranquilidad a los individuos. Desde mil novecientos noventa, a la fecha, se han introducido importantes reformas a la constitución en este renglón cuya única finalidad es lograr el respeto a la persona; así por ejemplo, se ensanchó el principio de legalidad en materia penal al exigirse requisitos precisos para detener a una persona (artículos 16 y 19); se contempla el derecho a la defensa inmediata y se norma que la confesión ya no constituye "la reina de las pruebas" dentro del proceso (artículo 20).

Sin embargo, paradójicamente esos avances tan plausibles que tienen como centro de atención la protección de la persona no aterrizan en la práctica; pues el investigador de los delitos en México se encarga de opacarlos con su ineptitud, salvo sus muy raras ocasiones que no que no sucede así. Tan luego aparece el precepto que impide la tortura y que estatuye los requisitos para rendir la confesión y valorar ésta en juicio, afloran nuevas conductas que laceran al individuo; de ese modo, se

atormenta psicológicamente a través de injurias y amenazas de muerte, se utilizan métodos denigrantes como la asfixia por sumersión o estrangulación, etcétera, etcétera; en tanto que el Ministerio Público hace lo propio, cuando al tomarle la declaración al indiciado no le nombra ni le permite que designe defensor, y en el mejor de los casos, le señala uno con el que éste jamás tiene contacto y ni siquiera conoce, pero eso sí, con posterioridad tal actuación aparece firmada por esa persona "de su confianza".

Ante esto la sentencia de amparo poco puede hacer, pues aun y cuando jurídicamente es posible restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, no existe un restablecimiento material, ya que una privación a la libertad personal, a la vida, una deportación y la aplicación de tormentos, son actos que se consuman instantáneamente. Así, es típico que la sentencia de amparo establezca que tal o cual detención es ilegal y que por lo tanto debe decretarse la libertad del indiciado, sin embargo, esa resolución nada puede hacer respecto de los azotes y vejaciones de fue víctima el quejoso en su momento.

El instrumento jurídico que más o menos ha servido para remediar los males de que hemos venido hablando, lo es la suspensión del juicio de amparo, porque a través de ella se le restituye al agraviado su libertad con sólo apreciar las características extrínsecas de la privación, o sea, observando si la detención fue lícita o ilegal; así lo confirma el párrafo tercero, del artículo 136, de la Ley de Amparo, al establecer.

"De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan con las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro horas. De existir flagrancia o urgencia se prevendrá el Ministerio Público para que el quejoso, sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención.

Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo."

Pero la suspensión debe llegar a estándares superlativos prácticos que impidan de tajo cualquier conducta de la autoridad tendiente a poner en peligro la libertad personal, la vida y a aplicar tormentos, azotes y palos a las personas.

#### **B) Amparo Expedito**

A decir verdad, no pertenece al mundo ignoto la suspensión con efectos reparatorios, según se ha visto con antelación; antes bien, es de sobre conocido que así actúa en situaciones muy urgentes, como sucede, por ejemplo, cuando se reclama la restricción a la libertad personal fuera del

procedimiento judicial y en cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional.

Pero en este tipo de asuntos, la suspensión debe ir más allá todavía; y para lograrlo, tienen que establecerse también reglas accesibles en relación a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que se trate de un instrumento jurídico eficaz totalmente. Así, en primer lugar, la competencia auxiliar tiene que ser enaltecida, de suerte que cualquier autoridad judicial local quede facultada no sólo para recibir la demanda de amparo y suspender provisionalmente los actos reclamados, sino también para conocer del amparo en lo principal y de la manera en que en el inciso posterior se detallará. De esta guisa, los jueces de primera instancia, cualquiera que sea su ramo, así como los jueces municipales, deben ser auténticos colaboradores del Poder Judicial Federal, cuya actividad debe traducirse a corto plazo en la erradicación total de las detenciones ilegales y del abuso de autoridad en aquellos lugares donde no existan órganos jurisdiccionales del poder que realicen la defensa de la Constitución; porque desgraciadamente es en los lugares más apartados e incommunicados donde se comenten tales violaciones. En segundo lugar, en relación a la solicitud de amparo, se sugiere que de la misma manera en que está concebida actualmente, se permita, o más bien, se convierta en una práctica cotidiana la instancia de garantías por comparecencia, incluso por la vía telegráfica, en atención a que los actos restrictivos de la libertad personal fuera del procedimiento judicial y los prohibidos por el artículo 22 constitucional merecen ser salvaguardados en el mismo momento en que se producen por parte de la autoridad; pudiendo ser promovido, en esos casos, por cualquier persona distinta del quejoso aunque sea menor, si aquél se encuentra



imposibilitado para ello, en la inteligencia de que deberá ser una obligación para el juez de amparo lograr la comparecencia del quejoso para la ratificación de la demanda correspondiente en el supuesto de que éste se encuentre privado de su libertad, castigándose severamente con pena privativa de libertad cuando tal medida no sea acatada debidamente. La demanda de amparo podrá presentarse en cualquier día, a cualquiera hora del día o de la noche, en cuyo caso el funcionario que reciba la solicitud de amparo deberá realizar todo lo relativo a la suspensión en la forma que indica el inciso siguiente y cualquier otra medida urgente que crea necesaria en beneficio del agraviado. De la misma manera, por ser importante proteger al individuo de los actos privativos de la libertad personal fuera del procedimiento judicial y de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo correspondiente deberá restituir al agraviado del pleno goce de la garantía individual violada en forma inmediata y observando las pruebas que se hubieren aportado al incidente de suspensión sobre la existencia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad, en la inteligencia de que si al tramitarse la suspensión se obtuvo la libertad personal del agraviado por no haber existido flagrancia, acuerdo de retención y mandamiento de detención por escrito en caso de urgencia, la sentencia tendrá como efecto ratificar la libertad concedida en dicho incidente; pero si por el contrario, consta que el acuerdo de retención fue dictado lo mismo que el mandato de detención, la resolución del juicio de amparo propenderá a determinar si existió flagrancia o urgencia al realizar la captura; si se advierte que tales casos de excepción no concurren, deberá ordenarse su absoluta e inmediata libertad, sin perjuicio de que con posterioridad el indiciado pueda ser detenido nuevamente, previo el cumplimiento de los

requisitos legales. En estos casos, las autoridades responsables están obligadas a rendir inmediatamente el informe justificado y previo a la autoridad de amparo haciendo uso de los medios de comunicación más sofisticados con que se cuente, como puede ser el fax, previa comprobación telefónica, y el internet.

Finalmente, respecto a este tipo de asuntos en trato, ningún juicio de amparo deberá quedar inconcluso; el funcionario que esto origine deberá ser inmediatamente separado de su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil en que incurra con su conducta.

### **C. Tramitación de la Suspensión**

#### **En el Amparo Expedito**

La suspensión de los actos reclamados dentro del juicio de amparo debe continuar su marcha evolutiva, dejando de ser un simple medio conservador de la materia de aquél, para pasar a ser un instrumento jurídico que permita al individuo seguir gozando de su libertad personal cuando no haya causa legítima de su privación, y debe culminar de una vez por todas con el exterminio del embuste e ineptitud de los funcionarios públicos encargados de la persecución de los delitos en México. La autoridad con semejante función tiene que acostumbrarse a combatir la delincuencia con apego a la Ley, no de dicho, sino de hecho.

Para lograr este propósito, la impartición de la justicia debe ser verdaderamente pronta y expedita, de tal manera que cuando un individuo

sea privado de su libertad personal fuera del procedimiento judicial, o cuando los cuerpos policíacos y el Ministerio Público le apliquen o pretendan aplicarle las penas que prohíbe el artículo 22 constitucional, debe ser protegido inmediatamente a efecto de evitar a toda costa un daño mayor que denigre su condición de humano. Por lo tanto, el hogaño reclama urgentemente que cuando se señalen en el amparo este tipo de actos, la suspensión se tramite de la siguiente manera.

Es requisito primario que la demanda de amparo se admita en el mismo momento de su presentación y que la suspensión sea decretada de Oficio en el auto admisorio de aquélla.

Ahora bien, si lo que se reclama es la detención de una persona en flagrancia por parte de un jefe de tenencia, policía judicial, federal o estatal, policía federal de caminos, policía militar u otras autoridades distintas del Ministerio Público, al admitirse la demanda deberá ordenarse que el juez (en su defecto el actuario o secretario del juzgado), se constituya en el lugar de reclusión del indiciado y exija al funcionario captor informes sobre el sitio, hora, día y el motivo de la detención. Si de estos informes se advierte que dichas autoridades no realizaron la captura en flagrancia, o si ha transcurrido el tiempo razonable,<sup>53</sup> en que debió ser puesto a disposición del Ministerio Público, el indiciado deberá ser puesto en libertad inmediatamente, bajo la reserva de Ley, sin perjuicio de que con posterioridad pueda ser detenido nuevamente previo los requisitos legales;

---

<sup>53</sup> Se llama tiempo razonable, aquel de que dispone el elemento captor para remitir al indiciado a disposición del Ministerio Público y que puede variar dependiendo de la distancia que media entre el lugar de la detención y aquel funcionario, pero ese tiempo nunca deberá ser mayor de una hora, contando a partir del momento mismo del aseguramiento a la persona

de todo lo cual deberá dejarse constancia en la actuación que practique el juez, en presencia de los testigos de asistencia que estime pertinentes. Igualmente, si el indiciado ya que fue puesto a disposición del Ministerio Público y éste no ha dictado la retención correspondiente, o si no lo ha consignado ante el juez a pesar del término constitucional de que goza para retenerlo, deberá ordenarse la absoluta libertad, dejándose constancia de ello en la actualización que se levante en los mismos términos que el anterior supuesto.

Por otro lado, si lo que se reclama en la demanda de amparo lo es una detención realizada por parte del Ministerio Público o por elementos policiales en base a una orden escrita, la actualización de juez o funcionario encargado de ella, deberá constreñirse a verificar si la orden de detención existe o no; si no existe tal, el indiciado deberá ser liberado ipso facto bajo las reservas de Ley y sin perjuicio que con posterioridad pueda ser detenido nuevamente previo al cumplimiento de los requisitos legales; dejándose constancia de esto en la actuación correspondiente, que puede levantarse con los testigos de asistencia que se estimen convenientes. En cambio si existe la orden de detención, el juicio de amparo deberá tramitarse en los mismos términos en que está concebido actualmente. Asimismo, idéntica realidad debe prevalecer cuando lo que se reclame sea una detención con orden de cateo.

Tanto en los casos en que se reclame la detención en flagrancia, cuanto en aquellos en que sea con motivo de una supuesta orden de detención y cateo, el juez que ha admitido la demanda de amparo deberá integrar, por duplicado, un cuadernillo con los informes y con la

actualización en que consta la libertad del agraviado, y remitirá el expediente original al Juez de Distrito competente, quien deberá dictar sentencia ratificando lo actuado por el "Juez de Suspensión" concediendo el amparo en forma definitiva.

La razón por la que debe procederse así en la suspensión de los amparos que versen sobre los actos restrictivos de la libertad personal fuera del procedimiento judicial o cuando se trate de los prohibidos por el artículo 22 constitucional es sumamente sencilla; en tales hipótesis las autoridades responsables se encuentran en condiciones de dar respuestas inmediatas a las imputaciones o actos que reclama el agraviado. Así, si se reclama la detención en flagrancia del delito, el elemento captor, al ser requerido por el juez en el incidente de suspensión, respecto de la hora, día y motivo de la detención, puede referir con detalle tales circunstancias y exponer el motivo por el que no ha puesto al indiciado a disposición del Ministerio Público; y es natural que si no puede narrar y justificar tales detalles y exponer el motivo por el que no ha puesto al indiciado a disposición del Ministerio Público; y es natural que si no puede narrar y justificar tales detalles de la captura o si no ha remitido al detenido ante aquél, seguramente es con el fin de mantenerlo incomunicado y aplicarle las penas prohibidas por el artículo 22 de nuestra Ley Fundamental; lo mismo será si encontrándose a disposición del Ministerio Público no le dicta acuerdo de retención o si no lo consigna dentro del término constitucional de cuarenta y ocho o noventa y seis horas. Con mayor razón, si lo que se reclama es una orden de detención escrita en caso de urgencia, o cateo, precisamente tal orden debe existir y para exhibirla no se necesita de ningún trámite dilatorio posterior.

Esto originará, indudablemente, una constante observación al desempeño del trabajo de los órganos encargados de la persecución de los delitos.

#### **D) Notas Finales**

La proposición de este trabajo puede significar un despropósito para quienes sean partidarios del arcaísmo en que todavía nos encontramos en materia de respeto a las Garantías Individuales y a los Derechos Humanos; pero para aquellos que crean en la dialéctica del Juicio de Amparo, esta obra debe servir, al menos, para despertar la inquietud de estudio y conclusiones ulteriores que nos permitan sentar las bases de un auténtico respeto a la persona por parte de la autoridad, que sociológicamente tiene como misión el orden y no el ataque a la condición humana.

También habrá quienes piensen que abundar sobre el tema de las Garantías Individuales y Derechos Humanos de las personas que cometen delitos, implica fomentar el crimen en este país. Pero a todas esas personas puede refutárseles diciendo que las Garantías Individuales y los Derechos Humanos no excluyen a nadie, ni siquiera a quienes se vean involucrados de alguna forma en cualquier ilícito, en virtud de que mientras no hay sentencia definitiva que haga la declaración de culpable hay inocencia.

El combate al crimen y el respeto alas Garantías Individuales pueden coexistir en el marco de acción que emprenda el órgano encargado de la persecución de los delitos; de no ser así y permitir que el delincuente virtual

o presunto responsable sea humillado, nos reduce a un ambiente característico de la jungla y que fue propio de la etapa primitiva del hombre.

Así las cosas, espero, pues, que este modesto trabajo el día de hoy represente un asomo a la realidad del mañana. (Víctor Barragán Benitez, Tomo II, páginas 1183 a 1210)

---

DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Capítulo III. Artículos del 122 al 144 de la Ley de Amparo. La suspensión del acto reclamado procede de oficio, a petición de parte y con arreglo a la ley, de oficio se decreta ante la existencia de violaciones directas al artículo 22 constitucional, es necesario que se agregue la suspensión de oficio por lo que respecta a la confiscación de bienes y pago de multas en virtud de que tales actos son violatorios flagrantes de los artículos 14 y 16 de nuestra carta magna, siendo prudente que los incidentes de suspensión que se formen con motivo de estos actos, tengan continuidad para efectos de probar el acto reclamado y que el juzgador federal, pueda resolver la interlocutoria definitiva de acuerdo al contenido que obre en los autos incidentales y no desechar el incidente al inicio del mismo por algún motivo que considere en forma discrecional de improcedencia.

En forma medular, la suspensión provisional decretada por el órgano federal tiene como base fundamental lo dispuesto en los artículos 124 y 130 de la Ley de Amparo, sobresaliendo en el contenido de dichos dispositivos las palabras ( interés social y orden público ).

El interés social se divide de un interés público cuando se atiende el bien común, cuando se hace mención a disposiciones que afectan a la sociedad en general, y privado, cuando se atiende a las conveniencia de alguien en particular. Como elementos esenciales, para la existencia del interés social deberán entenderse: I. Interés social es la seguridad general que comprende: la paz, el orden, la salud pública y la seguridad de las adquisiciones y transacciones. II. Seguridad de las instituciones sociales: la familia y las sucesiones; III. Seguridad de las instituciones religiosas, culturales y económicas; IV. Interés social en el progreso general: económico, político, científico y cultural; V. Interés social en niveles mínimos de vida; VI. Interés en la moral general, e VII. Interés en la conservación de los recursos naturales y ecología. Lo anterior, permite clasificar las disposiciones que regulan las materias en el sentido de interés y orden público.

El artículo 124 bis reformado mediante decreto de fecha ocho de febrero de 1999, estipuló en su contenido de manera clara y precisa los elementos necesarios para que el juez de amparo fije el monto de un garantía.

Tal acto nos hace entender que los artículos 123 y 130 de la ley en cita debe reformarse en el sentido de esclarecer la terminología de interés social y orden público, ya que es de fácil apreciación en las líneas anteriores que el contenido técnico jurídico de interés social resulta ser demasiado extensivo en muchos aspectos dando margen que la autoridad federal al resolver sobre la concesión de la suspensión provisional en forma por demás discrecional dicte ciertas medias que en la mayoría de los casos



afecta y vulnera las garantías individuales del agraviado que ocurre al amparo para efectos de su protección resultando nugatorio el espíritu de la ley de amparo que es el de la protección de todo gobernado. (Reynaldo Herrera Aké, Tomo II, páginas 1282 a 1284)

---

Con el objeto de subsanar la omisión en que incurren las autoridades que conocen y otorgan la suspensión del acto reclamado en perjuicio de las instituciones, servicios y dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las Entidades Federativas, por inexacta interpretación de los artículos 4o. del Código de Procedimientos Civiles y 9o. de la Ley de Amparo, se considera necesario adecuar la disposición de la suspensión del acto reclamado adicionando una tercera fracción al artículo 123.

De acuerdo a la lectura de los referidos artículos, se desprende que la Administración Pública Federal y las Entidades Federativas entre otras, se encuentran exentas de presentar las garantías exigidas para conceder la suspensión del acto reclamado ya sea provisional o definitiva; por lo que la disposición obliga de manera imperativa a las autoridades a otorgarla sin solicitar las garantías establecidas por la ley, sin embargo, en múltiples ocasiones se omite aplicar dichas disposiciones.

Aunado a lo anterior, nuestro máximo Tribunal de Justicia en criterio firme y definido estableció que las personas morales oficiales están exentas de presentar cualquier garantía que se les exija por ser de acreditada solvencia económica.

Propuesta:

Art. 123 . . .

I....

II...

III. Contra actos que afecten o puedan afectar el patrimonio de las dependencias de la Administración Pública Federal y Entidades Federativas. (Eduardo Macías Garrido, Tomo III, páginas 2000 y 2001)

---

ARTÍCULO 123. Procede la suspensión de oficio:

I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; y

II. Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegere (sic) a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.

La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el Juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley.

III. Derogada: D.O.F. 29 de junio de 1976.

Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el Juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2221 y 2222)

---

III. Cuando los actos reclamados tengan o puedan tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o sustracción del régimen jurídico ejidal. (Gilberto J. Hershberger Reyes, Tomo IV, páginas 2729 y 2730).

---

## **LAS CUESTIONES FAMILIARES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO**

Al margen de la discusión sobre si las cuestiones de indole familiar deben de estar incluidas tradicionalmente dentro del derecho civil o si bien deben de ser regulados por una rama independiente del derecho común, hemos de hacer hincapié en el que las cuestiones que se encuentran dentro del llamado derecho familiar merecen un tratamiento especial, dado que dentro de él se encuentran diversos supuestos que atañen a entidades y sujetos tales como la familia, el matrimonio, los menores, los incapaces y

los ausentes, los cuales reclaman un tratamiento específico, que les separe de los principios igualitarios pregonados por el liberalismo y de los cuales tiene su sustento el derecho civil, que en muchos casos los coloca en situaciones no del todo favorables a los intereses primigenios que portan.

En este sentido, considero que como signatura fundamental de la reforma que se realice a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales debe de serlo sin duda el de considerar a los temas del derecho de familia, como elementos fundamentales a proteger dentro del procedimiento de amparo, toda vez que el considerarlos junto con otra clase de temas que sólo responden a intereses particulares sin trascendencia común, se corre el riesgo de deruir las prerrogativas que la legislación ordinaria ha concedido en estos menesteres a efecto de lograr que el interés común que envuelven a estos supuestos queden plenamente salvaguardados.

Fácilmente se advierte que en el texto de la Ley de Amparo en vigor, algunas cuestiones son distinguidas del resto de casos que previene, ello en virtud a la trascendencia de los derechos que se tutelan.

Así verbi gracia tenemos que en el caso de la suspensión del acto reclamado, la Ley de Amparo reserva para algunos supuestos, la procedencia de oficio de la misma, tal y como lo señala en su artículo 123, al disponer:

Artículo 123.- Procede la suspensión de oficio:

I. Cuando que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal.

II. Cuando se trate de algún otro caso que, si llegare a consumarse, haria físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.

Como se aprecia, sólo para los casos antes enumerados se concederá la suspensión en forma oficiosa, para el resto de actos deberá llevarse a cabo a petición de parte y agotarse el incidente respectivo.

En ese mismo sentido la Ley de Amparo establece al lado del principio de estricto derecho, la facultad de suplencia de la queja en tratándose de amparos en materia laboral, penal y agrario, aún que hace excepciones en el resto de materias, en los casos consagrados por el artículo 76 bis en las fracciones I, V y VI, destacando en el presente caso que nos ocupa el contenido de la fracción V, que contempla supuestos afines a nuestro tema, dicho precepto establece lo siguiente:

Artículo 76 bis.- Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente: ... V. En favor de los menores de edad o de los incapaces.

Con los dos anteriores ejemplos, se aprecia que la legislación de amparo concede a ciertos hechos un trato especial, a mayor abundamiento basta recordar el contenido del libro segundo de la Ley de Amparo, el cual se establece con el único propósito de fincar a favor de los sujetos enumerados en el artículo 212 de la propia ley, una serie de preferencias en su actuación procesal como parte en el amparo.

En este sentido, consideramos que ciertas situaciones de índole familiar, tal como lo es la concesión de alimentos, la custodia de menores, la protección de incapaces, medidas provisionales entre cónyuges, entre otros, deberían de incluirse dentro de estos supuestos de excepción. De esta forma el acto de autoridad consistente en denegar la fijación de una pensión alimenticia provisional o definitiva, que en determinado caso podría convertirse en acto reclamado de un juicio de amparo, bien ameritaría que se concediese una suspensión de oficio, o bien que en el caso de que en su escrito de demanda no se estableciese con toda certeza y propiedad los conceptos de violación que lo motivan, pudiese el juzgador de amparo suplir esta deficiencia y con esto evitar que por una deficiencia en la exposición de su demanda se dejase sin percibir alimentos a quien por derecho debería de corresponderle.

Los dos anteriores casos –la concesión de la suspensión oficiosa y la suplencia de la queja- sirven de fiel sustento a la tesis enarbolada líneas arriba, las cuales se proponen en forma enunciativa y no limitativa, a la serie de supuestos donde puede lograrse una amplia protección a los intereses tutelados por el derecho de familia, por lo que en realidad esto sólo propone evidenciar la necesidad de contemplar este aspecto dentro de una posible

enmienda legislativa, la cual consideramos no escapa a la idoneidad o adecuación con los principios rectores del juicio de garantías, puesto que como se adujo, la propia ley en la actualidad concede estas concesiones, por lo que si se otorgan ciertas prerrogativas especiales a ejidatarios, trabajadores o procesados, por qué no hacerla extensiva a la familia, los menores, incapaces o el matrimonio.

En todo caso la reforma que adopte estas ideas debe de precisar los alcances de la misma, vigilando a qué sujetos y en qué condiciones puede obsequiarse estas preferencias y bajo qué supuestos pueden prestarse las mismas. En esta labor debe de ser fundamental el auxilio que preste la jurisprudencia existente hasta el momento, la cual ha tenido a bien reconocer esta realidad y en más de un caso ha atendido el silencio del texto legal. (Brígida Pérez Perusquia, Tomo IV, páginas 2786 a 2789).

**Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurren los requisitos siguientes:**

**I. Que la solicite el agraviado.**

**II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.**

**Se considerará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares;**

### **PROPUESTAS**

**a) La fracción II del artículo 124 debería desaparecer, pues en todo caso se trata de una lista enunciativa, por lo que es mejor que el juez**



analice el caso concreto y estime si la concesión de la suspensión en ese amparo va a alterar la paz pública o el interés social. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1671)

---

DECIMA SEXTA: En el artículo 124 Segundo Párrafo se señalan causas específicas por las cuales se dispone hay contravención a disposiciones de orden público.

Dentro de los supuestos enunciados, actualmente se dan otros que pudiera considerarse son una evolución de los contemplados, y por otra parte han surgido otras causas por la cuales no debe de concederse la suspensión, con independencia de que se emplean términos que modernamente se consideran peyorativos, proponiéndose en consecuencia la siguiente redacción.

Art. 124. Fracción II, Párrafo Segundo "Se considerará entre otros casos, y se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones cuando, de concederse la suspensión.

Se causan daños a la ecología o se impida la restauración de los sistemas ecológicos para restituir el equilibrio ambiental;

Se obstaculicen las funciones de seguridad pública o las de prevención de accidentes o desastres naturales;

Se continúe el funcionamiento de centros de vicio o de tráfico sexual;

Se permita la producción, comercialización, tráfico y consumo de drogas enervantes;

Se consumen o continúen los delitos o sus efectos;

Se provoque el alza de precios o la ocultación de artículos de primera necesidad o bien de consumo general o bien de consumo generalizado;

Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o exista peligro de invasión, o exista peligro de enfermedades exóticas.

Se dificulten campañas contra el alcoholismo, tabaquismo o de tráfico de sustancias o que envenenan al individuo o;

No se permita el cumplimiento de órdenes emanadas de las fuerzas armadas o se ponga en peligro la seguridad nacional. (Javier Herrera Anaya, Tomo V, páginas 210 y 211)

---

**III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.**

**El juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las**

**medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.**

### **PROPUESTAS**

Cabe preguntar ¿de qué término goza el quejoso para exhibir esa garantía que se le señala a favor del tercero o terceros perjudicados a fin de garantizar los posibles daños que pudieran causárseles con la medida cautelar concedida al quejoso? La ley en este aspecto no señala ningún término en lo relativo al tiempo que goce el quejoso para depositar o exhibir esa garantía que se le señala al concedérsele la suspensión provisional.

Si bien es cierto, el artículo 139 de la Ley de Amparo hace alusión a un término de cinco días contados a partir del siguiente al que surta efectos la suspensión concedida; ese precepto legal se refiere a la suspensión definitiva, mas no a la provisional, puesto que claramente está aludiendo al recurso de revisión que se interponga en contra del auto en que un Juez de Distrito conceda la suspensión, la cual no es otra que la definitiva porque es la que puede ser legalmente impugnada mediante el recurso de revisión; lo que no sucede con la suspensión provisional que solo puede dar lugar a la interposición del recurso de queja, por tanto no hay ninguna disposición en la Ley de Amparo que señale con precisión el término de que goza dicho quejoso para exhibir la garantía que se le señale por la suspensión provisional que se le concede. Erróneamente se ha considerado, sin ningún fundamento legal que existe el término de cinco días a que se refiere el artículo 139 de la Ley de Amparo, pero eso no resulta cierto ni legal, tal como ya quedó examinado.

Esta laguna en la ley, bajo mi punto de vista, ha dado motivo a que algunas autoridades responsables hayan violado una suspensión provisional en la que el acto reclamado es la ejecución de un lanzamiento de inmueble, alegando que no se acreditó que el quejoso haya exhibido la garantía exigida para que surtiera efectos la suspensión provisional. En cambio, tales situaciones podrían evitarse si se estableciera un precepto legal en la Ley de Amparo que claramente se refiera al término que el quejoso goza para la exhibición de la garantía que deberá otorgar al concedérsele la suspensión provisional; o bien se estableciera cuando menos en el artículo 139 de la Ley de Amparo que ese mismo término de cinco días que se establece para la suspensión definitiva, rige igualmente para la suspensión provisional; es de considerarse esta postura porque ello evita la confusión por obscuridad del artículo 139 de la Ley de Amparo. (Héctor Gálvez Tánchez, Tomo I, páginas 309 y 310)

---

1.- De todos los que de una forma u otra están relacionados con el trámite del amparo, es de sobra conocido la importancia y trascendencia que tiene el incidente de suspensión.

Bástame decir que a un alto porcentaje de quejosos lo único que les interesa al promover los juicios de garantías no es obtener el otorgamiento de la protección federal (de antemano saben que les será negado), sino la concesión de la suspensión ya provisional ya definitiva.

Justo por tal relevancia es que resulta absurdo que el incidente respectivo se inicie con un escrito sin firma; ocurno que no deja de ser una verdadera demanda incidental.

Efectivamente, la generalidad de los abogados postulantes acostumbran pedir a sus clientes que les firmen sólo el original de la demanda de garantías, comenzándose así la tramitación del incidente de suspensión con copias, por duplicado, de dicho libelo, pero, increíblemente, sin tener el respaldo de la firma del promovente.

Debido quizás a la urgencia del agraviado en la obtención de la medida, así como a la falta de costumbre del juzgador o para evitarse éste problemas, se ha accedido a dar curso a las peticiones, mas incorrectamente.

Tal como se encuentra redactada la ley de la materia (que no contempla a la firma del quejoso como uno de los requisitos de la demanda de amparo directo o indirecto), la única forma de dar respuesta a esas promociones sin respaldo, sería denegando el trámite del incidente hasta que se subsanara la omisión de la firma, mas lo conveniente sería incluir a la firma como elemento tanto de la demanda principal como de la incidental, para lo cual deberían adicionarse los artículos 116, 124 y 166 de la ley referida, con una fracción mas. (Jorge Figueroa Cacho, Tomo I, páginas 397 y 398)

Aunque el incidente de suspensión puede promoverse en cualquier momento con tal que no se hubiera pronunciado sentencia ejecutoria (artículo 141 de la Ley de Amparo), es práctica generalizada que en la gran mayoría de los casos se hace desde la demanda misma, debido quizás a que, como lo mencioné antes, en bastantes ocasiones a los quejosos lo único que les interesa es obtener la suspensión.

Como es sabido, en el trámite del juicio de garantías no existen documentos fundatorios, por lo que los agraviados no están obligados a exhibir documento alguno de esa naturaleza con sus demandas (pero sí los habilitantes).

Es por eso que algunas veces (quizás muchas) se niega a aquéllos la suspensión provisional con base en aquella jurisprudencia de la voz "SUSPENSION PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO", y que con toda justicia exige que los promoventes del amparo que tengan esa calidad deben justificar, aunque sea presuntivamente, su interés jurídico.

Esa tesis, sin embargo, de alguna manera se contradice con el texto del artículo 130 de la ley de la materia, al establecer que si hubiere peligro de que se ejecute el acto reclamado, el juez de Distrito, "con la sola presentación de la demanda de amparo", decretará la suspensión. Véase como la ley sólo exige para que se conceda la suspensión "la sola presentación de la demanda".

Para evitar confusiones estimo conveniente que de una vez por todas se añadiera algún precepto al capítulo denominado "De la suspensión del

acto reclamado" (podría serlo el mismo 130), que prescribiera que tratándose de terceros extraños deban presentar algún justificante que acredite presuntivamente su interés jurídico, a fin de que pueda otorgárseles la suspensión. (Jorge Figueroa Cacho, Tomo I, páginas 405 y 406)

---

Reforma al Título del Capítulo III del TITULO SEGUNDO (DEL JUICIO DE AMPARO ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO), cuyo texto actual es el siguiente:

### CAPÍTULO III

#### De la suspensión del acto reclamado

Se propone que el título anterior se reforme, para quedar como sigue:

### CAPÍTULO III

#### De la suspensión de los efectos del acto reclamado

Propongo que el texto anterior se reforme para quedar de la siguiente manera:

Art. 124.- "El juez decretará, a petición de parte, que cesen los efectos del acto reclamado cuando se surtan integralmente los siguientes supuestos: I. Sea necesario decretarla para mantener la materia del Juicio de Amparo y evitar que la parte quejosa sufra daños o perjuicios jurídicos o

materiales de difícil o imposible reparación; II. Que de concederse no se transgredan, irreparablemente, el orden o el interés públicos; III. Que de concederse no se ocasionen a terceros daños o perjuicios, jurídicos o materiales, de difícil o imposible reparación; IV. Que de ser reparables los daños o perjuicios que la suspensión pueda ocasionar en caso de que no se otorgue a la parte quejosa el amparo de la Justicia Federal, ésta garantice plenamente el pago de los mismos". (Pedro Fernando Reyes Colín, Tomo II, páginas 753 a 755)

---

Propongo adicionar el artículo 124 de la Ley de Amparo, con un último párrafo que establezca con toda precisión, que la materia del juicio de amparo que debe proteger cautelarmente la suspensión, está constituida por todos aquellos derechos que detente o posea el agraviado, derivados de la situación jurídico-legal afectada por el acto reclamado, y cuya validez o invalidez dependerá de la sentencia definitiva que determine la inconstitucionalidad, o constitucionalidad, de los actos reclamados en lo principal, y que son esos derechos precisamente los que deben protegerse cautelarmente por la suspensión, hasta el fallo definitivo del juicio de garantías.

La adición anterior es del todo necesaria, en razón del sinnúmero de autos de suspensión provisional y de interlocutorias de suspensión definitiva, pronunciados por los Tribunales Federales, que demuestran la imprecisión y la vaguedad respecto al concepto de la materia del amparo para la suspensión, frecuentemente confundido con el acto reclamado mismo al grado de que en muchos criterios judiciales se sostiene



increíblemente que son el acto reclamado y los efectos que genera, los que tienen que conservarse hasta la conclusión del juicio de garantías, criterio con el cual se deja en absoluto estado de indefensión al quejoso, por lo que ve al aspecto cautelar de la suspensión. **(Bulmaro Corral Rodríguez, Tomo II, páginas 878 y 879)**

---

Por lo que toca a la suspensión a petición de parte, antes de analizar en forma concreta los preceptos que la rigen y de proponer su reforma, debo decir que en más de una ocasión la posibilidad de que se continúe con el juicio y de que se analicen los actos reclamados en el fondo, de que se determine si hay o no violación de garantías, se encuentra en el incidente de suspensión, ya que si se niega y se permite la ejecución de los actos reclamados, en muchas ocasiones el amparo resulta inútil. Conceder la suspensión implica darle al quejoso la posibilidad de que sus intereses no se vean afectados, en tanto se resuelve el juicio.

Por tal motivo considero que la suspensión debe quedar íntegramente en manos del Juez de Distrito. Dicho de otra manera, la concesión o negativa de la suspensión, tanto la provisional como la definitiva, deben dejarse al prudente arbitrio del Juez. En esas condiciones, el segundo párrafo de la fracción II del artículo 124 debe eliminarse, máxime que se trata de un insulto a la inteligencia de los jueces. Se prohíbe conceder la suspensión para continuar el funcionamiento de lenocinios; para que se produzca y se comercie con drogas o se permita la continuación de los delitos o su consumación. Y repito, es un insulto para el Juez decirle en la ley, que en esos casos debe negar la suspensión, como si el Juez fuera tan

tonto que no entendiera que todas esas actividades implican un perjuicio al interés de la comunidad o una contravención a las normas de orden público. Tampoco podrá un Juez impedir las medidas tendientes a controlar una epidemia o permitir la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza (sic). Pero advertencia, el Juez no es un ser omnisciente: si la autoridad afirma que determinado establecimiento mercantil es un lugar donde se comercia con drogas, deberá probarlo porque si no lo prueba no se puede afirmar que haya ese comercio. También hay que considerar que frecuentemente un establecimiento comercial pide amparo y al solicitar la suspensión provisional, presenta documentos que acreditan que cuenta con autorización para operar y si así es, se le concederá la suspensión provisional y será la autoridad quien deberá demostrar, en la audiencia incidental, que ese establecimiento funciona irregularmente o no tiene documentación en orden o está falsificada.

Muchos casos hay en que las autoridades administrativas se quejan de que los jueces conceden la suspensión, sin tomar en cuenta de que se trata de actividades ilícitas; pero no advierte o no quieren advertir las autoridades, que ellas expidieron las licencias de funcionamiento y si no demuestran que el establecimiento mercantil funciona en forma indebida, el Juez de Distrito tendrá que conceder la suspensión. Pero es el caso que muchas autoridades administrativas no son abogados y muchos de los abogados de las autoridades administrativas son muy malos, por lo que o no se defienden o se defienden mal. El resultado es que no prueban lo que dicen que van a probar, pero quieren que el Juez de Distrito haga lo que

ellos no hicieron. (Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1084 y 1085)

---

Modificación del artículo 30 de la Ley de Amparo concerniente al emplazamiento al quejoso y tercero perjudicado.

Dicho precepto no expresa claramente cual es el procedimiento que habrá de seguirse para oír y recibir notificaciones, ya sea del quejoso o del tercero perjudicado. (Antonio Montes Peña, Tomo II, página 1255)

---

DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Capítulo III. Artículos del 122 al 144 de la Ley de Amparo. La suspensión del acto reclamado procede de oficio, a petición de parte y con arreglo a la ley, de oficio se decreta ante la existencia de violaciones directas al artículo 22 constitucional, es necesario que se agregue la suspensión de oficio por lo que respecta a la confiscación de bienes y pago de multas en virtud de que tales actos son violatorios flagrantes de los artículos 14 y 16 de nuestra carta magna, siendo prudente que los incidentes de suspensión que se formen con motivo de estos actos, tengan continuidad para efectos de probar el acto reclamado y que el juzgador federal, pueda resolver la interlocutoria definitiva de acuerdo al contenido que obre en los autos incidentales y no desechar el incidente al inicio del mismo por algún motivo que considere en forma discrecional de improcedencia.

En forma medular, la suspensión provisional decretada por el órgano federal tiene como base fundamental lo dispuesto en los artículos 124 y 130 de la Ley de Amparo, sobresaliendo en el contenido de dichos dispositivos las palabras ( interés social y orden público ).

El interés social se divide de un interés público cuando se atiende el bien común, cuando se hace mención a disposiciones que afectan a la sociedad en general, y privado, cuando se atiende a las conveniencia de alguien en particular. Como elementos esenciales, para la existencia del interés social deberán entenderse: I. Interés social es la seguridad general que comprende: la paz, el orden, la salud pública y la seguridad de las adquisiciones y transacciones. II. Seguridad de las instituciones sociales: la familia y las sucesiones; III. Seguridad de las instituciones religiosas, culturales y económicas; IV. Interés social en el progreso general: económico, político, científico y cultural; V. Interés social en niveles mínimos de vida; VI. Interés en la moral general, e VII. Interés en la conservación de los recursos naturales y ecología. Lo anterior, permite clasificar las disposiciones que regulan las materias en el sentido de interés y orden público.

El artículo 124 bis reformado mediante decreto de fecha ocho de febrero de 1999, estipuló en su contenido de manera clara y precisa los elementos necesarios para que el juez de amparo fije el monto de un garantía.

Tal acto nos hace entender que los artículos 123 y 130 de la ley en cita debe reformarse en el sentido de esclarecer la terminología de interés

social y orden público, ya que es de fácil apreciación en las líneas anteriores que el contenido técnico jurídico de interés social resulta ser demasiado extensivo en muchos aspectos dando margen que la autoridad federal al resolver sobre la concesión de la suspensión provisional en forma por demás discrecional dicte ciertas medidas que en la mayoría de los casos afecta y vulnera las garantías individuales del agraviado que ocurre al amparo para efectos de su protección resultando nugatorio el espíritu de la ley de amparo que es el de la protección de todo gobernado. (Reynaldo Herrera Aké, Tomo II, páginas 1282 a 1284)

---

Con objeto de establecer la base en la cual radica esta reforma, es menester, ubicar a la ciencia procesal dentro del Juicio de Amparo.

Es óbice, que la naturaleza de las áreas que abarcan el extenso campo del derecho, son distintas entre sí, por lo que hace al marco conceptual, desarrollo y aplicabilidad del mismo al caso en concreto. Pero desde la perspectiva de la presente, el objetivo es suponer la igualdad de dicho derecho en la ciencia procesal, al regir en éste, los principios del proceso, los cuales son aplicables a cualquier juicio de que se trate.

Es pues, entendida la justificación de lo importante que resulta para este trabajo la ciencia procesal, en especial dentro del proceso constitucional, al que intentamos expresar para saciar la inquietud de ver consolidado nuestro sistema de Derecho Procesal Constitucional.

El mecanismo procesal exige en si mismo un procedimiento preliminar, encontrándose éste último ligado al proceso, por lo que una, no puede subsistir sin la otra, siendo el primero la fase accesoria del segundo.

Dentro del proceso, encontramos que existen actuaciones preparatorias, que poseen naturaleza preliminar dentro de un proceso ulterior.

Estas actuaciones preparatorias son constituidas por aquellas medidas cautelares y medios preventivos.

Con relación a las diferentes ramas del derecho, por citar algunos, por lo que hace a las medidas cautelares, encontramos el Derecho Penal : la prisión preventiva; en el Derecho Administrativo : el embargo precautorio; en el Derecho Civil y Mercantil : el embargo; en el Derecho Constitucional : la suspensión del acto reclamado, etc.. Por otra parte, por lo que hace al medio preventivo, encontraremos las conciliaciones, efectuadas por entidades públicas como lo son la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Federal del Consumidor, etc.

Así pues, haremos referencia aquellas cuestiones que son planteadas dentro del proceso, denominadas "cuestiones de fondo".

Este tipo de cuestiones, en general se contienen dentro del proceso principal. Esta parte del proceso, será revisora de lo que en lo accesorio del proceso se dictó, pero además, es la parte más importante que determinara la situación jurídica en que se colocarán las partes de la relación procesal.

El procedimiento de amparo, como bien lo afirma el ilustre Fix Zamudio, tiene una triple formación, ya que es un procedimiento de cognición por poseer una clasificación, llámese directo o uni - instancial, e indirecto o bi - instancial; como procedimiento cautelar, ya que prevé el incidente de suspensión y por ultimo, un procedimiento de ejecución, ya que abarca el incidente de inejecución de sentencia y queja por exceso o deficiencia de ejecución.

Si bien es cierto, lo ideal sería que el proceso fuera instantáneo, por lo que las medidas cautelares intentan evitar los peligros inherentes a la imperfección del proceso jurisdiccional, procurando garantizar ya desde el momento de la presentación de la demanda, e incluso en ocasiones con anterioridad a esta, la efectividad futura del derecho, afirmado en la demanda.

Las medidas cautelares constituyen en este sentido, el producto de la adaptación del derecho sustancial a las necesidades creadas por los defectos del proceso, representando un remedio previsto por el derecho sustancial para evitar el peligro resultante de la necesidad de que preceda la declaración a la ejecución.

Las medidas cautelares evitan los peligros inherentes a la imperfección del proceso jurisdiccional, como hemos dicho, procurando garantizar la efectividad futura del derecho afirmado en la demanda, lo que es lo mismo "procurando garantizar la conservación de la materia en el Juicio de Amparo".

Estas consideraciones nos muestran el extraordinario papel que juegan las medidas cautelares en la consumación del derecho, dado que su característica accesoria tiene importancia esencial al originar nuevas situaciones jurídicas.

Dada la carencia de marco jurídico y conceptual alguno, partiremos de aquellas características que permiten calificar como medida cautelar a una figura procesal determinada.

Encontramos dentro de las características de ésta, la instrumentalidad, la temporalidad y la homogeneidad con las medidas ejecutivas.

La instrumentalidad de las medidas cautelares consiste en su relación de dependencia o subordinación respecto de la resolución definitiva sobre el fondo. Podemos agregar, que las medidas cautelares carecen, en efecto, de valor en sí mismas, ya que este valor lo tienen solo en relación a la cuestión principal, la cual se discute en el proceso, así, si la medida cautelar se encuentra encaminada a otra principal, las resoluciones de esta le afectan plenamente.

La temporalidad abarca la instrumentalidad, ya que esta posee sustancia propia para ser estudiada con independencia. La medida cautelar, que produce sus efectos en el momento que es concedida, tiene una duración temporal supeditada a la duración del proceso principal. Esta



medida no esta sujeta a condición resolutoria ejecutoriada, ya que esta se extinguiría, se conceda o niegue la principal.

Por otra parte, en relación a la homogeneidad con las medidas ejecutivas, esta permitirá diferenciar realmente a las medidas cautelares de todas las restantes medidas instrumentales existentes en el proceso.

En efecto, la actuación del derecho constituiría la medida cautelar por excelencia, pero al encontrarse el derecho en un periodo de incertidumbre, el juez no puede sustanciarlo sin el conocimiento que arroja el procedimiento judicial. Por tanto no pueden coincidir la medida cautelar con la medida ejecutiva. Pero el juez, si puede adelantar los efectos de la medida ejecutiva.

Lo anterior, toda vez que a la presentación de la demanda, el derecho del demandante es incierto, pero también lo es el del demandado. Por lo que no podría ejecutarse uno sin perjudicar al otro.

Ahora, lo mas importante de esto, son los presupuestos en que radican las medidas cautelares. Como hemos podido observar, resulta difícil generar una Teoría General de las Medidas cautelares, habida cuenta de su necesaria inserción en el campo de nuestro derecho cuya efectividad se pretende cautelar.

Por su parte los presupuestos típicos de las medidas cautelares, que afectan directamente a la situación precisa de la cautela : El Fumus boni iuris y el Periculum in mora, además de la fianza y la pendencia del proceso

principal, quienes dan pauta para la conservación de la materia en el Juicio de Amparo.

En efecto, el *Fumus Boni Iuris* que consiste en que el derecho que se pretenda cautelar aparezca como probable, no existiendo ninguna dificultad en que el Juicio sobre la medida cautelar, proporcione al juez mayor certeza, que el juicio sobre el fondo del asunto.

Al respecto, Calamandrei, comenta "La circunstancia de que el presupuesto de la medida cautelar sea simplemente una apariencia del derecho, no implica que este juicio tenga cualitativamente diversidad alguna respecto del juicio definitivo o de fondo".

Por otra parte, al encontramos ante la imposibilidad de establecer una previa etapa contradictoria sobre la existencia del derecho, podemos justificar su mera apariencia para que esta sirva como fundamento para la concesión de la medida cautelar. En este sentido basta que con la demanda y documentos a ella acompañados, el juez estime algunos de ellos, y al no existir hechos que la desvirtúen, haga la declaración de existencia del buen derecho.

Ahora, cabe señalar que para que este presupuesto sea procedente, se compruebe la existencia de la prueba documental para la concesión de la medida cautelar.

Este presupuesto, resulta necesario ya que a través de él se conservará viva la materia del fondo del asunto. Evitando que sea estéril la instancia intentada por haberse consumado el acto reclamado.

Por otra parte, el Periculum In Mora, que es el daño material, que pudiera derivarse del retraso inevitable de la lentitud del proceso hasta el momento de la resolución definitiva.

En este sentido, estimamos que el peligro en la demora, afecta a la efectividad del derecho en proceso, dado que a través de este se podrá conservar la materia del proceso, evitando que este resulte inútil por falta de contenido la instancia constitucional, superando así el peligro en el retardo.

Sería a todas luces ilusoria la eficacia protectora del amparo, de no existir una medida cautelar o precautoria que permitiera la conservación de la materia de la controversia hasta la conclusión del juicio.

Es óbice, que en nuestro sistema jurídico, no manejamos con fluidez las providencias cautelares, o alguna otra figura jurídica similar, como las medidas cautelares, los procesos precautorios, asegurativos, etc.

Por su parte Chiovenda, sostiene "que estas medidas provisionales de cautela se distinguen por la naturaleza y las condiciones de aquellas otras también provisionales -, que les son permitidas dictar al juez, vista la especial certidumbre del derecho en que no interviene el juez con una resolución, que consisten en acuerdos de los particulares, como lo son las hipotecas, las prendas, y además todos aquellos procedimientos en que si

interviene el juez, pero que estando concedidas únicamente en el supuesto de la efectividad del derecho, son en realidad accesorios del derecho mismo como podrán ser las obligaciones de prestar fianza, o el embargo de muebles de un arrendatario”.

En este entendido, resulta claro que la providencia cautelar, no es una determinación inserta en el proceso, la cual se pudiera oponer a la providencia principal.

Al ejercitar la acción jurisdiccional, enfrentaremos necesariamente la prolongación del proceso, el cual, en muchas ocasiones resulta complicado y perjudicioso para la parte a quien le asista el derecho. Ahora, en la duración del proceso, pueden surgir muchas situaciones de hecho o de derecho, que den lugar a la inestabilidad jurídica de las partes dentro del mismo o incluso fuera de él; siendo necesaria la accesoriedad de las medidas cautelares, dentro de éste, quienes asistirán a las partes, otorgando un estado de seguridad jurídica, y prontitud para salvaguardar ese derecho que se dice violado, convirtiéndose lo anterior en una necesidad, si se quiere conservar la viva la materia del asunto.

Así pues, la Fama del Buen Derecho, el Peligro en la Demora, La fianza, etc., así como todas aquellas características y presupuestos del proceso, los encontramos insertos en el “juicio” de amparo, a quien nos referimos de esa manera, por así denominarlo nuestro sistema de derecho positivo mexicano, pero excluyendo el mismo por el de proceso constitucional.

Si esto fuera tomado en cuenta por nuestros reformistas y legisladores, sería evidente el avance reformista de un nuevo Poder Judicial Federal, al encontrarnos que con apoyo a una Teoría General del Proceso, los asuntos se sustancien sin complicaciones doctrinales y criterios oponibles con el caso en concreto, todos aquellos procesos de amparo.

En relación a lo anterior, encontraríamos una mejor seguridad jurídica al asistir al proceso constitucional, encontrándonos seguros de que no se consumará el acto reclamado, dejándonos en verdadero estado de indefensión por lo anterior, trayendo como consecuencia que esta instancia resulte peligrosa para el agraviado, al no salvaguardar su derecho a tiempo y sin una sentencia que carezca de todo razonamiento de fondo por no tener el juzgador conocimiento o preceptos en donde pueda fundar su criterio, trayendo como consecuencia la ineficacia e inoperancia del amparo.

Como se podrá observar, la necesidad de conservar la materia en el Juicio de Amparo, es indispensable para la operancia y eficacia del mismo en nuestro sistema de derecho.

Garantizar la conservación de la materia del derecho pretendido, es el objeto y razón de ser de la institución de la suspensión del acto reclamado.

Como ya ha quedado señalado, para lograr el más alto fin de nuestro amparo, es necesario garantizar, que a través de la suspensión se logre la conservación de la materia del mismo, sin que por la negativa de este u omisión de la violación alegada, resulte el sobreseimiento por no existir materia sobre que pronunciarse.

Es menester pues, fomentar la cultura jurídica de nuestros órganos judiciales, para lograr la verdadera seguridad jurídica del gobernado frente a las autoridades que vulneren sus garantías.

Son pues, dos presupuestos típicos de las medidas cautelares, los cuales afectan directamente a la situación precisa de la cautela : El Fumus boni iuris y el Periculum in mora, quienes en ayuda para nuestros juzgadores surgen como tales, para lograr garantizar la conservación de la materia del proceso de amparo.

Garantizar la conservación de la materia del derecho pretendido, es el objeto y razón de ser de la institución de la suspensión del acto reclamado.

Son pues, dos presupuestos típicos de las medidas cautelares, los cuales afectan directamente a la situación precisa de la cautela : El Fumus boni iuris y el Periculum in mora, quienes en ayuda para nuestros juzgadores surgen como tales, para lograr garantizar la conservación de la materia del proceso de amparo.

Si bien es cierto, considerando que al aplicar la teoría de la apariencia del buen derecho, no se pudiera comprobar la verosimilitud del derecho pretendido por falta de pruebas fehacientes, que nos lleven a conceder la medida suspensiva, y para el efecto de garantizar los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar al quejoso, con la negativa de la medida suspensiva, de difícil o imposible reparación, entonces se deberá atender

al peligro en la demora, quien ayudará a la decisión que se tome, evitando la omisión de la naturaleza de la violación alegada por el quejoso.

Finalmente, si esta decisión fuera tomada y practicada por juzgadores negligentes e incluso mal intencionados, se atendería a la mutabilidad de la resolución interlocutoria, la cual se daría por hecho superveniente.

Por otra parte, si consideramos que la resolución que se dicta en el incidente de suspensión nunca causa estado, así como que la vida de esta resolución termina hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto, causando ejecutoria, es menester que este presupuesto nos sirva como supletorio de la apariencia del buen derecho para conceder la suspensión del acto reclamado.

Así entonces, la imperiosa labor que día con día vienen desempeñando los órganos jurisdiccionales, como el exceso de trabajo que en los mismos existe, llega a impedir la rápida efectividad del derecho, contribuyendo a retrasarlo y hacerlo ilusorio, no sin antes resolver sobre la suspensión, la cual en la mayor parte de las ocasiones conlleva a destruir la materia del amparo.

Es pues, que la problemática que intentamos hacer valer, en este punto, es trascendental para la conservación de la materia del asunto, ya que la institución de la suspensión es quien garantiza la efectividad del derecho pretendido.

Por ello, la accesoriedad de la providencia cautelar, llamada “suspensión”, en relación del asunto principal, como bien lo decía Ricardo Couto al definir esta: “tiene efectos de amparo provisional”.

Podemos agregar, que para la concesión de la suspensión del acto reclamado, es necesario entrar al fondo del asunto de manera forzosa, pues no se podrá conceder la misma sin antes observar los conceptos de violación planteados en la demanda.

De todo lo anteriormente expuesto es menester dar lugar a la reforma de los artículos 124 último párrafo y 175 de la Ley de Amparo, pues la institución de la suspensión, es la plataforma de la consolidación de nuestro proceso de amparo.

Es menester mencionar, que esta propuesta de reforma, se extiende exclusivamente al contenido de ambos artículos, toda vez que consideramos que en el contenido de ellos, es donde prevalece la garantía de la conservación de la materia del amparo.

Apreciamos que no existe necesidad de reformar el artículo 123 de la Ley de Amparo, ya que ésta, al ser decretada de oficio, lleva consigo, el peligro en la demora, que significa la urgencia en el retraso de la concesión de la suspensión, que pudiera ocasionar daños y perjuicios al agraviado, de difícil e imposible reparación.

Por su parte, el contenido del artículo 124 de la ley reglamentaria, regula la concesión de la suspensión a instancia de parte agraviada, así



como ciertos requisitos de procedencia de la misma, sin prever para ello la apariencia del buen derecho que le asista al agraviado y en su caso el peligro en la demora que se le pudiera ocasionar al quejoso, de difícil o imposible reparación.

En este sentido, este precepto regula la suspensión, en relación al amparo indirecto.

Finalmente, podemos concluir con la ilustre frase, que Chiovenda diera, misma que resume nuestro cometido: "El tiempo necesario para obtener la razón no debe causar daño a quien tiene la razón".

Redacción de los artículos reformados:

Lectura del artículo 124 de la Ley de Amparo:

"Art. 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurren los requisitos siguientes :

Que lo solicite el agraviado ;

Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

Se considerara, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión, se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción

y el comercio de drogas enervantes; se permitirá la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las ordenes militares;

Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomando en cuenta la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora al apreciar de manera provisional los conceptos de violación reclamados, con el objeto de conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. **(Alberto Rosales Méndez, Tomo III, páginas 1777 a 1791)**

---

**SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO.** Ante la practica de juicio de amparo se hace necesario, por una parte establecer expresamente que no se podrá otorgar la medida cautelar cuando se trate de un procedimiento, sea cual fuere la naturaleza del mismo; así como también, suprimir lo establecido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, dado que ya no son actuales sus términos y el juez debe tener la noble atribución de decidir su concesión o negativa, atendiendo a la tesis de la Corte de la

aparición del buen derecho, que en otras palabras quiere decir, que si el juez ve la posibilidad de conceder el amparo, conceda la suspensión.

REGULACION ESPECIFICA PARA UN AGENTE ECONOMICO CON PODER SUSTANCIAL EN EL MERCADO RELEVANTE. Se debería establecer en la Ley de Amparo que cuando las autoridades administrativas impongan regulaciones específicas a un agente económico con poder sustancial en el mercado relevante no procede conceder la suspensión. Esto se justifica porque anteriormente se prohibía y quizá se siga prohibiendo conceder la suspensión cuando la autoridad fija precios, como esto es una novedad en el derecho administrativo se debe de ampliar también la negativa de la suspensión en este caso, teniendo en cuenta el bienestar general de la sociedad. Anteriormente la preocupación era la fijación de precios, siendo que actualmente por las nuevas disposiciones la fijación de tarifas produce efectos similares. **(Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, página 1797)**

---

ARTICULO 120.- Con texto igual al vigente 124, agregando al párrafo segundo de la fracción II vigente ; medidas para preservar el equilibrio ecológico. Y además agregándosele la fracción IV que dirá : Que se garantice el monto de reparación del daño, siempre que el acto derive de un procedimiento penal. **(David Ancira Martínez, Tomo III, página 1927)**

---

Se estima conveniente adicionar el artículo 124 de la Ley de Amparo, con un párrafo en el que se establezca expresamente la obligación del Juez de Distrito de razonar pormenorizadamente la actualización o no de los 4 requisitos que contiene dicho numeral, debido a la trascendencia que tiene tanto para el gobernado como para la autoridad responsable la concesión o negativa de la suspensión definitiva. **(Olga Hernández Espíndola, Tomo III, página 2067)**

---

JUSTIFICACIÓN. La Jurisprudencia y criterios emanados del Poder Judicial de la Federación, básicamente desde el inicio de la actual Novena Epoca, han desplegado una serie de interpretaciones de las disposiciones legales en materia de suspensión que en mucho ha contribuido a incrementar el número de juicios de amparo.

Lo anterior ha permitido desde hace tiempo a incrementar el número de asuntos que en todas las instancias se ventilan tanto en la vía de amparo indirecto como en la de amparo directo, lo cual ha causado que, a la fecha, los juzgados y tribunales no atiendan de manera pronta y expedita los juicios.

Por lo que se debería incluir, un listado en los casos en los cuales, procede la suspensión del acto reclamado, y no estar innovando cada vez que se presente un juicio.

En otro orden de ideas, proponer soluciones viables a ésta situación, es complejo, mismas que contribuyan a aliviar la carga de trabajo de los

tribunales federales, una de ellas podría ser que no se abuse de la instancia de amparo, ya que este juicio se ha convertido en casi un recurso, de manera que el exceso de trabajo en los tribunales federales se puede atribuir a los quejosos, y a la abundancia de actos de autoridad y la persistencia de ambos en agotar por sistema todos los medios de impugnación que las leyes conceden con absoluta independencia de que se tenga o no razón para agotar el mismo, sin que se generen con una nueva ley de amparo, restricciones en el acceso de los particulares a la instancia constitucional, que pudiera considerarse contraria al artículo 17 constitucional.

TEXTO PROPUESTO. ARTÍCULO 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurren los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el agraviado;

II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.(DEFINIR QUE ES O QUE SE ENTIENDE POR INTERES SOCIAL Y POR ORDEN PUBLICO E INCLUIR UN LISTADO DE LAS CAUSALES)

Se considerará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a

artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares; y

III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. **(Luis Orlando Hernández, Tomo III, páginas 2104 a 2106)**

---

#### ARTÍCULO 124. IV..

El órgano de control constitucional o quien conozca del amparo, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. Además, podrá establecer las condiciones para que subsista la medida cautelar. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2222 y 2223)**

En cuanto a la suspensión del acto reclamado, cuando éste tiene el carácter de consumado, nuestro Máximo Tribunal recientemente ha establecido la figura jurídica relativa a la "apariencia del buen derecho", consistente en la concesión de la aludida medida cautelar con efectos restitutorios, criterio que ha sido sustentado en múltiples ejecutorias emitidas en juicios de garantías, por lo que se considera que tal criterio debe plasmarse dentro de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, a efecto de que sea de observancia obligatoria, por lo que se sugiere la adición de una fracción IV, al artículo 124, debiendo quedar de la siguiente forma:

"Art. 124...

Fracción IV.- Cuando del examen de la naturaleza de la violación alegada, tratándose de hecho o acto reclamado consumado, el juzgador considerando sus características y su trascendencia, presuma la ilegalidad del mismo y llegue a la convicción de que al otorgarla, en nada se perjudica al interés social ni se contraviene el orden público, para no ocasionar daños y perjuicios de imposible o difícil reparación al quejoso, con la finalidad de conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, teniendo esta medida efectos restitutorios". **(Eduardo Veraza Martínez-Cairo, Tomo IV, páginas 2363 y 2364).**

---

Actualmente el artículo 124 de la ley de amparo en su fracción II dice lo siguiente: "Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior la suspensión se decretará cuando concurren los requisitos siguientes:

I.-...

II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

Se considerarán, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o sea permita el incumplimiento de las órdenes militares".

Considero que también se seguiría perjuicio al interés social si se concede la suspensión en contra de una orden de detención girada por el ministerio público o de aprehensión girada por la autoridad judicial, por lo que creo que se debe adicionar el último párrafo de la fracción antes transcrita con lo siguiente "; o se impida la detención o aprehensión de una persona acusada de un delito grave lo que le impide tener derecho a la libertad provisional bajo caución."

La anterior sugerencia obedece a que conceder la suspensión de una orden de detención girada por el Ministerio Público en caso urgente de una



orden de aprehensión girada por una autoridad judicial considerando al indiciado probable responsable de un delito grave, seguiría perjuicio al interés social, porque al permitirse que siga sustraído a la acción de la justicia, se provoca la paralización del procedimiento desconociendo las razones de orden práctico que tienden a justificar la prisión preventiva y el no otorgamiento del beneficio de la libertad provisional bajo caución, entre ellas evitar que el daño causado por el delito siga persistiendo, que se escondan o destruyan pruebas dificultando la acción de la justicia se asegura el cumplimiento de la eventual pena de prisión, la realización de los procedimientos penales en los que es indispensable la presencia del indiciado; se protege a los ofendidos y a los testigos y al propio probable delincuente de la venganza privada y de la acción de sus cómplices, siendo indiscutible que la sociedad está interesada en que se averigüen los delitos, se castigue a los delincuentes y en que se prevenga la comisión de delitos. Además, se considera indebido otorgar mediante la suspensión en el juicio de amparo, mayores beneficios a los probables delincuentes de los que se les concede la ley en el proceso penal. **(Alicia Guadalupe Cabral Parra, Tomo IV, páginas 2554 y 2555).**

---

Finalmente, la actual Ley de 1936, en su artículo 124, precisa requisitos para decretar la suspensión, y uno de ellos, señalado en su fracción II, ordena: "Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público". Esta nueva redacción resulta verdaderamente desconcertante porque: a) Ya no puntualiza al juez que evalúe el perjuicio a la sociedad o al Estado, sino al interés social, y a la contravención de disposiciones de orden público; b) Ordena la negativa de

la suspensión en esos casos, sin posibilidades de manejar condiciones de equilibrio entre el interés público o social, y las urgencias del agraviado; y, c) Mantiene condicionamientos, que impiden el otorgamiento de la suspensión, a pesar de que el actual mandato constitucional no menciona a las disposiciones de orden público.

Pero algo más grave y trascendente encontramos en este nuevo y radical manejo de la suspensión. Como no se excepciona la consumación del acto reclamado -reputado como inconstitucional por el quejoso-, por no concederse la medida cautelar, finalmente resulta que los actos inconstitucionales de las autoridades, que pudieran apreciarse por el juez de amparo afectan al interés público o social, o contraviene disposiciones de orden público, no admiten la acción de amparo, deben desecharse las instancias suspensorias, y continuará su curso normal el acto de autoridad hasta consumarse en su integridad.

Hay así actos de autoridad que de hecho y de derecho no admiten el control constitucional. Para usar la terminología del derecho novohispánico, contienen un mandato de "obedézcanse y cúmplase".

De lo expuesto y narrado hasta aquí Señores Ministros pedimos su especial reflexión al llevar a cabo esa nueva Ley de Amparo ya que el poder Judicial de la Federación es la esperanza inquebrantable de la sociedad mexicana para alcanzar la aplicación de la justicia social; ahora bien, al aportar esta sencilla inquietud y al hablar de la SUSPENSION PROVISIONAL Y LA SUSPENSION DEFINITIVA que trasciende imprescindiblemente al efecto y alcance legal de la vida constitucional en el

Juicio de Amparo, pues durante muchos años ha sido un problema crítico y de extrema gravedad de la eficacia del amparo, el resolver la forma de restarle transitoriamente, eficacia, fuerza y propensión al acto reclamado que por su propia naturaleza le corresponde, queriendo decir con ello, que el capítulo de la suspensión definitiva concedida al quejoso y por las condiciones en que se otorga cuando se trata de amparo indirecto, se realiza por cuerda separada tomando con ello una vida jurídica propia e independiente en relación a la demanda de garantías planteada, por lo tanto para que tenga y continúe teniendo materia sobre la cual actuar, la SUSPENSION concedida al quejoso debiera en el momento de empezar el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo hacerse efectiva a las responsables sin concesiones procesales o intraprocesales del procedimiento de la ejecución de la sentencia amparadora, sino todo lo contrario que desde el momento en que se haga el primer requerimiento a la(s) responsable(s) cualesquiera que ella fuera(n), se le prevenga y aperciba que el acto reclamado goza de la suspensión definitiva y que ésta tiene ineludiblemente efectos restitutorios, todo ello con el fin de que la responsable cumpla cabalmente con la sentencia amparatriz.

Como es sabido por la sociedad mexicana y por ser de interés social y de orden público este capítulo de suspensión definitiva se ha visto en forma constante y permanente burlado por las responsables, en virtud de que los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados y hasta el máximo Organismo de Control Constitucional no le da la importancia debida y por ende el poder público ha hecho uso y abuso de su autorizada gozando con ello de más beneficios de los que ya ostentan y que sólo estos deben ser sujetos eficazmente por el juicio de garantías tanto en el juicio principal

como en el capítulo de suspensión provisional y definitiva. Por lo cual a continuación ejemplificamos lo sustentado: Un Juez de Distrito requiere a la responsable para que cumpla un fallo protector y esta responsable tiene superiores jerárquicos y lo que actualmente sucede es que se le requiere para que informe ante el Juez la forma y término que da a la sentencia de amparo –resaltando que esta sentencia de amparo tiene concedida la suspensión definitiva- y al momento de hacer ese requerimiento ni se previene ni se apercibe ni se hace la mínima indicación a la responsable de que la sentencia amparatriz goza de la suspensión definitiva, así las cosas la responsable como puede no dar cumplimiento o darlo a su criterio (dándose vista al quejoso por 5 días para que manifieste su conformidad o inconformidad de dicho cumplimiento), ateniéndose dicha autoridad a que se le vuelva a requerir por medio de su superior(es) jerárquico(s) y éstos lo conminen nuevamente tantas veces como superiores jerárquicos existan, por lo que dicho procedimiento establecido por el artículo 105 de la Ley de Amparo le da a la responsable oportunidad de burlar como quiera y cuantas veces quiera la suspensión definitiva. Y de acuerdo a esos actos de autoridad que se hacen con frecuencia en perjuicio de los derechos fundamentales del gobernado, lo más correcto es que en la Nueva Ley de Amparo se faculte al Juez de Distrito o a los Tribunales Colegiados de circuito en la Materia que actúan para que apliquen la sanción contemplada en el artículo 107 fracción XVI de la constitución Federal de la República, corriendo la misma suerte los superiores jerárquicos de las responsables acabando así con la manga ancha de que gozan nuestras autoridades, así como con la obstaculización y demora del cumplimiento de las sentencias amparadoras. Y que esta suspensión definitiva también goce de materia para actuar en los cumplimientos sustitutos de las sentencias amparadoras

de aplicación supletoria al Código Federal de Procedimientos Civiles, Tomando en alta consideración que se trata de las GARANTIAS INDIVIDUALES consagradas en nuestra CARTA MAGNA. (Ángel García Lara, Tomo IV, páginas 2618 a 2621).

---

Como primera propuesta nos referimos al artículo 124 bis, que se ubica en el capítulo III (De la suspensión del acto reclamado), título segundo, libro primero. En efecto, el precepto citado en su segundo párrafo indica los elementos que el Juez de Amparo debe tomar en cuenta al momento de fijar la garantía para que proceda la suspensión en tratándose de actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal del quejoso. Ahí encontramos tres fracciones, sin embargo, ante la incidencia de delitos que afectan el patrimonio de las personas, es necesario que como un elemento más a considerar por el juzgador federal, se establezca otra fracción en la que se requiera que también se cubra el monto del daño patrimonial causado y acreditado hasta ese momento procesal. Para este efecto, el Juez de Amparo tendrá que solicitar a la autoridad responsable ordenadora que al momento de rendir el informe previo señale el daño que hasta ese etapa del procedimiento se encuentra comprobado.

El motivo de esta propuesta radica en el hecho de que, como lo mencioné anteriormente, son más frecuentes los delitos de carácter patrimonial y algunas ocasiones con montos muy elevados y no obstante la cuantía de los mismos, la garantía que el Juez de Amparo solicita al quejoso es mínima, lo cual resulta contradictorio e inequitativo, pues mientras que el

proceso se sigue por un delito patrimonial grave con la consecuente afectación del ofendido, el quejoso goza fácilmente de su libertad personal. Todo ello, cotidianamente lo podemos ver, genera la reacción de la sociedad en un sentido crítico para la institución del Juicio de Amparo y del propio Poder Judicial de la Federación. (**Flor de María López González, Tomo IV, páginas 2622 y 2623**).

---

Y por lo que hace al artículo 124, se adicionaría el párrafo primero de la fracción III, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 124.- ...

Fracción III

Podrá concederse la suspensión con efecto restitutorios cuando se trate de actos de autoridades administrativas que puedan ocasionar daños y perjuicios irreparables al quejoso, siempre y cuando se conserve la materia del juicio y se observe lo dispuesto por la fracción anterior. (**Fidel Ortega Escobedo, Tomo IV, página 2714**).

---

**ARTÍCULO 124.-** Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurren los requisitos siguientes:

...

III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio y en caso de que el agraviado no cumpla con los requisitos exigidos para que surta efectos la suspensión, deberá comunicar a las autoridades responsables tal circunstancia, y de que en consecuencia están en aptitud de ejecutar el acto reclamado. (Salvador Bravo Gómez, Tomo V, páginas 27 y 28)

---

Artículo 124.- Párrafo primero, fracción I, y fracción II, párrafo primero, iguales.

Se considerará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión; se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios en relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares; que invasores continúen en posesión del inmueble; se preste el servicio público de transporte en sus diferentes modalidades, careciendo de

concesiones, permisos o autorizaciones, expedidas por las autoridades competentes. **(Jerónimo Eulogio Quiroz Gutiérrez, Tomo V, página 45)**



**Artículo 124 bis.** Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.

El juez de amparo fijará el monto de la garantía, tomando en cuenta los elementos siguientes:

- I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso;
- II. La situación económica del quejoso, y
- III. La posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia.

### **PROPUESTAS**

ADICIONAR UNA FRACCION III AL ARTICULO 124 BIS, PASANDO LA ACTUAL FRACCION III A SER LA FRACCION IV DEL DICHO ARTICULO Y UN ULTIMO PARRAFO AL PROPIO ARTICULO 124 BIS, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

"ARTICULO 124 BIS.....  
.....

III.- El monto de la posible reparación del daño, y

IV.- La posibilidad.....

En caso de que el quejoso no otorgue la garantía fijada de acuerdo con los elementos anteriores en un plazo de diez días naturales, la suspensión quedará sin efectos."

#### MOTIVO

Se hace indispensable incorporar este elemento, pues en muchos casos el daño patrimonial o el quebranto son cuantiosos y la garantía que se fija no corresponde al monto de la posible reparación del daño.

Asimismo, se fija plazo racional para el otorgamiento de dicha garantía. (Armando Díaz Olivares, Tomo I, páginas 93 y 94)

---

Como ya se indicó, para fijar el monto de la garantía que debe exhibir el quejoso, el Juez de amparo debe tomar en cuenta tres aspectos, pero qué sucede si en la demanda de amparo no se hace alusión a ninguno de estos datos, es decir, que la demanda es omisa en señalar la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso, su situación económica, y no se dan antecedentes personales para establecer la posibilidad de que el quejoso no se sustraerá a la acción de la justicia. En estos casos, cabe preguntarse si el Juez de Distrito, ante dicha omisión, podría prevenir al quejoso para que subsane tal omisión, y esté en aptitud de fijar dicha cuantía. Al respecto debemos ver que el artículo 146 de la Ley de Amparo, prevé que el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido

en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esa ley, si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120 de la propia ley; sin embargo, la omisión de los datos en comento no puede considerarse como una irregularidad en el escrito de demanda, pues esto se refiere a la diferencia o incongruencia de datos (verbigracia que el nombre del quejoso sea diferente al que signa la demanda, que se señale a una autoridad responsable en un capítulo y en los antecedentes se hable de diversa autoridad, etc.), tampoco podemos considerar que haya omisión de los requisitos que prevé el artículo 116 de la Ley de Amparo, pues este precepto no señala como requisitos de la demanda ninguno de los datos que debe tomar en cuenta el Juez de amparo para fijar el monto de la garantía; ni estaríamos ante la imprecisión del acto reclamado ni la falta de copias a que alude el artículo 120 de la Ley de Amparo, por lo cual se puede pensar que la prevención no podría apoyarse en este precepto; y además existen diversos criterios que establecen la improcedencia de mandar aclarar una demanda para los efectos de la suspensión.

Pensando en que fuera factible mandar aclarar la demanda para que se manifiesten los datos para fijar el monto de la garantía en cuestión, lo cierto es, que el Juez de amparo carecería de facultad para tener por no interpuesta la demanda de amparo por la falta cumplimiento a la prevención. **(Horacio Armando Hernández Orozco, Tomo I, páginas 243 y 244)**

---

De la redacción de este artículo, se advierte sin lugar a dudas que en lo que se refiere a la exhibición de la garantía para que surta efectos la

suspensión que derive de un procedimiento penal, constituye una exigencia previa para la procedencia de dicha medida suspensiva, lo que significa que mientras no se exhiba dicha garantía no surtirán efectos la concesión de la medida, lo que aparentemente riñe con lo previsto con el artículo 139 de la Ley de Amparo, el que dispone que el auto en el cual se conceda la suspensión surtirán efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el quejoso no llena dentro de los cinco días siguientes al de la notificación los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado; sin embargo, tomando en consideración el principio de derecho que la regla especial rige sobre la general, se concluye que el artículo 139 de la ley en comento no es aplicable en cuanto a la oportunidad para la exhibición de la garantía, ni a la circunstancia de que la medida suspensiva surta efectos desde luego, en el mismo momento en el que se dicte el auto respectivo, cuando el acto reclamado se haga consistir en alguna resolución derivada de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, pues en este caso específico se debe atender a lo previsto por el artículo 124 bis de la multicitada ley.

Por otra parte, el suscrito considera que no obstante que en el artículo en estudio se dispone que el Juez de amparo fijará el monto de la garantía, tomando en cuenta los siguientes elementos:

- I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso.
- II. La situación económica del quejoso, y;

III. La posibilidad de que el quejoso se sustraiga de la acción de la Justicia.

Debe decirse que en mi concepto en la mayoría de los casos en los que se reclaman actos provenientes de un proceso por el que afectan la libertad del quejoso, este último en su demanda de garantías, no refiere su situación económica, ni el delito que se le imputa, por lo que se estima que estos requisitos deben de ser observados en todo caso al momento de resolver sobre la suspensión definitiva, siempre y cuando previamente se solicite el informe respectivo a la autoridad responsable requiriéndole sobre estos conceptos, por lo que concluyo que para la concesión de la suspensión provisional, debe fijarse por el Juez de Distrito la garantía para que surta efectos la misma de manera discrecional. **(Clemente Gerardo Ochoa Cantú, Tomo I, páginas 252 a 254)**

---

El 8 de febrero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman y adicionan diversos preceptos de la Ley de Amparo.

Las citadas reformas como se aprecia de su simple lectura, repercuten exclusivamente en materia de amparo penal, pues se refiere a los artículos 73, fracción X, 138 y 155 de la citada Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, creándose o adicionándose el artículo 124 bis que impone al Juez o Tribunal de amparo, la obligación de exigir al peticionario de amparo, garantía bajo ciertas condiciones, para la procedencia de la suspensión.

El 9 de diciembre de 1997, el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, envió al Senado de la República la iniciativa de reformas a diversas leyes, entre ellas la Ley de Amparo, y en esta exposición en lo que se refiere al precepto materia de esta ponencia, se señalaba: "que "tratándose de actos que afecten la libertad procesal derivados de la "probable comisión de un delito, se conceda la suspensión de los "mismos, siempre que se garantice el monto estimado de la reparación "del daño. De esta forma se asegura el derecho de la víctima u "ofendido por el delito a ser reparado en la afectación de su "patrimonio."

Una vez analizada la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, emitió dictamen el que consideró la adición del artículo 124 bis, para hacerla acorde con el párrafo segundo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo; y por estimarse que en la práctica judicial las medidas para asegurar la presencia del quejoso en el procedimiento penal, del cual emanaba el acto reclamado, con frecuencia resultaban insuficientes al utilizar la suspensión como un medio para evadir la acción de la justicia.

El Pleno de la Cámara de Diputados al recibir el dictamen probado por la Cámara de Senadores, lo turnó a la Comisión de Justicia, quien emitió a su vez dictamen en el que reitera lo aprobado por la Cámara de Origen, precisando entre otras cosas que la adición propuesta (artículo 124 bis) está dentro de los cauces constitucionales, y es determinante para evitar la impunidad de la que tanto se quejaba la ciudadanía, y así para gozar de los efectos de la suspensión, se exigieron mayores requisitos.

En el citado Decreto de 8 de febrero de 1999, el artículo 124 bis adicionado quedó como sigue:

"Artículo 124 bis.- Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.

El juez de amparo fijará el monto de la garantía, tomando en cuenta los elementos siguientes:

La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso;

II. La situación económica del quejoso, y

III. La posibilidad de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia."

Desarrollo del Tema.

Es evidente que las condiciones que se imponen al juez y que debe exigir al peticionario de garantías, para la procedencia de la suspensión, se refieren a la prevista en el artículo 124 de la Ley Reglamentaria en cita, esto es la suspensión a petición de parte, de donde a partir de la citada adición el Juez o Tribunal de Amparo, además de los siguientes requisitos de

procedencia que debe examinar, previstos en el numeral citado en último término, ya sea al decretar la suspensión provisional o definitiva, deberá exigir el otorgamiento de garantías de acuerdo a los elementos que el propio precepto fija, lo anterior consideramos que en la práctica y sobre todo en tratándose de la suspensión provisional, fijar el quantum de la garantía, para obligar al quejoso a comparecer ante la autoridad responsable cuantas veces sea necesario, para la práctica de diligencias y no se sustraiga de la acción de la justicia, cuando se trate de delitos no graves, o tratándose de ilícitos de esa naturaleza a efecto de que quede a disposición del Juez o Tribunal de Amparo en el lugar en que estos se señalen, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal y a la de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento; producirá inquietudes y diferencias de opinión respecto de su interpretación, alcance y aplicación, en primer lugar porque al resolver sobre la suspensión provisional, el Tribunal Constitucional generalmente no cuenta con los elementos necesarios para cumplir las exigencias del artículo 124 bis, porque en la demanda de garantías en múltiples ocasiones ni siquiera se señala el delito materia del acto restrictivo de libertad que se reclama, y por ende mucho menos las modalidades y características; también se ignora la situación económica del quejoso, y por ende la posibilidad o no de que se sustraiga de la acción de la justicia.

Una vez recibidos los informes justificados y de señalarse en éstos que sea cierto el acto reclamado, quizá de ellos pudieran desprenderse datos suficientes para detectar al menos los elementos previstos en las fracciones I y III, toda vez que se encuentran íntimamente vinculados, puesto que de acuerdo a la naturaleza y modalidades del ilícito imputado, se



puede desprender el mayor o menor riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia, sin embargo el elemento relativo a la situación económica del quejoso, será siempre un problema práctico deducirlo.

#### **Conclusión.**

Atento a lo anterior consideramos que la adición del artículo 124 bis, como ya dijimos causará graves cuestiones prácticas, que obligarán al Juez Constitucional, no obstante la disposición vigente, a señalar la garantía exigida discrecionalmente, con base en los escasos elementos que tenga a su disposición, para no hacer aun más nugatoria, la procedencia de la medida cautelar por excelencia, para la protección de la libertad personal. **(Elvia Díaz de León de López, Tomo II, páginas 713 a 716)**

---

#### **LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL.**

1.- Requisitos para obtener la suspensión del acto reclamado derivados de un procedimiento del orden penal.

2.- La finalidad de la garantía para obtener la suspensión provisional del acto reclamado.

3.- Finalidad de hacer comparecer al quejoso ante el juez de su causa.

4.- Propuestas.

Realmente no existe alguna razón de peso para que el legislador en la reciente reforma de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve que se efectuó a la Ley de Amparo, haya adicionado el artículo 124 bis que se comenta, porque la Ley de Amparo ya disponía en su artículo 130 que el Juez de Amparo tomara las medidas que estimare convenientes para el aseguramiento del quejoso, si se tratase de la garantía de la libertad personal.

130...

Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiera a delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación.

Las partes podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. En los casos previstos en el artículo 204 de esta ley, se considerará hecho superveniente la demostración de la falsedad u omisión de datos en el contenido del informe y el juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en que hubiese concedido o negado la suspensión; además, dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos del precepto legal citado."

En el primer párrafo de este artículo se deja establecido que la suspensión sólo se refiere a la libertad misma del quejoso y no al procedimiento de donde emana el acto reclamado, el cual debe continuar su trámite conforme a las leyes instrumentales correspondientes; sin embargo, debiera estimarse que en tratándose de órdenes de aprehensión aun no ejecutadas, en que el procedimiento penal está suspendido precisamente porque el quejoso no ha sido detenido, al concedérsele la suspensión provisional no se debería obligar al quejoso a comparecer ante el juez de la causa, porque eso trae como consecuencia que la finalidad formal de la orden de aprehensión recurrida quede satisfecha, ya que aun cuando ésta se ocupe como un medio para privar de la libertad a los ciudadanos, conforme a un Estado Democrático de Derecho como el que establece la Constitución Federal, no debiera ser esa su función; por ello es adecuado lo señalado en el cuarto párrafo del artículo que se comenta, al prever que de concederse la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, el Juez de Amparo dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo, sin que esto signifique que las medidas de aseguramiento tengan que ser la garantía pecuniaria y comparecencia ante el juez de la causa que se exige al quejoso, al relacionar dichas disposiciones con lo prevenido en el artículo 124 bis y 138 segundo párrafo, de la misma Ley de Amparo, pues éstas dos últimas disposiciones fueron recientemente adicionadas, siendo anteriores las disposiciones del artículo 136. Consiguientemente, se puede apreciar que en vez de hacer más humanitaria nuestra legislación conforme al espíritu de la Constitución, que manifiesta que el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste; contrario a ello, cada día se

denota más el autoritarismo; que para convencer al pueblo del supuesto beneficio que se pretende alcanzar, se hacen valer frases como el clamor popular, el sentir ciudadano, la opinión pública, la conciencia del pueblo, las cruzadas contra la delincuencia, y tantas otras que dan forma al argumento de evitar el abuso del amparo, por el combate a la delincuencia, y se restrinjan cada día más los derechos constitucionales, y se pretende a través de la represión penal el control de los problemas sociales que debieran ser controlados por medios penales. No existirían tantas demandas de amparo si no existieran tantas autoridades arbitrarias, abusivas del poder. No existiría tanta delincuencia si existieran fuentes de trabajo en donde el trabajador recibiera el justo pago por su fuerza de trabajo, que le permitiera tener una vida decorosa para él y su familia. No existiría tanta delincuencia si los medios de comunicación no hicieran todos los días, de manera sistemática y sofisticada apología del delito; si en campo, la agricultura, la riqueza forestal, etcétera, fuesen enfrentadas por medios políticos, no penales, con el objeto de que cumplan sus objetivos de producción de manera digna, en beneficio de la sociedad, etcétera.

Por ello se debe entender que el verdadero sentido del artículo 136 es preservar y proteger la libertad física de los individuos, contra los actos arbitrarios de autoridades administrativas o judiciales.

En el segundo párrafo de este precepto (138) se puede apreciar más claramente uno de los requisitos necesarios para obtener la suspensión del acto reclamado, y que ya se ha analizado con anterioridad por la relación que guarda con los artículos 124, 124 bis y 130 de la Ley de Amparo, teniendo presente lo ilógico de imponer al quejoso la obligación de

comparecer precisamente ante la autoridad que señala como responsable de los actos que reclama; que una de las razones por las que en infinidad de casos se promueve el amparo y se solicita la suspensión del acto reclamado, es que el quejoso no quiere comparecer ante la autoridad que considera está infringiendo su garantía de libertad, y es precisamente a eso a lo que se le obliga. Por otra parte, el precepto que se comenta, independientemente de la íntima relación que guarda con los artículos 124, 124 bis y 130, también debe analizarse teniendo en cuenta lo establecido en el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la propia Ley de Amparo, que analizados en su conjunto y teniendo en cuenta los términos y formas del procedimiento penal, se puede descubrir un diseño en la legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política Federal, para que el Juez de Amparo encuentre la salida más fácil que cumplir con su obligación de analizar los actos de las autoridades, y de existir violaciones a los derechos constitucionales de los individuos para en su caso conceder la protección de la justicia federal, que es en lo que consiste precisamente su función y que es la más noble y alta facultad con que cuenta un Juez Federal.

Sin embargo, el Juez de Amparo que en realidad quiere abocarse a su tarea en el llamado amparo garantías, que doctrinalmente sirve para distinguirlo del amparo contra leyes, del amparo casación y del amparo soberanía, se encuentra limitado conforme a las propias disposiciones de los citados artículos 73 fracción X, 124, 124 bis, 130 y 138, de la Ley de Amparo, en relación con los términos y formas del procedimiento penal, ya que cuando un individuo que se encuentre libre esté sufriendo actos violatorios del artículo 16 de la Constitución Federal, y con motivo de ello

presente demanda de amparo contra dichos actos solicitando la suspensión del acto reclamado a fin de que no se le moleste en su libertad, que no sea privado de su libertad, por considerar que la autoridad señalada como responsable no cuenta con orden judicial de aprehensión en su contra o que ésta no reúne los requisitos necesarios para su procedencia; el Juez de Amparo entre otras medidas ordena al quejoso que se presente ante la autoridad que el quejoso ha señalado como quien está violando sus garantías o pretende vulnerar sus derechos constitucionales cuya protección está solicitando, de tal suerte que si el acto deriva de una orden de aprehensión, el quejoso tendrá que comparecer ante el Juez de la causa el que continuará al procedimiento penal instaurado en su contra, y si al momento de resolverse la situación jurídica del quejoso el Juez del proceso penal resuelve dictarle formal prisión, ello bastará para que el Juez de Amparo, en acatamiento a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 74 fracción III de la misma ley, indefectiblemente tendrá que decretar el sobreseimiento del Juicio de Garantías.

Piénsese en el perjuicio cometido en quien es sometido de manera arbitraria a un procedimiento de esta índole, que jamás podrá reparársele el menoscabo que sufrió en su persona, en la lesión a su peligro, en la situación traumática de haber estado preso siendo inocente en el honor de él y de su familia, en ese daño no solamente físico sino principalmente psíquico y moral, que aún cuando recupere su libertad, no se le podrá reparar jamás.

No debemos olvidar que en la Ley de Amparo se prevén los procedimientos para hacer efectivas las garantías constitucionales de los gobernados que le han sido conculcadas, y no para hacer efectivas las acciones ilegales de las autoridades.

Insistir en el sistema que impera significa seguir tolerando actos arbitrarios por parte de los órganos encargados de la procuración y administración de justicia, en menoscabo de la libertad de los gobernados, y permitir así el desenvolvimiento de procedimientos penales viciados de origen.

## 2.- La finalidad de la garantía pecuniaria.

Los preceptos transcritos en el apartado acabado de exponer, y principalmente el artículo 124 bis, genera la necesidad de determinar cuál es el objeto y finalidad que se persigue con imponer al quejoso la exhibición de una garantía, cuyo contenido sin duda es pecuniario, teniendo en cuenta que el monto de esa garantía dificulta la obtención de la suspensión, y que por sí misma no evita que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia.

Los antecedentes de esta reforma a la ley de amparo de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, indican que originalmente fue planteada por el ejecutivo federal la posibilidad de que el quejoso otorgara una garantía pero para garantizar el monto estimado de la reparación del daño y de este modo salvaguardar los derechos de los ofendidos. Sin embargo el constituyente permanente no adoptó tal iniciativa sino que consideró que al resultar frecuentemente insuficientes las medidas para

asegurar la presencia del quejoso en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, era necesario que para la concesión de la suspensión se otorgara una garantía, como un medio para evitar la sustracción del quejoso a la acción de la justicia.

Se aprecia que tal disposición resulta injustificada, ya que por sí sola o con las medidas de aseguramiento dictadas por el juzgador de amparo, resulta inadecuada para evitar la sustracción a la acción de la justicia por el quejoso.

La garantía pecuniaria sólo tiene como fin evitar, injustificada y arbitrariamente, que el indiciado obtenga la suspensión del acto reclamado aun estando en juego uno de sus bienes más preciados como lo es la libertad, siendo que finalmente con semejante sistema el Estado se allegará de más fondos económicos, lo cual no constituye la finalidad de aquella garantía.

3.- Finalidad de hacer comparecer al quejoso ante el juez de su causa.

Una de las obligaciones a cargo del quejoso que ha obtenido la suspensión del acto reclamado contra una orden de aprehensión es comparecer ante su juzgador dentro del término de tres días, de lo contrario le sería revocada la suspensión concedida. El cumplimiento de esta medida en la práctica judicial ineludiblemente lleva a un cambio de situación jurídica conforme al sistema vigente en el artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que al comparecer el quejoso ante la autoridad judicial que conoce de su



proceso, la misma debe resolver su situación jurídica dentro del término constitucional de las setenta y dos horas, y en caso de dictarle formal prisión, esto generará la consecuente nueva situación jurídica que conllevará al sobreseimiento del juicio de amparo, lo que primeramente, como se ha señalado, evita el análisis del fondo del asunto y la posible convalidación de vicios que puedan existir previos a la formal prisión, y consecuentes violaciones a la garantía de libertad consagradas en el artículo 16 de la Carta fundamental, sin un medio real de protección de la misma, ya que la propia ley de amparo como se encuentra confeccionada da lugar a los actos de autoridad que en esos supuestos se realizan. Además se convierte a los juzgadores de amparo en auxiliares de la administración y procuración de justicia penal ordinarios, pues serán ellos quienes pongan a su disposición al indiciado, precisamente de quien se pide su protección es quien lo pone a disposición de la autoridad que se encuentra ejecutando los posibles actos anticonstitucionales en su perjuicio. Así también se desnaturaliza el juicio de amparo advirtiéndose incluso notorias contradicciones entre sus preceptos pues precisamente el artículo 124 del citado ordenamiento impone al juez de amparo la obligación de decretar medidas para mantener viva la materia del amparo y por otra parte lo obliga a poner al quejoso a disposición de la autoridad responsable a sabiendas que con tal acto quedará paradójicamente el amparo sin materia.

También se da la práctica de no atender al espíritu, motivación y objetivo final de la ley, que consiste en esperar que en esos juicios en que se reclaman actos de autoridad que contravienen el artículo 16 de la Constitución Federal, se encuadren en la causal de improcedencia prevista

en el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, para que por el aludido cambio de situación jurídica, dar por actualizado el sobreseimiento del juicio de amparo conforme a la fracción III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo, evitando la tarea de estudiar el fondo del asunto en que cabe la posibilidad de haber existido la violación constitucional reclamada, y emitiendo una resolución ya estructurada de sobreseimiento. Incluso, llegando en algunos casos a propiciar tal causal de improcedencia, para lo cual si se encuentran en el supuesto de tener que celebrar la audiencia constitucional, cuando en el proceso penal aun no se ha resuelto la situación jurídica del inculpado quejoso, sin fundarse en precepto legal alguno de la Ley de Amparo, de oficio difieren la audiencia constitucional, a sabiendas de que el juez de la causa necesariamente tendrá que emitir el auto de término constitucional, que desde luego generará de acuerdo con el texto vigente del segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, la nueva situación jurídica del inculpado quejoso que como se ha anotado, originará el sobreseimiento del juicio de amparo. Practica esta nada aceptable, propiciada por el sistema vigente en la Ley de amparo acerca de las medidas y requisitos para que siga surtiendo efectos la suspensión provisional.

#### 4.- Propuestas.

Considerando que el Juicio de Amparo es un medio jurídico procesal destinado a salvaguardar las garantías de los gobernados; que a través de la suspensión de plano, provisional y definitiva del acto reclamado emanado de un procedimiento penal se pretende evitar restricciones irreparables a la libertad personal; que la obligación impuesta al quejoso de exhibir una

garantía carece de una finalidad acorde con los postulados intrínsecos del Amparo Mexicano y dificulta el acceso a la Justicia de la Unión; que la obligación impuesta al quejoso de comparecer ante el juez de su causa hace nugatoria la protección de la garantía de libertad estatuida en el artículo 16 de la Ley Fundamental; que es necesario que los juzgadores de amparo realmente decreten de ser conveniente medidas de aseguramiento al quejoso para ponerlo a disposición del juzgador ordinario, en caso de que se le niegue el amparo solicitado, por todo ello, se propone la derogación del artículo 124 bis y segundo párrafo del 138, de la Ley de Amparo, ya que no existe razón jurídica para que solamente quienes puedan otorgar la garantía económica fijada por el Juez de Amparo tengan acceso a la protección de la Justicia Federal a través de la suspensión del acto reclamado, pues lo que debe de procurar el Juez de Amparo es que el quejoso se someta a las resultas del juicio de garantías, y que de no serle favorable quede a disposición de la autoridad que señaló como responsable; al conceder la suspensión del acto reclamado podrá entre otras medidas de aseguramiento decretar la comparecencia periódica del quejoso ante sí, prohibir que éste abandone determinado lugar, someterlo a la vigilancia de la fuerza pública, una vez que se entere del informe previo de la autoridad responsable, decretar aseguramiento precautorio de bienes del quejoso, pero no que para la concesión de la suspensión provisional previamente exhiba fianza, ya que en esos casos el Juez de Amparo prejuzga su culpabilidad. Además por lo que se refiere a la obligación que se le impone al quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o Ministerio Público, so pena que de no hacerlo dejará de surtir efectos la suspensión concedida, también debe de quitarse esa carga al quejoso, para evitar que a través del cambio de situación jurídica se

convaliden actos que vulneran sus garantías constitucionales, pues no debe crearse en la ley artificios o figuras jurídicas de que se valen las autoridades para sojuzgar a los gobernados.

Esto de ninguna manera quiere decir que los individuos a través del juicio de amparo burlarán la acción de la justicia, pues el cuarto párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo ya establece que "si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo", de donde al hacer una aplicación eficaz de dicho párrafo conforme a los lineamientos expuestos, puesto que si lo que se quiere es evitar que el quejoso se sustraiga al procedimiento penal, lo conveniente es que en la práctica los juzgadores de amparo decreten otras medidas ciertamente eficaces de aseguramiento de este último, como comparecencias obligadas y periódicas en lapsos de quince días ante el propio juzgador de amparo, vigilancia de la policía, prohibición de abandonar un lugar determinado, o salir de un radio territorial, sin autorización del juzgador de amparo, etcétera, con la prevención de que el incumplimiento de sus medidas generará la revocación de la suspensión concedida, pudiendo la autoridad responsable ejecutar el acto reclamado. Dentro de las formas para asegurar que el quejoso no se sustraerá a la acción de la justicia, no se necesita de garantías pecuniarias ni de que el quejoso comparezca ante el Juez de la causa o Ministerio Público, lo que de ninguna manera significa solapar o propiciar la impunidad de quienes pretenden burlar la acción de la justicia, el Juez de Amparo

conforme al cuarto párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo, una vez que resuelva el juicio de garantías, dejará a disposición de la autoridad señalada como responsable al quejoso, pero habiendo respetado sus garantías constitucionales.

Los preceptos transcritos, y principalmente el artículo 124 bis, genera la necesidad de determinar cual es el objeto y finalidad que se persigue con imponer al quejoso la exhibición de una garantía, cuyo contenido sin duda es pecuniario, teniendo en cuenta que el monto de esa garantía dificulta la obtención de la suspensión, y que por sí misma no evita que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia.

Los antecedentes de esta reforma a la ley de amparo de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, indican que originalmente fue planteada por el ejecutivo federal la posibilidad de que el quejoso otorgara una garantía pero para garantizar el monto estimado de la reparación del daño y de este modo salvaguardar los derechos de los ofendidos. Sin embargo el constituyente permanente no adoptó tal iniciativa sino que consideró que al resultar frecuentemente insuficientes las medidas para asegurar la presencia del quejoso en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, era necesario que para la concesión de la suspensión se otorgara una garantía, como un medio para evitar la sustracción del quejoso a la acción de la justicia. **(Francisco Salvador Pérez, Tomo II, páginas 900 a 926)**

Consideramos que nuestra propuesta debe centrarse sobre la actuación de los Jueces de Distrito, al fijar las garantías para poder otorgar las suspensiones provisionales y posteriormente las definitivas en los Juicios de Amparo, de las ordenes de aprehensión dictadas por nuestras autoridades judiciales, ya que tomando en cuenta que el artículo 125 del Título Segundo, Capítulo I, de la Ley de Amparo en vigor, menciona los casos en que es procedente la suspensión, pero si ocasiona daño o perjuicio a tercero, se concederá si se otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella le causaron, no obtienen sentencia favorable en el juicio de Amparo, pero si en cambio el tercero afectado, tiene que otorgar caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y esto comprende lo enumerado por el artículo 126 en sus párrafos y fracciones respectivas de la Ley de Amparo en comento. Y todos estos requisitos, no se le piden al quejoso, para cubrir el importe que garantice su suspensión, bastando únicamente que con la sola presentación de la demanda de Amparo, las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva y a criterio del Juez, se fijará la garantía bastante para reparar el daño o indemnizar los perjuicios. Debemos tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, en que se fijan tres elementos para el monto de la garantía, pero en ningún caso se habla de la reparación del daño e indemnización. Proponiéndole que el siguiente articulado quede integrado en el mismo Título y Capítulo, pero los artículos serían los subsecuentes al 124, 125 y 126 de la Ley de Amparo.

## CONSIDERACIONES

1.- La propuesta que se hace es tomando en cuenta que al quejoso, no se le pide cubra los requisitos, como se le pide al tercero perjudicado, según el artículo 126 de la Ley de Amparo. Únicamente como se ha mencionado el artículo 124 bis de la referida Ley reglamentaria en donde se presentan tres puntos:

La naturaleza, modalidades y características del delito que le imputa al quejoso.

La situación económica del quejoso, y

La posibilidad de que el quejoso, se sustraiga a la acción de la justicia.

El artículo 124 Bis, sería el 125 para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimientos penal que afecten la libertad personal, el Juez de Amparo, deberá exigir al quejoso, que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.

Como se aprecia, en ningún momento se habla en qué términos se fijará la garantía, es decir, no se precisa de ningún porcentaje para fijar la garantía, ni en el artículo 124, ni en el artículo 125 de la Ley reglamentaria de los artículos constitucionales señalados.

2.- Que la garantía bastante que fije el Juez de Distrito, cubra los requisitos que el Título Décimo, Capítulo I, Sección Primera de libertad

provisional bajo caución, artículo 340 del Código de Procedimientos Penales, fija a los inculcados. Ya que en este Capitulado, sí se piden los requisitos esenciales, para otorgar una libertad caucional, como son:

La garantía del monto de la reparación del daño y tratándose de delitos que afecten la vida o la integridad corporal, no puede ser menor del que resulte conforme a la Ley Federal del Trabajo.

Que garantice las sanciones pecuniarias que se pudieran imponer.

Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo que la Ley establece en razón al proceso.

Que no se trate de delitos graves.

Además fija que la garantía señalada en la fracción I del artículo referido, deberá ser efectivo. Punto éste, que no lo toca actualmente la Ley de Amparo.

#### REDACCIÓN

Se propone la siguiente redacción para que quede plasmada en la nueva Ley de Amparo, bajo el siguiente tenor:

Suponiendo que los artículos de la Ley de Amparo, en los que se aportan nuevas ideas no fueren modificados, deberán quedar como siguen



y en caso contrario de los números subsecuentes a los que ahora son 124 bis, 125 y 126 de la Ley de Amparo.

124 bis. Sería ahora el artículo 125- para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de Amparo, deberá exigir al quejoso, que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.

El Juez de Amparo fijará el monto de la garantía, tomando en cuenta los elementos siguientes.

- 1.- Que se garantice conforme a la Ley Federal del Trabajo, el monto estimado de la reparación del daño.
- 2.- La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso.
- 3.- Que garantice las sanciones pecuniarias, en su caso, puedan imponérseles.
- 4.- Que no se trate de alguno de los delitos señalados como graves en la Ley Penal.
- 5.- La situación económica del quejoso.

6.- La posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia.

7.- Bajo protesta de decir verdad, que antecedentes penales tiene el quejoso.

125. Conforme se encuentra plasmado en la Ley de Amparo actual.

126. Quedaría igualmente como se encuentra redactado.

127. Cuando la garantía consista en hipoteca, el inmueble no deberá tener gravamen alguno o, de veinte años a la fecha y el valor fiscal será cuando menos de tres veces al monto de la suma fijada como garantía.

Para concluir el presente trabajo, consideremos que los artículos anteriores queden plasmados como se han redactado. **(José Vera Monroy, Tomo III, páginas 1891 a 1896)**

**Artículo 125.** En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

### **PROPUESTAS**

Me ha tocado ver asuntos en que los promoventes del amparo son asesorados por abogados que casi no litigan en dicha clase de juicios o simplemente son desconocedores de la forma en que se tramitan.

Pues bien, en amparos promovidos por esos abogados una vez que el juez de Distrito concedió la medida suspensiva, da término a los quejosos para la exhibición de la fianza respectiva, pero, en acatamiento lo que dispone el artículo 7o. de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, les conmina a que la garantía sea exhibida mediante billete de depósito expedido por dicha institución. A pesar de ello los agraviados exhiben la fianza pero otorgada no por Nacional Financiera, sino por alguna Tesorería o Secretaría de Finanzas dependiente de las entidades federativas. Ante esa circunstancia el juez de Distrito no tiene por presentada la garantía

ocasionando con esa actitud que quizás se llegue a ejecutar el acto reclamado.

Si al final de cuentas lo que sucede es que Nacional Financiera obtendrá dividendos de una cantidad que, por decirlo así, sólo está en "depósito", es injusto que el quejoso tenga que soportar las consecuencias graves de; proceder ignorante de su abogado.

Creo conveniente se facultara legalmente al juez federal para que aceptara billetes de depósito aunque no hayan sido expedidos por la sociedad aludida, corriendo a cargo de ésta la obligación de hacer el canje o el trámite necesario para que la cantidad le fuera enviada por quien expidió el billete. **(Jorge Figuero Cacho, Tomo I, páginas 401)**

---

Es importante reglamentar de una manera más adecuada el monto de las garantías y contra garantías, pues a pesar de que su objeto es garantizar los daños y perjuicios que se ocasione a los terceros perjudicados con la suspensión de la ejecución del acto reclamado o a los quejosos con el levantamiento de la suspensión y consecuente ejecución del acto, algunos juzgados o tribunales colegiados fijan como monto de la garantía el importe de la suerte principal a que fue condenado el quejoso en el juicio del que emana el acto reclamado, más los intereses respectivos, lo que es indebido. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1671)**

---

Que la figura jurídica de la subsistencia del trabajador se respete, ya que el trabajador por ser la parte económicamente débil en un conflicto laboral, es quien debe de soportar todo un proceso legal a fin de recibir justicia, por lo que se debe obligar a las empresas demandadas exhiban inmediatamente la cantidad correspondiente respecto a la subsistencia del trabajador mientras dure el juicio de garantías. **(Héctor Manuel Medrano Hurtado, Tomo III, página 1800)**

---

Artículo 125.-

...

La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta efectos. **(Gilberto J. Hershberger Reyes, Tomo IV, página 2730).**

---

El principal problema a que nos enfrentamos la autoridades en materia agraria señaladas como responsables en un juicio constitucional, para la fijación de la garantía que suspende los actos reclamados, es la falta de un indicador que norme el criterio que debe seguirse para la fijación de la causa; ya que proveer la suspensión del acto reclamado en tratándose de los amparos directos que corresponda conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito, es una obligación constitucional de las autoridades señaladas como responsables, quienes según lo dispone la fracción XVII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se harán acreedoras a la destitución del cargo cuando admitan fianza o garantía que

resulte “ilusoria o insuficiente”, luego entonces, lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley de Amparo no se ajusta a dicho precepto constitucional al establecer que: “la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía”; motivo por el cual estima Magistratura estima pertinente que se deberá legislar en cuanto a este rubro, proporcionándonos un parámetro legal en el cual nos podamos apoyar para cumplir con la referida orden constitucional, y no incurrir en desacato con las consecuentes sanciones. **(Gilberto Suárez Herrera, Tomo IV, página 2873).**

**Artículo 126.** La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.

Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado al quejoso. Este costo comprenderá:

I. Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa afianzadora legalmente autorizada que haya otorgado la garantía;

II. El importe de las estampillas causadas en certificados de libertad de gravámenes y de valor fiscal de la propiedad cuando hayan sido expresamente recabados para el caso, con los que un fiador particular haya justificado su solvencia, más la retribución dada al mismo, que no excederá, en ningún caso, del cincuenta por ciento de lo que cobraría una empresa de fianzas legalmente autorizada;

III. Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria;

**IV. Los gastos legales que acredite el quejoso haber hecho para constituir el depósito.**

### **PROPUESTAS**

Bajo estas condiciones debería eliminarse la contra garantía prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, a menos que se tratase de un amparo judicial, en el que el tercero perjudicado demostrare que de no ejecutarse el acto reclamado, existiera peligro real de la desaparición del quejoso o dilapidación de sus bienes, pero en todo caso tendría que exhibir la contra garantía respectiva. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1671)**

---

Es importante reglamentar de una manera más adecuada el monto de las garantías y contra garantías, pues a pesar de que su objeto es garantizar los daños y perjuicios que se ocasione a los terceros perjudicados con la suspensión de la ejecución del acto reclamado o a los quejosos con el levantamiento de la suspensión y consecuente ejecución del acto, algunos juzgados o tribunales colegiados fijan como monto de la garantía el importe de la suerte principal a que fue condenado el quejoso en el juicio del que emana el acto reclamado, más los intereses respectivos, lo que es indebido. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1671)**



**Artículo 127. No se admitirá la contrafianza cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo, ni en el caso del párrafo segundo del artículo 125 de esta ley.**

### **PROPUESTAS**

**ARTÍCULO 127. No se admitirá la contragarantía al tercero perjudicado cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el amparo o cuando pueda afectar derechos del quejoso no estimables en dinero. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2224 y 2225)**

**Artículo 128.** El juez de Distrito fijará el monto de la garantía y contragarantía a que se refieren los artículos anteriores.

**Artículo 129.** Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común.

### **PROPUESTAS**

2.- \* (art. 129) Regular la entrega al trabajador de la garantía para subsistir durante la tramitación del juicio de amparo indirecto.

3.- \* (art. 129) Regular la devolución al quejoso de la garantía que haya otorgado para la subsistencia del trabajador durante la tramitación del juicio, en caso de que se conceda la protección constitucional si el promovente es el patrón o un tercero ajeno a la litis y en el supuesto de sobreseimiento en tratándose de un tercero extraño. (Emilio Alberto Hassey Domínguez, Tomo III, página 1607)

---

ARTICULO 125.- Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará incidente , el cual deberá promoverse dentro de los 30 días siguientes al en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo ; en la inteligencia que de no intentarse el incidente , éste se destinará al fondo de administración de justicia federal. **(David Ancira Martínez, Tomo III, página 1928)**

---

ARTÍCULO 129. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2225)**

**Artículo 130.** En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal.

En este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del juez de Distrito, quien tomará, además, en todo caso, las medidas de aseguramiento que estime pertinentes.

El juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior.

## **PROPUESTAS**

Otra materia en que la suspensión trae graves problemas es en materia penal. Tradicionalmente en esta materia han habido las peores dificultades y para no remontarme mucho en el tiempo, hay que recordar una circular que, sin facultades, expidió hace, más o menos 50 años, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalándole a los jueces cuales eran los requisitos para otorgar suspensión en materia penal, instrucciones que después se integraron a la ley y cuya disposición general consiste en negar la suspensión, en tanto sea posible.

No es fácil solucionar el problema, porque es patente que muchos delincuentes tratan de promover un amparo y obtener la suspensión para impedir la detención y, en su momento pagarse pero también hay personas que por no ser delincuentes, no desean entrar en prisión. Considero que hay errores en la ley y hay errores en la concesión o negativa de la medida cautelar, en materia penal.

Es evidente que las Procuradurías quieren que estén en la cárcel todos los individuos que, de alguna manera, han estado relacionados con la comisión de un delito, tengan o no tengan responsabilidad. Además, cuando los delitos son escandalosos, la comunidad reacciona en contra del delincuente o del presunto delincuente, de aquél a quién los medios de comunicación, muchas veces inducidos por las Procuradurías, señalan como el delincuente. El resultado es que hay una especie de vindicta privada contra el señalado, todo lo cual puede comprenderse, pero no

aprobarse. Y así se solicita del Juez su intervención, que debe tener valor para conceder la suspensión, en contra del clamor público.

De ese clima de vindicta, participan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En esas condiciones, de cualquier manera se pergeña una ley o la reforma de otra, para "hacer frente a la delincuencia" lo que, por otra parte, frecuentemente es inútil, porque la delincuencia no se termina con las leyes, se termina cuando los delincuentes son juzgados y sentenciados; pero si por mil y una razones la mayoría de los delincuentes en México están libres, son inútiles las reformas legales. Lo útil es la labor preventiva, eficiente, de los policías y de los agentes del Ministerio Público y, después de ellos, de los jueces; pero en relación con la suspensión en materia penal, se olvida que ésta tiene por objeto proteger uno de los bienes más preciados del hombre, como es su libertad y no se quiere ver que el juicio de amparo es para la protección de los derechos humanos.

Por las razones ante dichas, lo cierto es que la suspensión en materia penal puede decirse que no existe. En primer lugar, a partir de la circular mencionada, se le ha vinculado al proceso, a grado tal, que para conceder la libertad en la suspensión se tiene que sujetar a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, de la Constitución y a las leyes aplicables y, frecuentemente, la suspensión consiste, exclusivamente en que el solicitante de ella quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar que éste señale y a disposición de la autoridad a quien corresponda conocer del procedimiento penal para su continuación.

Aquí cabe reflexionar:

El amparo es una institución cuya finalidad esencial es proteger los derechos del hombre y, entre ellos, uno esencial, cual es de la libertad física, es decir el que el hombre pueda entrar, salir, hacer o no hacer, libremente.

En el proceso penal, lo que se trata es de detener al posible delincuente con el fin de que sea juzgado y, en su caso, sentenciado. Obviamente los fines de ambas instituciones son antitéticos, pues mediante la suspensión en el amparo se trata de que quede en libertad el quejoso y en el proceso penal se pretende que quede encarcelado, salvo en delitos menores. En esas condiciones, no es fácil dar una solución adecuada; pero considero que tomando en consideración un principio, que en el proceso penal de México no se observa, que consiste en que todo el mundo es inocente, hasta que no se demuestre que es culpable, y tomando en consideración, también, otro principio que ahora no se toma en cuenta, que dice que más vale cien delincuentes en la calle, que un inocente en la cárcel, el Juez, atendiendo las circunstancias del caso es quien debe conceder o negar la suspensión a su arbitrio y podría pensarse en que se quitaran todos los requisitos que señala el capítulo de suspensión para concederla en materia penal, requisitos a que se refieren los artículos 130, 136 y 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que la suspensión, provisional o definitiva, siempre se conceda cuando los actos proceden del Ministerio Público o de autoridades distintas de las judiciales, tomando el Juez todas las medidas que estime prudentes para asegurar al quejoso.



Asimismo, si la suspensión se pide contra ordenes de los jueces penales, la suspensión también deberá concederse y el Juez deberá tomar todas las medidas que estime pertinentes para que el quejoso no evada la acción de la justicia, medidas que pueden ser fianzas altas, vigilancia por la policía, firma diaria en el juzgado, etc.

Pudiera ser también que el juez concediera la suspensión para que el inculcado quedara a su disposición, pero no en los lugares de detención ordinarios, sino en un lugar específico, separado totalmente de aquellos dónde se encuentran a quienes se les sigue un proceso, aunque esta solución tenga dificultades para llevarse al cabo, por la inexistencia de lugares adecuados.

Por último, y esto sí es indispensable, en el supuesto de que haya un proceso seguido contra el quejoso, deberá continuar siempre, por ello deberá comparecer el quejoso ante su Juez, requisito indispensable para que siga vigente la suspensión concedida.

Todo lo dicho tiene una razón: el proceso penal tiene sus reglas, el juicio de amparo las suyas. Aquel pretende la sanción, este la protección de los derechos del hombre. Y si así es, que el amparo siga protegiendo a los quejosos y, para que no se diga que es una manera de que los delincuentes huyan, pueden acudirse a medios diversos: negar la suspensión provisional, si el Juez no tiene elementos suficientes para otorgarla y conceder la definitiva, una vez que cuente con el informe previo y, en todo caso, conceder o negar la medida cautelar a su prudente arbitrio, sin sujetar el

juicio de amparo a las reglas del proceso. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1085 a 1089)**

---

Por otra parte son pertinentes, salvo la corrección redaccional, los artículos 125, 126, 127, 128, 129 y el procedimiento a que se refiere al 130, para la concesión de la suspensión provisional, teniendo en cuenta además que la frase "con notorios perjuicios para el quejoso" debiera desaparecer, pues la suspensión debe impedir la ejecución del acto reclamado, aun cuando no sean notorios los perjuicios. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1090)**

---

La siguiente propuesta es en el sentido de que se adicione un párrafo al final del artículo 130 de la Ley de Amparo, que prevé la suspensión provisional del acto reclamado, en el que se establezca que en ningún caso la suspensión provisional tendrá efectos restitutorios, el propósito de esta adicción, es para que el Juez de Distrito no esté obligado a conceder dicha media precautoria, respecto de un acto consumado que inclusive no llene el requisito a que se refiere la fracción II del artículo 124 de la citada Ley, como sería la clausura de algún giro mercantil, de los llamados "giros negros", ya que es muy común que en esos asuntos el quejoso narre en la demanda hechos falsos, diciendo que no se le dio garantía de audiencia, que nunca se le siguió procedimiento alguno, y con esos datos, el Juez de Distrito conceda la suspensión provisional y ordena a la autoridad responsable el levantamiento de la clausura, sin embargo al rendir su informe previo la responsable acredita lo contrario, esto es, que el quejoso

si fue oído en su defensa y que se le siguió el procedimiento que concluyó con la referida clausura, es por eso que se requiere limitar que la concesión de la suspensión provisional no tenga efectos retroactivos.

Con la adicción que se propone al artículo 130 se evitarán que funcionen con constantes suspensiones provisionales, giros, mercantiles, que autorizados para una determinada actividad realicen otra no permitida.

Por otra parte de concederse la suspensión provisional con efectos retroactivos, se le está dando un trato procesal desigual a la responsable, pues se le impide acreditar que el acto no es suspendible provisionalmente.

La propuesta de adicción del artículo 130 de la Ley de Amparo debe quedar en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, en los siguientes términos:

**"En ningún caso la suspensión provisional tendrá efectos retroactivos, sin perjuicio de lo que disponen los artículos 136 y 139 de esta Ley". (Rosa Elena Rivera Barbosa, Tomo III, páginas 1761 y 1762)**

---

ARTICULO 126.- En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 120 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda podrá ordenar que los casos se mantengan en el Estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión

definitiva, tomando las medidas conducentes para que no se defrauden los derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible o bien las que sean necesarios para que el quejoso acuda ante la autoridad responsable para continuar con el procedimiento de donde deriva el acto reclamado, si se trata de la garantía de libertad personal.

MOTIVOS.- Si la pretensión es crear una nueva Ley de Amparo y no simplemente reformar ésta, deberá operarse un viraje en su articulado que auspicie un régimen de legalidad y libertad en los gobernados. Esto solo se logrará modificando sustancialmente la normatividad relacionada con la suspensión de los actos reclamados.

Cierto, en la actualidad una medida suspensiva permite que se prive la libertad cuando el delito por el que se sigue procedimiento o proceso penal es considerado por la Ley como grave. Tal medida, se estima contraria a la sana lógica y auspicia a que las personas a quien se les atribuye es tipo de delitos automáticamente se sustraigan a la acción de la justicia, sin que hagan uso del amparo, aún cuando el acto de autoridad sea evidentemente inconstitucional. De igual forma, quien llega a solicitar el amparo en este tipo de delitos, normalmente no pide suspensión y en tanto dura el amparo permanece oculto a la acción de la justicia, siendo que con posterioridad obtiene sentencia favorable. Además debe partirse de la buena fe de quien pide amparo.

Por ello, se estima conveniente modificar la regulación de la suspensión en actos privativos de libertad, para darle congruencia a la medida cautelar, fortalecer el respeto a la legalidad por parte de las

autoridades responsables y propiciar que los quejosos se sometan al proceso penal, al contener la medida suspensiva el deber de que se acuda ante la responsable para la reanudación o continuación del procedimiento, sin que a esta le sea permitido afectar la libertad del quejoso mientras perdura la medida suspensiva, con ello se lograría evitar la gran cantidad de evasores de justicia. (David Ancira Martínez, Tomo III, páginas 1928 y 1929)

**Artículo 131.** Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en el artículo 133,, (sic) en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial, en la que el juez podrá recibir únicamente las pruebas documental o de inspección ocular que ofrezcan las partes, las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta ley.

Cuando se trate de alguno de los actos a que se refiere el artículo 17 de esta ley, podrá también el quejoso ofrecer prueba testimonial.

No son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional; no podrá exigirse al quejoso la proposición de la prueba testimonial, en el caso, a que se refiere el párrafo anterior.

## **PROPUESTAS**

La interpretación que se ha dado por parte de los titulares de los diferentes órganos jurisdiccionales, al artículo 131 de la Ley de Amparo, y que reitero –no comparto–, ha sido en el sentido de que el cómputo de las setenta y dos horas para que tenga verificativo la audiencia incidental, debe hacerse tomando en cuenta las veinticuatro horas que se le otorgan a la autoridad responsable para que rinda su informe previo.

Ahora bien, el contenido literal del numeral en comento, es como sigue:

"Artículo 131. Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el Juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas siguientes. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas..."

Como se puede advertir de la anterior transcripción, existe señalamiento expreso de que "transcurrido dicho término", es decir, el de veinticuatro horas que se le otorgan a la autoridad responsable para que rinda su informe previo, es que se empezarán a contar las setenta y dos horas para que se lleve a cabo la audiencia incidental, pues la palabra "transcurrido o transcurso", se refiere propiamente al paso del tiempo, según se define en el "Diccionario Ideológico de la Lengua Española" de JULIO CÁSAIRES; de ahí que, se esté en presencia de un término indeterminado, esto es, que no existe base alguna para considerar que ese

término deba computarse a partir del auto de inicio del incidente de suspensión respectivo.

Ante tal complejidad, el suscrito propone que el término indeterminado previsto por el artículo 131 de la Ley de Amparo, se deje a la potestad de los Jueces de Distrito, a fin de que éstos puedan fijar de manera discrecional la fecha de celebración de la audiencia incidental relativa a la suspensión definitiva del acto reclamado, con la finalidad de que se pueda respetar el diverso término de veinticuatro horas que la ley concede a las autoridades responsables para que rindan su informe previo, esto es, que se tome en cuenta de manera prudente que la notificación a las autoridades responsables debe efectuarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al auto de admisión, lo cual significa que a esas setenta y dos horas debe agregarse las veinticuatro horas del informe previo, así como las diversas veinticuatro horas que se conceden para la notificación de requerimiento de ese informe, lo cual redundaría en un término promedio de cinco días hábiles para efectuar la audiencia incidental respectiva. **(Mario Galindo Arizmani, Tomo I, páginas 302 a 304)**

---

Abordaré ahora un tema que me parece bastante intrincado o, cuando menos, difícil de solucionar.

Pongo de ejemplo un asunto del que me tocó conocer siendo juez de Distrito.



En materia civil son comunes los amparos indirectos que se promueven contra embargos.

En el caso se trató de un vehículo del que el quejoso afirmaba era su dueño y poseedor y sobre el que se trabó ejecución en un juicio al que dicho agraviado era ajeno.

Pero lo curioso del caso era que aunque aquél había adquirido el vehículo dos o tres años antes de que fuera embargado, toda la documentación oficial seguía apareciendo a nombre del dueño anterior. Y ello es factible, además de frecuente, debido a que cuando se adquiere algún vehículo es común que, para no cubrir de inmediato los impuestos respectivos, el comprador, aun sin conocimiento del vendedor, sigue pagando la tenencia o tramitando el canje de placas a nombre del dueño anterior.

Es claro que en el asunto que comento una vez que se embargó el vehículo, el verdadero propietario (o nuevo por así decirlo), de inmediato llenó el endoso de la factura (estaba en blanco) y en ella se apoyó para solicitar el amparo y la suspensión, misma que se le concedió en forma provisional.

Mas cuando el actor en el juicio natural (tercero perjudicado en el amparo) fue emplazado, se apersonó al incidente de suspensión y objetó en cuanto a su valor probatorio la factura susodicha por tratarse de un documento simple proveniente de terceros, e igual sucedió con cuanto documento privado exhibía el quejoso: la factura por alguna refacción

adquirida por dicho agraviado, por el pago de servicios hechos al vehículo en talleres mecánicos, etcétera.

Cuanto documento privado presentaba el promovente era objetado.

Si a lo anterior se suma el hecho de que tratándose de suspensión en amparo de materia civil únicamente pueden ofrecerse las pruebas de inspección judicial o las documentales, es claro que en el ejemplo que expongo (que en la práctica puede darse infinidad de veces) al quejoso le era difícil, por no decir imposible, obtener la suspensión definitiva.

Una forma sencilla de lograrla sería concediéndole la oportunidad de que aquél pudiera ofrecer una prueba testimonial.

Esto es, propongo se reforme la Ley de Amparo para que también se autorice el ofrecimiento y desahogo de pruebas que hasta ahora están proscritas en el incidente de suspensión.

Robustece mi propuesta esta otra circunstancia:

El artículo 136, último párrafo, de la ley de la materia, autoriza a las partes a que puedan objetar de falsos los informes previos. Si se objetara de falsa la firma de la autoridad responsable contenida en dicho informe, no hay duda de que la única forma de justificar esa falsedad sería mediante pericial, es decir, otra prueba que también está prohibida en el incidente de suspensión.

Es claro que el ofrecimiento de las pruebas no admisibles hasta ahora en dicho incidente podría hacerse desde que se promueve y en cualquier momento incluso en la audiencia respectiva donde se desahogarían.

Reitero que como se encuentra redactado en la actualidad en la Ley de Amparo el capítulo relativo al incidente de suspensión, con excepción de los juicios de garantías en materia penal, sólo caben dos clases de pruebas: la documental y la inspección judicial

Con ello se ha pretendido dar agilidad a dicho incidente y evitar, en lo posible, el diferimiento de la audiencia correspondiente.

Hay casos, sin embargo, en los que las partes se ven en la necesidad de ofrecer pruebas documentales existentes en archivos de autoridades no señaladas como responsables en los juicios de garantías, o siéndolo no se otorgan copias a los quejosos que son tercero extraños.

Estando tan limitadas las partes en cuanto a las pruebas que pueden ofrecerse en el incidente de suspensión, es claro que de no accederse al diferimiento de la audiencia incidental para dar tiempo a las autoridades para que expidan las copias certificadas que aquéllas les tienen solicitadas para luego allegarías como pruebas en el aludido incidente, se les priva del derecho que tienen para defenderse.

Hasta antes de que se integrara la jurisprudencia a que luego haré referencia, eran relativamente muy pocos (por no decir que casi nadie) los

jueces de Distrito que accedían a diferir la audiencia incidental con el objeto que menciono en el párrafo anterior. Sobre ese punto existe una tesis visible en el Informe de 1974, tercera parte, página 227, que dice: "DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSION CUANDO TODAVIA NO SE HAN EXPEDIDO LAS COPIAS QUE EL INTERESADO HUBIESE SOLICITADO OPORTUNAMENTE, A FIN DE APORTARLAS COMO PRUEBAS DE SU PARTE.- Este Tribunal Colegiado del Tercer Circuito sostiene que cuando el quejoso oportunamente solicite, de las responsables, la expedición de copias certificadas, con el objeto de exhibirlas como prueba de su parte en el incidente de suspensión, y esas copias no se le expiden ni se le entregan para la fecha de la audiencia en el incidente de que se habla, debe celebrarse, si con apoyo en esa falta de expedición solicita, al Juez de Distrito, el diferimiento de la audiencia susodicha, tal diferimiento debe acordarse de conformidad: porque el artículo 131 de la Ley de Amparo, permite a las partes el ofrecimiento de las pruebas documental y de inspección ocular; porque al negarse el diferimiento de la audiencia incidental, en las condiciones arriba puntualizadas, equivale a privar al interesado del derecho de rendir la prueba documental de referencia, no obstante que el citado precepto le da justo el derecho de que se reciba, y porque en tales circunstancias, para no volver nugatorio el derecho de que se habla, por razones semejantes y por equidad, debe aplicarse el artículo 152 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales (tanto más que siendo así en lo principal, no hay razón para que no sea igualmente en lo accesorio), que precisamente autoriza el aplazamiento de la audiencia a fin de lograr la expedición de las copias que los autorizados hubiesen pedido a las responsables, así como al C. Juez de Distrito a

requerir a dichas responsables para que cumplan oportunamente con sus omisiones, concediéndoles inclusive la facultad de hacer uso de los medios de apremio y de hacer la consignación correspondiente en la hipótesis de que la susodicha autoridad omisa, insista en desobedecer su mandato".

La lectura del precedente transcrito pone de manifiesto que en aquellos rarísimos casos en que se accedía a posponer la audiencia incidental por falta de expedición de copias solicitadas por las partes para ofrecerlas en aquélla, se aplicaba analógicamente el artículo 152 de la ley de la materia, que alude a tal diferimiento pero para la audiencia constitucional.

Precisamente sobre se precepto el pleno de la Suprema Corte (cuando ésta se encontraba integrada por veintiún ministros) llegó a sostener el criterio (justo para evitar continuos diferimientos) referente a que la petición de copias debería hacerse cuando menos con cinco días de anticipación a la celebración de la audiencia. Ese criterio se encuentra plasmado en la jurisprudencia 83 (que no es a la que me referí dos párrafos atrás, pues ésta la transcribiré más adelante) del tomo VI del Apéndice 1917-1995, del siguiente tenor:

"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DIFERIMIENTO DE LA OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR COPIAS O DOCUMENTOS PARA EL AMPARO.- Para solicitar al juez que opere el artículo 152 de la Ley de Amparo y que requiera a la autoridad que exhiba copias o documentos solicitados por las partes y difiera la audiencia, en principio la petición de esas copias o documentos debe hacerse a la autoridad por lo menos cinco

días hábiles antes de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, a fin de que dicha autoridad pueda disponer del tiempo razonable para atender la petición, a menos que en el caso haya circunstancias especiales que justifiquen la petición posterior."

Es indudable que si en la práctica se cumpliera fielmente con el mandamiento de que la audiencia incidental debe verificarse a más tardar en tres días (artículo 131 de la ley de la materia), jamás podría tener aplicación la tesis acabada de transcribir, dado que no se tendría tiempo para haber formulado la petición de copias.

La actual integración de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 4/94, formó jurisprudencia (ésta es ya la que he venido mencionando) en el sentido de que por razones analógicas y de equidad sí debe aplicarse al incidente de suspensión el artículo 152 mencionado. Dicha tesis es visible en la novena época del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, diciembre, página 41, y dispone:

"AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSION. PROCEDE DIFERIRLA A PETICION DE PARTE CUANDO OPORTUNAMENTE SOLICITO DOCUMENTOS A UNA AUTORIDAD Y POR CAUSAS NO IMPUTABLES A AQUELLA NO HA SIDO POSIBLE PRESENTARLOS.- Si se parte de la base de que, atento al principio de supremacía constitucional establecido por el artículo 133 de la Ley Fundamental, cuando una norma jurídica admite varias interpretaciones debe adoptarse la que resulte más congruente con el Ordenamiento Supremo, se llega a concluir que lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo -según

el cual no son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional- no es obstáculo para que en el incidente de suspensión pueda aplicarse lo dispuesto por el artículo 152 de la misma Ley y, con apoyo en este precepto, se difiera la audiencia a petición de la parte que acreditó haber solicitado, oportunamente, copias certificadas a una autoridad y manifiesta que tal petición no le ha sido obsequiada o le fue ilegalmente rechazada. Es cierto que la prohibición contenida en el mencionado párrafo se refiere, en concreto, a la admisión de pruebas, pero no debe pasarse por alto, por un lado, que en el juicio de garantías se previenen además de esa etapa procesal, la de ofrecimiento y la de desahogo de probanzas, y, por otro, que el mencionado artículo 152 se refiere a la posibilidad real y efectiva de ofrecer la prueba documental, es decir, de presentarla (presupuesto necesario para que posteriormente el juez de Distrito esté en condiciones de examinarla y decidir su admisión o rechazo). De ahí que por analogía, y fundamentalmente, por razones de congruencia con lo establecido en la Carta Magna, así como por equidad, es posible aplicar las disposiciones de este precepto en el incidente, y así, de ser necesario, el juez difiera la audiencia, requiera de las responsables la expedición de las copias que le solicitó el quejoso y, en su caso, sancione a éste, si resulta que le informó la denegación de una copia o documento que no hubiese solicitado o que ya se le hubiese expedido. Tal interpretación concuerda con el mandato contenido en el artículo 14 constitucional, en cuanto concede al gobernado la garantía de audiencia, con la prerrogativa de defensa que la misma conlleva. En cambio, una interpretación contraria a la anterior, ocasionaría evidente indefensión al quejoso, a la par de propiciar abusos de las autoridades responsables, las que, impedirían la defensa del quejoso con

omitir la expedición de constancias que demostrasen su interés jurídico respecto de la medida suspensiva, circunstancia que no puede pensarse hubiera querido el legislador cuando estableció la posibilidad de suspender los actos reclamados, salvo casos de excepción, hasta en tanto se resolviera si son o no violatorios de garantías."

La jurisprudencia acabada de transcribir fue omisa en señalar el término con que el interesado debe hacer la solicitud de copias.

Lo que llevo dicho hasta ahora en el punto presente pone de manifiesto la necesidad de que en el capítulo relativo al incidente de suspensión se añada algún artículo en el que se establezca tanto la facultad de pedir el diferimiento de la audiencia incidental cuando se ha pedido a alguna autoridad la expedición de constancias que pretenden ofrecerse como pruebas en el incidente multicitado, como el término en que, en forma previa a la fecha señalada para la audiencia, debe hacerse la solicitud de copias. **(Jorge Figueroa Cacho, Tomo I, páginas 407 a 415)**

---

En cuanto al artículo 131 de la Ley de Amparo, independientemente de la corrección redaccional, deberá suprimirse la parte relativa del primer párrafo que sólo permite las pruebas documental y la de inspección ocular y el último párrafo, que impide la aplicación de las reglas probatorias de la audiencia constitucional, en la audiencia incidental. Aquí cabe hacer una pequeña relación histórica: hace algunos años el Departamento del D.F., al igual que ahora, se estuvo quejando de que los jueces, en especial uno de ellos, concedían suspensiones a favor de los llamados giros negros. Al



propio tiempo, un abogado que sabía amparo y que era muy hábil, una vez concedida la suspensión provisional ofrecía pruebas periciales de difícil desahogo; en esas condiciones, la celebración de la audiencia incidental, en la que el abogado sabía que le negarían la suspensión definitiva, se difería una y otra vez. El Departamento del D.F., se quejó de esa situación y siguiendo una receta probada, de que una vez muerto el perro se acaba la rabia, mataron al perro, es decir eliminaron la posibilidad de pruebas distintas de la documental y de la inspección ocular en la audiencia incidental. En principio es verdad que la pericial no tiene nada que ver con los hechos a que se refiere la suspensión y, por consiguiente deberá ser rechazada siempre, salvo algún caso excepcional que no alcanzo a ejemplificar; pero la testimonial si es en muchas ocasiones indispensable, porque ciertas autoridades administrativas realizan muchos actos sin documento escrito o amenazan con hacerlo y esas amenazas sólo pueden ser demostradas mediante la prueba testimonial. Por otra parte, la prohibición de admitir ciertas pruebas en la audiencia incidental se antoja una violación del 14 constitucional, por una parte, y por la otra, deja de tomar en cuenta que en todo caso es el Juez, quien atendiendo a lo que realmente esta sucediendo en el juicio, debe aceptar o negar la prueba correspondiente.

Y volviendo al tema anterior, debo agregar que en las quejas de la autoridad responsable en contra de uno de los Jueces de Distrito, que había concedido suspensiones provisionales, la Suprema Corte investigó la responsabilidad de dicho Juez resolvió que su conducta había sido honrada y se había apegado, en todo caso, a las normas que rigen la suspensión y, lógicamente, no lo sancionó

días hábiles antes de la audiencia, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, a fin de que dicha autoridad pueda disponer del tiempo razonable para atender la petición, a menos que en el caso haya circunstancias especiales que justifiquen la petición posterior."

Es indudable que si en la práctica se cumpliera fielmente con el mandamiento de que la audiencia incidental debe verificarse a más tardar en tres días (artículo 131 de la ley de la materia), jamás podría tener aplicación la tesis acabada de transcribir, dado que no se tendría tiempo para haber formulado la petición de copias.

La actual integración de la Suprema Corte al resolver la contradicción de tesis 4/94, formó jurisprudencia (ésta es ya la que he venido mencionando) en el sentido de que por razones analógicas y de equidad sí debe aplicarse al incidente de suspensión el artículo 152 mencionado. Dicha tesis es visible en la novena época del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, diciembre, página 41, y dispone:

"AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSION. PROCEDE DIFERIRLA A PETICION DE PARTE CUANDO OPORTUNAMENTE SOLICITO DOCUMENTOS A UNA AUTORIDAD Y POR CAUSAS NO IMPUTABLES A AQUELLA NO HA SIDO POSIBLE PRESENTARLOS.- Si se parte de la base de que, atento al principio de supremacía constitucional establecido por el artículo 133 de la Ley Fundamental, cuando una norma jurídica admite varias interpretaciones debe adoptarse la que resulte más congruente con el Ordenamiento Supremo, se llega a concluir que lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo -según



omitir la expedición de constancias que demostrasen su interés jurídico respecto de la medida suspensiva, circunstancia que no puede pensarse hubiera querido el legislador cuando estableció la posibilidad de suspender los actos reclamados, salvo casos de excepción, hasta en tanto se resolviera si son o no violatorios de garantías."

La jurisprudencia acabada de transcribir fue omisa en señalar el término con que el interesado debe hacer la solicitud de copias.

Lo que llevo dicho hasta ahora en el punto presente pone de manifiesto la necesidad de que en el capítulo relativo al incidente de suspensión se añada algún artículo en el que se establezca tanto la facultad de pedir el diferimiento de la audiencia incidental cuando se ha pedido a alguna autoridad la expedición de constancias que pretenden ofrecerse como pruebas en el incidente multicitado, como el término en que, en forma previa a la fecha señalada para la audiencia, debe hacerse la solicitud de copias. **(Jorge Figueroa Cacho, Tomo I, páginas 407 a 415)**

---

En cuanto al artículo 131 de la Ley de Amparo, independientemente de la corrección redaccional, deberá suprimirse la parte relativa del primer párrafo que sólo permite las pruebas documental y la de inspección ocular y el último párrafo, que impide la aplicación de las reglas probatorias de la audiencia constitucional, en la audiencia incidental. Aquí cabe hacer una pequeña relación histórica: hace algunos años el Departamento del D.F., al igual que ahora, se estuvo quejando de que los jueces, en especial uno de ellos, concedían suspensiones a favor de los llamados giros negros. Al

propio tiempo, un abogado que sabía amparo y que era muy hábil, una vez concedida la suspensión provisional ofrecía pruebas periciales de difícil desahogo; en esas condiciones, la celebración de la audiencia incidental, en la que el abogado sabía que le negarían la suspensión definitiva, se difería una y otra vez. El Departamento del D.F., se quejó de esa situación y siguiendo una receta probada, de que una vez muerto el perro se acaba la rabia, mataron al perro, es decir eliminaron la posibilidad de pruebas distintas de la documental y de la inspección ocular en la audiencia incidental. En principio es verdad que la pericial no tiene nada que ver con los hechos a que se refiere la suspensión y, por consiguiente deberá ser rechazada siempre, salvo algún caso excepcional que no alcanzo a ejemplificar; pero la testimonial si es en muchas ocasiones indispensable, porque ciertas autoridades administrativas realizan muchos actos sin documento escrito o amenazan con hacerlo y esas amenazas sólo pueden ser demostradas mediante la prueba testimonial. Por otra parte, la prohibición de admitir ciertas pruebas en la audiencia incidental se antoja una violación del 14 constitucional, por una parte, y por la otra, deja de tomar en cuenta que en todo caso es el Juez, quien atendiendo a lo que realmente esta sucediendo en el juicio, debe aceptar o negar la prueba correspondiente.

Y volviendo al tema anterior, debo agregar que en las quejas de la autoridad responsable en contra de uno de los Jueces de Distrito, que había concedido suspensiones provisionales, la Suprema Corte investigó la responsabilidad de dicho Juez resolvió que su conducta había sido honrada y se había apegado, en todo caso, a las normas que rigen la suspensión y, lógicamente, no lo sancionó

Como conclusión debo decir que las autoridades administrativas, en muchas, muchas ocasiones, o no prueban nada o lo prueban mal, entre otros motivos porque son prepotentes y se consideran infalibles señores de horca y cuchillo, y hacen las cosas sin observar ninguna formalidad. En otras ocasiones, y esto me consta personalmente, han presentado pruebas documentales falsas, torpemente hechas, por lo que la falsedad se nota con tanta claridad, como una luz en la oscuridad. Por todo ello pierde los juicios y se quejan de los jueces.

En definitiva, en materia de suspensión, la ley debe concederle al Juez de Distrito libertad total, para que conceda o niegue la suspensión, según su libre arbitrio, cualquiera que sea la materia, pues considero que los jueces tienen criterio suficiente para gozar de esa libertad. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1090 a 1092)**

---

#### ARTICULO 131

La propuesta es por que se considera necesario otorgar oportunidad al quejoso de allegar pruebas al cuaderno incidental, por lo que debe aplicarse a la presente disposición lo previsto en el art. 152 de la Ley de Amparo

Texto con modificación

ARTICULO 131.- Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en el artículo 133, (sic) en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial, en la que el juez podrá recibir únicamente las pruebas documental o de inspección ocular que ofrezcan las partes, las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta ley.

Cuando se trate de alguno de los actos a que se refiere el artículo 17 de esta ley, podrá también el quejoso ofrecer prueba testimonial.

No son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional; no podrá exigirse al quejoso la proposición de la prueba testimonial, en el caso, a que se refiere el párrafo anterior.

Es aplicable a la presente disposición lo previsto en el artículo 152 de la ley de amparo. **(María Simona Ramos Ruvalcaba, Tomo II, páginas 1440 a 1443)**

---

El artículo 131 de la Ley de Amparo contraviene a la garantía de audiencia ya que prohíbe la prueba testimonial y la pericial en la audiencia incidental, lo que en algunas ocasiones impide al quejoso probar la existencia del acto para efectos de la suspensión, v. gr.: la amenaza verbal que haga la autoridad para clausurar, detener, etc., en estos casos es prácticamente imposible acreditar el acto sin una prueba testimonial.

Es cierto que el artículo 131 se reformó para vedar dichas pruebas debido al abuso de algún litigante, quién las ofrecía con el sólo objeto de alargar la suspensión provisional, pero en todo caso esa conducta es objeto de una sanción a aquél abogado que actúe dolosamente, pero no debe ni puede permitirse en un estado de derecho que so pretexto de evitar una conducta dolosa se prive a los litigantes del derecho de probar. En todo caso, lo correcto es que el Poder Judicial sancione y sin que esto implique una cacería de brujas, a quienes actúen dolosamente o con mala fe en los procesos judiciales. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1672)**

---

Artículo 116, 166, 149, 131 y 149. Que se establezca en la ley la posibilidad de presentar demandas de amparo, informes con justificación, informes previos o notificaciones, por medio de correo electrónico, más ahora que ella está legitimada la firma digital, acompañando las copias de los actos por este medio (scanner). **(Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, página 1793)**



---

**IMPRORROGABILIDAD DE LOS PLAZOS.** Que se establezca expresamente que los plazos para la rendición sena improrrogables, a efecto de no retardar la celebración de las audiencias y los fallos respectivos. Estableciendo con toda precisión las causas por las que se pueda diferir, suspender o aplazar una audiencia, y por qué plazos. El plazo para rendir el informe con justificación debería ampliarse a quince días, ya que ese es el plazo de la quejosa para presentar su demanda de garantías. **(Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, página 1793)**

---

**JUSTIFICACIÓN.** El término para rendir el informe previo debería ampliarse, ya que en la práctica el informe es rendido por la autoridad responsable, en algunos casos hasta minutos antes de la celebración de la audiencia incidental, de la misma forma el término para la celebración de la audiencia de 72 horas, en la mayoría de las audiencias incidentales no se cumple, por lo que se considera que estos plazos sólo deberán prevalecer en los casos previsto en el artículo 22 Constitucional.

Por cuanto hace a que el Juez podrá recibir únicamente las pruebas documental o de inspección ocular que ofrezcan las partes, debería incluirse la testimonial, para los casos en que la autoridad niegue los actos reclamados, y no sólo en caso del artículo 17 de la Ley de Amparo.

**TEXTO PROPUESTO. ARTÍCULO 131.** Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el Juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de cuarenta

y ocho horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial, en la que el Juez podrá recibir únicamente las pruebas documental, de inspección ocular y la testimonial que ofrezcan las partes, las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el Juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta ley.

No son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional; no podrá exigirse a las partes la proposición de la prueba testimonial.

Por razón de técnica, en la suspensión definitiva del acto reclamado, deberían analizarse, por su orden, las siguientes cuestiones: A).- Si son ciertos o no los actos reclamados (premisa). B).- Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). C).- Si se satisfacen las condiciones exigidas por el artículo 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales), y D).- Si ante la existencia de terceros perjudicados es necesario exigir alguna garantía (requisitos de efectividad). **(Luis Orlando Hernández, Tomo III, páginas 2101 y 2102)**

---

Es de todos conocido que la figura de la suspensión de los actos reclamados en el amparo indirecto constituye, en muchas ocasiones, un

abuso y permite la continuación de actos ilegales, debido a la tramitación del incidente de suspensión.

Creo que esto se debe a la cantidad de tiempo que transcurre entre el otorgamiento de la suspensión provisional y la celebración de la audiencia incidental, motivado principalmente por la carga de trabajo de los juzgados de distrito, que impide la celebración de la audiencia en el plazo que marca el artículo 131.

Por ello, propongo una doble modificación: por un lado, la ampliación del término para la celebración de la audiencia incidental, de tres a diez días. Esta ampliación permitirá que el juzgado pueda preparar la audiencia, y no exista pretexto para diferirla.

Pero, además de lo anterior, propongo que exista un apercibimiento al juez de distrito: el hecho de no celebrar la audiencia dentro de el mencionado término generará responsabilidad del Juez de Distrito. Con esto se garantiza que las suspensiones provisionales no tengan vigencia durante mas de quince días.

El artículo quedaría como sigue:

ARTÍCULO 131.- Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el Juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de veinticuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin el, se celebrará la audiencia dentro de diez días hábiles, excepto en el caso previsto por el artículo 133,

en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial... ..con arreglo al artículo 134 de esta ley. El juez tendrá la obligación de vigilar el estricto cumplimiento de los términos a que se refiere este artículo, y la no observancia de los mismos será causal de responsabilidad para el Juez de Distrito. **(Juan Manuel López Ruíz, Tomo III, páginas 2142 a 2143)**

---

**ARTÍCULO 131.** Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el Juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial, en la que el Juez podrá recibir únicamente las pruebas documental o de inspección judicial que ofrezcan las partes, las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el Juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta ley.

Cuando se trate de alguno de los actos a que se refiere el artículo 17 de esta ley, podrá también el quejoso ofrecer prueba testimonial.

No son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional; no podrá exigirse al quejoso la proposición de la prueba testimonial, en el caso, a que se refiere el párrafo anterior. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2226)**

---

Finalmente, entre otros aspectos que no abordamos por el momento, también sugerimos que se amplíe la posibilidad probatoria en el incidente de suspensión en el juicio de amparo indirecto. (art. 131 de la Ley de Amparo). **(Román Díaz Vázquez, Tomo III, página 2292)**

---

En los casos de los Amparos Administrativos, en donde no está de por medio ni la vida, ni la integridad física, ni la libertad de las personas, se considera prudente conceder a las Autoridades Administrativas un plazo mayor para rendir sus informes correspondientes en el Juicio de Amparo. Esto se pone de manifiesto, ya que de acuerdo a la organización, carga de trabajo e imprevistos que pueden presentarse a las Autoridades en materia Administrativa consideradas como Responsables para efectos del Juicio de Garantías, y con la finalidad de estar en posición de poder rendirlos sin ningún tipo de presión que pueda afectar la forma o el fondo del contenido de tales informes, o en su caso de no poder desahogar los requerimientos formulados por la Autoridad Federal, se sugiere un término para rendir el Informe Previo de TRES DIAS y un término para rendir el Informe Justificado de DIEZ DIAS, son cuestiones procesales que en nada perjudicarían a las partes en el Juicio de Amparo y sí beneficiaría la igualdad y la equidad procesal, considerando que el quejoso, para interponer su demanda de garantías, cuenta con un término de 15 días, 90 días o en cualquier tiempo, dependiendo la violación que recaiga al quejoso.

En tales circunstancias se considera procedente reformar los artículos 131 y 149, contemplados en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III,

De la suspensión del acto reclamado, de la Ley de Amparo, para quedar de la siguiente forma:

ARTICULO 131.- " Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el Juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de los tres días posteriores a la fecha de notificación. Transcurrido dicho término, con informe o sin el, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial, en la que el Juez podrá recibir únicamente las pruebas documental o de inspección ocular que ofrezcan las partes, las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el Juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta Ley..." (Alma Araiza Hernández, Tomo IV, páginas 2297 a 2299).

---

En relación a los INFORMES PREVIOS.

MOTIVOS.- Es frecuente que en días viernes se requiera de un Informe Previo para rendirlo en 24:00 horas, sin embargo se niega la Admisión del mismo argumentando que hasta las 14:30 horas se recibe correspondencia por lo que se sugiere:

Adicionar un precepto en que se obligue a recibir dentro de las siguientes 24:00 horas a que se reciba el oficio que requiere dicho Informe

Previo, éste informe y con ello cumplir cabalmente con el objetivo del artículo 131 de la Ley de Amparo. (Ciro Juárez González, Tomo IV, páginas 2762 y 2763).

---

**ARTÍCULO 131.-** Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de las setenta y dos horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial, en la que el juez podrá recibir únicamente las pruebas documental o de inspección ocular que ofrezcan las partes, las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta ley.

Cuando se trate de alguno de los actos a que se refiere el artículo 17 de esta ley, podrá también el quejoso ofrecer prueba testimonial.

No son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional; no podrá exigirse al quejoso la proposición de la prueba testimonial, en el caso, a que se refiere el párrafo anterior. (Salvador Bravo Gómez, Tomo V, páginas 28 y 29)

Artículo 131.- Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el Juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de las setenta y dos horas. Transcurrido dicho término con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial, en la que el juez podrá recibir únicamente las pruebas documentales o de inspección ocular que ofrezcan las partes, las que se recibirán desde luego; oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta ley.

Los párrafos segundo y tercero, igual. (Jerónimo Eulogio Quiroz Gutiérrez, Tomo V, páginas 45 y 46)

---

#### ARTICULO 131.

#### COMENTARIO

Se propone que el término de la autoridad responsable para rendir el informe previo se distinga:

a) Para los actos a que se refiere el propio artículo 17 de la ley, sea de veinticuatro horas.



b) Para los demás actos no comprendidos en el artículo 17 sea de tres días.

Ello porque en la primera hipótesis se comprenden actos que de llevarse a cabo son de difícil o imposible reparación, por lo que se requiere que la autoridad responsable rinda en breve término su informe y así el juez esté en posibilidad de conceder la suspensión definitiva dentro del plazo de las setenta y dos horas que señala la ley.

En los demás casos el juez tal como sucede en la práctica, podrá fijar la audiencia incidental hasta antes de celebrarse la audiencia constitucional.

## REFORMA

Art. 131.- Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de setenta y dos horas, salvo en los casos previstos en el artículo 17 de esta ley, en cuyo caso deberá rendirse en un término de veinticuatro horas.

Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el caso previsto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial; en la que el juez podrá recibir únicamente las pruebas documentales o de inspección ocular que ofrezcan las partes, las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo hubiera, y del Ministerio Público, el juez resolverá en la misma audiencia, concediendo

o negando la suspensión o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta ley.

Cuando se trate de alguno de los actos que se refiere el artículo 17 de esta ley, podrá también el quejoso ofrecer prueba testimonial.

No son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la admisión de pruebas en la audiencia constitucional; no podrá exigirse al quejoso la proposición de la prueba testimonial, en el caso, a que se refiere el párrafo anterior. (Juan José Paullada Figueroa, Tomo V, páginas 275 a 277)

**Artículo 132.** El informe previo se concretará a expresar si son o no ciertos los hechos que se atribuyen a la autoridad que lo rinde, y que determinen la existencia del acto que de ella se reclama, y, en su caso, la cuantía del asunto que lo haya motivado; pudiendo agregarse las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión.

En casos urgentes el juez de Distrito podrá ordenar a la autoridad responsable que rinda el informe de que se trata, por la vía telegráfica. En todo caso lo hará, si el quejoso asegura los gastos de la comunicación telegráfica correspondiente.

### **PROPUESTAS**

Párrafo segundo.- En casos urgentes el Juez de Distrito podrá ordenar a la autoridad responsable que rinda el informe por vía telefónica o fax. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1930)

---

La falta de informes establece la presunción de ser cierto el acto que se estima violatorio de garantías, para el solo efecto de la suspensión; hace además incurrir a la autoridad responsable en una corrección disciplinaria, que le será impuesta por el

**mismo juez de Distrito en la forma que prevengan las leyes para la imposición de esta clase de correcciones.**

## **PROPUESTAS**

Respecto al artículo 132 de la ley de la materia, debe derogarse del segundo párrafo de dicho artículo lo último de su contenido que señala: "En todo caso lo hará si el quejoso asegura los gastos de la comunicación telegráfica correspondiente". **(Reynaldo Herrera Aké , Tomo II, página 1284)**

---

El artículo citado establece en su tercer párrafo que la falta de informe previo permite presumir cierto el acto reclamado y con base en esa presunción se puede resolver en definitiva sobre la suspensión de dicho acto y faculta al Juez de Distrito para imponer una corrección disciplinaria a la autoridad omisa. Sin embargo, se estima que los aún el incidente de suspensión debe ser resuelto con pleno conocimiento de la existencia o inexistencia en su caso de los actos reclamados y no la presunción de certeza de éstos, derivada de la omisión de la responsable de rendir su informe. Por lo tanto, a fin de lograr la debida y pronta integración de los incidentes de suspensión, se considera pertinente modificar el artículo en el párrafo aludido y conceder al Juez de Amparo la facultad de imponer sanciones más severas a la prevista, pudiendo incluso proceder en contra de la omisa por el delito de desobediencia en caso de negarse a rendir el informe. **(Emilio Alberto Hassey Domínguez, Tomo III, páginas 1608 y 1609)**

El artículo 132 de la Ley de Amparo establece que el Informe Previo se concretará a expresar si son o no ciertos los hechos que se atribuyen a la autoridad que lo rinda, y que determinen la existencia del acto que de ella se reclama; sin embargo, en la generalidad de los casos las autoridades responsables rinden su informe previo bien sea reconociendo o negando la existencia del acto reclamado, sin hacer mención alguna a los hechos, y debido a la premura con la que se rinde el informe previo parece más conveniente que el mismo se concrete a señalar si el o los actos reclamados son ciertos o no, en virtud de que las demandas de garantías pueden contener numerosos hechos que harían inútil su referencia específica en el informe.

Por ello, sería conveniente modificar el artículo 132 en el sentido de que la autoridad al rendir su informe previo se refiera exclusivamente a los actos que se le atribuyen, eliminando la confusión al pronunciarse respecto de los hechos.

Asimismo, resulta pertinente que se establezca en la Ley de la Materia, que las autoridades puedan presentar su informe previo, hasta la hora señalada para que tenga verificativo la audiencia incidental, lo que daría igualdad procesal a las partes, estableciéndose al efecto que entre la fecha de notificación del auto que lo solicite y la celebración de la audiencia debe mediar un plazo no menor de cinco días. **(Olga Hernández Espíndola, Tomo III, páginas 2067 y 2068)**

---

## COMENTARIO

El artículo en comento establece que para el caso de que la autoridad responsable no rinda su informe previo se le impondrá una corrección disciplinaria.

De ahí que se propone que el artículo distinga:

Para el caso de una omisión total por parte de la autoridad, el juez pueda imponer a la misma una multa.

Para el caso de que el informe previo sea rendido extemporáneamente, pues la misma ley de la materia señala en su artículo 3° bis que el juez sólo aplicará las multas establecidas en la ley cuando los infractores hubieren actuado de mal fe.

Asimismo, se propone que el artículo que ahora se estudia, señale claramente lo que se entiende por corrección disciplinaria ya que el Código Federal de Procedimientos Civiles que es de aplicación supletoria, distingue entre corrección disciplinaria y medidas de apremio en sus artículos 55 y 59 respectivamente.

## Reforma

ARTICULO 132.- El informe previo se concretará a expresar si son o no ciertos los hechos que se atribuyen a la autoridad que lo rinde, y que determinen la existencia del acto que de ella se reclama, y, en si caso, la

cuantía del asunto que lo hay motivado; pudiendo agregarse las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia de la suspensión.

En casos urgentes el juez de Distrito podrá ordenar a la autoridad responsable que rinda el informe de que se trata, por la vía telegráfica. En todo caso lo hará si el quejoso asegura los gastos de la comunicación telegráfica correspondiente.

La falta de informes establece la presunción de ser cierto el acto que se estime violatorio de garantías para el sólo efecto de la suspensión.

Hasta el momento en que se dicte la sentencia definitiva, no se podrá imponer multa por la omisión a la autoridad por la omisión en rendir sus informes previos.

En dado caso, antes de que se multe a las autoridades responsables el juez de Distrito le solicitará a éstas que informen incluso a través de la vía facsimilar, si el informe de mérito fue rendido con antelación al dictado de la audiencia incidental, a fin de acreditar si existió o no la mala fe. **(Juan José Paullada Figueroa, Tomo V, páginas 277 a 279)**

**Artículo 133.** Cuando alguna o algunas de las autoridades responsables funcionen fuera del lugar de la residencia del juez de Distrito, y no sea posible que rindan su informe previo con la debida oportunidad, por no haberse hecho uso de la vía telegráfica, se celebrará la audiencia respecto del acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva de celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas; pudiendo modificarse o revocarse la resolución dictada en la primera audiencia en vista de los nuevos informes.

### **PROPUESTAS**

**ARTICULO 129.-** Igual al texto vigente del artículo 133, salvo que deberá agregársele el uso de fax. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1930)

---

Sería conveniente que en el artículo 133 se estableciera en forma imperativa la obligación del Juez de Distrito para celebrar la audiencia incidental respecto de las autoridades que residen en el mismo lugar que el Juez, toda vez que en muchos casos so pretexto de que no se cuenta con las constancias de notificación de las autoridades foráneas, se difiere la audiencia incidental en multitud de ocasiones, lo cual redundaría en perjuicio de las partes, toda vez que si se negó la suspensión provisional, el acto reclamado puede consumarse de un modo irreparable, situación que incidiría en la resolución que se emita respecto del fondo del asunto.



Por otra parte, si la suspensión provisional fue concedida se impediría a la autoridad ejecutar un acto que puede ser constitucionalmente válido y su realización socialmente conveniente, máxime cuando existe el principio de presunción legal de los actos de autoridad, por lo que el mantener en estado de indecisión la suspensión definitiva puede afectar además el interés público. **(Olga Hernández Espíndola, Tomo III, páginas 2068 y 2069)**

**Artículo 134.** Cuando al celebrarse la audiencia a que se refieren los artículos 131 y 133 de esta ley, apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona, en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión, y se impondrá a dicho quejoso, a su representante o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario.

### **PROPUESTAS**

**ARTÍCULO 134.** Cuando al celebrarse la audiencia a que se refieren los artículos 131 y 133 de esta ley, apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión.

\* ( se suprime ) en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona, en su nombre o representación, ante otro Juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión, y se impondrá a dicho quejoso, a su representante o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2227 y 2228)

**Artículo 135.** Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda.

El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la posibilidad del quejoso, según apreciación del juez, o cuando previamente se haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, o cuando se trate de persona distinta del causante obligado directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los medios de garantía permitidos por las leyes fiscales aplicables.

## **PROPUESTAS**

El Poder Judicial Federal, a través del juicio de amparo en particular del indirecto, tiene una jurisdicción exclusiva en materia fiscal, que excluye al Tribunal Fiscal de conocimiento, por ejemplo, en tratándose de impugnación de leyes fiscales federales o locales, reglamentos, o bien de los promovidos por personas terceras extrañas a controversia, procedimiento o juicio fiscal, etc., de acuerdo a lo previsto por los artículos 103, 107 fracción VII, de la Constitución Federal, y artículos primeros, 114 fracciones I, II, V y VI, de la Ley de Amparo.

Lo anterior, implica que en el incidente de suspensión en el amparo, se aplica frecuentemente el artículo 135 de la Ley de Amparo, reformado por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cinco de enero de 1988, precepto que consigna sólo la facultad del juez, para conceder discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, lo cual crea la incertidumbre e inseguridad jurídica del contribuyente, acerca de si se le otorgará o no la suspensión, no obstante estar garantizado el interés fiscal. Por lo anterior, el numeral que nos ocupa, debió haber establecido, la obligación para el Juez, de conceder la suspensión cuando se encontrara garantizado plenamente el interés fiscal, ya que por no ser así, la Ley de Amparo es inconexa e incongruente con la legislación fiscal, no obstante ser ésta la especial y propia para regular las formas de garantizar los créditos tributarios, si tenemos en cuenta que el legislador fiscal, instituyó siempre como una obligación, otorgar la suspensión en los recursos administrativos fiscales y juicio contencioso administrativo, cuando está plenamente garantizado el crédito fiscal. En efecto, el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, en lo conducente dispone: "No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales..." Por su parte, el artículo 227 del mismo ordenamiento, prevé: "Los particulares podrán promover el incidente de suspensión de la ejecución, cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución, ante el magistrado instructor de la Sala Regional que conozca del asunto o que haya conocido del mismo en la primera instancia, acompañando copia de los documentos en que se haga constar el ofrecimiento y, en su caso, otorgamiento de la garantía, así como de la solicitud de suspensión presentada ante la ejecución y, si la hubiere, la

documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución...”

Por lo anterior, si la jurisdicción de amparo, es la jurisdicción suprema de salvaguarda de los derechos del gobernado, y por lo mismo del contribuyente, debe instituirse en el artículo 135 de la Ley de Amparo, la obligación para el juzgador de amparo como regla general, de suspender los actos reclamados fiscales, cuando ya se encuentre plenamente garantizado el interés fiscal, a semejanza y en armonía, con lo previsto en la legislación tributaria; y por el contrario, como una excepción a aquella regla general, prever la facultad discrecional de suspensión, para los demás supuestos que regula el último precepto indicado, y lograr así, la concordancia entre la legislación de amparo y la fiscal, y por lo mismo de la legislación mexicana, en cuanto a la suspensión obligatoria, cuando ya se ha garantizado el interés fiscal, y evitar que la concesión de suspensión, quede sujeta a la facultad discrecional, la cual tiene mucho de subjetiva, y por tanto, propicia inseguridad jurídica en el contribuyente, en cuanto a la concesión de la suspensión.

Véanse las siguientes tesis de Tribunal Colegiado:

**SUSPENSION. TRATÁNDOSE DE MULTAS ADMINISTRATIVAS NO DEBE EXIGIRSE LA GARANTIA SEÑALADA EN EL ARTICULO 135, DE LA LEY DE AMPARO.-** De conformidad con lo que establece el artículo 3º., del Código Fiscal de la Federación, los aprovechamientos son los ingresos que percibe el Estado por sus funciones de derecho público, entre los que se encuentran comprendidos las “multas administrativas”. Por tanto, si el

artículo 135, de la Ley de Amparo, señala como requisito para que surta efectos la suspensión cuando el amparo se pide contra el cobro de "contribuciones", el depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorería de la Federación, entidad federativa o municipio correspondiente; debe concluirse que, tal requisito no debe satisfacerse cuando el acto reclamado lo es "una multa administrativa", pues éstas son de naturaleza distinta de las contribuciones, en términos del artículo 2º., del Código Tributario Federal.

Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, marzo de 1996, p. 1030.

**RESOLUCIONES FISCALES. ES PROCEDENTE LA SUSPENSION DEFINITIVA CONTRA LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LAS.-** Si bien es cierto que contra la emisión de las órdenes de embargo y de las resoluciones fiscales no es procedente el otorgamiento de la suspensión definitiva por tratarse de actos consumados, ya que al emitirse se consuman; también lo es, que no sucede lo mismo con los efectos y consecuencias de tales actos, en razón de que éstos no se consuman, ya que un embargo que ha sido trabado puede considerarse como consumado pero sus efectos ulteriores, como son, por ejemplo el remate y la adjudicación, si son suspendibles, y respecto de una resolución que determina una obligación fiscal a cargo de un particular, la emisión de la resolución e si es consumada, pero la consecuencia y efecto de la misma que es su ejecución no, y por tanto, si puede ser suspendible.

Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, marzo de 1996, p. 1013. **(Gregorio Sánchez León, Tomo I, páginas 16 a 19)**

---

Tratándose de la suspensión en materia fiscal hay un precepto, el 135, que es incomprensible que exista en la Ley de Amparo, salvo por el hecho de que favorece a las autoridades exactoras. Arriba he dicho que el amparo es para la protección de los derechos del hombre; pero en materia fiscal no hay tal protección. Y me explico: si se solicita la suspensión del procedimiento económico coactivo ante las autoridades fiscales, de acuerdo con el Código Fiscal (art. 141) esa suspensión se va a conceder, siempre y cuando se acredite que ha habido la promoción de algún recurso o medio de defensa, y mediante cualquier tipo de garantía, incluyendo la fianza y el embargo; pero si se trata de una suspensión en materia fiscal solicitada en el juicio de amparo, la única garantía posible, para que surta efectos dicha suspensión, es el depósito en efectivo de la cantidad que cobra el fisco. En tales condiciones es incomprensible la Ley de Amparo. Una ley protectora de los derechos humanos, de las garantías individuales, que en el terreno fiscal es más dura que la propia ley fiscal.

Me he referido en este caso a la Ley Federal, pero he consultado varias leyes locales y todas permiten la suspensión mediante una garantía diversa del dinero en efectivo. Por tanto, procede la reforma de este precepto, para admitir cualquier tipo de garantía. **( Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1089 y 1090)**

Por lo que ve, el artículo 135 de la ley que nos atañe, debe reformarse en su párrafo primero dice: "Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra ante la tesorería de la federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda".

Para quedar de la siguiente manera: "La suspensión provisional debe ser otorgada ante la solicitud del agraviado, pudiendo el juez de distrito al resolver en definitiva y con atención a los informes previos, decidir lo conducente a la existencia o no de violación a las garantías individuales del quejoso". **(Reynaldo Herrera Aké, Tomo II, páginas 1284 y 1285)**

---

En materia fiscal tampoco existe una suspensión efectiva pues de acuerdo a lo ordenado en el artículo 135 de la Ley de Amparo, el quejoso debe desembolsar un importe equivalente al crédito fiscal y sus accesorios para comprar un billete de depósito que deberá exhibir a la responsable y hecho esto el juez de distrito suspenderá el cobro del crédito.

En estas condiciones es evidente que no se suspende nada, pues el gobernado de todos modos tiene que realizar el desembolso para comprar el billete de depósito, en la inteligencia de que si gana el juicio de garantías se le debe devolver el importe del depósito o la cantidad que se le haya cobrado en la ejecución del crédito fiscal; es decir en ambos casos hay desembolso y devolución del dinero desembolsado.



Para que la suspensión en amparo fuera real debería bastar con que el quejoso exhibiera la garantía de su preferencia, tal y como acontece en las controversias fiscales, pues conforme al Código Fiscal el contribuyente puede suspender el procedimiento administrativo de ejecución con la exhibición de cualquier garantía, por ello me parece extraño que la Ley de Amparo siendo un instrumento para la defensa de las garantías individuales sea más exigente que la propia legislación fiscal.

No obsta a lo anterior que cuando el quejoso haya garantizado previamente el interés fiscal ante la responsable o cuando no sea el obligado principal, o no tenga a juicio del tribunal los recursos suficientes para comprar el billete de depósito, la suspensión si tenga efectos reales, porque en esos casos surte efectos exhibiendo cualquier medio de garantía, pues se trata de supuestos de excepción y en todos los demás casos el agraviado tiene que comprar el billete de depósito. Aunque cabe aclarar que si se trata de amparo directo, el peticionario de garantías puede exhibir cualquier medio de garantía para obtener en el juicio fiscal la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, lo que le permite que al solicitar la suspensión en el amparo ante la responsable, ésta la conceda con efectos reales, por estar previamente exhibido cualquier medio de garantía ante la autoridad fiscal.

En estas condiciones debería revisarse la suspensión en materia fiscal para que ésta pueda ser efectiva. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1675 y 1676)**

**Artículo 136.** Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste.

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o su consignación.

De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan con las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro horas. De existir flagrancia o urgencia se prevendrá al Ministerio Público para que el quejoso, sea puesto en libertad o se le

consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención.

Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo.

Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiera a delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación.

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, podrá ser puesto en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior.

En los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión

**preventiva, el juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habersele solicitado.**

**La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del juicio de amparo o del procedimiento penal respectivo.**

**Las partes podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. En los casos previstos en el artículo 204 de esta ley, se considerará hecho superveniente la demostración de la falsedad u omisión de datos en el contenido del informe y el juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en que hubiese concedido o negado la suspensión; además, dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos del precepto legal citado.**

## **PROPUESTAS**

Nuestro juicio de amparo ha demostrado su eficacia frente a otros procedimientos, otros sistemas constitucionales, que al igual que nosotros intentan el total respecto a los derechos esenciales de las personas.

Creo sin embargo que falla en tratándose de algunos casos, y en situaciones muy precisas, respecto a la necesaria protección de la libertad. No me refiero a los procesos penales o a los procedimientos administrativos en sí, (en que se manejan la detención, la aprehensión, la retención y el arresto), sino a la nula eficacia de nuestra actual suspensión del acto reclamado en este respecto.

En mi concepto el ejemplo más dramático es lo dispuesto por el artículo 21 constitucional en materia de arrestos por infracciones administrativas. Dicho mandato constitucional ordena que ningún arresto administrativo debe exceder de 36 horas. Si a una persona inconstitucionalmente se le impone un arresto superior a ese plazo (una semana, un mes, o algo más), no le sirve al agraviado recurrir al amparo porque suponiendo que solicitara la suspensión del acto (el arresto) que por cierto ya se ha consumado, el trámite del incidente de suspensión es mucho muy superior al del propio arresto decretado, y es por tanto totalmente ineficaz.

Lo mismo ocurre en tratándose de la materia penal, en la cual –bajo el sistema actual- prácticamente se pueden dictar órdenes de aprehensión, y ejecución de las mismas totalmente inconstitucionales, que "pueden" no ser analizadas bajo el rigor constitucional por pasar el procedimiento a otras

etapas procesales en donde se contempla el acto bajo la luz del artículo 16, sino del 19 ó 20 constitucionales.

Por ello propongo un “procedimiento de exhibición” a la manera de una habeas corpus, pero todo ello no como una instancia separada del juicio de amparo, sino como normatividad especial de la suspensión a dicho juicio.

Concretamente estas son las modificaciones que propongo:

(ACTUAL ARTICULO 136)

Si el acto reclamado afectare o pudiere afectar la libertad personal del quejoso, la substanciación de la suspensión que se hubiere solicitado se ajustará a los siguientes procedimientos especiales:

I. Cuando el mandado privativo de la libertad no se hubiere cumplimentado por las responsables al solicitarse la suspensión, y tampoco se estuviere en el caso de decretarla de oficio, la suspensión provisional que considere procedente dictar el juez de Distrito competente producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito, únicamente en cuanto al juicio de amparo se refiere, pero quedando a disposición de la autoridad que debe juzgarlo cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuidad de éste. El hecho de que se prosiga el procedimiento penal ordinario, y se llegue a dictar un auto de formal prisión contra el quejoso en el amparo, no se considerará como cambio de situación jurídica que obligue al

sobreseimiento del juicio de amparo, sin examinarse la constitucionalidad de la orden impugnada.

Las partes podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo de las responsables. En los casos previstos en el artículo 204 de esta ley se considerará como hecho superveniente la demostración de la falsedad u omisión de datos en el contenido del informe, y el juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en que hubiere concedido o negado la suspensión provisional; además dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos del precepto legal citado.

II. Si por el contrario el acto reclamado consistiere en la detención, retención o arresto del quejoso, y ya se hubieren ejecutado por autoridades del ramo penal o del administrativo, el procedimiento de suspensión no podrá considerar consumado el acto reclamado de suspensión no podrá considerar consumado el acto reclamado, por lo cual el juez competente iniciará el incidente de suspensión mediante una orden enviada a los responsables de la privación de la libertad del quejoso, para que lo presenten físicamente ante el juez de amparo, ya que solamente mediante esta exhibición el juez podrá resolver si la pérdida de la libertad del agraviado se ajusta o no a los mandatos constitucionales.

(NUEVO ARTICULO).- Cuando haya temor fundado de que la autoridad responsable trate de burlar la orden de exhibición de la persona afectada, o de ocultarla trasladándola a otro lugar, el juez de Distrito tomará las determinaciones procedentes para localizar y trasladar ante su presencia al quejoso agraviado y a la autoridad responsable.

(NUEVO ARTICULO).- Desde el momento en que juez de Distrito decreta la orden de exhibición, se precisará el lugar y hora en que la autoridad responsable deberá presentar a la persona privada de su libertad, y se le ordenará asistir a la audiencia personalmente, o mediante delegado debidamente legitimado para representarla, mediante simple oficio que así lo acredite.

Obtenida la presentación ordenada, el Juez de Distrito procederá en la audiencia en los términos del artículo subsecuente. (actual artículo 137). Si no se lograre la localización del agraviado, el incidente permanecerá abierto hasta por el término de un año.

(NUEVO ARTICULO).- Cualquier persona podrá promover este procedimiento de exhibición, a nombre del agraviado, aun en forma verbal, cuando se aprecie un peligro de pérdida de la vida o de la salud física o mental del ofendido por actos de autoridad, y deberá iniciarse dicho juicio precisamente ante el juez de Distrito competente, pero en caso de no poder localizarlo oportunamente la petición podrá plantearse ante cualquier autoridad judicial del lugar en que se produzca la impugnada afectación de la libertad. Si interviniera la autoridad judicial del orden común, en auxilio del juez de Distrito, aquélla deberá decretar de inmediato el mandato de exhibición, el cual tendrá que cumplimentarse ante el juez de Distrito competente, y dictará además las medidas conducentes para localizar y presentar ante él al agraviado. **(Juventino V. Castro y Castro, Tomo I, páginas 146 a 150)**



---

VI a XI...

Artículo 136.- Si el acto reclamado se hace consistir en una resolución jurisdiccional que pueda afectar la libertad personal y que aún no ha sido ejecutada, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de amparo, únicamente en cuanto a ella se refiere, quedando obligado a comparecer ante la autoridad que deba juzgarlo, en el término de tres días, a rendir su declaración preparatoria y para los demás efectos del procedimiento. La obligación anterior es exigible, a fin de que pueda surtir sus efectos la medida suspensiva decretada.

2º párrafo.

3º

4º

5º

6º

7º

8º párrafo.

En los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento judicial del orden penal y éste ya se hubiere ejecutado, el juez de amparo dictará las medidas pertinentes para garantizar la seguridad del quejoso en el lugar en que se encuentre recluido. Dichas medidas se impondrán, sin perjuicio de la libertad caucional que decreta, si procediere, el órgano jurisdiccional que debe juzgarle.

Las parte podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. En los casos previstos en el artículo 204 de esta ley, se considerará hecho superveniente la demostración de la falsedad u omisión de datos en el contenido del informe y el juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en que se hubiese concedido o negado la suspensión; además dará vista al Ministerio Público de la Federación para los efectos del precepto legal citado. **(Ricardo Ojeda Bohórquez, Tomo II, páginas 821 a 824)**

---

En el artículo 136, se reforma el primer párrafo; en cuanto a redacción la reforma es perfectible, pues no afirma la afectación del acto reclamado sino advierte la posibilidad de esa afectación y especifica al caso de privación de la libertad personal que aún no ha sido ejecutada; el efecto es el mismo en cuanto a que el quejoso quede a disposición del juez de amparo, únicamente en cuanto a su libertad personal, suprimiéndose el efecto de que quede a disposición del Juez que deba juzgarlo por lo que hace a la continuación del procedimiento penal, estableciéndose específicamente la obligación del quejoso a comparecer ante el Juez responsable en tres días a declarar en preparatoria y demás efectos del procedimiento, estipulándose como requisito sine qua non para que surta efectos la suspensión.

De hecho esta medida era tomada por los jueces de Distrito, variando el término de presentación y descuidándose un poco la efectividad de la medida.

La medida ha sido criticada por algunos doctrinarios pues argumentan que terminarán con la esencia del amparo - ¿qué caso tiene pedir la suspensión, si ésta misma obliga al quejoso a presentarme a continuar con un procedimiento, el que no acepta?-. Otros la admiten en aras del interés social.- Esta obligación trae como consecuencia necesaria un cambio de situación jurídica y el sobreseimiento del juicio de garantías. La anterior reforma de 1994, (2º párrafo, frac. X, art. 73) tendía a evitar el sobreseimiento, sin embargo se da marcha atrás. Pareciera que retrocedemos.

El párrafo octavo se modifica y suprime la facultad del Juez de Distrito de poder conceder la libertad provisional bajo caución si procediere y se está en el caso de que la privación de la libertad personal ya fue ejecutada. Se suprime en consecuencia el párrafo noveno, pasando en décimo íntegro a quedar como tal, el noveno. Sin embargo no se propone la modificación del párrafo segundo del artículo 130, en donde subsiste la facultad.

Se adiciona un último párrafo, estableciendo como requisito de procedencia para suspensión, garantizar la reparación del daño, cuando se trata de la comisión de un delito. Pareciera que es un requisito de procedencia de los que marca el artículo 124 de la Ley de Amparo y que la garantía debe ser previa a la solicitud. Sin embargo, cuando el quejoso interpone el amparo contra la orden de aprehensión, se supone que no sabe con exactitud de su existencia; de tal manera que en la provisional se exigirá al Juez responsable indique el monto estimado de esa reparación, y que el quejoso garantice esa reparación para que proceda la definitividad. **(Ricardo Ojeda Bohórquez, Tomo II, páginas 825 a 827)**

---

Otra materia en que la suspensión trae graves problemas es en materia penal. Tradicionalmente en esta materia han habido las peores dificultades y para no remontarme mucho en el tiempo, hay que recordar una circular que, sin facultades, expidió hace, más o menos 50 años, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalándole a los jueces cuales eran los requisitos para otorgar suspensión en materia penal, instrucciones que después se integraron a la ley y cuya disposición general consiste en negar la suspensión, en tanto sea posible.

No es fácil solucionar el problema, porque es patente que muchos delincuentes tratan de promover un amparo y obtener la suspensión para impedir la detención y, en su momento pagarse pero también hay personas que por no ser delincuentes, no desean entrar en prisión. Considero que hay errores en la ley y hay errores en la concesión o negativa de la medida cautelar, en materia penal.

Es evidente que las Procuradurías quieran que estén en la cárcel todos los individuos que, de alguna manera, han estado relacionados con la comisión de un delito, tengan o no tengan responsabilidad. Además, cuando los delitos son escandalosos, la comunidad reacciona en contra del delincuente o del presunto delincuente, de aquél a quién los medios de comunicación, muchas veces inducidos por las Procuradurías, señalan como el delincuente. El resultado es que hay una especie de vindicta privada contra el señalado, todo lo cual puede comprenderse, pero no aprobarse. Y así se solicita del Juez su intervención, que debe tener valor para conceder la suspensión, en contra del clamor público.

De ese clima de vindicta, participan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En esas condiciones, de cualquier manera se pergeña una ley o la reforma de otra, para "hacer frente a la delincuencia" lo que, por otra parte, frecuentemente es inútil, porque la delincuencia no se termina con las leyes, se termina cuando los delincuentes son juzgados y sentenciados; pero si por mil y una razones la mayoría de los delincuentes en México están libres, son inútiles las reformas legales. Lo útil es la labor preventiva, eficiente, de los policías y de los agentes del Ministerio Público y, después de ellos, de los jueces; pero en relación con la suspensión en materia penal, se olvida que ésta tiene por objeto proteger uno de los bienes más preciados del hombre, como es su libertad y no se quiere ver que el juicio de amparo es para la protección de los derechos humanos.

Por las razones ante dichas, lo cierto es que la suspensión en materia penal puede decirse que no existe. En primer lugar, a partir de la circular mencionada, se le ha vinculado al proceso, a grado tal, que para conceder la libertad en la suspensión se tiene que sujetar a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, de la Constitución y a las leyes aplicables y, frecuentemente, la suspensión consiste, exclusivamente en que el solicitante de ella quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar que éste señale y a disposición de la autoridad a quien corresponda conocer del procedimiento penal para su continuación.

Aquí cabe reflexionar:

El amparo es una institución cuya finalidad esencial es proteger los derechos del hombre y, entre ellos, uno esencial, cual es de la libertad física, es decir el que el hombre pueda entrar, salir, hacer o no hacer, libremente.

En el proceso penal, lo que se trata es de detener al posible delincuente con el fin de que sea juzgado y, en su caso, sentenciado. Obviamente los fines de ambas instituciones son antitéticos, pues mediante la suspensión en el amparo se trata de que quede en libertad el quejoso y en el proceso penal se pretende que quede encarcelado, salvo en delitos menores. En esas condiciones, no es fácil dar una solución adecuada; pero considero que tomando en consideración un principio, que en el proceso penal de México no se observa, que consiste en que todo el mundo es inocente, hasta que no se demuestre que es culpable, y tomando en consideración, también, otro principio que ahora no se toma en cuenta, que dice que más vale cien delincuentes en la calle, que un inocente en la cárcel, el Juez, atendiendo las circunstancias del caso es quien debe conceder o negar la suspensión a su arbitrio y podría pensarse en que se quitaran todos los requisitos que señala el capítulo de suspensión para concederla en materia penal, requisitos a que se refieren los artículos 130, 136 y 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que la suspensión, provisional o definitiva, siempre se conceda cuando los actos proceden del Ministerio Público o de autoridades distintas de las judiciales, tomando el Juez todas las medidas que estime prudentes para asegurar al quejoso.

Asimismo, si la suspensión se pide contra ordenes de los jueces penales, la suspensión también deberá concederse y el Juez deberá tomar

todas las medidas que estime pertinentes para que el quejoso no evada la acción de la justicia, medidas que pueden ser fianzas altas, vigilancia por la policía, firma diaria en el juzgado, etc.

Pudiera ser también que el juez concediera la suspensión para que el inculpado quedara a su disposición, pero no en los lugares de detención ordinarios, sino en un lugar específico, separado totalmente de aquellos dónde se encuentran a quienes se les sigue un proceso, aunque esta solución tenga dificultades para llevarse al cabo, por la inexistencia de lugares adecuados.

Por último, y esto sí es indispensable, en el supuesto de que haya un proceso seguido contra el quejoso, deberá continuar siempre, por ello deberá comparecer el quejoso ante su Juez, requisito indispensable para que siga vigente la suspensión concedida.

Todo lo dicho tiene una razón: el proceso penal tiene sus reglas, el juicio de amparo las suyas. Aquel pretende la sanción, este la protección de los derechos del hombre. Y si así es, que el amparo siga protegiendo a los quejosos y, para que no se diga que es una manera de que los delincuentes huyan, pueden acudir a medios diversos: negar la suspensión provisional, si el Juez no tiene elementos suficientes para otorgarla y conceder la definitiva, una vez que cuente con el informe previo y, en todo caso, conceder o negar la medida cautelar a su prudente arbitrio, sin sujetar el juicio de amparo a las reglas del proceso. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1085 a 1089)**

---

En cuanto al artículo 131 de la Ley de Amparo, independientemente de la corrección redaccional, deberá suprimirse la parte relativa del primer párrafo que sólo permite las pruebas documental y la de inspección ocular y el último párrafo, que impide la aplicación de las reglas probatorias de la audiencia constitucional, en la audiencia incidental. Aquí cabe hacer una pequeña relación histórica: hace algunos años el Departamento del D.F., al igual que ahora, se estuvo quejando de que los jueces, en especial uno de ellos, concedían suspensiones a favor de los llamados giros negros. Al propio tiempo, un abogado que sabía amparo y que era muy hábil, una vez concedida la suspensión provisional ofrecía pruebas periciales de difícil desahogo; en esas condiciones, la celebración de la audiencia incidental, en la que el abogado sabía que le negarían la suspensión definitiva, se difería una y otra vez. El Departamento del D.F., se quejó de esa situación y siguiendo una receta probada, de que una vez muerto el perro se acaba la rabia, mataron al perro, es decir eliminaron la posibilidad de pruebas distintas de la documental y de la inspección ocular en la audiencia incidental. En principio es verdad que la pericial no tiene nada que ver con los hechos a que se refiere la suspensión y, por consiguiente deberá ser rechazada siempre, salvo algún caso excepcional que no alcanzo a ejemplificar; pero la testimonial si es en muchas ocasiones indispensable, porque ciertas autoridades administrativas realizan muchos actos sin documento escrito o amenazan con hacerlo y esas amenazas sólo pueden ser demostradas mediante la prueba testimonial. Por otra parte, la prohibición de admitir ciertas pruebas en la audiencia incidental se antoja una violación del 14 constitucional, por una parte, y por la otra, deja de tomar en cuenta que en todo caso es el Juez, quien atendiendo a lo que



realmente esta sucediendo en el juicio, debe aceptar o negar la prueba correspondiente.

Y volviendo al tema anterior, debo agregar que en las quejas de la autoridad responsable en contra de uno de los Jueces de Distrito, que había concedido suspensiones provisionales, la Suprema Corte investigó la responsabilidad de dicho Juez resolvió que su conducta había sido honrada y se había apegado, en todo caso, a las normas que rigen la suspensión y, lógicamente, no lo sancionó

Como conclusión debo decir que las autoridades administrativas, en muchas, muchas ocasiones, o no prueban nada o lo prueban mal, entre otros motivos porque son prepotentes y se consideran infalibles señores de horca y cuchillo, y hacen las cosas sin observar ninguna formalidad. En otras ocasiones, y esto me consta personalmente, han presentado pruebas documentales falsas, torpemente hechas, por lo que la falsedad se nota con tanta claridad, como una luz en la oscuridad. Por todo ello pierde los juicios y se quejan de los jueces.

En definitiva, en materia de suspensión, la ley debe concederle al Juez de Distrito libertad total, para que conceda o niegue la suspensión, según su libre arbitrio, cualquiera que sea la materia, pues considero que los jueces tienen criterio suficiente para gozar de esa libertad. (Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1092)

Se proponen algunas reformas, las que se precisan en el apartado siguiente. No sin antes poner de manifiesto que todo lo anterior no es simplemente "Un ideal de justicia" o "Un sueño imposible", ya que la Política Criminal se ha encargado de hacer creer a la opinión pública que en la medida de la dureza de las penas habrá disminución del delito. Lo que visto a la luz de la realidad queda descubierto como falso. Yo se que esta propuesta, en principio y dada la creencia popular ya mencionada, se antoja descabellada y absurda porque surgirían las siguientes preguntas:

¿No se incrementará en progresión geométrica la delincuencia? ¿Qué sucederá con la opinión pública? ¿Cuántas críticas se recibirán? etc. No obstante, ésta, que se antoja una simplísima propuesta, abriría realmente el camino hacia un derecho verdaderamente humano y auténticamente racional, despojado de la contaminación de la mencionada Política Criminal que obedece más a intereses de cúpulas Gubernamentales que a los fines de Derecho. Y en relación al resultado de poner en práctica la presente propuesta, seguramente, y muy lejos de las expectativas mencionadas, no pasaría nada. Es decir, ni se incrementaría la delincuencia, ni tampoco aumentaría la impunidad y mucho menos habría un caos social, porque ciertamente los índices delincuenciales se han incrementado gracias precisamente al pésimo sistema que se tiene de impartición de justicia, el que propicia que los indiciados que están siendo procesados se contaminen con los sentenciados y aunado a las familias de aquellos que caen en conductas antisociales dado que se va desarrollando un odio, un rencor y un desprecio hacia la sociedad. Demostrar mi aserto implicaría un estudio de campo de un costo muy elevado y de mucho tiempo. Sin embargo, valdría la pena el detenerse, al menos un poco en mi

propuesta y sus consecuencias para que mi objetivo estuviera cumplido. Es decir, estaría satisfecho con saber que hay intentos por crear legislación acorde con nuestros avances tecnológicos. Y si una vez estudiada mi propuesta no se aplicara a la nueva Ley de amparo, estaría convencido de que todavía nuestra sociedad no está preparada para estar bajo un Derecho Humano. (Luis Angel Sánchez Albarrán, Tomo II, páginas 1126 y 1127)

---

El artículo 136 quedaría de la siguiente manera:

Artículo 136.- Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito entre tanto se resuelva su situación jurídica definitiva. Quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo desde el momento en que se niegue o sobresea en el amparo contra orden de aprehensión, en cuanto a la continuación del procedimiento penal correspondiente.

Se sugiere también la supresión del párrafo V, quedando el párrafo VI actual que pasaría a ser el V de la siguiente manera:

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, podrá ser puesto en libertad provisional, mediante las medidas de aseguramiento, quedando a disposición de la autoridad que corresponda conocer del

procedimiento para los efectos de su continuación. (Luis Ángel Sánchez Albarran, Tomo II, página 1129)

---

En la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal, expedida en 1882 se indicó que en tratándose de actos privativos de la libertad, la suspensión consistiría en que el reo quedaría a disposición del juez de amparo quién debería adoptar las medidas necesarias para que el quejoso no se sustrajera de la acción de la justicia, para el caso de que le fuera negado la protección federal. Este criterio fue reiterado en el texto original de la Ley de Amparo vigente y la interpretación que el Poder Judicial le dio al término quedar a disposición de la autoridad judicial, fue que el quejoso con motivo de la suspensión quedaría libre, pero a disposición del juez de amparo respecto a su libertad personal, para que no se escapara de la ley y a disposición del juez penal para la continuación de la causa.

Sin embargo por motivos no jurídicos se cambió este criterio y desde entonces, cuando menos en algunos supuestos, se ha confundido la institución de la suspensión del acto reclamado, previsto en el artículo 107 constitucional, como un beneficio en el procedimiento de amparo a favor del quejoso, con la institución de la libertad caucional, que es la garantía individual que tiene todo procesado en una causa penal para obtener su libertad condicional si se dan los supuestos de la fracción I del artículo 20 constitucional.

En este orden de ideas, el artículo 136 de la Ley de Amparo establece que en tratándose de actos privativos de la libertad la suspensión sólo tendrá el efecto de que el quejoso quede en libertad, cuando se trate de actos emitidos por autoridades distintas a la judicial o a la judicial penal y cuando se trate de actos de jueces penales dictados con motivo de una causa penal en la que el delito no sea considerado como grave por la ley, pues de lo contrario, el efecto de la suspensión será que el individuo queda privado de su libertad, pero protegido por el juez de amparo para que en la causa penal, no se violen las garantías previstas por el artículo 20 de la Constitución<sup>80</sup>. Sin embargo éste criterio es erróneo pues las violaciones que cometiera el juez de la causa penal darían lugar a un juicio de amparo distinto.

De acuerdo a las garantías de audiencia y legalidad, ninguna persona puede ser privada en sus derechos sin ser oída y vencida en juicio en el que se dicte una sentencia conforme a la letra de la ley y su interpretación jurídica, no obstante ello el segundo párrafo del artículo 16 y el artículo 19 ambos de la constitución, constituyen una excepción a la garantía de audiencia, sin embargo como el acusado no ha sido sentenciado tiene el derecho a la libertad caucional prevista en la fracción I del artículo 20 Constitucional. Pero además como el acto privativo de la libertad puede ser inconstitucional, es factible impugnarlo a través del juicio de garantías que prevé la suspensión del acto reclamado. En consecuencia la suspensión en contra de los actos que priven de la libertad al individuo no debe condicionarse a la libertad caucional pues su causa y su efecto son

---

<sup>80</sup> Así lo estimó el Pleno de la Suprema Corte Justicia de la Nación en el dictamen que emitió a mediados del siglo para determinar que debería entenderse por el término quedar a disposición del

distintos, lo que debe tomar en cuenta el juez de amparo es si la persona acusada por el delito en realidad puede constituir un riesgo para la sociedad, y para ello tiene que hacer un estudio de los antecedentes y de la personalidad del quejoso claro está debiéndolo relacionar con el delito por el que es acusado. Es importante que no se trate de un simple estudio abstracto, pues de hacerlo así evidentemente podría concluirse que cualquier persona acusada de homicidio sería peligrosa o escaparía de la justicia, lo que debe hacer el juez federal es meditar sobre la situación personal del inculpado, como son su carácter, estado emocional, capacidad de adaptación, madurez, capacidad económica circunstancias en las que se cometió el delito, posibilidades reales de que se extraiga de la acción de la justicia. Hecho esto el juez deberá resolver si concede o niega la suspensión, pero si lo hace el individuo debería quedar en libertad. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1672 a 1675)**

---

NOTA.- Se deroga el artículo 136 por las razones expuestas en el artículo 126. **(David Ancira Martínez, Tomo III, página 1930)**

---

La primera, consistente en que aquellos quejosos a los que se les ha concedido la suspensión por delito no grave (y aun casi por el grave), no se les obligue a que se presenten a la autoridad que conoce de su proceso para su continuación, ya que ello implica necesariamente un cambio de situación jurídica y por ende, que no se estudie la legalidad o ilegalidad de la orden de aprehensión dictada en su contra.

La segunda, relativa a lo que se ha denominado arraigo, en que considero el Juez de Distrito debe tener especialmente la posibilidad de establecer, dentro de la suspensión, los lineamientos del lugar en donde se lleve a cabo, la forma e incluso el tiempo en que ésta deba durar, mientras se resuelve la legalidad de su procedencia, tomando evidentemente las precauciones debidas para evitar que el inconforme escape de la autoridad que deba juzgarlo.

Sin más por el momento le envío a usted un cordial saludo y quedo a sus apreciables órdenes. **(Alfonso M. Patiño Vallejo, Tomo III, página 1986)**

---

ARTÍCULO 136. Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito o del magistrado del Tribunal Unitario de Circuito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste.

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o su consignación.

De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan con las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro horas. De existir flagrancia o urgencia se prevendrá al Ministerio Público para que el quejoso, sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención.

Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo.

Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiera a delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación.

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, podrá



ser puesto en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior.

En los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión preventiva, el Juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el Juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habersele solicitado.

La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del juicio de amparo o del procedimiento penal respectivo.

Las partes podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. En los casos previstos en el artículo 204 de esta ley, se considerará hecho superveniente la demostración de la falsedad u omisión de datos en el contenido del informe y el Juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en que hubiese concedido o negado la suspensión; además, dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos del precepto legal citado. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2228 a 2230)**

---

Actualmente el artículo 124 de la ley de amparo en su fracción II dice lo siguiente: ...

Considero que también se seguiría perjuicio al interés social si se concede la suspensión en contra de una orden de detención girada por el ministerio público o de aprehensión girada por la autoridad judicial, por lo que creo que se debe adicionar el último párrafo de la fracción antes transcrita con lo siguiente "; o se impida la detención o aprehensión de una persona acusada de un delito grave lo que le impide tener derecho a la libertad provisional bajo caución."

La anterior sugerencia obedece a que conceder la suspensión de una orden de detención girada por el Ministerio Público en caso urgente de una orden de aprehensión girada por una autoridad judicial considerando al indiciado probable responsable de un delito grave, seguiría perjuicio al interés social, porque al permitirse que siga sustraído a la acción de la justicia, se provoca la paralización del procedimiento desconociendo las razones de orden práctico que tienden a justificar la prisión preventiva y el no otorgamiento del beneficio de la libertad provisional bajo caución, entre ellas evitar que el daño causado por el delito siga persistiendo, que se escondan o destruyan pruebas dificultando la acción de la justicia se asegura el cumplimiento de la eventual pena de prisión, la realización de los procedimientos penales en los que es indispensable la presencia del indiciado; se protege a los ofendidos y a los testigos y al propio probable delincuente de la venganza privada y de la acción de sus cómplices, siendo indiscutible que la sociedad está interesada en que se averigüen los delitos,

se castigue a los delincuentes y en que se prevenga la comisión de delitos. Además, se considera indebido otorgar mediante la suspensión en el juicio de amparo, mayores beneficios a los probables delincuentes de los que se les concede la ley en el proceso penal.

Por otra parte, con la adición que se propone, se aclararía lo dispuesto actualmente por el artículo 136 en su párrafo quinto sobre los efectos de la suspensión de la orden de aprehensión, detención o retención giradas por delito que no permita la libertad provisional bajo caución, párrafo que a la letra dice: "Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiera a delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar en que ése señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación", de donde resulta, que al señalar efectos de la suspensión, sugiere que procede ésta contra dichos actos, cuando de ninguna manera puede serlo para los efectos que ahí se contemplan, ya que el reclamo en el amparo de una orden de éstas, presupone la libertad del solicitante y por ende la imposibilidad del juez de Distrito de ponerlo a su disposición en algún lugar, así como de ponerlo a disposición de la autoridad responsable para que continúe el procedimiento penal correspondiente, porque lo anterior implica la pérdida de la libertad personal del quejoso, sin derecho a obtenerla bajo caución. En cambio, al establecerse claramente que en los casos que nos ocupan no procede la suspensión, se evitan erróneas interpretaciones de la ley de amparo que han llevado, por ejemplo, a conceder la suspensión, para que el quejoso se

interne en la cárcel a disposición del juez de Distrito, por lo que hace a su libertad personal y a disposición de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal.

Por lo anterior también propongo que del párrafo quinto del artículo 136 de la actual ley de amparo, se eliminen las palabras: "orden de aprehensión, detención o", para quedar como sigue:

Y también sugiero, que al citado artículo 136 se le agregue otro párrafo en el que se disponga que cuando se reclamen las órdenes de detención o aprehensión giradas por delito grave y se solicite la suspensión, las autoridades responsables, si llegan a ejecutar dicha orden, tanga la obligación de comunicarlo sin demora a juez de Distrito y éste concederá de inmediato la suspensión provisional para que el quejoso quede en el lugar en que se encuentra detenido o en el que señale el juez de Distrito bajo su responsabilidad, a su disposición exclusivamente en lo que se refiere a su libertad personal y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Dicho párrafo diría así:

"Cuando se reclamen las órdenes de detención o aprehensión giradas por delito grave y se solicite la suspensión, las autoridades responsables, si llegan a ejecutar dicha orden, tengan la obligación de comunicarlo sin demora a juez de Distrito y éste concederá de inmediato la suspensión provisional para que el quejoso quede en el lugar en que se encuentra detenido o en el que señale el juez de Distrito bajo su responsabilidad, a su disposición exclusivamente en lo que se refiere a su libertad personal y a

disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Para los mismos efectos se concederá la suspensión, cuando se reclame alguna de las citadas órdenes y ésta ya haya sido ejecutada".

En el entendido de que se propone la última parte del párrafo que antecede, porque se trata de un caso frecuente en la práctica, que no es contemplado en la ley.

Así mismo, quiero proponer que todas las disposiciones que atañen a las cuestiones de fondo de la suspensión se contemplen en un capítulo que pudiera ser el XIII del título primero de la ley de amparo y que se dejaran en los títulos segundo y tercero de la ley de amparo solamente las cuestiones procedimentales relativas al juicio de amparo indirecto y directo respectivamente; toda vez que varias disposiciones que actualmente están comprendidas en el título segundo relativo al amparo indirecto, son aplicables también a la suspensión en amparo directo y en amparo agravio, lo que crea confusión y en cambio clasificadas como se propone se facilitaría el manejo y aplicación de la ley. **(Alicia Guadalupe Cabral Parra, Tomo IV, páginas 2554 a 2558).**

---

**ARTÍCULO 136.-** Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste.

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o su consignación.

De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan con las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro horas. De existir flagrancia o urgencia se prevendrá al Ministerio Público para que el quejoso, sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención.

Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo.

Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiera a delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución,

la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación.

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, podrá ser puesto en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior.

En los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión preventiva, el juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el juez o tribunal que conozca de la causa perspectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habersele solicitado, pero no podrá decretar alguna providencia al respecto, hasta en tanto las autoridades responsables rindan sus respectivos informes, a fin de que esté en aptitud de determinar fehacientemente si hubo o no tal pronunciamiento.

La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de ley se

deriven a su cargo en razón del juicio de amparo o del procedimiento penal respectivo.

Las partes podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. En los casos previstos en el artículo 204 de esta ley, se considerará hecho superveniente la demostración de la falsedad u omisión de datos en el contenido del informe y el juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en que hubiese concedido o negado la suspensión; además, dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos del precepto legal citado. **(Salvador Bravo Gómez, Tomo V, páginas 29 a 31)**



**Artículo 137.** Cuando haya temor fundado de que la autoridad responsable trate de burlar las órdenes de libertad del quejoso, o de ocultarlo, trasladándolo a otro lugar, el juez de Distrito podrá hacerlo comparecer a su presencia para hacer cumplir dichas órdenes.

### **PROPUESTAS**

(NUEVO ARTICULO).- Concluido el desahogo de las pruebas y los alegatos verbales de las partes en esa audiencia, el juez dictará su resolución definitiva. Si encuentra ajustada a las disposiciones constitucionales las medidas privativas de libertad, negará la suspensión solicitada por el quejoso, pero a expresa petición de él, y tratándose de procesos penales, podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado sobre la libertad provisional del quejoso por no habersele solicitado. Dicha libertad bajo caución podrá ser revocada por el juez de Distrito que lo otorgó cuando el peticionario incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de la ley se deriven a su cargo en razón del juicio de amparo o del procedimiento penal respectivo. Esta libertad caucional también podrá decretarse, en su caso, en los procedimientos de la fracción I del artículo 136 (actual).

(NUEVO ARTICULO).- Si la resolución del incidente de suspensión mediante exhibición encuentra que los procedimientos de detención, retención o arresto se aprecian como inconstitucionales, el juez del conocimiento decretará de inmediato la total libertad del quejoso agraviado. Dicha resolución tendrá el carácter y los efectos de una sentencia en el fondo del juicio de amparo, la cual podrá recurrirse en los términos de esta ley, pero el mandato de libertad decretando se ejecutará de inmediato.

La sentencia de fondo en este tipo de amparos de la libertad, dentro de un procedimiento de exhibición, se sujetará a las formas y procedimientos que expresamente se determinan en este artículo y en el próximo anterior, y no a las disposiciones para otra diversa clase de sustanciación en amparos salvo en aquello que no se le oponga.

A estas modificaciones sustanciales se les deben añadir otras reformas referentes a artículos relacionados de la actual Ley de Amparo, en la forma siguiente. **(Juventino V. Castro y Castro, Tomo I, páginas 150 a 152)**

---

ARTÍCULO 137. Cuando haya temor fundado de que la autoridad responsable trate de burlar las órdenes de libertad del quejoso, o de ocultarlo, trasladándolo a otro lugar, el Juez de Distrito o magistrado del Tribunal Unitario de Circuito podrá hacerlo comparecer a su presencia para hacer cumplir dichas órdenes o trasladarse al lugar de detención para ponerlo en inmediata libertad. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2230 y 2231)**

---

**Artículo 138. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.**

**Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida.**

### **PROPUESTAS**

**Que los términos que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para la presentación del promovente del amparo ante el Juez de la causa cuando la suspensión se otorgue contra actos derivados de un procedimiento en materia penal y para la exhibición de la garantía, son contradictorios, requisitos que de no ser satisfechos traen como consecuencia que deje de surtir sus efectos la suspensión concedida. (Mario Galindo Arizmendi, Tomo I, página 302)**

El estudio de los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, va encaminado a aquellos casos en donde la suspensión se otorga contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal y, para que surta efectos esta concesión el Juez de Distrito tiene la potestad de fijar las medidas de aseguramiento que considere pertinentes, entre las que se encuentran: El exigir al quejoso la exhibición de una garantía y el que se presente ante el Juez de la causa para la prosecución del procedimiento.

Por un lado, el artículo 139, primer párrafo, de la ley en comento, dispone que el auto en que un Juez de Distrito conceda la "suspensión" surtirá sus efectos desde luego; pero, dejará de surtirlos si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado; como se puede advertir, dicho numeral no especifica si ese término debe otorgarse en la suspensión "provisional" o en la "definitiva".

Por otro lado, el artículo 138 de la ley de la materia, en su segundo párrafo, que se adicionó precisamente el ocho de febrero de la presente anualidad (1999), establece que la suspensión concedida contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida.

En ese contexto, es incuestionable que resulta contradictorio que por una parte se constriña al quejoso para que comparezca dentro del plazo de

tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y, de no hacerlo, se le sancione dejando sin efectos la suspensión; y, que al mismo tiempo se le conceda el término de cinco días para que dé cumplimiento a los requisitos que se le hayan impuesto al concedérsele la suspensión y si desacata tales disposiciones, deja de surtir efectos el beneficio otorgado.

Por tales motivos, se propone que se unifique el término que se impone al quejoso para comparecer ante la autoridad judicial o administrativa que pretende afectarle de su libertad personal, así como el diverso término que se le impone para que exhiba la garantía correspondiente a la suspensión respectiva, pues de otra manera, se puede llegar a dar el caso de que esa suspensión deje de surtir sus efectos desde el momento mismo en que el peticionario de garantías no cumpla con la primera de las condiciones antes indicadas, sin importar que aún se encuentre transcurriendo el diverso término de cinco días que se le concedió para que exhibiera la garantía respectiva, lo cual haría nugatorio este último término. Así pues, la propuesta se encamina en el sentido de que se fije el término común de tres días para que se cumplan cada una de las condiciones antes apuntadas, partiendo de la base de que el artículo 139 de la Ley de Amparo, solamente hace referencia de que el cumplimiento de los requisitos que se exigen al quejoso para el otorgamiento de la suspensión, deben satisfacerse en el término de cinco días, sin hacer alusión alguna en torno al tipo de suspensión, esto es, a la provisional o definitiva; de ahí que, deba interpretarse que tal precepto se refiere propiamente a la suspensión definitiva.

De esa manera, se puede solucionar provisionalmente la duplicidad de términos que se fijan para satisfacer los requisitos que se imponen al otorgarse la suspensión provisional, quedando aún latente dicha problemática en torno a la suspensión definitiva, pues es obvio que se está en presencia de dos términos (de tres y cinco días), para el cumplimiento de diversos requisitos, cuya omisión trae como consecuencia que deje de surtir sus efectos la suspensión otorgada, en cuyo caso solamente se propone que al momento de imponerse los requisitos referidos anteriormente, se obligue a la autoridad responsable que inmediatamente informe sobre el cumplimiento de la presentación del quejoso, pues así podría el Juez de Distrito darse cuenta sobre la necesidad de volver a imponer el cumplimiento de esa obligación y, como consecuencia de ello, evitar la duplicidad de términos.

Por otra parte, debe hacerse hincapié en que la duplicidad de términos que pudiera presentarse en torno a los requisitos o condiciones impuestas en el otorgamiento de la suspensión definitiva, es factible de evitarse en aquellos casos en que el quejoso haya cumplido con alguno de los dos requisitos antes apuntados, esto es, que haya exhibido la garantía fijada en la suspensión provisional o, en su caso, que se haya presentado ante la autoridad responsable, aunque la posibilidad de duplicidad de términos no desaparece absolutamente, porque al momento de otorgarse la suspensión definitiva puede darse la hipótesis de que ninguna de esas dos condiciones hayan sido cubiertas, lo cual ineludiblemente provoca que el juzgador imponga el cumplimiento de las mismas, pues al respecto solamente puede proponerse que se modifique el término que se consigna

en cada una de tales exigencias. (Mario Galindo Arizmendi, Tomo I, páginas 304 a 307)

---

En materia penal tratándose de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal del quejoso, como concretamente podría ser la orden de aprehensión, es indiscutible que procede conceder la medida cautelar, pero deberá atenderse a lo dispuesto en los párrafos cuarto y quinto del artículo 136 de la Ley de Amparo, y por tanto, si la orden de aprehensión se refiere a un delito no grave, el juez de distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no conceder el amparo; pero si el delito a que se refiere la orden de aprehensión reclamada no permite la libertad provisional bajo caución, por tratarse de un delito grave, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de distrito en el lugar en que deba ser recluido únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición del juez de la causa para la continuación del procedimiento correspondiente.

La concesión de la medida cautelar en los términos antes expuestos, la ponente considera que sería congruente con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 138 de la propia ley que fue adicionado mediante decreto mencionado al inicio de esta ponencia, sólo en los casos de delito grave, porque también podría condicionarse la medida suspensiva a que el quejoso compareciera dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa y de no hacerlo dejaría de surtir efectos la suspensión concedida.

Lo que no sucede en el caso de que el delito por el que se hubiere decretado en contra del quejoso la orden de aprehensión reclamada no fuera grave, porque con lo preceptuado en el párrafo que se adicionó al artículo 138 en análisis, es evidente que al imponerse al peticionario de garantías la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa, es incuestionable que sería con el fin de que declarara en preparatoria y se sometiera al término constitucional, en el que, en el caso de que se decretara auto de formal prisión o de sujeción a proceso, originaría consecuentemente un cambio de situación jurídica, actualizándose la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, y por tanto, no se estaría en aptitud de analizar la constitucionalidad de la orden de aprehensión reclamada, quedando además irreparablemente consumadas las violaciones a las garantías individuales en perjuicio del quejoso.

Y aun cuando en la iniciativa de la reforma en cuestión se dijo que lo anterior, no implica la indefensión del inculpado, pues éste continúa disfrutando de los beneficios que tiene al promover el juicio de amparo contra la orden de aprehensión, como son las medidas cautelares del incidente de suspensión y la posibilidad de promover un nuevo juicio de garantías contra el auto de término constitucional, sin embargo, el legislador debió considerar que al obligarse al quejoso a comparecer en el término de tres días ante el juez de la causa, la medida cautelar, sobre todo cuando la orden de aprehensión no ha sido ejecutada, realmente no le beneficia, porque se reitera, que con motivo de esa delegación que se le impone, necesariamente se originará el sobreseimiento en el juicio de garantías, y



nunca será factible que se analice la constitucionalidad de ese acto reclamado, el cual en el caso de ser ilegal, procedería la concesión del amparo, y se le evitaría al quejoso la obligación de comparecer ante el juez del proceso, con la consecuente molestia para su persona, sobre todo si realmente no cometió el hecho ilícito que se le imputa, de tal manera que aun cuando la figura de la suspensión no deba ser instrumento para burlar a la justicia penal, como se expuso en la iniciativa de la reforma en análisis, sin embargo, tampoco debe ser un medio que permita y provoque inevitablemente el sobreseimiento del juicio de garantías, pues no se debe olvidar que en el último párrafo del artículo 124 de la propia Ley de Amparo, se establece que "El juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas, y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", lo cual no se cumple cuando con tales medidas se origina el sobreseimiento del juicio, por lo que este precepto evidentemente se contrapone con lo establecido en el segundo párrafo con el que se adicionó el artículo 138 de la propia ley.

Por lo anterior, la ponente estima que en todo caso, el legislador debió tomar en consideración al aprobar esa reforma a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que no puede darse el mismo tratamiento a la persona que comete un delito considerado como grave, pues es indiscutible que en estos casos el delincuente procurará todos los medios necesarios para evadir la acción de la justicia, y por ello, dada la naturaleza de esos delitos, la concesión de la medida cautelar sí debe ser muy restringida y condicionada, en cambio, tratándose de un delito no grave, en virtud de que el indiciado tendría derecho a la libertad provisional

bajo caución, existe menos posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia, de tal manera que en estos casos no es factible considerar que la suspensión pueda servir como instrumento para burlar a la justicia penal.

Por lo anterior, la ponente considera que fue desafortunada la adición del segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, en los términos en que se aprobó por el Congreso de la Unión, pues se reitera que, en todo caso, se debió establecer que cuando se conceda la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, y se trate de delito grave, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el ministerio público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida; excluyéndose así a los quejosos, a los que se les atribuya la comisión de delitos no graves. **(María Eugenia Martínez Cardiel, Tomo I, páginas 545 a 549)**

---

Para la procedencia de la suspensión si el acto reclamado deriva de la probable responsabilidad en la comisión de delitos , es requisito que se garantice el monto estimado de la reparación del daño.

#### Artículo 138.- 1er párrafo

En los procedimientos penales el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del término de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público, y en caso de no hacerlo dejará de surtir sus efectos la suspensión concedida. **(Ricardo Ojeda Bohórquez, Tomo II, página 824)**

---

El artículo 138 se le adiciona un párrafo segundo, reiterando la obligación del quejoso de presentarse ante el Juez responsable dentro del término de tres días y estableciéndose la consecuencia para el caso de incumplir con dejar sin efecto la suspensión concedida. A mi juicio que no tiene razón de ser la adición de este párrafo, pues ya se propone en el primer párrafo del artículo 136. (Ricardo Ojeda Bohórquez, Tomo II, página 827)

---

#### LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL.

1.- Requisitos para obtener la suspensión del acto reclamado derivados de un procedimiento del orden penal.

2.- La finalidad de la garantía para obtener la suspensión provisional del acto reclamado.

3.- Finalidad de hacer comparecer al quejoso ante el juez de su causa.

4.- Propuestas.

#### LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL

De la suspensión del acto reclamado se ha dicho que produce efectos similares que los del amparo concedido, con la diferencia de que,

mientras el amparo concedido los genera de manera definitiva, la medida cautelar de la suspensión del acto reclamado los mantiene sólo por el tiempo que dure el trámite del juicio constitucional; Tratándose de amparos penales, la medida cautelar otorgada al quejoso a través de la suspensión del acto reclamado, tiene los efectos de actuar de inmediato y por el tiempo que dure el juicio de garantías, el objeto de la suspensión es el de mantener viva la materia del juicio de amparo.

Es pertinente resaltar que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro país todos los individuos son libres dentro del marco del sistema jurídico vigente, y de acuerdo con los artículos 14 y 16 de la misma Ley fundamental, de esa libertad no se les puede privar ni molestar de manera arbitraria, ya que conforme al último numeral señalado, el individuo sólo puede ser suspendido en el disfrute de su libertad personal, únicamente de acuerdo a cualquiera de los tres procedimientos que el mismo indica; ya sea porque la autoridad judicial libre en su contra una orden de aprehensión, que está sujeta a reunir ciertos requisitos; porque sin existir orden de aprehensión el individuo sea sorprendido y detenido en el momento mismo en que de manera flagrante comete un delito, sea en el momento mismo de su realización o en un momento muy próximo a su ejecución; o cuando sin existir la orden de aprehensión de la autoridad judicial o la flagrancia, existe caso de urgencia para la detención, tratándose de delito grave así calificado por la ley y riesgo fundado de sustracción de la acción de la justicia no habiendo en el lugar autoridad judicial debidamente legitimada para ordenar la detención. Cualquier otra hipótesis diferente a las enunciadas y que contempla el artículo 16 de la Constitución Federal, por más evidente que resulte la

responsabilidad de un individuo, su detención realizada en forma distinta a la señalada por dicho artículo, debe estimarse inconstitucional.

Todos aquellos actos de las autoridades de restricción a la libertad personal de los individuos, en el orden penal, pueden combatirse a través del juicio constitucional de amparo, en donde independientemente de la resolución que en lo principal se llegue a emitir, como sabemos existe la medida cautelar de la suspensión del acto reclamado, que cabe decir, por diversas reformas efectuadas a la Ley de Amparo, se ha convertido el juicio constitucional en un procedimiento complicado que día con día se vuelve más complejo, el cual ha perdido su fisonomía original que le dieron sus creadores, de ser un procedimiento rápido, sencillo, eficaz, del que resolvieran conocedores de la ciencia jurídica, ya que institución tan importante como lo es el juicio de amparo no puede ser resuelto por personas que no estén capacitadas en materia jurídica, lo que no significa de ningún modo el impedir que cualquier individuo tenga acceso a dicho juicio, sino por el contrario debe ser el procedimiento más sencillo, rápido y eficaz para la protección de las garantías de los gobernados.

El juicio de amparo indirecto conforme a los artículo 123 y 124 de la Ley de Amparo, establecen dos tipos de suspensión, las de oficio o suspensión de plano y la suspensión a petición de parte agraviada, subclasificándose esta última en provisional y definitiva.

La suspensión de oficio hace calificar al Juez de amparo como un celoso guardián de las garantías individuales, que conforme al citado artículo 123, procede cuando se trata de actos que importen peligro de

privación de la vida, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; o cuando se trata de algún otro acto que si llegará a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.

En tratándose de amparos directos también existe en la actual Ley de Amparo una suspensión de oficio en materia penal, determinada en los artículos 171 y 172 de la citada Ley Reglamentaria, que establecen: “ Cuando se trate de sentencias definitivas en juicios de orden penal, al proveer la autoridad responsable, conforme a los párrafos del artículo 168 de ésta Ley, mandará suspender de plano la ejecución de la sentencia reclamada”, “Cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito competente, por mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución, la cual podrá ponerlo en libertad caucional si procediere”. Como se puede observar basta con la interposición de la demanda de amparo indirecto contra una sentencia definitiva penal, para que la autoridad esté obligada a suspender oficiosamente la ejecución del acto.

En cuanto a la suspensión a petición de parte agraviada en materia penal, su esencia es la de mantener viva la materia del acto reclamado mediante un procedimiento sencillo.

Para obtener la suspensión contra actos en los que el quejoso reclame la afectación a su libertad personal, es necesario determinar en

primer lugar si se trata de actos de autoridades judiciales o bien si se trata de actos de autoridades no judiciales.

Cuando se trata de actos de afectación de la libertad personal, provenientes de autoridades no judiciales, el Juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional del acto reclamado. Si los actos de tales autoridades todavía no se ejecutan, la suspensión tendrá el efecto de que las responsables no procedan a la detención del quejoso; sin perjuicio de que se practiquen las diligencias de averiguación previa que resulten conducentes, o bien, se consigne la ya integrada ante la autoridad judicial por el delito que se le impute.

La Ley de Amparo en sus artículos 130 y 136 impone al Juez de Distrito que conceda la suspensión la obligación de decretar las medidas de aseguramiento pertinentes tendientes a evitar que el quejoso en el supuesto de negársele el amparo se sustraiga a la acción de la justicia y pueda ser puesto a disposición de las autoridades responsables.

De conformidad con el artículo 136 de la citada ley, en el que se contemplan diversas hipótesis de detenciones ilegales y el tratamiento que se debe dar en cuanto a la suspensión, previene que si los actos de las autoridades mencionadas ya se hubieren ejecutado, esto es, si el quejoso ya hubiese sido detenido, el Juez podrá poner al quejoso en libertad provisional bajo caución de ser procedente, así también deberá decretar las medidas de aseguramiento que resulten adecuadas para que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia en el caso de que no se le conceda el amparo.

Si el delito que se le imputa al quejoso, por su gravedad no permite la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Amparo en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad responsable por lo que respecta al procedimiento.

Tratándose de actos dictados por una autoridad judicial, tales como órdenes de aprehensión y autos de formal prisión para obtener la suspensión provisional del acto reclamado, necesariamente tendrá que solicitarse ésta.

En el supuesto de que el acto reclamado ya haya sido ejecutado, el efecto de la suspensión será que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo en cuanto al procedimiento penal.

Para obtener la suspensión provisional de un acto reclamado que todavía no se haya ejecutado, el quejoso tiene que otorgar garantía tal como lo dispone el artículo 124 bis de la Ley de Amparo que a la letra dice:

"Artículo 124 bis. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes. El Juez de



amparo fijará el monto de la garantía, tomando en cuenta los elementos siguientes:

I.- La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso;

II.- La situación económica del quejoso, y ;

III.- La posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia ”.

Así también para que la suspensión siga surtiendo sus efectos, el quejoso de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 138 de la Ley de Amparo, tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de su causa.

En ambos casos el Juez debe decretar las medidas necesarias para poner al quejoso a disposición de la autoridad judicial en el caso de que se le niegue el amparo.

1.- Requisitos para obtener en amparo indirecto la suspensión del acto reclamado derivado de un procedimiento del orden penal, y los efectos de la suspensión.

El Título Segundo, del Libro Primero, de la actual Ley de Amparo, contempla en su capítulo III lo relativo a la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo indirecto, y concretamente en los artículos 123,

124, 124 bis, 130, 136 y 138, establece los requisitos para obtener la suspensión contra actos provenientes de un procedimiento penal o que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; así como lo concerniente a los efectos de la propia suspensión, forma en que será concedida, y alcances de la misma.

Siendo necesaria su transcripción, para su correspondiente análisis, tenemos que los artículos 123, 124, 124 bis, 130, 136 y 138 de la vigente Ley de Amparo, disponen lo siguiente:

**ARTICULO 123.-** Procede la suspensión de oficio:

I.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal;

II.- Cuando se trate de algún otro acto, que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.

La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta ley.

Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados.”

En este precepto podemos apreciar las enormes facultades con que fue investido el Juez de amparo para que de oficio, en los casos señalados en dicho artículo, concediera la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, también se puede observar que el último párrafo que fue adicionado a principio de mil novecientos ochenta y ocho, restringe los efectos de la suspensión de oficio que limitativamente consistirá en que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o destierro o la ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, u ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden para evitar su consumación.

ARTICULO 124.- Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

I.- Que la solicite el agraviado.

II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."

En este precepto la problemática consiste en determinar el contenido y alcances de las expresiones interés social y orden público, lo que es importante clarificar, precisamente en la propia Ley la que debe establecer su contenido y alcance, e incluso evitar expresiones como las señaladas para proporcionar seguridad jurídica.

ARTICULO 124 bis.- Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.

El juez de amparo fijará el monto de la garantía, tomando en cuenta los elementos siguientes:

- I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso;
- II. La situación económica del quejoso, y
- III. La posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia.

Realmente no existe alguna razón de peso para que el legislador en la reciente reforma de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve que se efectuó a la Ley de Amparo, haya adicionado el artículo 124 bis que se comenta, porque la Ley de Amparo ya disponía en su artículo 130 que el Juez de Amparo tomara las medidas que estimare convenientes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal.

ARTICULO 130.- En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el juez de

Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal.

En este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposición de la autoridad que la haya concedido, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabilidad del juez de Distrito, quien tomará, además, en todo caso, las medidas de aseguramiento que estime pertinentes.

El juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo anterior."

Aquí se dan las bases para la procedencia de la suspensión provisional. En tratándose de la garantía de la libertad personal, dentro o fuera de procedimiento judicial, en los casos en que proceda la suspensión del acto reclamado conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Amparo tomara las medidas que estimare convenientes para el aseguramiento del quejoso. Fundamentalmente esas medidas han consistido en montos de dinero que exhibe el quejoso ya sea en efectivo o a

través de un billete de depósito, así como en hacer que el quejoso comparezca ante el Ministerio Público o Juez que esté conociendo de su causa; sin embargo, se debe de tener en consideración que no es lógico que con la suspensión se obligue al quejoso a comparecer precisamente ante la autoridad que señala como responsable de los actos que le reclama; que una de las razones por las que en infinidad de casos se promueve el amparo y se solicita la suspensión del acto reclamado, es que el quejoso no quiere comparecer ante la autoridad que considera está infringiendo su garantía de libertad, y es precisamente a eso a lo que se le obliga. Las medidas de aseguramiento que debe decretar el Juez de Amparo, deben entenderse como aquellas que no sujetan al quejoso a la prisión preventiva, ni el sujetarlo a un procedimiento que el quejoso considera viciado, sino mas bien a que sin necesidad de ello el Juez de Amparo se asegure de que el quejoso se sujetará a las resultas del Juicio Constitucional, y de negarse la protección de la Justicia de la Unión, la autoridad responsable podrá actuar en contra del quejoso que quedará a su disposición, caso en el cual el propio Juez de Amparo dictará las medidas correspondientes para ello. Luego, al conceder el Juez de Amparo la suspensión del acto reclamado podrá entre otras medidas de aseguramiento decretar la comparecencia periódica del quejoso ante sí, prohibir que éste abandone determinado lugar sin autorización del juzgador de amparo, someterlo a la vigilancia de la fuerza pública, una vez que se entere del informe previo de la autoridad responsable, decretar aseguramiento precautorio de bienes del quejoso, pero no que para la concesión de la suspensión provisional previamente exhiba fianza, ya que en caso contrario el Juez de Amparo estará prejuzgando su culpabilidad.

“ARTICULO 136.- Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, cuando el acto emane de un procedimiento del orden penal por lo que hace a la continuación de éste.

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se concederá, si procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o su consignación.

De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concederá y desde luego se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que rinda la autoridad responsable no se acreditan con las constancias de la averiguación previa la flagrancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro horas. De existir flagrancia o urgencia se prevendrá al Ministerio Público para que el quejoso, sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el caso, a partir de su detención.

Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que



pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo.

Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiera a delito que conforme a la ley no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del juez de Distrito en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para los efectos de su continuación.

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, podrá ser puesto en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior.

En los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión preventiva, el juez dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá ser puesto en libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o locales aplicables al caso, siempre y cuando el juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habersele solicitado.

La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del juicio de amparo o del procedimiento penal respectivo.

Las partes podrán objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo. En los casos previstos en el artículo 204 de esta ley, se considerará hecho superveniente la demostración de la falsedad u omisión de datos en el contenido del informe y el juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en que hubiese concedido o negado la suspensión; además, dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos del precepto legal citado."

En el primer párrafo de este artículo se deja establecido que la suspensión sólo se refiere a la libertad misma del quejoso y no al procedimiento de donde emana el acto reclamado, el cual debe continuar su trámite conforme a las leyes instrumentales correspondientes; sin embargo, debiera estimarse que en tratándose de órdenes de aprehensión aun no ejecutadas, en que el procedimiento penal está suspendido precisamente porque el quejoso no ha sido detenido, al concedérsele la suspensión provisional no se debería obligar al quejoso a comparecer ante el juez de la causa, porque eso trae como consecuencia que la finalidad formal de la orden de aprehensión recurrida quede satisfecha, ya que aun cuando ésta se ocupe como un medio para privar de la libertad a los ciudadanos, conforme a un Estado Democrático de Derecho como el que establece la Constitución Federal, no debiera ser esa su función; por ello es adecuado lo señalado en el cuarto párrafo del artículo que se comenta, al prever que de

concederse la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, el Juez de Amparo dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo, sin que esto signifique que las medidas de aseguramiento tengan que ser la garantía pecuniaria y comparecencia ante el juez de la causa que se exige al quejoso, al relacionar dichas disposiciones con lo prevenido en el artículo 124 bis y 138 segundo párrafo, de la misma Ley de Amparo, pues éstas dos últimas disposiciones fueron recientemente adicionadas, siendo anteriores las disposiciones del artículo 136. Consiguientemente, se puede apreciar que en vez de hacer más humanitaria nuestra legislación conforme al espíritu de la Constitución, que manifiesta que el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste; contrario a ello, cada día se denota más el autoritarismo; que para convencer al pueblo del supuesto beneficio que se pretende alcanzar, se hacen valer frases como el clamor popular, el sentir ciudadano, la opinión pública, la conciencia del pueblo, las cruzadas contra la delincuencia, y tantas otras que dan forma al argumento de evitar el abuso del amparo, por el combate a la delincuencia, y se restrinjan cada día más los derechos constitucionales, y se pretende a través de la represión penal el control de los problemas sociales que debieran ser controlados por medios penales. No existirían tantas demandas de amparo si no existieran tantas autoridades arbitrarias, abusivas del poder. No existiría tanta delincuencia si existieran fuentes de trabajo en donde el trabajador recibiera el justo pago por su fuerza de trabajo, que le permitiera tener una vida decorosa para él y su familia. No existiría tanta delincuencia si los medios de comunicación no hicieran todos los días, de manera sistemática y sofisticada apología del delito; si en

campo, la agricultura, la riqueza forestal, etcétera, fuesen enfrentadas por medios políticos, no penales, con el objeto de que cumplan sus objetivos de producción de manera digna, en beneficio de la sociedad, etcétera.

Por ello se debe entender que el verdadero sentido del artículo 136 es preservar y proteger la libertad física de los individuos, contra los actos arbitrarios de autoridades administrativas o judiciales.

“ARTICULO 138.- En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida.”

En el segundo párrafo de este precepto se puede apreciar más claramente uno de los requisitos necesarios para obtener la suspensión del acto reclamado, y que ya se ha analizado con anterioridad por la relación que guarda con los artículos 124, 124 bis y 130 de la Ley de Amparo, teniendo presente lo ilógico de imponer al quejoso la obligación de comparecer precisamente ante la autoridad que señala como responsable

de los actos que reclama; que una de las razones por las que en infinidad de casos se promueve el amparo y se solicita la suspensión del acto reclamado, es que el quejoso no quiere comparecer ante la autoridad que considera está infringiendo su garantía de libertad, y es precisamente a eso a lo que se le obliga. Por otra parte, el precepto que se comenta, independientemente de la íntima relación que guarda con los artículos 124, 124 bis y 130, también debe analizarse teniendo en cuenta lo establecido en el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la propia Ley de Amparo, que analizados en su conjunto y teniendo en cuenta los términos y formas del procedimiento penal, se puede descubrir un diseño en la legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política Federal, para que el Juez de Amparo encuentre la salida más fácil que cumplir con su obligación de analizar los actos de las autoridades, y de existir violaciones a los derechos constitucionales de los individuos para en su caso conceder la protección de la justicia federal, que es en lo que consiste precisamente su función y que es la más noble y alta facultad con que cuenta un Juez Federal.

Sin embargo, el Juez de Amparo que en realidad quiere abocarse a su tarea en el llamado amparo garantías, que doctrinalmente sirve para distinguirlo del amparo contra leyes, del amparo casación y del amparo soberanía, se encuentra limitado conforme a las propias disposiciones de los citados artículos 73 fracción X, 124, 124 bis, 130 y 138, de la Ley de Amparo, en relación con los términos y formas del procedimiento penal, ya que cuando un individuo que se encuentre libre esté sufriendo actos violatorios del artículo 16 de la Constitución Federal, y con motivo de ello presente demanda de amparo contra dichos actos solicitando la suspensión

del acto reclamado a fin de que no se le moleste en su libertad, que no sea privado de su libertad, por considerar que la autoridad señalada como responsable no cuenta con orden judicial de aprehensión en su contra o que ésta no reúne los requisitos necesarios para su procedencia; el Juez de Amparo entre otras medidas ordena al quejoso que se presente ante la autoridad que el quejoso ha señalado como quien está violando sus garantías o pretende vulnerar sus derechos constitucionales cuya protección está solicitando, de tal suerte que si el acto deriva de una orden de aprehensión, el quejoso tendrá que comparecer ante el Juez de la causa el que continuará al procedimiento penal instaurado en su contra, y si al momento de resolverse la situación jurídica del quejoso el Juez del proceso penal resuelve dictarle formal prisión, ello bastará para que el Juez de Amparo, en acatamiento a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 74 fracción III de la misma ley, indefectiblemente tendrá que decretar el sobreseimiento del Juicio de Garantías.

Piénsese en el perjuicio cometido en quien es sometido de manera arbitraria a un procedimiento de esta índole, que jamás podrá reparársele el menoscabo que sufrió en su persona, en la lesión a su peligro, en la situación traumática de haber estado preso siendo inocente en el honor de él y de su familia, en ese daño no solamente físico sino principalmente psíquico y moral, que aún cuando recupere su libertad, no se le podrá reparar jamás.

No debemos olvidar que en la Ley de Amparo se prevén los procedimientos para hacer efectivas las garantías constitucionales de los

gobernados que le han sido conculcadas, y no para hacer efectivas las acciones ilegales de las autoridades.

Insistir en el sistema que impera significa seguir tolerando actos arbitrarios por parte de los órganos encargados de la procuración y administración de justicia, en menoscabo de la libertad de los gobernados, y permitir así el desenvolvimiento de procedimientos penales viciados de origen.

## 2.- La finalidad de la garantía pecuniaria.

Los preceptos transcritos en el apartado acabado de exponer, y principalmente el artículo 124 bis, genera la necesidad de determinar cuál es el objeto y finalidad que se persigue con imponer al quejoso la exhibición de una garantía, cuyo contenido sin duda es pecuniario, teniendo en cuenta que el monto de esa garantía dificulta la obtención de la suspensión, y que por si misma no evita que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia.

Los antecedentes de esta reforma a la ley de amparo de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, indican que originalmente fue planteada por el ejecutivo federal la posibilidad de que el quejoso otorgara una garantía pero para garantizar el monto estimado de la reparación del daño y de este modo salvaguardar los derechos de los ofendidos. Sin embargo el constituyente permanente no adoptó tal iniciativa sino que consideró que al resultar frecuentemente insuficientes las medidas para asegurar la presencia del quejoso en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, era necesario que para la concesión de la suspensión se

otorgara una garantía, como un medio para evitar la sustracción del quejoso a la acción de la justicia.

Se aprecia que tal disposición resulta injustificada, ya que por sí sola o con las medidas de aseguramiento dictadas por el juzgador de amparo, resulta inadecuada para evitar la sustracción a la acción de la justicia por el quejoso.

La garantía pecuniaria sólo tiene como fin evitar, injustificada y arbitrariamente, que el indiciado obtenga la suspensión del acto reclamado aun estando en juego uno de sus bienes más preciados como lo es la libertad, siendo que finalmente con semejante sistema el Estado se allegará de más fondos económicos, lo cual no constituye la finalidad de aquella garantía.

3.- Finalidad de hacer comparecer al quejoso ante el juez de su causa.

Una de las obligaciones a cargo del quejoso que ha obtenido la suspensión del acto reclamado contra una orden de aprehensión es comparecer ante su juzgador dentro del término de tres días, de lo contrario le sería revocada la suspensión concedida. El cumplimiento de esta medida en la práctica judicial ineludiblemente lleva a un cambio de situación jurídica conforme al sistema vigente en el artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que al comparecer el quejoso ante la autoridad judicial que conoce de su proceso, la misma debe resolver su situación jurídica dentro del término constitucional de las setenta y dos horas, y en caso de dictarle formal



prisión, esto generará la consecuente nueva situación jurídica que conllevará al sobreseimiento del juicio de amparo, lo que primeramente, como se ha señalado, evita el análisis del fondo del asunto y la posible convalidación de vicios que puedan existir previos a la formal prisión, y consecuentes violaciones a la garantía de libertad consagradas en el artículo 16 de la Carta fundamental, sin un medio real de protección de la misma, ya que la propia ley de amparo como se encuentra confeccionada da lugar a los actos de autoridad que en esos supuestos se realizan. Además se convierte a los juzgadores de amparo en auxiliares de la administración y procuración de justicia penal ordinarios, pues serán ellos quienes pongan a su disposición al indiciado, precisamente de quien se pide su protección es quien lo pone a disposición de la autoridad que se encuentra ejecutando los posibles actos anticonstitucionales en su perjuicio. Así también se desnaturaliza el juicio de amparo advirtiéndose incluso notorias contradicciones entre sus preceptos pues precisamente el artículo 124 del citado ordenamiento impone al juez de amparo la obligación de decretar medidas para mantener viva la materia del amparo y por otra parte lo obliga a poner al quejoso a disposición de la autoridad responsable a sabiendas que con tal acto quedará paradójicamente el amparo sin materia.

También se da la práctica de no atender al espíritu, motivación y objetivo final de la ley, que consiste en esperar que en esos juicios en que se reclaman actos de autoridad que contravienen el artículo 16 de la Constitución Federal, se encuadren en la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, para que por el aludido cambio de situación jurídica, dar por actualizado el sobreseimiento del juicio

de amparo conforme a la fracción III del artículo 74 de la citada Ley de Amparo, evitando la tarea de estudiar el fondo del asunto en que cabe la posibilidad de haber existido la violación constitucional reclamada, y emitiendo una resolución ya estructurada de sobreseimiento. Incluso, llegando en algunos casos a propiciar tal causal de improcedencia, para lo cual si se encuentran en el supuesto de tener que celebrar la audiencia constitucional, cuando en el proceso penal aun no se ha resuelto la situación jurídica del inculpado quejoso, sin fundarse en precepto legal alguno de la Ley de Amparo, de oficio difieren la audiencia constitucional, a sabiendas de que el juez de la causa necesariamente tendrá que emitir el auto de término constitucional, que desde luego generará de acuerdo con el texto vigente del segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, la nueva situación jurídica del inculpado quejoso que como se ha anotado, originará el sobreseimiento del juicio de amparo. Practica esta nada aceptable, propiciada por el sistema vigente en la Ley de amparo acerca de las medidas y requisitos para que siga surtiendo efectos la suspensión provisional.

#### 4.- Propuestas.

Considerando que el Juicio de Amparo es un medio jurídico procesal destinado a salvaguardar las garantías de los gobernados; que a través de la suspensión de plano, provisional y definitiva del acto reclamado emanado de un procedimiento penal se pretende evitar restricciones irreparables a la libertad personal; que la obligación impuesta al quejoso de exhibir una garantía carece de una finalidad acorde con los postulados intrínsecos del Amparo Mexicano y dificulta el acceso a la Justicia de la Unión; que la

obligación impuesta al quejoso de comparecer ante el juez de su causa hace nugatoria la protección de la garantía de libertad estatuida en el artículo 16 de la Ley Fundamental; que es necesario que los juzgadores de amparo realmente decreten de ser conveniente medidas de aseguramiento al quejoso para ponerlo a disposición del juzgador ordinario, en caso de que se le niegue el amparo solicitado, por todo ello, se propone la derogación del artículo 124 bis y segundo párrafo del 138, de la Ley de Amparo, ya que no existe razón jurídica para que solamente quienes puedan otorgar la garantía económica fijada por el Juez de Amparo tengan acceso a la protección de la Justicia Federal a través de la suspensión del acto reclamado, pues lo que debe de procurar el Juez de Amparo es que el quejoso se someta a las resultas del juicio de garantías, y que de no serle favorable quede a disposición de la autoridad que señaló como responsable; al conceder la suspensión del acto reclamado podrá entre otras medidas de aseguramiento decretar la comparecencia periódica del quejoso ante sí, prohibir que éste abandone determinado lugar, someterlo a la vigilancia de la fuerza pública, una vez que se entere del informe previo de la autoridad responsable, decretar aseguramiento precautorio de bienes del quejoso, pero no que para la concesión de la suspensión provisional previamente exhiba fianza, ya que en esos casos el Juez de Amparo prejuzga su culpabilidad. Además por lo que se refiere a la obligación que se le impone al quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o Ministerio Público, so pena que de no hacerlo dejará de surtir efectos la suspensión concedida, también debe de quitarse esa carga al quejoso, para evitar que a través del cambio de situación jurídica se convaliden actos que vulneran sus garantías constitucionales, pues no debe

crearse en la ley artificios o figuras jurídicas de que se valen las autoridades para sojuzgar a los gobernados.

Esto de ninguna manera quiere decir que los individuos a través del juicio de amparo burlarán la acción de la justicia, pues el cuarto párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo ya establece que "si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo", de donde al hacer una aplicación eficaz de dicho párrafo conforme a los lineamientos expuestos, puesto que si lo que se quiere es evitar que el quejoso se sustraiga al procedimiento penal, lo conveniente es que en la práctica los juzgadores de amparo decreten otras medidas ciertamente eficaces de aseguramiento de este último, como comparecencias obligadas y periódicas en lapsos de quince días ante el propio juzgador de amparo, vigilancia de la policía, prohibición de abandonar un lugar determinado, o salir de un radio territorial, sin autorización del juzgador de amparo, etcétera, con la prevención de que el incumplimiento de sus medidas generará la revocación de la suspensión concedida, pudiendo la autoridad responsable ejecutar el acto reclamado. Dentro de las formas para asegurar que el quejoso no se sustraerá a la acción de la justicia, no se necesita de garantías pecuniarias ni de que el quejoso comparezca ante el Juez de la causa o Ministerio Público, lo que de ninguna manera significa solapar o propiciar la impunidad de quienes pretenden burlar la acción de la justicia, el Juez de Amparo conforme al cuarto párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo, una vez

que resuelva el juicio de garantías, dejará a disposición de la autoridad señalada como responsable al quejoso, pero habiendo respetado sus garantías constitucionales.

Los preceptos transcritos, y principalmente el artículo 124 bis, genera la necesidad de determinar cual es el objeto y finalidad que se persigue con imponer al quejoso la exhibición de una garantía, cuyo contenido sin duda es pecuniario, teniendo en cuenta que el monto de esa garantía dificulta la obtención de la suspensión, y que por sí misma no evita que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia.

Los antecedentes de esta reforma a la ley de amparo de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, indican que originalmente fue planteada por el ejecutivo federal la posibilidad de que el quejoso otorgara una garantía pero para garantizar el monto estimado de la reparación del daño y de este modo salvaguardar los derechos de los ofendidos. Sin embargo el constituyente permanente no adoptó tal iniciativa sino que consideró que al resultar frecuentemente insuficientes las medidas para asegurar la presencia del quejoso en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, era necesario que para la concesión de la suspensión se otorgara una garantía, como un medio para evitar la sustracción del quejoso a la acción de la justicia. **(Francisco Salvador Pérez, Tomo II, páginas 900 a 926)**

---

Otra materia en que la suspensión trae graves problemas es en materia penal. Tradicionalmente en esta materia han habido las peores dificultades y para no remontarme mucho en el tiempo, hay que recordar una circular que, sin facultades, expidió hace, más o menos 50 años, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalándole a los jueces cuales eran los requisitos para otorgar suspensión en materia penal, instrucciones que después se integraron a la ley y cuya disposición general consiste en negar la suspensión, en tanto sea posible.

No es fácil solucionar el problema, porque es patente que muchos delincuentes tratan de promover un amparo y obtener la suspensión para impedir la detención y, en su momento pagarse pero también hay personas que por no ser delincuentes, no desean entrar en prisión. Considero que hay errores en la ley y hay errores en la concesión o negativa de la medida cautelar, en materia penal.

Es evidente que las Procuradurías quieran que estén en la cárcel todos los individuos que, de alguna manera, han estado relacionados con la comisión de un delito, tengan o no tengan responsabilidad. Además, cuando los delitos son escandalosos, la comunidad reacciona en contra del delincuente o del presunto delincuente, de aquél a quién los medios de comunicación, muchas veces inducidos por las Procuradurías, señalan como el delincuente. El resultado es que hay una especie de vindicta privada contra el señalado, todo lo cual puede comprenderse, pero no aprobarse. Y así se solicita del Juez su intervención, que debe tener valor para conceder la suspensión, en contra del clamor público.

De ese clima de vindicta, participan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En esas condiciones, de cualquier manera se pergeña una ley o la reforma de otra, para "hacer frente a la delincuencia" lo que, por otra parte, frecuentemente es inútil, porque la delincuencia no se termina con las leyes, se termina cuando los delincuentes son juzgados y sentenciados; pero si por mil y una razones la mayoría de los delincuentes en México están libres, son inútiles las reformas legales. Lo útil es la labor preventiva, eficiente, de los policías y de los agentes del Ministerio Público y, después de ellos, de los jueces; pero en relación con la suspensión en materia penal, se olvida que ésta tiene por objeto proteger uno de los bienes más preciados del hombre, como es su libertad y no se quiere ver que el juicio de amparo es para la protección de los derechos humanos.

Por las razones ante dichas, lo cierto es que la suspensión en materia penal puede decirse que no existe. En primer lugar, a partir de la circular mencionada, se le ha vinculado al proceso, a grado tal, que para conceder la libertad en la suspensión se tiene que sujetar a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, de la Constitución y a las leyes aplicables y, frecuentemente, la suspensión consiste, exclusivamente en que el solicitante de ella quede a disposición del Juez de Distrito en el lugar que éste señale y a disposición de la autoridad a quien corresponda conocer del procedimiento penal para su continuación.

Aquí cabe reflexionar:

El amparo es una institución cuya finalidad esencial es proteger los derechos del hombre y, entre ellos, uno esencial, cual es de la libertad física, es decir el que el hombre pueda entrar, salir, hacer o no hacer, libremente.

En el proceso penal, lo que se trata es de detener al posible delincuente con el fin de que sea juzgado y, en su caso, sentenciado. Obviamente los fines de ambas instituciones son antitéticos, pues mediante la suspensión en el amparo se trata de que quede en libertad el quejoso y en el proceso penal se pretende que quede encarcelado, salvo en delitos menores. En esas condiciones, no es fácil dar una solución adecuada; pero considero que tomando en consideración un principio, que en el proceso penal de México no se observa, que consiste en que todo el mundo es inocente, hasta que no se demuestre que es culpable, y tomando en consideración, también, otro principio que ahora no se toma en cuenta, que dice que más vale cien delincuentes en la calle, que un inocente en la cárcel, el Juez, atendiendo las circunstancias del caso es quien debe conceder o negar la suspensión a su arbitrio y podría pensarse en que se quitaran todos los requisitos que señala el capítulo de suspensión para concederla en materia penal, requisitos a que se refieren los artículos 130, 136 y 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que la suspensión, provisional o definitiva, siempre se conceda cuando los actos proceden del Ministerio Público o de autoridades distintas de las judiciales, tomando el Juez todas las medidas que estime prudentes para asegurar al quejoso.

Asimismo, si la suspensión se pide contra ordenes de los jueces penales, la suspensión también deberá concederse y el Juez deberá tomar



todas las medidas que estime pertinentes para que el quejoso no evada la acción de la justicia, medidas que pueden ser fianzas altas, vigilancia por la policía, firma diaria en el juzgado, etc.

Pudiera ser también que el juez concediera la suspensión para que el inculpado quedara a su disposición, pero no en los lugares de detención ordinarios, sino en un lugar específico, separado totalmente de aquellos dónde se encuentran a quiénes se les sigue un proceso, aunque esta solución tenga dificultades para llevarse al cabo, por la inexistencia de lugares adecuados.

Por último, y esto sí es indispensable, en el supuesto de que haya un proceso seguido contra el quejoso, deberá continuar siempre, por ello deberá comparecer el quejoso ante su Juez, requisito indispensable para que siga vigente la suspensión concedida.

Todo lo dicho tiene una razón: el proceso penal tiene sus reglas, el juicio de amparo las suyas. Aquel pretende la sanción, este la protección de los derechos del hombre. Y si así es, que el amparo siga protegiendo a los quejosos y, para que no se diga que es una manera de que los delincuentes huyan, pueden acudir a medios diversos: negar la suspensión provisional, si el Juez no tiene elementos suficientes para otorgarla y conceder la definitiva, una vez que cuente con el informe previo y, en todo caso, conceder o negar la medida cautelar a su prudente arbitrio, sin sujetar el juicio de amparo a las reglas del proceso. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1085 a 1089)**

---

Se proponen algunas reformas, las que se precisan en el apartado siguiente. No sin antes poner de manifiesto que todo lo anterior no es simplemente "Un ideal de justicia" o "Un sueño imposible", ya que la Política Criminal se ha encargado de hacer creer a la opinión pública que en la medida de la dureza de las penas habrá disminución del delito. Lo que visto a la luz de la realidad queda descubierto como falso. Yo se que esta propuesta, en principio y dada la creencia popular ya mencionada, se antoja descabellada y absurda porque surgirían las siguientes preguntas:

¿No se incrementará en progresión geométrica la delincuencia?  
¿Qué sucederá con la opinión pública? ¿Cuántas críticas se recibirán? etc.  
No obstante, ésta, que se antoja una simplísima propuesta, abriría realmente el camino hacia un derecho verdaderamente humano y auténticamente racional, despojado de la contaminación de la mencionada Política Criminal que obedece más a intereses de cúpulas Gubernamentales que a los fines de Derecho. Y en relación al resultado de poner en práctica la presente propuesta, seguramente, y muy lejos de las expectativas mencionadas, no pasaría nada. Es decir, ni se incrementaría la delincuencia, ni tampoco aumentaría la impunidad y mucho menos habría un caos social, porque ciertamente los índices delincuenciales se han incrementado gracias precisamente al pésimo sistema que se tiene de impartición de justicia, el que propicia que los indiciados que están siendo procesados se contaminen con los sentenciados y aunado a las familias de aquellos que caen en conductas antisociales dado que se va desarrollando

un odio, un rencor y un desprecio hacia la sociedad. Demostrar mi aserto implicaría un estudio de campo de un costo muy elevado y de mucho tiempo. Sin embargo, valdría la pena el detenerse, al menos un poco en mi propuesta y sus consecuencias para que mi objetivo estuviera cumplido. Es decir, estaría satisfecho con saber que hay intentos por crear legislación acorde con nuestros avances tecnológicos. Y si una vez estudiada mi propuesta no se aplicara a la nueva Ley de amparo, estaría convencido de que todavía nuestra sociedad no está preparada para estar bajo un Derecho Humano. **(Luis Angel Sánchez Albarrán, Tomo II, páginas 1126 y 1127)**

---

El artículo 138 quedará de la siguiente manera:

La suspensión se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, etc.

Como se puede observar se eliminó la locución : “En los casos en que la suspensión sea procedente” **(Luis Ángel Sánchez Albarran, Tomo II, páginas 1129 y 1130)**

---

La supresión del segundo párrafo, tiene como razón que la obligación de comparecer ante el Juez de Distrito que libró la orden de aprehensión, hace nugatorio el ejercicio de la acción constitucional, pues lleva indefectiblemente al sobreseimiento en el juicio.

Texto con modificación

ARTICULO 138.- En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

( Se suprime el segundo párrafo.) **(María Simona Ramos Ruvalcaba, Tomo II, páginas 1442 a 1444)**

---

ARTÍCULO 138. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2231)**

---

A reserva de ponernos a sus órdenes para ampliar estas propuestas y efectuar otras aportaciones, les manifestamos la profunda preocupación y grave inquietud en el foro y en el pueblo en general, la última reforma a la Ley de Amparo plasmada en el artículo 138, en cuanto a que obliga a los quejosos a comparecer dentro del término de tres días ante las responsables, después de habérseles concedido la suspensión en contra de la orden de aprehensión ya que esta situación puede dar lugar a arbitrariedades en contra de los solicitantes de la protección federal y de esta manera restringir mas todavía la eficacia de la suspensión en materia penal, que por cierto también se propone se revise, para devolverle su utilidad, máxime por tratarse del don maspreciado que los dioses han dado a los seres humanos, según Don Miguel de Cervantes Saavedra, pensamiento plasmado en el "Quijote de la Mancha". **(Román Díaz Vázquez, Tomo III, página 2292)**

---

Sabido es que se han realizado múltiples estudios, ensayos y hasta tratados referente a la suspensión del acto reclamado, por lo que la orden del Juez de Distrito, suspendiendo el acto reclamado no es otra cosa que un mandamiento de paralización en el proceso del desenvolvimiento del acto reclamado, por lo que la autoridad responsable que recibe tal orden del Juez Federal, no tiene que hacer en virtud de ella, absolutamente nada, simple y sencillamente debe dejar de actuar en el cumplimiento o ejecución del acto reclamado por lo que se puede decir que la autoridad responsable cumple con la suspensión provisional con el hecho de dejar de actuar positivamente o de abstenerse; siendo pertinente destacar que para la

procedencia de la suspensión se tiene que atender a la concurrencia de diversas circunstancias, unas de carácter material derivadas de la propia naturaleza del acto reclamado y otra de naturaleza legal emanadas de las leyes correspondientes que exigen la presencia de ciertas modalidades en el acto que motiva el amparo para que sea posible la suspensión del mismo.

Asimismo, a través de las reformas a la Ley de Amparo mismas que entraron en vigor el 09 nueve de febrero de 1999 mil novecientos noventa y nueve, específicamente en la adición en un segundo párrafo del Artículo 138 de la citada Ley y transcrito líneas arriba se dió un paso importante en relación con la suspensión del acto reclamado, toda vez que este establece la obligación al quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o del Ministerio Público cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal del mismo, y en caso de hacerlo dejará de surtir efectos la suspensión concedida.

Ahora bien la práctica ha demostrado que en relación con esta adición al citado Artículo, él mismo ha dejado ciertas deficiencias en el caso concreto cuando un Juez Jurisdiccional dicta una orden de aprehensión en contra de una persona y esta promueve un amparo señalando como acto reclamado la citada orden de aprehensión y la ejecución a la Policía Ministerial, una vez promovido él mismo, dentro de la suspensión provisional entre otras cosas se le condiciona a que se presente dentro de los tres días ante el Juez de la causa y que en caso de no hacerlo dejara de surtir efectos dicha suspensión, lo que trae como consecuencia la cumplimentación de la orden de aprehensión; pero resulta que la mayoría de las veces el quejoso no se presenta dentro de ese término establecido

por la Ley de Amparo y al no informarse al C. Juez Federal de la no presentación ante el Juez Jurisdiccional durante dicho término, al momento de llevarse a cabo la Audiencia Incidental, se le concede la Suspensión Definitiva y no obstante que se le vuelve a condicionar a que se presente dentro de los tres días ante el Juez Instructor, es pertinente destacar que entre el auto de la suspensión provisional y la resolución de la Audiencia Incidental la mayoría de las veces hay un margen superior a los tres días que señala el Artículo 138 párrafo segundo de la Ley de Amparo, por lo que sería conveniente que se hiciera un agregado al citado Artículo para el efecto de que fuera más explícito en el sentido de que el Juez de la causa le informe al C. Juez Federal si el quejoso se presentó o no ante el citado Juez Penal y se este en aptitud de al momento de llevar a cabo la Audiencia Incidental, de conceder o negar la suspensión definitiva, lo que traerá como consecuencia que haya uniformidad en los autos de la suspensión provisional dictado por los distintos Jueces Federales ya que algunos de ellos si hacen alusión en el sentido de que requieran al Juez Instructor para que se le informe si se presentó o no el quejoso dentro del plazo de los tres días y por el contrario otros Jueces Federales nada hacen mención al respecto.

Artículo 138.- En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejara de surtir efectos la suspensión concedida, debiéndose informar al C. Juez Federal, si el quejoso cumplió o no con la suspensión concedida. **(Miguel Angel Peña Guerrero, Tomo IV, páginas 2637 a 2640).**



**Artículo 139.** El auto en que un juez de Distrito conceda la suspensión surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero dejará de surtirlos si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado.

El auto en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la jurisdicción de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso revocare la resolución y concediere la suspensión, los efectos de ésta se retrotraerán a la fecha en que fue notificada la suspensión provisional, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo permita.

## **PROPUESTAS**

El estudio de los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, va encaminado a aquellos casos en donde la suspensión se otorga contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal y, para que surta efectos esta concesión el Juez de Distrito tiene la potestad de fijar las medidas de aseguramiento que considere pertinentes, entre las que se encuentran: El exigir al quejoso la exhibición de una garantía y el que se presente ante el Juez de la causa para la prosecución del procedimiento.

Por un lado, el artículo 139, primer párrafo, de la ley en comento, dispone que el auto en que un Juez de Distrito conceda la "suspensión" surtirá sus efectos desde luego; pero, dejará de surtirlos si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado; como se puede advertir, dicho numeral no especifica si ese término debe otorgarse en la suspensión "provisional" o en la "definitiva".

Por otro lado, el artículo 138 de la ley de la materia, en su segundo párrafo, que se adicionó precisamente el ocho de febrero de la presente anualidad (1999), establece que la suspensión concedida contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida.

En ese contexto, es incuestionable que resulta contradictorio que por una parte se constriña al quejoso para que comparezca dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y, de no hacerlo, se le sancione dejando sin efectos la suspensión; y, que al mismo tiempo se le conceda el término de cinco días para que dé cumplimiento a los requisitos que se le hayan impuesto al concedérsele la suspensión y si desacata tales disposiciones, deja de surtir efectos el beneficio otorgado.

Por tales motivos, se propone que se unifique el término que se impone al quejoso para comparecer ante la autoridad judicial o

administrativa que pretende afectarle de su libertad personal, así como el diverso término que se le impone para que exhiba la garantía correspondiente a la suspensión respectiva, pues de otra manera, se puede llegar a dar el caso de que esa suspensión deje de surtir sus efectos desde el momento mismo en que el peticionario de garantías no cumpla con la primera de las condiciones antes indicadas, sin importar que aún se encuentre transcurriendo el diverso término de cinco días que se le concedió para que exhibiera la garantía respectiva, lo cual haría nugatorio este último término. Así pues, la propuesta se encamina en el sentido de que se fije el término común de tres días para que se cumplan cada una de las condiciones antes apuntadas, partiendo de la base de que el artículo 139 de la Ley de Amparo, solamente hace referencia de que el cumplimiento de los requisitos que se exigen al quejoso para el otorgamiento de la suspensión, deben satisfacerse en el término de cinco días, sin hacer alusión alguna en torno al tipo de suspensión, esto es, a la provisional o definitiva; de ahí que, deba interpretarse que tal precepto se refiere propiamente a la suspensión definitiva.

De esa manera, se puede solucionar provisionalmente la duplicidad de términos que se fijan para satisfacer los requisitos que se imponen al otorgarse la suspensión provisional, quedando aún latente dicha problemática en torno a la suspensión definitiva, pues es obvio que se está en presencia de dos términos (de tres y cinco días), para el cumplimiento de diversos requisitos, cuya omisión trae como consecuencia que deje de surtir sus efectos la suspensión otorgada, en cuyo caso solamente se propone que al momento de imponerse los requisitos referidos anteriormente, se obligue a la autoridad responsable que inmediatamente informe sobre el

cumplimiento de la presentación del quejoso, pues así podría el Juez de Distrito darse cuenta sobre la necesidad de volver a imponer el cumplimiento de esa obligación y, como consecuencia de ello, evitar la duplicidad de términos.

Por otra parte, debe hacerse hincapié en que la duplicidad de términos que pudiera presentarse en torno a los requisitos o condiciones impuestas en el otorgamiento de la suspensión definitiva, es factible de evitarse en aquellos casos en que el quejoso haya cumplido con alguno de los dos requisitos antes apuntados, esto es, que haya exhibido la garantía fijada en la suspensión provisional o, en su caso, que se haya presentado ante la autoridad responsable, aunque la posibilidad de duplicidad de términos no desaparece absolutamente, porque al momento de otorgarse la suspensión definitiva puede darse la hipótesis de que ninguna de esas dos condiciones hayan sido cubiertas, lo cual ineludiblemente provoca que el juzgador imponga el cumplimiento de las mismas, pues al respecto solamente puede proponerse que se modifique el término que se consigna en cada una de tales exigencias. **(Mario Galindo Arizmendi, Tomo I, páginas 304 a 307)**

---

Sin embargo, aun cuando la redacción del párrafo citado de la Ley en comento no ha sido reformado desde su expedición, en la última década diversos Tribunales de Circuito han reinterpretado el momento en que surte efectos la suspensión. Se han pronunciado en el sentido de que, el artículo 139 referido, al utilizar el modo adverbial "desde luego", significa que es "inmediatamente", es decir, desde que el juez de Distrito resuelve sobre la

suspensión provisional o definitiva; o, en su caso, el Tribunal Colegiado cuando resuelve el incidente en revisión. Pues, lo que determina su obligatoriedad de la resolución, es el haberse concedido y no su notificación, por tratarse de una excepción al artículo 33 de la Ley de la Materia. Todo ello a la luz de una teoría que vela más porque se cumpla cabalmente con el objeto esencial de la medida cautelar, que es suspender, cuando proceda, el acto de autoridad que se estima violatorio de garantías.

Se arriba a la anterior conclusión con apoyo, entre otras tesis, en la publicada en la página 375, Tomo X, Diciembre de 1992, Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis establece:

SUSPENSION, EL AUTO EN EL QUE SE CONCEDE SURTE EFECTOS DESDE LUEGO, DE CONFORMIDAD CON EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 139 DE LA LEY DE AMPARO. POR LO TANTO, EL ACTO QUE SE EJECUTE CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE CONCEDIO LA MEDIDA CAUTELAR, ES VIOLATORIO DE LA MISMA Y DEBE DECLARARSE INEXISTENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EN LA FECHA EN QUE SE EJECUTO EL ACTO, LAS RESPONSABLES AUN NO HABÍAN SIDO NOTIFICADAS. El primer párrafo del artículo 139 de la Ley de Amparo, es claro y contundente al señalar el momento en que surte efectos la suspensión, pues establece; 'El auto en que un juez de Distrito conceda la suspensión surtirá sus efectos desde luego', disposición tajante, en virtud de que el legislador utilizó el modo adverbial 'desde luego', que significa 'inmediatamente, sin tardanza' (Diccionario de la Lengua Española, décima novena edición, 1970, página 821, bajo la voz 'luego... desde luego'), así resulta claro que el

momento en que surte efectos la suspensión es cuando, una vez solicitada la medida cautelar, o bien, si procede de oficio, el juez de Distrito o la autoridad que conozca del juicio, examinando las constancias que tenga, determina que la medida suspensiva procede, y dicta el acuerdo o resolución en el que ordena se mantengan las cosas en el estado que guardan. De esta manera, es en la fecha en que se dicta o emite el auto concediendo la suspensión (considerándose que el ideal es que sea la misma fecha en que se solicitó o que se reclamó la violación), cuando surte sus efectos paralizadores, debiendo ser acatadas por cualquier autoridad e incluso por cualquier persona que no obstante no teniendo el carácter de autoridad, tenga alguna ingerencia en la ejecución de los actos. En la práctica se presenta el problema de que el acuerdo o resolución en que se concede la suspensión, desafortunadamente ya no es notificado el mismo día en que se dicta, como fue el deseo del legislador sino que ahora media un tiempo, en ocasiones largo, entre la fecha del acuerdo en el que se concede la suspensión al quejoso, y la fecha en que se notifica éste a las autoridades responsables, sucediendo que en este lapso se llegan a ejecutar los actos suspendidos por el juez de Distrito, actos que son violatorios de la suspensión concedida, por haberse ejecutado con posterioridad a la fecha en que se emitió el auto de suspensión, por consiguiente, atendiendo a que la violación a la suspensión tiene dos consecuencias que son: el volver las cosas al estado que tenían al momento de decretarse la suspensión, y el determinar la responsabilidad en que incurre la autoridad que desató lo ordenado por un juez de Distrito, estas consecuencias pueden darse la una sin la otra, o bien, las dos juntas. Respecto a la primera consecuencia, esto es, el volver las cosas al estado que tenían al momento de decretarse la suspensión provisional,

encontramos dos requisitos: el primero, que la naturaleza del acto ejecutado lo permita, y el segundo, que respecto a dicho acto se haya concedido la suspensión definitiva, en el supuesto de que ésta ya se hubiere resuelto, como es el caso que nos ocupa, en virtud de que la suspensión definitiva va a sustituir a la provisional, dejándola sin efecto en el caso de que se niegue la medida cautelar en contra del acto suspendido con la provisional; el primer requisito de la especie si se da, toda vez, el acto ejecutado después de concedida la suspensión provisional, es la clausura del negocio de la quejosa, acto que por su naturaleza puede dejarse sin electos y ordenar el levantamiento del estado de clausura ejecutado cuando la quejosa ya disfrutaba de la medida cautelar concedida por la juez de Distrito. y el segundo requisito, relativo a que, de haberse resuelto sobre la suspensión definitiva, ésta se haya concedido por el acto cuya ejecución se reputa violatoria de la suspensión provisional, pues de negarse la definitiva, esto haría jurídicamente imposible volver las cosas al estado que tenían cuando se otorgó la provisional, también se surte, puesto que la juez a quo concedió la suspensión definitiva para el efecto de que no se clausure la negociación que defiende la quejosa. Por consiguiente, al darse los dos requisitos necesarios para que se actualice la primera consecuencia de resultar fundada la denuncia de violación a la suspensión provisional, consistente en que vuelvan las cosas al estado que tenían al decretarse la suspensión provisional, procede declarar inexistente la clausura ejecutada y ordenar que las cosas vuelvan al estado que tenían al decretarse la suspensión provisional. Por lo que hace a la segunda consecuencia que se deriva de la violación a la suspensión, consistente en determinar la responsabilidad en que incurre la autoridad que desacató lo ordenado por un juez de Distrito, no se da, es decir, no es el caso de determinar la

responsabilidad en que incurrieron las autoridades denunciadas, toda vez que, ésta no existe de conformidad con el artículo 206 de la Ley de Amparo, el cual señala que será sancionada la autoridad que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, lo que interpretado a contrario sensu significa que una autoridad que no se encuentra debidamente notificada de un auto de suspensión, al momento de ejecutar el acto suspendido o desobedecer lo ordenado en aquél, no será sancionada, esto es, no incurre en el delito de abuso de autoridad, por lo que de no darse exactamente los supuestos que prevé este numeral (que exista una suspensión concedida por el juez de Distrito, que esté debidamente notificada a la autoridad y que ésta la desobedezca), no es el caso de determinarle responsabilidad a esa autoridad, y en el caso a estudio no se dan los tres supuestos jurídicos mencionados, en virtud de que el acto violatorio de la suspensión provisional se ejecutó antes de que el auto que la concedió fuera debidamente notificado a las responsables. Es de concluirse que el hecho de que la autoridad ejecute un acto suspendido por un juez de Distrito, con desconocimiento de que existía tal medida cautelar con anterioridad a su ejecución, no impide que dicho acto se declare nulo de pleno derecho por ser violatorio de la determinación del juez de Distrito y se ordene volver las cosas al estado que tenían cuando se concedió la suspensión, pues el desconocimiento de la medida cautelar, por no haberse notificado legalmente a la autoridad denunciada, el auto suspensivo, sólo trae como efecto el salvar su responsabilidad para que no se le sancione, pero no el que subsistan los actos violatorios de la suspensión concedida.



En el mismo sentido, se emitió la tesis publicada en la página 573, Tomo II, Segunda Parte-21 de la Epoca y Semanario en consulta, que establece:

SUSPENSION PROVISIONAL. SURTE EFECTOS DESDE LUEGO Y NO HASTA QUE SE NOTIFIQUE EL AUTO EN QUE LA DECRETA. El artículo 139 de la Ley de Amparo, en su parte conducente dice: el auto en que un juez de Distrito concede la suspensión surtirá efectos desde luego. Por tanto, el hecho de que a la autoridad se le haya notificado la resolución que concede la suspensión provisional con posterioridad a la fecha en que ejecutó el acto que se le reclama, no la exime de su cumplimiento si la concesión de la de la suspensión provisional se decretó con anterioridad, pues lo que determina su obligatoriedad es el haberse concedido y no su notificación.

Similar criterio lo sostiene la tesis publicada en la página 283, Tomo VIII, Octubre de 1991, Epoca y Semanario referido, que es del tenor literal siguiente:

SUSPENSION EN EL AMPARO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 139, PARRAFO PRIMERO, EN RELACION CON EL 33, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 139, párrafo primero, de la ley de materia determinada que el auto en que un juez de Distrito concede la suspensión surtirá sus efectos desde luego, por lo que desde su fecha, las autoridades están obligadas a respetar la medida ya que el texto legal no sujeta su obligatoriedad a la notificación del auto respectivo. Lo que entraña una excepción al artículo 33 de la Ley de Amparo.

#### IV.- CONSIDERACIONES.

Así pues, cuando el juez de Distrito resuelve sobre la suspensión provisional, ésta debe notificarse de inmediato, y la definitiva a más tardar al día siguiente. Sin embargo, tratándose de la suspensión definitiva, la práctica general indica que ésta no es notificada en la fecha en que se decreta, sino que transcurren varios días, particularmente cuando la definitiva es resuelta por Tribunal Colegiado. Lo que resulta evidente cuando el Tribunal Colegiado y el Juzgado de Distrito no residen en la misma ciudad; y más aún cuando las responsables residen en una tercera ciudad. De modo de que entre el momento en que el Tribunal Colegiado resuelve revocar y conceder la suspensión definitiva, y la fecha en que se hace del conocimiento al Juez de Distrito, y éste a su vez lo comunica a la responsable, es notorio que transcurren varios días.

No presenta mayor problema determinar si hubo violación o no a la suspensión, cuando se ejecuta el acto reclamado en fecha posterior a aquella en que se decretó la suspensión. Sin embargo, si el acto suspendido se ejecuta en la misma fecha en que ésta se decretó, y la parte quejosa ocurre denunciando la violación a la medida cautelar, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado, al resolver la queja, no podrá determinar si se actualiza o no tal violación, porque no tiene los elementos para ello. Que en este caso es la hora exacta en que se concedió la medida referida. De ahí, que resulte conveniente incorporar ese dato adicional a la resolución respectiva, que es precisamente la hora en que ésta se decreta. Esto es necesario e importante para estar en posibilidades de determinar si se violó

o no la suspensión, y en su caso, proveer lo necesario, para retrotraer los efectos de la medida suspensiva.

Lo que además de ser útil y necesario, no resulta un problema práctico, pues los ordenadores o computadoras con que actualmente cuentan los órganos judiciales, contienen programas que generan documentos en formato ("machotes") a los que por sistema se pueden programar para que automáticamente agreguen la fecha y hora en que se generan.

Asimismo, resulta conveniente destacar, que la suspensión provisional y la definitiva surten sus efectos desde que se decreta, porque aún cuando la primera parte del primer párrafo del artículo 139 de la Ley de Amparo, dispone que el "El auto que conceda la suspensión, surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión"; no debe interpretarse en forma limitada a la suspensión definitiva, sino también a la provisional, ya que debe considerarse que éste precepto data desde que se publicó la Ley de Amparo (D.O.F. de 10 de enero de 1936), la cual no contemplaba el recurso de queja contra la suspensión provisional. Por lo que al adicionarle al artículo 95 de la ley de la materia, la fracción XI (publicada en el D. O. F. de 16 enero de 1984) que prevé el recurso de queja contra la resolución que concede o niega la provisional, debe ahora interpretarse el citado precepto 139 en forma extensiva, sistemática y en integración con la adición aludida; para concluir que los efectos a que hace referencia el artículo 139 mencionado, también debe considerarse que rigen para la provisional, pues ambas son medidas cautelares.

Por último, cabe advertir que el artículo 206 de la Ley de Amparo, señala que la autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionado en los términos que señala el Código Penal para el delito de abuso de autoridad; y que por ende, la medida cautelar solo surte efectos hasta que se notifique a la responsable; sin que ello signifique que la medida cautelar surte sus efectos cuando se notifica a la responsable, ya que ésta exigencia y su comprobación es sólo para responsabilizar a la autoridad que no obstante que conoce la medida suspensiva ejecuta el acto reclamado suspendido.

## V.- CONCLUSIONES

1.- Para que se cumpla cabalmente con la esencia de la suspensión, que consiste en detener la ejecución de los actos reclamados, cuando su naturaleza lo permita, debe precisarse el momento en que se decreta la medida cautelar. Tanto en la provisional como en la definitiva.

2.- Para precisar ese momento, en tales resoluciones debe agregarse la hora en que éstas se decretan.

3. Esa adición es necesaria para que el juez de Distrito o el Tribunal Colegiado, en su caso, puedan determinar si con la ejecución del acto suspendido en la misma fecha en que se decretó, se actualiza o no la violación a la de la medida suspensiva. Con independencia de que a la responsable no se le sancione por desacato, por no habersele notificado. **(José Luis Sierra López, Tomo I, páginas 443 a 451)**

**ARTÍCULO 139.** El auto en que un Juez de Distrito conceda la suspensión surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero dejará de surtirlos si el agraviado no cumple, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado; sin embargo, podrá cumplir con tales requisitos aún después de transcurrir el término de referencia, siempre y cuando no se haya ejecutado el acto reclamado por el quejoso.

El auto en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la jurisdicción de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso revocare la resolución y concediere la suspensión, los efectos de ésta se retrotraerán a la fecha en que fue notificada la suspensión provisional, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo permita. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2231 y 2232)

**Artículo 140. Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, el juez de Distrito puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento.**

### **PROPUESTAS**

Conforme a la Ley de Amparo, la suspensión puede ser provisional, definitiva y de plano, decretándose ésta de oficio y las otras a petición de la parte agraviada.

La suspensión de plano, por sus características, es equiparable a la definitiva que se decreta en el incidente de suspensión, pero sin que -aquella- esté sujeta al trámite incidental.

Tanto el auto que concede o niega de plano la suspensión del acto reclamado en el juicio de garantías binstancial, como el que resuelve lo de la provisional y la interlocutoria que decide la definitiva en el incidente de suspensión de dicho juicio así como el auto que determina esa medida precautoria en el amparo directo, pueden ser objeto de modificación o revocación con base en el hecho superveniente.

La suspensión definitiva es substanciada en la vía incidental y decidida en interlocutoria, por lo que la solicitud por la que se demande su revocación o modificación también debe tramitarse incidentalmente.

En cambio, la suspensión de oficio es decretada o negada de plano en el mismo auto en que se admite la demanda de garantías, sin estar sujeta a posterior ratificación; por tanto, la modificación o revocación que se demande de la misma por el hecho superveniente, debe decidirse de plano en un auto y no en la vía incidental.

Mientras que la suspensión provisional se concede o niega en el auto admisorio del incidente, por lo que su modificación o revocación también debe resolverse en un auto cuando sea planteada antes de dictarse la interlocutoria que decida lo de la definitiva o, una vez dictada, cuando se demande la modificación o revocación de ésta.

La suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo directo es determinada en un auto, sin que sea objeto de posterior ratificación o rectificación en audiencia o interlocutoria alguna, por lo que su modificación o revocación debe decidirse en un auto, sin substanciar incidente alguno.

#### **REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 140 DE LA LEY DE AMPARO, QUE SE PROPONE**

“Artículo 140.- Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, el juez de Distrito puede modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento; decidiéndose en los mismos términos en que el auto se haya emitido”. **(Victorino Rojas Rivera, Tomo IV, páginas 2656 a 2658).**

---

El texto que propongo, es el siguiente:

Art. 140.- “Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, el juzgador, previa vista a las partes, podrá modificar o revocar el auto o resolución en que haya concedido o negado la suspensión, siempre que se hagan de su conocimiento elementos, de hecho o de derecho, que así lo justifiquen”. **(Pedro Fernando Reyes Colín, Tomo II, página 755)**

---

ARTÍCULO 140. Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, el Juez de Distrito puede modificar o revocar el auto o resolución en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2232)**



**Artículo 141. Cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria.**

**Artículo 142.** El expediente relativo al incidente de suspensión se llevará siempre por duplicado. Cuando se interponga revisión contra la resolución dictada en el incidente, el juez de Distrito remitirá el expediente original al Tribunal Colegiado de Circuito que deba conocer del recurso, y se dejará el duplicado en el juzgado.

### **PROPUESTA**

ARTÍCULO 142. El expediente relativo al incidente de suspensión se llevará siempre por cuerda separada y por duplicado. Cuando se interponga revisión contra la resolución dictada en el incidente, \* ( se suprime) se remitirá el expediente original al Tribunal Colegiado de Circuito que deba conocer del recurso, y se dejará el duplicado en el juzgado de Distrito o en el Tribunal Unitario de Circuito para que se siga actuando en éste. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2232)

**Artículo 143.** Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se observarán las disposiciones de los artículos 104, 105, párrafo primero, 107 y 111 de esta ley.

Las mismas disposiciones se observarán, en cuanto fueren aplicables, para la ejecución del auto en que se haya concedido al quejoso su libertad caucional conforme al artículo 136.

### **PROPUESTAS**

Estos artículos que a continuación se citan tienen relación con el artículo 143 de la Ley de Amparo y son referentes a la denuncia de violación, a la suspensión provisional o definitiva, que considero se deben agregar.

Denuncia de violación a la suspensión.

Artículo 143 Bis. El expediente relativo al incidente de la denuncia de violación a la suspensión se llevará siempre por duplicado que se formará con copia de la demanda y del auto de suspensión provisional o resolución de la suspensión definitiva y demás constancias que se estimen necesarias. Cuando se interponga recurso de queja contra la resolución dictada en el incidente de violación, el juez de Distrito remitirá el expediente original al Tribunal Colegiado de Circuito que deba conocer del recurso, y se dejará el duplicado en el juzgado.

Artículo 143 Bis-1. La denuncia de violación a la suspensión provisional o definitiva deberá promoverse por escrito con copia para las partes dentro del término de tres días siguientes al de su conocimiento o de tal hecho.

Artículo 143 Bis-2. Las autoridades responsables deberán rendir su informe justificado sobre la denuncia de violación a la suspensión provisional o definitiva dentro del término de veinticuatro horas, acompañando las constancias que lo justifiquen.

Artículo 143 Bis-3. Transcurrido el mencionado término, si las partes no promovieran pruebas ni el tribunal las estimare necesarias, dentro de los tres días siguientes se citará a la audiencia de alegatos, la que se verificará, concurran o no las partes.

Y dentro del término de los cinco días siguientes el tribunal dictara su resolución.

Artículo 143 Bis-4. Si se declara fundada la denuncia de violación a la suspensión provisional o definitiva, se dará inmediatamente vista al agente del Ministerio Público adscrito, para los efectos de su competencia.  
**(Guillermo Arturo Medel García, Tomo II, páginas 1228 y 1229)**

---

Considero que los artículos que propongo pueden agregarse después de los artículos de la Ley de amparo que les anteceden, es decir se puede recorrer la numeración de los artículos de la Ley de Amparo sin que se

---

pierda el orden, a fin de que la nueva Ley de Amparo sea mas completa y clara en sus temas relativos.

El motivo que tiene el suscrito para hacer las propuestas señaladas obedece a que durante la función de juez de Distrito es necesario tener una Ley de Amparo que sea mas completa, clara y precisa, y mas acorde con la realidad y las materias que comprende, a fin de no estar aplicando tanto la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Finalmente considero que la redacción de la nueva Ley de Amparo al incorporar los artículos propuestos con la redacción señalada de acuerdo a la materia de amparo desde mi punto de vista, sería beneficio que incluyera mas capítulos y artículos que expliquen la forma y trámite de cada etapa procesal del juicio de amparo como se propone. **(Guillermo Arturo Medel García, Tomo II, página 1244)**

---

ARTICULO 138.- Párrafo único igual al párrafo primero del vigente artículo 143, se deroga el párrafo segundo, porque la propuesta es que los órganos de amparo ya no se pronuncien respecto de libertad cautional, lo que corresponde a la autoridad común. **(David Ancira Martínez, Tomo III, página 1931)**

---

La presente propuesta de Reformas a la Ley de Amparo, la baso específicamente en la modificación del artículo 143 y la inclusión del 143

bis, para que se regule lo relativo al incumplimiento de la suspensión en la Ley de Amparo.

Debo referirme por principio de cuentas que los Tribunales que conocen del Juicio de Garantías en la mayoría de los casos son los Juzgados de Distrito y la forma en que se regula actualmente el incumplimiento a la suspensión encuentra sustento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, mismo artículo que nos remite a lo concerniente a la inejecución de sentencias, situación que, evidentemente no regula pues en forma especial y directa la institución de la suspensión y trae como consecuencia que las autoridades que conocen del Juicio de Garantías realicen prácticas burocráticas para tramitar ese incumplimiento, con el consabido retardo al cumplimiento de la suspensión, ya que como lo exponen los artículos 104 y 105 párrafo primero, 107 y 111 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 143 antes citado, se advierte que si la autoridad responsable no cumple con el mandamiento de suspensión, deberá entonces requerirse a la responsable omisa, una vez hecha la solicitud por el quejoso para que en el término de veinticuatro horas informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión concedida al quejoso, siendo entonces que la autoridad que conoce del Juicio de Garantías deberá realizar los acuerdos correspondientes, girar los oficios respectivos y de no obtener respuesta en ese término de veinticuatro horas, requiere ahora a su superior jerárquico si lo tuviere, para que obligue al inferior a cumplir con la suspensión, y si pasadas veinticuatro horas no quedare cumplida se comisiona al Secretario o Actuario del Tribunal que conozca del Juicio de Garantías y en su caso el Juez o Magistrado cumplirán con el mandato de suspensión, lo que resulta en términos de tiempo grandes retrasos para

cumplir una suspensión en perjuicio grave del quejoso quien pretende mantener viva la materia del fondo del amparo.

Debe hacerse notar que no sólo el incumplimiento total de la suspensión puede traer consecuencias graves en perjuicio del quejoso y en cuyo caso la autoridad responsable debe hacerse acreedor a las sanciones correspondientes con iguales consecuencias si el cumplimiento fue tardío, por lo que se advierte la necesidad de que no quede impune la conducta lesiva de las autoridades responsables que con conocimiento de causa y con toda mala intención, retrasen el cumplimiento o incumplan la orden de suspensión, para lo cual no obstante la conclusión del juicio respectivo y a efecto de hacer una realidad y que no continúen como letras muertas las disposiciones contenidas en los artículos 206 de la Ley de Amparo, 215 y 225 del Código Penal Federal, se faculte al Juez o al Tribunal que conozca del Juicio para que de oficio o a petición de parte inicie el procedimiento respectivo en vía incidental, pudiéndose precisar esa facultad en un nuevo precepto como lo sería un artículo 143 bis.

Por lo antes expuesto me permito emitir mi modesta opinión, pues la institución de la suspensión es una de las partes del Juicio de Amparo tal vez de las más importantes por cuanto hace a su función, pues como se ha visto, tiende a mantener viva la materia del amparo en tanto se resuelve éste en lo principal, siendo entonces menester darle un medio procedimental para hacerla cumplir incluyéndose un incidente de violación a la suspensión que sirva de investigación para que en su caso y si resulta procedente el resultado, se remita a la Suprema Corte de Justicia para fincar responsabilidad a las responsables que no cumplieron en el mandato

de suspensión, siendo mi propuesta específica reformar el artículo 143 y adicionar un 143 bis de la Ley de Amparo bajo el siguiente formato:

143.- Una vez notificada la resolución que concede la suspensión, las responsables la cumplirán de inmediato en los casos que así lo requiera, o dentro de las veinticuatro horas siguientes cuando la naturaleza del acto lo permita; o encontrándose en vías de cumplimentación en caso contrario, de no hacerlo el tribunal de amparo que conozca del caso, requerirá de oficio o a instancia de parte al superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplirla sin demora, si no tuviere superior se requerirá a ésta directamente, y en caso de no obtener el cumplimiento de la suspensión, las autoridades requeridas, en su caso incurrirán en responsabilidad. Independientemente de lo anterior, la autoridad que haya conocido del juicio de garantías, podrá hacer cumplir la resolución de suspensión, cuando las órdenes dadas para ese efecto no fueren obedecidas, comisionando al Secretario o Actuario para que lo cumplimenten cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso el mismo Juez o el Magistrado designado por el Tribunal se constituirán en el lugar en que deba cumplirse, para ejecutada por sí mismos, pudiendo salir de su lugar de residencia, para ese efecto, bastando con dar aviso a la Suprema Corte tanto de su salida como de su regreso. Agotadas las medidas anteriores sin lograrse la cumplimentación de la suspensión, podrá pedirse el uso de la fuerza pública, o cualquier otro medio legal para hacerla cumplir.

En tratándose de la libertad personal, cuando la responsable se negare a cumplir o violare la suspensión, la autoridad que conozca del



juicio de amparo, mandará poner al quejoso en inmediata libertad, sin perjuicio de que aquella dicte después la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones darán debido cumplimiento a las órdenes que se les giren conforme a esta disposición.

143 bis.- En caso de incumplimiento o cumplimiento tardío, del auto de suspensión, el juez o tribunal que conozca del amparo, podrá decretar de oficio o a petición de parte la apertura del procedimiento de investigación en vía incidental, en el cual se oirá a las partes y en una sola audiencia se aportarán pruebas se formularán alegatos y se resolverá en un término no mayor de cinco días y en caso de encontrar responsabilidad en las autoridades que intervengan, se enviará el duplicado del incidente de suspensión y la resolución del incidente de cumplimiento, a la Suprema Corte de Justicia a efecto de fincar la responsabilidad correspondiente, conforme al artículo 206 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 215 penúltimo párrafo del Código Penal Federal. Lo anterior sin perjuicio de haberse resuelto sobre la suspensión definitiva en su caso así como el fondo del juicio de amparo. **(José Peña Reyes, Tomo IV, páginas 2672 a 2675).**

**Artículo 144. Las autoridades judiciales comunes, autorizadas por el artículo 38 de esta ley para recibir la demanda y suspender provisionalmente el acto reclamado, deberán formar por separado un expediente en el que se consigne un extracto de la demanda de amparo, la resolución en que se mande suspender provisionalmente el acto reclamado, copias de los oficios o mensajes que hubiesen girado para el efecto y constancias de entrega, así como las determinaciones que dicten para hacer cumplir su resolución, cuya eficacia deben vigilar, en tanto el juez de Distrito les acusa recibo de la demanda y documentos que hubiesen remitido.**

### **PROPUESTA**

Por último, congruente con la proposición de que se elimine la jurisdicción concurrente, deberá eliminarse el artículo 144. ( **Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1092**)

## Capítulo IV

### De la substanciación del juicio

**Artículo 145.** El juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.

### PROPUESTAS

ADICIONAR UN SEGUNDO Y TERCER PARRAFOS AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

“ARTICULO 145.....

Asimismo, se desechará de plano la demanda, cuando un Juez de Distrito ante quien se haya promovido un Juicio de Amparo tenga conocimiento fehacientemente por cualquier medio, de que otro y otros han conocido de juicios promovidos por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre y representación, en contra de los mismo actos reclamados, respecto de los cuales existan sentencias ejecutoriadas.

Para este efecto, se darán a conocer al quejoso los datos relativos, previniéndolo en los términos del Artículo 146 y si no hiciere las aclaraciones conducentes, se procederá al desechamiento, imponiéndose al propio quejoso la sanción que señala el Artículo 211, Fracción I.”

## MOTIVO

La propuesta esta vinculada con lo expuesto en relación a la adición al artículo 17 y permitirá evitar estas practicas que van en detrimento de la Justicia Federal. **(Armando Díaz Olivares, Tomo I, páginas 94 y 95)**

---

Adicionalmente, en otro aspecto revestido de excesiva formalidad, la ley obliga a la exhibición de copias, y el incumplimiento de esa disposición podrá traer como consecuencia el que se tenga por no interpuesta la demanda o el recurso. Tan es excesiva esa exigencia, que la propia ley exceptúa de esa obligación a los promoventes en los casos del amparo penal y el amparo agrario, según se advierte de los artículos 168, segundo párrafo; 221 y 229. **(Sergio Pallares y Lara, Tomo I, página 490)**

---

Adicionar un segundo párrafo al artículo 145, en los siguientes términos:

Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.

No obstante lo anterior el juez, de oficio, deberá regularizar el trámite cuando advierta que en lugar de un nuevo juicio de amparo procede un recurso, y adoptará las medidas pertinentes para tramitar el medio de

impugnación que sea procedente. (Sergio Pallares y Lara, Tomo I, páginas 493 y 494)

---

Sería bueno que se aclarara en función de los criterios jurisprudenciales existentes, lo que debe entenderse por manifiesta e indudable improcedencia, pues en algunos casos en los que existe los jueces no cumplen lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, y en otros casos que no existe la autoridad judicial desecha la demanda. (Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1659)

---

ARTÍCULO 145. El Juez de Distrito o el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2233)

---

ARTÍCULO 145.- El juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, también podrá desecharla si advierte que notoriamente el acto reclamado no es inconstitucional. (Salvador Bravo Gómez, Tomo V, página 31)

**Artículo 146 . Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.**

**Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado, el juez de Distrito tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso.**

**Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, el juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según fuere procedente.**

## **PROPUESTAS**

Respecto de la anterior tesis, opinamos que tanto la Ley de Amparo, como la jurisprudencia del Poder Judicial Federal, deben armonizarse con la legislación fiscal, ya que existe suplencia de la queja obligatoria u oficiosa, en el supuesto del artículo 212, segundo párrafo, del Código Fiscal, en el sentido de que cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio contencioso administrativo no fuese señalada por el actor como demandada, de oficio se le correrá traslado de la demanda para que la conteste en el plazo de 45 días.

Por lo antes expuesto, consideramos muy acertad y justa la siguiente tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.- Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión

de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si señala o no como responsable a la referida autoridad y, de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición.

2ª. XXIV/96

Amparo en revisión 340/96.- Transportes Aguascalientes, S.A. de C.V.- 15 de marzo de 1996.- Cuatro votos.- Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, por estar integrando la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, en virtud de la designación del Tribunal Pleno.- En su ausencia hizo suyo el proyecto el Ministro Genaro David Góngora Pimentel.- Secretaria: Adela Domínguez Salazar.

Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, abril de 1996, pp. 204 y 205.(Gregorio Sánchez León, Tomo I, páginas 14 y 15)

---

Muchos jueces de Distrito mandan aclarar las demandas de amparo por cuestiones que sólo tienen que ver con aspectos relacionados con el

---



incidente de suspensión, lo que es objetivamente correcto, pero lo indebido es que aperciben al promovente con tener la demanda por no interpuesta para el caso de incumplimiento. Nada más injusto.

Ejemplo: el juez apercibe al quejoso con no admitir el libelo para el caso de que éste no exprese el monto de las pensiones rentísticas, lo que, dice aquél, servirá para poder fijar la garantía para la suspensión en caso de que proceda.

Afirmo que es incorrecto el proceder del juzgador porque más valdría al quejoso no solicitar la medida si lo único que pasaría sería, en el peor de los casos, que se le lanzara del inmueble, pero si obtuviera en el fondo se le restituiría en la posesión. Esto es, podría llegar a serle favorable la sentencia aun sin incidente de suspensión.

Así, pues, debería existir un artículo en el capítulo de la suspensión que estableciera que cuando se ordena la aclaración de una demanda de amparo por cuestiones referentes a dicha medida, no se abrirá el incidente respectivo, mas no tener a aquélla por no interpuesta.

Corroboran lo que afirmo las dos tesis visibles en la novena época del semanario citado, la primera en el tomo III, abril, página 377, y la segunda en el tomo VIII, septiembre, página 1157, que en su orden dicen:

"DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. NO DEBE LLEVARSE A CABO SI EL QUEJOSO NO CUMPLE CON EL APERCIBIMIENTO QUE SE LE HAGA, A FIN DE QUE PRECISE PARA

**QUE EFECTOS SOLICITA LA SUSPENSIÓN.-** El artículo 146, de la Ley de Amparo, en modo alguno sanciona que debe tenerse por no interpuesta la demanda de garantías, cuando la parte quejosa, no establezca en la misma, en forma clara y precisa cuestiones relativas tanto de la suspensión provisional como de la definitiva, pues es claro que tales cuestiones de manera alguna se encuentran enunciadas en los artículos 116 y 146 de la ley de la materia; cuenta habida de que tampoco incide en la precisión del acto reclamado, y menos aún respecto a las copias que señala el artículo 120 de la Ley de Amparo, hipótesis éstas a que se refiere el artículo 146 del ordenamiento legal en cita" y, **"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA DEFICIENCIA DE ALGUN DATO RELACIONADO CON EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, NO ES MOTIVO PARA TENERLA POR NO INTERPUESTA SI EL QUEJOSO NO CUMPLIO CON LA ACLARACIÓN** - De la lectura de los artículos 116, 120 y 146 de la Ley de Amparo, no se advierte que la deficiencia de algún dato para solicitar la suspensión del acto reclamado sea uno de los requisitos formales e indispensables de la demanda de garantías. Es por ello que si un Juez de Distrito requiere al promovente para que aclare su libelo respecto de datos que tienen que ver con dicha medida al no ser éstos de trascendencia, aquél no debe tener por no interpuesto el referido libelo". (Jorge Figueroa Cacho, Tomo I, páginas 398 y 399)

---

Adicionalmente, en otro aspecto revestido de excesiva formalidad, la ley obliga a la exhibición de copias, y el incumplimiento de esa disposición podrá traer como consecuencia el que se tenga por no interpuesta la demanda o el recurso. Tan es excesiva esa exigencia, que la propia ley

exceptúa de esa obligación a los promoventes en los casos del amparo penal y el amparo agrario, según se advierte de los artículos 168, segundo párrafo; 221 y 229. (Sergio Pallares y Lara, Tomo I, página 490)

---

Suprimir del artículo 146 las siguientes partes:

Párrafo primero: o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120 .

Párrafo segundo: o no presentare las copias. (Sergio Pallares y Lara, Tomo I, página 494 )

---

Más de 180 juzgados de Distrito en la República Mexicana ocupan casi la mitad de su tiempo y de sus recursos humanos y materiales en el trámite de juicios de amparo promovidos contra órdenes de detención o de aprehensión atribuidas a autoridades no judiciales como son, entre otros, los procuradores de justicia, los agentes del Ministerio Público y los directores de policía, así como la ejecución de tales órdenes que con frecuencia se reclaman de decenas de cuerpos policiacos.

Este trabajo implica, como en todos los juicios de amparo, la recepción, registro y análisis de la demanda, la formación del expediente principal y del incidente de suspensión, el dictado y notificación de cinco o más acuerdos que deben hacerse del conocimiento, de una considerable cantidad de autoridades, sobre todo en lugares donde la zona

metropolitana está formada con varios municipios, como los casos de Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, entre otros.

Sin embargo, rara vez encontraremos una demanda con la que se persiga realmente una seria declaración de inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues en casi la totalidad de los casos a los promoventes no les interesa una sentencia que generalmente es de sobreseimiento, ni la resolución interlocutoria en la que casi siempre se niega la suspensión definitiva de los actos. Lo único que pretenden es obtener una "protección rápida", a través de la suspensión de los actos reclamados, con la esperanza de que esa situación perdure el mayor tiempo posible.

#### **SOLUCIÓN QUE SE PROPONE:**

Las reformas al artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal y de los artículos 123 y 146 de la Ley de Amparo, fundamentalmente, así como del 39, 89 y 117 para precisarlos, aclararlos o adecuarlos.

Estas reformas darían lugar a lo siguiente:

**ELIMINACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SOLO ENTRATÁNDOSE DE LOS ACTOS ALUDIDOS.** Para ello se sugiere decretar la suspensión de plano, oficiosamente, en el auto inicial, tomando las medidas de aseguramiento del quejoso, toda vez que el artículo 130 de la Ley de Amparo establece en su último párrafo la obligación de conceder la suspensión provisional siempre que se trate de la restricción de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, sin que dicho precepto exija el

cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 124; por tanto no existe obstáculo para decretarla oficiosamente. Además, el mismo hecho de presentar una demanda contra éste tipo de actos genera la presunción de que implícitamente se pide la suspensión.

LA ELIMINACIÓN DE LA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO Y DE LA DECLARACION DE EJECUTORÍA EN ESTOS CASOS. Pues es sabido de todos los juzgadores federales, que resultan ser trámites inútiles, ya que a ninguna de las partes les interesan y sí, en cambio, ocasionan junto con el incidente, un gran gasto de recursos humanos, materiales y económicos que pueden emplearse mejor en los trámites y resoluciones que sí sean importantes.

Para esto se propone que antes de la admisión de la demanda se abra y registre un expediente auxiliar y se dicte un acuerdo decretando oficiosamente la suspensión, en el mismo auto se requerirá a las responsables y al promovente para que en el plazo de cinco días aquéllas informen solo sobre la existencia o inexistencia de los actos y en el mismo plazo el promovente podrá aportar prueba documental o el testimonio de dos personas para acreditarlo. Si se acredita la existencia del acto se admitirá la demanda; si no, se tendrá por no interpuesta.

IRRECURREBILIDAD DEL AUTO INICIAL EN COMENTO. Sugiero que no se reformen los artículos 83 y 95 ni los relativos a éstos, ya que el auto a que se refiere el inciso anterior deberá ser irrecurrible, pues su naturaleza y la transitoriedad del mismo hacen impráctico un medio de defensa en su contra. En cambio, el promovente presentará nuevamente su

demanda cuando realmente existan los actos que reclama. (José Luis Rodríguez Santillán, Tomo I, páginas 590 a 592)

---

Aprovechando la oportunidad de las reformas, debe formalizarse la existencia de los expedientes auxiliares; en este caso se propone como una adición interlineal en el párrafo primero del artículo 146.

La eliminación de la parte final del Segundo párrafo y de todo el tercer párrafo del artículo 146 se debe a la conveniencia de excluir de la materia penal la regla por la que se tiene por no interpuesta una demanda de amparo, pues no tiene aplicación práctica, dado que de conformidad con el artículo 117 dicha demanda de amparo penal no requiere para su trámite, en estos casos, más que el señalamiento de las autoridades, los actos y la exhibición de las copias. Además en la práctica el litigante prefiere la presentación de una nueva demanda en lugar de aclarar la irregular, aprovechando que no tiene límite de tiempo para su presentación.

En cuanto al artículo 146 bis, deben tenerse por reproducidos los motivos expuestos a propósito de la reforma constitucional que se propone.

reforma

ARTÍCULO 146.- Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; si se hubiere omitido en ella algunos de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el

artículo 12 el juez de distrito ordenará la formación y registro de un expediente auxiliar y mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos haga las aclaraciones que corresponda o presente las copias dentro del término de tres días expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.

Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado, el juez de distrito tendrá por no interpuesta la demanda.

(Se deroga el resto del artículo vigente. pero se adiciona un artículo 146 bis, con el texto siguiente:)

**ARTÍCULO 146 BIS.-** Cuando se reclame una orden de aprehensión atribuida solo a autoridades distintas de las judiciales. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda se formará expediente auxiliar.

Decretando de plano la suspensión del acto reclamado para el efecto de que el quejoso no sea detenido. sin perjuicio de que se haga la consignación correspondiente, y en el mismo auto se requerirá tanto a las responsables como a promovente, para que en el plazo común de cinco días aquéllas informen sobre la certeza del acto y éste presente documentos o dos testigos que acrediten la existencia del mismo. Contra este acuerdo no procede recurso alguno.

En el momento en que el promovente presente los testigos el juez de distrito se cerciorará de la identidad de ellos y los interrogará sobre el lugar, tiempo y circunstancias en que tuvieron conocimiento de la existencia de la orden de aprehensión reclamada.

Si las responsables niegan el acto y el promovente no prueba su existencia, la demanda se tendrá por no interpuesta, quedando sin efectos la suspensión decretada. En cambio, la omisión del informe o su presentación extemporánea, además de sancionarse en términos del artículo 149, tercer párrafo, ocasionará la presunción de certeza del acto.

Dicha presunción, o la aceptación expresa del acto, o el acreditamiento de su existencia, darán lugar a la admisión de la demanda y al trámite establecido por esta ley, incluyendo el incidente de suspensión y el requerimiento de los informes previo y justificado.

No se aplicará lo dispuesto en este artículo en los casos en que la privación de libertad se haya llevado a cabo antes de la presentación de la demanda. **(José Luis Rodríguez Santillan, Tomo I, páginas 599 a 604)**

---

Hay casos, y son frecuentes, en que en los Juzgados de Distrito se mande aclarar la demanda por requisitos distintos de los señalados en el artículo 146 de la Ley de Amparo y hay ocasiones en que se puede pensar, ante la repetición constante de las aclaraciones de demanda, si el Juez no ésta apostando a que no se satisfaga la prevención, para desechar la promoción y no tener que tramitar los amparos. Y si esto es así cabría en el

---



artículo 146 expresar, de alguna manera, que la demanda sólo podrá mandarse aclarar cuando no se satisfagan algunos requisitos del artículo 116 o que no se hubiera precisado el acto reclamado o no se hubieren exhibido las copias correspondientes y que, fuera de estas tres hipótesis, en ninguna otra pudiera mandarse a aclarar la demanda.

Congruente con la proposición de que se elimine al Ministerio Público como parte, deberán suprimirse el párrafo tercero del artículo 146 y el párrafo segundo del artículo 157. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1067)**

---

DE LA DEMANDA. Los Jueces de Distrito tienen la obligación legal de proteger al gobernado que es la víctima de atropellos y abusos por parte de las autoridades por lo que proponemos que la demanda inicial ya sea por escrito, por comparecencia o vía telegráfica y que cumpla con los requisitos mínimos tratándose de actos que señala el artículo 22 constitucional se aplique la suplencia de la queja a favor del quejoso y no se le hagan prevenciones que retarden la protección de la justicia federal que solicita. Por lo que respecta al artículo 117 se propone reformar el último párrafo, que la demanda pueda formularse por comparecencia ante cualquier funcionario del juzgado y no únicamente ante el juez sin menoscabo de su autoridad, esto es, con la finalidad de hacer más rápida y expedita la protección de la justicia federal a favor de quien lo solicita en comparecencia y no cargarle el trabajo al juez, de igual forma se deben plantear los requisitos y efectos que deba contener la comparecencia. Cabe señalar que también proponemos adicionar el artículo 118 solicitando que

se utilicen los medios modernos de comunicación independientemente del telégrafo como son: el fax, el correo electrónico, los cuales harían más rápida la pronta y eficaz protección de la justicia federal a favor del gobernado toda vez que los tiempos modernos así lo requieren. **(Reynaldo Herrera Aké, Tomo II, páginas 1282)**

---

Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo prevé que el Juez puede requerir al promovente cuando exista alguna irregularidad en la demanda de garantías; sin embargo, no existe un precepto específico que regule la ratificación de escritos en general y específicamente sobre el desistimiento de la instancia constitucional. **(Emilio Alberto Hassey Domínguez, Tomo III, página 1607)**

---

Por lo que hace a la vista que se debe dar al MP, reitero mi opinión consistente en que la participación de esa institución en el juicio de garantías no es justificable, salvo los casos en que el MP fue parte en el juicio del que emana el acto reclamado y entonces ese MP es el que debe comparecer al juicio de amparo en su calidad de tercero perjudicado, pues como quejoso no puede hacerlo ya que en el procedimiento del que emana el acto reclamado actuó como autoridad, por lo que no puede ser titular de la acción de amparo. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1659 y 1660)**

---

Párrafo segundo.- Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado, se mandará dar traslado al Ministerio Público por igual término y en vista de lo que exponga, admitirá o en su caso tendrá por no interpuesta la demanda. **(David Ancira Martínez, Tomo III, páginas 1931 y 1932)**

---

ARTÍCULO 146. Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.

Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado, el Juez de Distrito tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso.

Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, el

Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según fuere procedente. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2233 y 2234)**

---

Proponemos que se reforme el artículo 146, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 146.- Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta Ley; si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.

Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciera las aclaraciones conducentes el Juez de Distrito tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso.

(...)

Cuando al interponerse el escrito de demanda no se acompañen copias de la misma de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 120, no será obstáculo para su admisión en cuyo caso el Juez oficiosamente mandará

sacarlas a costa del promovente. (Fidel Ortega Escobedo, Tomo IV, página 2715).

---

Artículo 146.-

....

En los juicios de amparo promovidos por las entidades o individuos que especifica la fracción IV del artículo 22, no será obstáculo para la admisión de la demanda la falta de copias, en cuyo caso el Juez oficiosamente mandará sacarlas. (Gilberto J. Hershberger Reyes, Tomo IV, página 2730).

---

ARTÍCULO 146.- Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda, si se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley, si no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el juez de Distrito mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corresponda, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.

Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones conducentes o no presentare las copias dentro del término señalado, el juez de Distrito tendrá por no interpuesta la demanda, cuando

el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso.

Cuando el juez deseche la demanda o la tenga por no interpuesta, deberá comunicar tal circunstancia a las autoridades responsables.

Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, el juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según fuere procedente. **(Salvador Bravo Gómez, Tomo V, página 32)**

**Artículo 147. Si el juez de Distrito no encontrare motivos de improcedencia, o se hubiesen llenado los requisitos omitidos, admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá informe con justificación a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda al tercer perjudicado, si lo hubiere; señalará día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, y dictará las demás providencias que procedan con arreglo a esta ley.**

**Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado al pedirle informe previo.**

**Al tercero perjudicado se le entregará copia de la demanda por conducto del actuario o del secretario del juzgado de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en que éste se siga; y, fuera de él, por conducto de la autoridad responsable, la que deberá remitir la constancia de entrega respectiva, dentro del término de cuarenta y ocho horas.**

### **PROPUESTAS**

**Un nuevo juicio de amparo.**

**Por ágil que sea el juicio de amparo indirecto, lo cierto que en tanto se emplaza al o a los terceros y se reciben las pruebas, pasa cierto tiempo, y**

aun cuando la suspensión puede impedir los daños que cause el acto reclamado, hay casos en que es posible dictar sentencia sin tener que esperar a la audiencia y a todas las formalidades del que podríamos llamar procedimiento ordinario.

Ocorre que hay actos de autoridades administrativas, como las ordenes de clausura; de autoridades judiciales, como la imposición de los medios de apremio o las ordenes de aprehensión o arraigo y en estas hipótesis u otras similares, a la presentación de la demanda podría enviarse de inmediato a un Secretario ante la responsable para oírla, tomar nota de las constancias pertinentes y dar fe de la existencia del acto reclamado y, con ello dar cuenta al Juez, para que dictara sentencia de inmediato.

No ignoro que un amparo de este tipo tiene grandes dificultades, que serían las siguientes:

El amparo sólo procedería por actos concretos, en una enumeración cerrada.

Un procedimiento con reglas simples, que podrían ser:

\* Una demanda, incluso por comparecencia, con documentos que acrediten interés jurídico y personalidad, en su caso, del promovente. Podría aceptarse que se precisara donde se encuentran los documentos, que podrían estar con la responsable u otras autoridades y de los que podía dar su fe.



\* Una visita de inspección para examinar todo lo referente al acto reclamado y para que la responsable sea oída, justificándose o justificando su acto.

\* Dar a conocer al Juez el resultado de la inspección, para que este dicte resolución inmediatamente.

\* Un recurso de queja de 24 horas.

\* Si de la inspección resultara imposible que se dictara sentencia, se tramitaría el amparo por la "vía ordinaria".

Un amparo de este tipo requiere, como requisito esencial, un personal honrado, muy capaz, que sólo conozca de este tipo de juicios y podrá – incluso – pensarse en juzgados especializados, lo que implicaría, además de la inclusión de este tipo de juicios en el artículo 107, fracción XII, de la Constitución, (fracción que deberá desaparecer, por las razones que adelante se expresan) la redacción del título y capítulos que se requieren en la Ley de Amparo y la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.

Finalmente, quiero insistir en que el éxito de este tipo de juicios descansa en un personal capaz y muy experimentado, que pueda valorar los hechos de inmediato y obtener conclusiones acertadas.

Por último, en donde pueden presentarse juicios en los que sea útil un procedimiento como el que se menciona, es en la materia administrativa, por lo que en los juzgados de Distrito Administrativo podría crearse una

sección que los atendiera. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1043 a 1045)**

---

Este artículo que a continuación se cita tiene relación con el artículo 147 de la Ley de Amparo, y se refiere al emplazamiento.

Artículo 147 Bis. El emplazamiento al tercero perjudicado tendrá por efecto hacerle saber que cuenta con nueve días hábiles, aumentados con los que correspondan por razón de la distancia, para que se apersona y ofrezca pruebas y alegatos si lo estima conveniente. **(Guillermo Arturo Medel García, Tomo II, página 1230)**

---

Considero que los artículos que propongo pueden agregarse después de los artículos de la Ley de amparo que les anteceden, es decir se puede recorrer la numeración de los artículos de la Ley de Amparo sin que se pierda el orden, a fin de que la nueva Ley de Amparo sea mas completa y clara en sus temas relativos.

El motivo que tiene el suscrito para hacer las propuestas señaladas obedece a que durante la función de juez de Distrito es necesario tener una Ley de Amparo que sea mas completa, clara y precisa, y mas acorde con la realidad y las materias que comprende, a fin de no estar aplicando tanto la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Finalmente considero que la redacción de la nueva Ley de Amparo al incorporar los artículos propuestos con la redacción señalada de acuerdo a la materia de amparo desde mi punto de vista, sería beneficio que incluyera mas capítulos y artículos que expliquen la forma y trámite de cada etapa procesal del juicio de amparo como se propone. **(Guillermo Arturo Medel García, Tomo II, página 1244)**

---

En el tercer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo se establece la posibilidad de que cuando el tercero perjudicado no residiere en el mismo lugar en donde se encuentra radicado el juicio, se le entregue copia de la demanda por conducto de la autoridad responsable, la que deberá remitir la constancia de entrega dentro del término de 48 horas.

Tal disposición no parece del todo adecuada, en virtud de que da lugar a numerosos diferimientos de la audiencia constitucional con el consecuente retraso en la administración de justicia, aunado a que no todas las autoridades responsables tienen su domicilio en la misma localidad donde radica el Tercero perjudicado.

Por ello, se propone que en todos los casos como el expuesto, se realice la notificación al tercero perjudicado por correo certificado con acuse de recibo, o por exhorto dirigido al Juez de Distrito del lugar de su residencia. **(Olga Hernández Espíndola, Tomo III, página 2069)**

---

ARTÍCULO 147. Si el Juez de Distrito o el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito no encontrare motivos de improcedencia, o se hubiesen

llenado los requisitos omitidos, admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá informe con justificación a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda al tercer perjudicado, si lo hubiere; señalará día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, a más tardar dentro del término de treinta días, y dictará las demás providencias que procedan con arreglo a esta ley.

Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado al pedirle informe previo.

Al tercero perjudicado se le entregará copia de la demanda por conducto del actuario o del secretario del Juzgado de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en que éste se siga; y, fuera de él, por conducto de la autoridad responsable, la que deberá remitir la constancia de entrega respectiva, dentro del término de cuarenta y ocho horas. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2234)

---

Con la finalidad de evitar que se promuevan juicio de amparo con el único propósito de impedir que la autoridad competente cumpla con sus atribuciones, como por ejemplo, de no permitir que permanezcan vehículos de origen extranjero que se encuentran ilegalmente en el territorio nacional, es práctica reiterada que los quejosos señalen en la demanda de amparo infinidad de "supuestas" autoridades responsables, lo que a su vez, se traduce en una innecesaria generación de informes previos y justificados rendidos por las autoridades administrativas que indebidamente fueron

mencionadas por la parte quejosa, que conlleva pérdida de tiempo, horas hombre, recursos materiales y gastos innecesarios para la Administración Pública Federal; se propone que el Juez de Distrito, en ejercicio de sus atribuciones y conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo así como a la Jurisprudencia emitida por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir el auto admisorio de la demanda de amparo, precise qué autoridades administrativas, de las mencionadas en la demanda de amparo, tiene el carácter de autoridades responsables.

Lo anterior, en nuestra opinión, evitaría que el juicio de amparo sea utilizado como un instrumento para tratar de alcanzar un fin no justificado legalmente y, además el que se soliciten informes previos y justificados a autoridades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones, no podrían llevar a cabo los posibles actos autoritarios señalados como actos reclamados.

Redacción propuesta para el artículo 147:

"Artículo 147. Si el Juez de Distrito no encontrare motivos de improcedencia o se hubiesen llenado los requisitos omitidos, admitirá la demanda y en el mismo auto, precisará, de las autoridades responsables señaladas por la quejosa, quién tiene ese carácter y pedirá informe con justificación a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda al tercero perjudicado, si lo hubiere; señalará día y hora para la celebración de la audiencia a más tardar dentro del término de treinta días, y dictará las demás providencias que procedan con arreglo a esta Ley.

.....  
.....”  
.....

(Diego Tinoco Ariza, Tomo IV, páginas 2670 y 2671).

---

Con esta adición se pretende que las partes conozcan con certidumbre la fecha en que se presentó la demanda de garantías por parte del quejoso, a fin de conocer si la misma se interpuso dentro de los términos legales que establece la Ley de Amparo.

#### Reforma

ARTICULO 147. Si el Juez de Distrito no encontrare motivos de improcedencia, o se hubiesen llenado los requisitos omitidos, admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá informa con justificación a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda al tercer perjudicado, si lo hubiere; señalará día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, y dictará las demás providencias que procedan con arreglo a esta ley.

Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda, sino se hubiese enviado al pedirle informe previo.

Al tercer perjudicado se le entregará copia de la demanda por conducto del actuario o del secretario del juzgado de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en que éste se siga; y, fuera de

él, por conducto de la autoridad responsable, la que deberá remitir la constancia de entrega respectiva, dentro del término de cuarenta y ocho horas.

En todo caso, se deberá remitir a las partes en el juicio, un tanto del escrito inicial de demanda en la que consten la fecha en que se presentó así como de los anexos correspondientes. **(Juan José Paullada Figueroa, Tomo V, páginas 279 y 280)**

**Artículo 148.** Los jueces de Distrito o las autoridades judiciales que conozcan de los juicios de amparo, con arreglo a esta ley, deberán resolver si admiten o desechan las demandas de amparo dentro del término de veinticuatro horas, contadas desde la en que fueron presentadas.

### **PROPUESTAS**

Aridos litigios desvían la atención de las partes y de los propios jueces del amparo, en tan sólo determinar si una causa propuesta debe ser o no tramitada en los procedimientos de amparo, desvirtuándose así el objetivo fundamental de esta significada institución del derecho positivo mexicano, llegándose al extremo de substanciar dilatadas contiendas sin que ahí se estudie o resuelva sobre cuestiones substanciales, de las que realmente resultan importantes a las partes, pero principalmente a la justicia, todo esto con excesivos gastos del erario público sin ninguna utilidad para la eficacia plena del derecho; de ahí que se propone la reforma del artículo 148 de la ley de amparo en los siguientes términos:

"Artículo 148.- sin perjuicio de que en su oportunidad procesal los jueces de distrito, en su caso, decreten la improcedencia o sobreseimiento del juicio de amparo, deberán en todo caso y dentro del término de veinticuatro horas, contadas desde la en que fueron presentadas, admitir y tramitar en sus términos, las demandas de amparo". (Jesús González Moreno, Tomo III, página 1806)



ARTICULO 143.- Los Jueces de Distrito deberán resolver sobre la admisión o desechamiento de una demanda, dentro de veinticuatro horas contados desde que se presentó o se desahogó o satisfacción la prevención. **(David Ancira Martínez, Tomo III, página 1932)**

**Artículo 149. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días, pero el juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia.**

**Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.**

**Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su**

**constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.**

**Si la autoridad responsable no rinde informe con justificación, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, el juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de salario. No se considerará como omisión sancionable, aquélla que ocurra debido al retardo en la toma de conocimiento del emplazamiento, circunstancia que deberá demostrar la autoridad responsable.**

**Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta por el juez de Distrito siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.**

### **PROPUESTAS**

El artículo 149 es incongruente, por una parte otorga 5 días para que las autoridades rindan el informe justificado, plazo que puede , duplicarse pero, por otra, permite que pueda presentarse el informe con justificación hasta 8 días antes de la fecha de la audiencia y posteriormente, se dispone que si el informe no se rinde en esos plazos, será tomado en cuenta por el Juez de Distrito, siempre y cuando las partes tengan oportunidad de conocerlo, lo que podrán hacer solicitando el diferimiento de la audiencia.

En conclusión, las autoridades pueden rendir su informe con justificación hasta minutos antes de la audiencia, que se diferirá para que lo conozcan las partes. Y esto es lo que ocurre usualmente. Y si esto es así ¿para que fijar plazos? bastará con decir que el informe deberá rendirse hasta antes de la audiencia constitucional y que si las partes no han tenido oportunidad de conocerlo, la audiencia deberá ser diferida, corrigiéndose así la incongruencia del precepto.

En cuanto al párrafo que se refiere a las multas, propuse con anterioridad que todos los preceptos que se refieran a multas se envíen a un capítulo especial. En este párrafo, que es el cuarto del artículo 149, hay otra incongruencia: se afirma que no se sancionará la no rendición del informe, si hay retardo en el emplazamiento lo que deberá demostrar la autoridad responsable, lo que es inútil porque el retardo del emplazamiento va a resultar de las constancias de autos, pues en ellas aparece la fecha del auto admisorio de la demanda; la fecha en que deberá celebrarse la audiencia constitucional y, finalmente, la fecha en que se emplazó a la autoridad responsable, lo cual se sabe mediante el sello que se recaba al emplazar, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Amparo.(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1068)

---

Enmienda.

MISMO TEXTO HASTA DONDE DICE: "...SE PRESUMIRÁ CIERTO EL ACTO RECLAMADO", DEROGÁNDOSE EL RESTO DE DICHO PÁRRAFO.

SE PROPONE COMO NUEVA REDACCIÓN EN EL LUGAR DE LA PARTE QUE SERÁ DEROGADA:

...Y VIOLATORIO DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.

Motivos.

LA DOCTRINA Y LA LEGISLACIÓN SON UNIFORMES EN EL SENTIDO DE QUE, CUANDO EL DEMANDADO DEJA DE CONTESTAR, COMO CONSECUENCIA DE SU OMISIÓN, SE PRESUMEN CIERTOS LOS HECHOS.

EN EL AMPARO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES ENJUICIADA Y LA LEY REGLAMENTARIA LA OBLIGA A JUSTIFICAR SUS ACTOS, ELLA ES QUIEN ESTÁ CONSTREÑIDA EN LA NECESIDAD JURÍDICA DE PROBAR QUE OBRÓ DENTRO DE LA LEY, ES DECIR RESPETANDO EL ORDEN CONSTITUCIONAL, DE NINGUNA MANERA SE PUEDE TRASLADAR ESA OBLIGACIÓN AL QUEJOSO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE PUEDA APORTAR PRUEBAS Y DEMOSTRAR LA PROCEDENCIA DE SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE JUSTIFICAR SUS ACTOS.

CONSECUENTEMENTE, ANTE LA FALTA DEL INFORME JUSTIFICADO SE ESTÁ ADMITIENDO QUE EL ACTO DE LA AUTORIDAD ES VIOLATORIO DE LA CONSTITUCIÓN, PORQUE LA DEMANDA DE AMPARO SE DEBE ESTUDIAR COMO UN TODO Y NO SE PUEDE TRAZAR UNA LÍNEA DIVISORIA ENTRE CADA UNO DE SUS CAPÍTULOS POR QUE EXISTE UNA RELACIÓN DE NECESIDAD ENTRE

ELLOS. RESULTA CONTRARIO AL SENTIDO JURÍDICO, QUE ANTE LA FALTA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ACTOS DE LA RESPONSABLE, SE ARROJE LA CARGA DE LA PRUEBA AL QUEJOSO.

DESDE OTRO PUNTO DE VISTA, LA OBEDIENCIA DEBIDA A LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD, QUE NO PUEDE ACTUAR SINO ÚNICAMENTE COMO LO MANDA LA LEY, IMPONE LA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE RENDIR SUS INFORMES, PORQUE SANCIONAR A LA RESPONSABLE CON UNA SIMPLE MULTA, CONSTITUYE UN DESPRECIO A LA SUPREMA MAJESTAD DE LA LEY, UN DESACATO A LOS JUECES FEDERALES Y UNA REITERACIÓN DE LA VIOLACIÓN A LA CONSTITUCIÓN, DENTRO DEL MISMO JUICIO CREADO PARA PRESERVARLA. (Fidencio Ramírez y Fidel Herrera Beltrán , Tomo II, páginas 1160 a 1162)

---

El artículo citado establece en el párrafo cuarto que el juicio de amparo puede ser resuelto aún cuando la autoridad responsable no haya rendido su informe con justificación y faculta al Juez de Distrito para imponer una multa de diez a ciento cincuenta días de salario a la autoridad omisa. Con respecto a ello, se estima que los juicios de amparo deben ser resueltos teniendo como base la existencia o inexistencia en su caso de los actos reclamados y no la presunción de certeza de éstos, derivada de la omisión de la responsable de rendir su informe. Por lo tanto, a fin de lograr la debida y pronta integración de los juicios de amparo, se considera pertinente modificar el artículo en el párrafo aludido y conceder al Juez de Amparo la facultad de imponer sanciones más severas a la prevista,

pudiendo incluso proceder en contra de la omisa por el delito de desobediencia en caso negarse a rendir el informe. **(Emilio Alberto Hassey Domínguez, Tomo III, página 1608)**

---

A pesar de que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal es la herramienta procesal que tiene el gobernado para impugnar las violaciones constitucionales en que incurran las autoridades, curiosamente esa ley en su artículo 149 viola la garantía de equidad prevista en el artículo 17 constitucional, ya que prácticamente le da a la responsable la oportunidad de rendir su informe, que constituye la contestación a la demanda, en cualquier momento, por lo que no hay equidad entre el término fatal que tiene el quejoso para presentar su demanda, y el que tiene la responsable para contestarla en su informe, a pesar de que en todos los procedimientos judiciales e incluso administrativos seguidos en forma de juicio, el término para contestar la demanda es fatal.

En estas condiciones es urgente que se remedie esa situación de inequidad y se dé un término fatal a las responsables para que rindan su informe justificado, máxime que su falta, con independencia de la sanción económica, tan sólo da lugar a que se tengan por ciertos los actos pues el quejoso está obligado a probar su inconstitucionalidad, a menos que el acto de autoridad viole directamente la constitución, pero en todo caso la violación deberá acreditarse con los conceptos de violación, que es la parte más técnica de la demanda. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1660)**

---

Artículo 116, 166, 149, 131 y 149. Que se establezca en la ley la posibilidad de presentar demandas de amparo, informes con justificación, informes previos o notificaciones, por medio de correo electrónico, más ahora que ella está legitimada la firma digital, acompañando las copias de los actos por este medio (scanner). **(Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, página 1793)**

---

**IMPRORROGABILIDAD DE LOS PLAZOS.** Que se establezca expresamente que los plazos para la rendición sean improrrogables, a efecto de no retardar la celebración de las audiencias y los fallos respectivos. Estableciendo con toda precisión las causas por las que se pueda diferir, suspender o aplazar una audiencia, y por qué plazos. El plazo para rendir el informe con justificación debería ampliarse a quince días, ya que ese es el plazo de la quejosa para presentar su demanda de garantías. **(Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, página 1793)**

---

"artículo 149.- .....

Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañarán en forma obligatoria copia certificada de todas las constancias que obren en su poder, ofreciendo además las pruebas que estimen necesarias para apoyar su informe.



La autoridad responsable estará, en todo caso, bajo su estricta responsabilidad, a emitir su informe con justificación dentro de los términos señalados para ello.

Si la autoridad responsable no rinde su informe con justificación, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, se dará vista al ministerio público para los efectos del capítulo II del título quinto de esta ley.

.....". (Jesús González Moreno, Tomo III, páginas 1814 y 1815)

---

9.- En el artículo 149, podría establecerse expresamente que la autoridad responsable rinda su informe con justificación hasta antes de la hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional, como lo establece la Jurisprudencia, a fin de actualizar así una práctica que es común en los Juzgados de Distrito, estableciéndose al efecto que entre la fecha de notificación del auto que lo solicite y la celebración de la audiencia debe mediar un plazo no menor de diez días. (Olga Hernández Espíndola, Tomo III, página 2069)

---

En los casos de los Amparos Administrativos, en donde no está de por medio ni la vida, ni la integridad física, ni la libertad de las personas, se considera prudente conceder a las Autoridades Administrativas un plazo mayor para rendir sus informes correspondientes en el Juicio de Amparo.

Esto se pone de manifiesto, ya que de acuerdo a la organización, carga de trabajo e imprevistos que pueden presentarse a las Autoridades en materia Administrativa consideradas como Responsables para efectos del Juicio de Garantías, y con la finalidad de estar en posición de poder rendirlos sin ningún tipo de presión que pueda afectar la forma o el fondo del contenido de tales informes, o en su caso de no poder desahogar los requerimientos formulados por la Autoridad Federal, se sugiere un término para rendir el Informe Previo de TRES DIAS y un término para rendir el Informe Justificado de DIEZ DIAS, son cuestiones procesales que en nada perjudicarían a las partes en el Juicio de Amparo y sí beneficiaría la igualdad y la equidad procesal, considerando que el quejoso, para interponer su demanda de garantías, cuenta con un término de 15 días, 90 días o en cualquier tiempo, dependiendo la violación que recaiga al quejoso.

En tales circunstancias se considera procedente reformar los artículos 131 y 149, contemplados en el Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, De la suspensión del acto reclamado, de la Ley de Amparo, que establecen:

ARTICULO 149.- " Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días, pero el Juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el Juez podrá diferir o suspender la audiencia según lo que proceda, a

solicitud del quejoso o del tercer perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia..."

Para quedar de la siguiente forma:

ARTICULO 149.- " Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de diez días, pero el Juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el Juez podrá diferir o suspender la audiencia según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercer perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia..." (Alma Araiza Hernández, Tomo IV, páginas 2297 a 2299).

---

En cuanto al artículo 149 de la Ley se propone la siguiente redacción: Las autoridades responsables están obligadas a rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días, pero en todo caso lo rendirán cuando menos ocho días antes de la audiencia para que los quejosos se enteren de su contenido y puedan aportar pruebas. Si no se rinden los informes oportunamente, en todo caso el juez con apoyo en el artículo 78 del mismo ordenamiento debe recabar oficiosamente pruebas, que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto.

Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañarán en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.

Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación cuando menos ocho días antes de la audiencia constitucional, o lo haga, sin remitir en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, el juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de salario. No se considerará como omisión sancionable aquélla que ocurra debido al retardo en la toma de conocimiento del emplazamiento, de acuerdo con las constancias de notificación respectivas. **(Mario Gómez Mercado, Tomo IV, páginas 2680 y 2681).**

---

Artículo 149.-

...

En el caso de que los promoventes sean núcleos agrarios o ejidatarios o comuneros en lo individual, las autoridades responsables deberán rendir sus informes dentro del término de diez días, que el Juez de Distrito podrá ampliar por otro tanto, si estimare que la importancia del caso lo amerita.

**Artículo 149 Bis.-** En los amparos en que los quejosos sean núcleos agrarios o ejidatarios o comuneros en lo individual, los informes justificados deberán expresar:

**I.** El nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo hay;

**II .** La declaración precisa respecto a si son o no ciertos los actos reclamados en la demanda o si han realizado actos similares o distintos de aquéllos, que tengan o puedan tener por consecuencia negar o menoscabar los derechos agrarios del quejoso;

**III.** Los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad se hayan ejecutado o que se pretendan ejecutar,

**IV.** La fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas; así como los actos por virtud de los cuales hayan adquirido sus derechos los quejosos y los terceros. **(Gilberto J. Hershberger Reyes, Tomo IV, página 2731).**

---

Se amplía el plazo para que las autoridades responsables rindan su informe justificado, equilibrando así las cargas procesales de las autoridades con las de las otras partes.

Se releva de la obligación de exhibir constancias a las autoridades que hayan negado la existencia del acto reclamado, por razones de imposibilidad material y jurídica.

### Propuesta

Art. 149 Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de diez días, pero el juez podrá ampliarlo hasta por otros diez si estimara que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia.

Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación exponiendo, en su caso, las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, y acompañarán, de ser cierto el acto reclamado, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. (Francisco Moreno y Gutiérrez, Tomo IV, páginas 2752 a 2754).

---

No obstante que la Ley de Amparo señala que el informe con justificación se debe de rendir dentro de los cinco días siguientes a su

notificación o en caso extraordinario diez días, se ha recurrido a la práctica de rendirlo minutos antes de la celebración de la Audiencia Constitucional, para el caso de quejosos que no tienen práctica procesal en los usos, se encuentren en estado de indefensión al no solicitar el diferimiento de la Audiencia Constitucional, y cuando se tiene el cuidado de solicitar el diferimiento vienen los problemas de interpretación respecto de la oportunidad para el ofrecimiento y preparación de las pruebas pericial, testimonial, y ahora últimamente la documental.

El término para rendir el informe en consecuencia debe ser fatal porque como se da en la práctica no hay igualdad procesal puesto que solamente para los quejosos y en su caso terceros interesados si hay preclusión.

Por eso debe tenerse especial cuidado en que este informe se rinda en el término oportuno para ello y que de lugar a que si no se rindió, el Juez de Distrito determine la sanción que se hizo acreedora la autoridad responsable, pero lo más importante sepan el quejoso y en su caso los terceros interesados, la carga procesal probatoria que tienen, ya que queda a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinan la inconstitucionalidad.

Un informe rendido fuera de término no debe ser tomado en consideración ni desde luego las pruebas que se anexan al mismo. **(Javier Herrera Anaya, Tomo V, páginas 202 y 203)**

---

Art. 149. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término perentorio de cinco días contados a partir del siguiente en que sean notificados pero el Juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco días si se estimará que la importancia del caso lo amerita.

En el informe con justificación se expondrán las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado por la improcedencia del juicio, y acompañarán en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.

Si la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.

El juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de salario a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación, o lo haga sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

El informe con justificación rendido fuera de tiempo no surtirá efecto legal alguno. **(Javier Herrera Anaya, Tomo V, páginas 206 y 207)**



Art. 149. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término perentorio de cinco días contados a partir del siguiente en que sean notificados pero el Juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco días si se estimará que la importancia del caso lo amerita.

En el informe con justificación se expondrán las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado por la improcedencia del juicio, y acompañarán en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.

Si la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.

El juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de salario a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación, o lo haga sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

El informe con justificación rendido fuera de tiempo no surtirá efecto legal alguno. **(Javier Herrera Anaya, Tomo V, páginas 206 y 207)**

Se propone que el término de la autoridad responsable para rendir el informe justificado se distinga:

I.- Las autoridades responsables deberán de rendir su informe con justificación dentro del término de diez días.

II.- La multa se imponga cuando la autoridad incurrió en la omisión de rendir si respectivo informe pero no cuando el mismo sea presentado extemporáneo o sea antes o después de la celebración de la audiencia constitucional.

III.- Se faculte al juez dejar sin efecto su determinación en cuanto a la imposición de la multa a la autoridad responsable, cuando el informe con justificación no haya llegado al Juez, por causas no imputables a dicha autoridad.

Lo anterior obedece, a que el término que señala el propio precepto para rendir el informe que es de cinco días, resulta muy corto, ya que en ocasiones no es imputable a la propia autoridad el rendir el mismo con la debida oportunidad.

Por lo que se propone que dicho precepto deberá de señalar que para la rendición del informe justificado de diez días y en caso de omisión de las autoridades para rendir el mismo, antes de imponer la sanción que contempla el citado precepto debe comprobar fehacientemente que verdaderamente se incurrió en tal omisión antes o después de celebrada la

audiencia. Pues de lo contrario la autoridad responsable tendrá que interponer el recurso que en derecho corresponda, dicho medio retrasa el procedimiento al remitirse los autos para la substanciación del aludido recurso al Tribunal Colegiado correspondiente.

## **Reforma**

**ARTICULO 149.-** Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de diez días, pero el Juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estima que la importancia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menso ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipación, el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercer perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia.

Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, y acompañarán, en su caso, copias certificadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.

Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario quedando a cargo de los quejosos de los hechos que determinen su

inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.

Si la autoridad responsable no rinde informe con justificación, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, el Juez de Distrito le impondrá, en la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de salario. No se considerará como omisión sancionable, aquellas que ocurra debido al retardo en la forma de conocimiento del emplazamiento circunstancia que deberá demostrar la autoridad responsable y únicamente se hará efectiva la multa cuando la autoridad incurrió en la omisión de rendir su respectivo informe pero no cuando el mismo sea presentado en forma extemporánea, es decir, momentos antes o después de la celebración de la audiencia constitucional o hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva.

Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la Ley para ello, será tomado en cuenta por el Juez de Distrito siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.

En dado caso, antes de que se multe a las autoridades responsables, el Juez de Distrito les solicitará a éstas que informen inclusive a través de la vía facsimilar, si el informe de mérito fue rendido con antelación al dictado de la audiencia constitucional, a fin de acreditar si existió o no la mala fe. **(Juan José Paullada Figueroa, Tomo V, páginas 280 a 283)**

**Artículo 150.** En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho.

## **PROPUESTAS**

Después del artículo 150 de la Ley de Amparo se propone aumentar un capítulo V relativo a los documentos públicos y privados, que sería el siguiente:

### **CAPÍTULO V**

#### **DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS**

**Artículo 1.** Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.

**Artículo 2.** Los documentos públicos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y Territorios, o de los Municipios, harán fe en el juicio, sin necesidad de legalización.

Artículo 3. De la traducción de los documentos que se presenten en idioma extranjero, se mandará dar vista a la parte contraria, para que, dentro de tres días, manifieste si está conforme, si lo estuviera o no contestare la vista, se pasará por la traducción; en caso contrario, el tribunal nombrará traductor.

Artículo 4. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 1.

Después del artículo 150 también se propone aumentar otro capítulo VI referente a la prueba que sería el siguiente:

## CAPÍTULO VI

### PRUEBA

Artículo 150 Bis. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquiera persona sea parte o tercero y de cualquier cosa y documento ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones de que las pruebas estén reconocidas o permitida por la ley, y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.

Los tribunales no tienen límites extemporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las

limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes.

Artículo 150 Ter. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo sea cual fuere la naturaleza del asunto, la práctica, repetición o ampliación de cualquiera diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos en la práctica de esas diligencias obrarán como lo estimen procedente, para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes, y procurando en todo su igualdad. **(Guillermo Arturo Medel García, Tomo II, páginas 1230 a 1232)**

---

Considero que los artículos que propongo pueden agregarse después de los artículos de la Ley de amparo que les anteceden, es decir se puede recorrer la numeración de los artículos de la Ley de Amparo sin que se pierda el orden, a fin de que la nueva Ley de Amparo sea mas completa y clara en sus temas relativos.

El motivo que tiene el suscrito para hacer las propuestas señaladas obedece a que durante la función de juez de Distrito es necesario tener una Ley de Amparo que sea mas completa, clara y precisa, y mas acorde con la realidad y las materias que comprende, a fin de no estar aplicando tanto la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Finalmente considero que la redacción de la nueva Ley de Amparo al incorporar los artículos propuestos con la redacción señalada de acuerdo a

la materia de amparo desde mi punto de vista, sería beneficio que incluyera mas capítulos y artículos que expliquen la forma y trámite de cada etapa procesal del juicio de amparo como se propone. **(Guillermo Arturo Medel García, Tomo II, página 1244)**

---

**PRUEBAS DE CONFIDENCIALIDAD.** En aquellos documentos aportados ante la autoridad responsable con el carácter confidencial, los Tribunales Federales estarán restringidos por ley para hacerla del conocimiento a las demás partes, responsabilizándose al juez o magistrado de mantenerla en secreto y no integrarla al expediente. **(Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, página 1793)**

---

El precepto citado, esto es el artículo 150 de la ley de amparo, adolece de una falta de técnica legislativa, ya que los medios probatorios deben de señalarse expresamente en el texto de la ley, y si se trata de un código adjetivo, es menester que se indique todas y cada una de las formalidades procedimentales, precisando la forma, términos de su ofrecimiento; así como de su aceptación o admisión y la manera de desahogar las probanzas legalmente.

En efecto en los artículos 151, 152, 153, 154, 155, de la ley de amparo en forma ostensiblemente vaga y genérica hace referencia a algunos medios de pruebas, como son: la documental; testimonial; pericial; la de inspección ocular. pero omite deliberadamente señalar otros medios probatorios como son la prueba instrumental; la de reconocimiento de



documentos en cuanto a su contenido y firma, la de fama publica; la de presunciones en su doble aspecto legal y humano las científicas, esto es todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, como son las fotocopias, fotografías, videos, discos magnéticos; notas taquigráficas, etc.

Lo anterior nos lleva a la necesaria consideración de que se elabore una nueva ley de amparo y propongo incluir en la iniciativa de ley que se presentara en términos del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un capítulo de procedimientos para regular los medios probatorios de que dispondrán las partes en el juicio constitucional de amparo y que tendra a precisar todos y cada uno de los medios probatorios, en sus diversas fases como son el ofrecimiento, admisión, desahogo, debiendo establecerse una relación con los puntos de antecedentes, hechos y conceptos de violación contenidos en la demanda de garantías.

También se recomienda que exista un sistema jurídico procesal respecto de la valuación de las pruebas, de tal manera que haya un conocimiento mas exacto de los medios de convicción, tanto para el juzgador como para las partes contendientes.

### **Objetivo**

Las anteriores consideraciones, tiene como finalidad que se cumpla con el principio de prontitud y expedites en la administración de justicia, a que hace mérito el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, sin necesidad de acudir supletoriamente a otros tipos de ordenamientos procesales que son diferentes en cuanto a la naturaleza jurídica del juicio constitucional de garantías que regulan los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, antes invocada. (Julio César Ramírez López, Tomo III, páginas 1976 y 1977)

---

Del estudio de los referidos artículos se desprende que no existe la unificación de los criterios para el desahogo y valorización de las pruebas en especie dentro del juicio de amparo bi-instancial, lo que provoca la liberalidad en materia de pruebas. Esto es, que las autoridades responsables que conocen de las pruebas ofrecidas al momento de valorarlas utilizan un criterio discrecional y apreciativo sin sujetarse a reglas determinadas dejando atrás la realidad de la eficacia probatoria consignada expresamente en la misma ley para observar, valorar y aplicar las pruebas ofrecidas por los contendientes.

En virtud de lo anterior, debe incluirse un capítulo específico que reglamente el ofrecimiento, admisión y valoración de las pruebas aportadas por las partes, con la finalidad de que los jueces al momento de resolver en definitiva los juicios de amparo normen su criterio de acuerdo a las disposiciones que se agreguen a la nueva Ley de Amparo.

Propuesta:

TITULO TERCERO. Prueba

CAPITULO I Reglas generales

CAPITULO II. Documentos públicos y privados

CAPITULO III. Prueba pericial

CAPITULO IV. Reconocimiento o inspección judicial

CAPITULO V. Prueba testimonial

CAPITULO VI. Fotografías, y todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia

CAPITULO VII. Presunciones

CAPITULO VIII. Valuación de la prueba. **(Eduardo Macías Garrido, Tomo III, páginas 2002 y 2003)**

---

Proponemos que se adicione un capítulo dentro el libro primero, título primero relativo a las pruebas en el que se incluyan el tipo de pruebas admisibles en el juicio de garantías, así como los términos de ofrecimiento y desahogo de las mismas así como su valoración por el juzgador. **(Fidel Ortega Escobedo, Tomo IV, página 2716).**

---

La autoridad que no remita las copias certificadas a que se refiere este artículo, será sancionada con multa de veinte a ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. En caso de que subsista la omisión no obstante el requerimiento del Juez, la multa se irá duplicando en cada nuevo requerimiento.

En los juicios a que se refiere el párrafo primero de este artículo, además de tomarse en cuenta las pruebas que se aporten, la autoridad judicial deberá recabar de oficio todas aquellas que puedan beneficiar al

quejoso. Además deberán acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

La autoridad que conozca del amparo resolverá sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados tal como se hayan probado, aun cuando sean distintos de los invocados en las demanda, si en este último caso es en beneficio de los núcleos de población o de los ejidatarios o comuneros en lo individual. **(Gilberto J. Hershberger Reyes, Tomo IV, página 2732).**

---

Artículo 150. El informe con justificación, los escritos de los terceros perjudicados (terceros interesados) y demás comunicaciones que tengan que hacerse cuando el Juez de Distrito resida en lugar diferente de la autoridad responsable o de los terceros, se presentará ante el Juzgado de Distrito de su domicilio quien tendrá la obligación de hacerlos llegar al Juez del conocimiento certificando previamente el día y hora de presentación. **(Javier Herrera Anaya, Tomo V, página 207)**

**Artículo 151. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.**

**Quando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial.**

**Al promoverse la prueba pericial, el juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por separado.**

**Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales.**

**La prueba pericial será calificada por el juez según prudente estimación.**

### **PROPUESTAS**

La Ley de Amparo, que en el mismo artículo 107 de la Constitución es señalada como su ley reglamentaria, en ninguna parte alude al Tribunal Unitario de Circuito respecto a su competencia en los casos que de esa fracción VII le corresponde, pues el artículo 114 de dicha ley, refiriéndose a tales casos, señala únicamente al juez de distrito ante quien se pedirá el amparo, y en cuanto a la tramitación del juicio, que también indica la propia fracción VII, que se reglamenta en los numerales 151 al 155 de la Ley de Amparo, también aluden sólo al juez de distrito, pero en ningún precepto de esta ley, de los que reglamentan esa clase de juicios biinstanciales, menciona a los Tribunales Unitarios de Circuito, todos se refieren al juez de distrito.

Es el artículo 29, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es el único que da las atribuciones correspondientes a los Tribunales Unitarios de Circuito, del modo siguiente:

"Art. 29.- Los tribunales unitarios de circuito conocerán: 1.- De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado".

En mi particular punto de vista, estimo que esa sola reglamentación a manera de atribución a los tribunales unitarios de circuito para conocer de los juicios de amparo indirecto de su competencia, no es suficiente, menos aun, que se encuentra introducida sólo en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, atendiendo además, y fundamentalmente, a que por principios constitucionales correspondía estar específicamente determinada su regulación en la Ley de Amparo, que es la reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la propia Carta Magna, como incluso se indica en el segundo de esos preceptos, y la Ley Orgánica no es reglamentaria, ya que su función legal esta inmersa en su propia denominación.

Por lo anterior resumido estimo que existe una deficiente regulación legal del amparo indirecto de la competencia de los Tribunales Unitarios de Circuito, pues hasta podría aventurarse a pensar que saldría de la constitucionalidad, y debiera corregirse tal deficiencia, en mi concepto, agregándose en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal y en los artículos 114 y 151 a 155, así como en los demás que corresponda de la Ley de Amparo.

Sin otro particular, y esperando no estar equivocado, de que el tema expuesto pudiera tener algún interés real, jurídico y constitucional en la institución del amparo, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. (Adolfo Olguín García, Tomo I, páginas 530 a 532)

---

En la prueba testimonial, a que se refiere el artículo 151 debe modificarse la forma en que se anuncian. Es comprensible que dicho precepto exija que se presente el interrogatorio escrito para los testigos al ofrecerse la prueba. Y digo que es comprensible, porque de esa manera las autoridades tienen conocimiento previo de las preguntas para que, a su vez, puedan formular repreguntas.

Pero el hecho de que sea comprensible no quiere decir que sea correcto, porque la prueba testimonial con interrogatorio escrito y previo es una prueba que no cumple con sus fines. Al testigo debe interrogársele libremente por las partes y por el Juez, siempre en relación con el caso a que se refiere el juicio de amparo, para determinar si efectivamente dice la verdad; para ahondar en sus contestaciones, cosa imposible de hacer con un interrogatorio escrito; pero se objeta: es que las autoridades sólo pueden contrainterrogar si existe interrogatorio escrito, lo cual es falso, porque al facultarse a las responsables para que estén presentes delegados suyos en la audiencia (art. 19) estos delegados podrán hacer las repreguntas y será un problema de las autoridades nombrar delegados que conozcan el juicio y sean capaces, problema que no tiene porque solucionar la ley.



La prueba pericial, en la forma en que se recibe en México, es bastante parcial, porque el perito tercero es pagado por una de las partes a la que favorecerá el dictamen, aun cuando la Ley de Amparo, al determinar que la prueba pericial se integra esencialmente con el perito del Juez, hace nacer la esperanza de que el dictamen sea imparcial; pero lo cierto es que no ocurre así, porque el Juez pide auxilio a las Procuradurías, federal o local, que en ocasiones pueden tener interés en el juicio o simplemente sus peritos no son confiables. El remedio es difícil, pero no imposible, consiste en que el Poder Judicial Federal cree su propio cuerpo de peritos, cuando menos en las materias que se presentan con más frecuencia y, en otros casos, que los jueces puedan pagar los honorarios a los peritos que nombren, para lo cual deberán tener presupuesto suficiente, con el fin de evitar, hasta donde esto es posible, que alguna de las partes pague a los peritos que darán la razón a quien les paga, y desgraciadamente esto es más frecuente de lo que se cree, a pesar de que en materia federal ocurre menos que en la materia local.

Por último, el plazo de 5 días anterior a la audiencia para anunciar las pruebas pericial, testimonial y de inspección ocular, se antoja demasiado breve, porque, no se pueden desahogar antes de la audiencia, en especial la pericial, por ello sería de desear la fijación de un plazo mayor. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1069 a 1071)**

Estos artículos que a continuación se citan tienen relación con el artículo 151 de la Ley de Amparo y se refieren a la prueba de inspección judicial.

### **PRUEBA DE INSPECCIÓN JUDICIAL**

Artículo 151 Bis. La inspección judicial puede practicarse, a petición de parte o por disposición del tribunal, con oportuna citación, cuando puede servir para aclarar o fijar hechos relativos a la contienda que no requieran conocimientos técnicos especiales.

Artículo 151 Bis-1. Las partes, sus representantes y abogados podrán concurrir a la inspección, y hacer las observaciones que estimen oportunas.

Artículo 151 Bis-2. De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que a ella concurren.

Artículo 151 Bis-3. A juicio del tribunal, o a petición de parte, se levantarán planos o se tomarán fotografías del lugar u objetos inspeccionados.

Estos artículos que a continuación se citan tienen relación con el artículo 151 de la Ley de Amparo y se refieren a la prueba testimonial.

### **PRUEBA TESTIMONIAL**

Artículo 151 Ter. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos.

Artículo 151 Ter-1. Una parte sólo puede presentar hasta cinco testigos sobre cada hecho, salvo disposición diversa de la ley.

Artículo 151 Ter-2. Los testigos serán citados a declarar cuando la parte que ofrezca su testimonio manifiesta no poder, por sí misma, hacer que se presenten, la citación se hará con apercibimiento de apremio si faltaren su justa causa.

Artículo 151 Ter-3. Los gastos que hicieren los testigos y los perjuicios que sufran por presentarse a declarar, serán satisfechos por la parte que los llamare.

Artículo 151 Ter-4. Los funcionario públicos o quienes los hayan sido, no están obligados a declarar, a solicitud de las partes, respecto al asunto de que conozcan o hayan conocido por virtud de sus funciones. Solamente cuando el Tribunal lo juzgue indispensable para la investigación de la verdad, podrán ser llamados a declarar.

Artículo 151 Ter- 5.- Los funcionarios públicos de la Federación y de los Estados a que alude el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Rendirán su declaración por oficio, pero si los expresados funcionarios lo estimaren prudente y lo ofrecieren así en respuesta al oficio que se les dirija, podrán rendir su declaración personalmente.

Artículo 151 Ter- 6.- La parte que desee rendir prueba testimonial en el juicio, deberá promoverla dentro del término señalado en el artículo 151 (DE LA LEY DE AMPARO).

Artículo 151 Ter- 7.- Para el examen de los testigos no se presentarán interrogatorios escritos, las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes o sus abogados, al testigo primero interrogará el promovente de la prueba, y, a continuación, las demás partes, pudiendo el Tribunal, en casos en que la demora puede perjudicar el resultado de la investigación, a su juicio, permitir que, a raíz de una respuesta, hagan las demás partes las preguntas relativas a ella, o formularlas el propio Tribunal.

Artículo 151 Ter- 8.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando el testigo sea un funcionario, o resida fuera del lugar del negocio, deberá el promovente, al ofrecer la prueba, presentar sus interrogatorios, con las copias respectivas para las demás partes, las cuales serán puestas a su disposición, en el mismo auto en que se mande recibir la prueba, para que, dentro de tres días, presenten, en pliego cerrado, si quisièren, su interrogatorio de repreguntar, pero, si lo presentaren después, no les será admitido, sin perjuicio de que, en todo caso, pueda la parte interesada presentarse directamente a repreguntar ante el Tribunal, requerido, el que hará la calificación de las repreguntas, cuidando de asentar, literalmente en autos, las que deseche, como lo manda el artículo 151 Ter.9.

Para el examen de los testigos que no residan en el lugar del negocio, se librará recado al Tribunal que ha de practicar la diligencia,

acompañándole en pliego cerrado, los interrogatorios, previa la calificación correspondiente.

Artículo 151 Ter-9.- Las preguntas y repreguntas deben estar concebidas en términos claros y precisos, han de ser conducentes a la cuestión debatida; se procurará que en una sola no se comprenda más de un hecho y no hechos o circunstancias diferentes, y pueden ser en forma afirmativa o inquisitiva, las que no satisfagan estos requisitos, serán desechadas de plano, sin que proceda recurso alguno; pero se asentarán literalmente en autos.

Artículo 151 Ter-10.- Después de tomarse, al testigo, la protesta de conducirse con verdad, y de advertirlo de las penas en que incurre el que se produce con falsedad. Se hará constar su nombre, edad, estado, lugar de su residencia, ocupación, domicilio; si es pariente consanguíneo o afín de alguno de los litigantes, y en qué grado; si tiene interés directo en el pleito o en qué grado; si tiene interés directo en el pleito o en otro semejante, y si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes a continuación se procederá al examen.

Artículo 151 Ter 11. Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar las declaraciones de los otros cuando no fuere posible terminar el examen de los testigos en un solo día, la diligencia se suspenderá para continuarse al día siguiente hábil.

Artículo 151 Ter 12.- Cuando el testigo deje de contestar algún punto, o haya incurrido en contradicción, o se haya expresado con ambigüedad,

pueden las partes llamar la atención al tribunal para que, si lo estiman conveniente exija a aquel las respuestas y aclaraciones que proceden.

Artículo 151 Ter 13.- El Tribunal tendrá la más amplia facultad para hacer a los testigos y a las partes las preguntas que estime conducentes a la investigación de la verdad, así como para cerciorarse de la idoneidad de los mismos testigos, asentándose todo en el acta.

Artículo 151 Ter 14.- Si el testigo no habla el castellano, rendirá su declaración por medio de interprete, que será nombrado por el Tribunal cuando el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en español, podrá escribirse en su propio idioma, por el o por el interprete este último deberá, antes de desempeñarse su encargo protestar hacerlo lealmente, haciéndose constar esta circunstancia.

Artículo 151 Ter 15.- Cada respuesta del testigo se hará constar en autos en forma que, al mismo tiempo, se comprenda en ella en sentido o términos de la pregunta formulada solo cuando lo pida una parte, respecto a preguntas especiales, puede el tribunal permitir que, primero, se escriba textualmente la pregunta, y, a continuación la respuesta.

Artículo 151 Ter. 16.- Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, respecto de las respuestas que no la lleven en si y el Tribunal deberá exigirla.

Artículo 151 Ter 17.- El testigo firmara al pie de su declaración y al margen de las hojas en que se contenga, después de habersele leído o de

que la lea por si mismo y la ratifique, si no quiere no sabe o no puede leer, la declaración será leída por el Secretario, y, si no quiere no sabe o no puede firmar, imprimirá sus huellas digitales, si puede y quiere hacerlo, de todo lo cual se hará relación motivada en autos.

Artículo 151 Ter 18.- La declaración, una vez ratificada, no puede variarse ni en la substancia ni en la redacción.

Artículo 151 Ter 19.- Con respecto a los hechos sobre que haya versado un examen de testigos y con respecto a los directamente contrarios, no puede la misma parte volver a presentar prueba testimonial, en ningún momento del juicio.

Artículo 151 Ter 20.- En el acto del examen de un testigo o dentro de los tres días siguientes, pueden las partes atacar el dicho de aquel, por cualquiera circunstancia que su concepto, afecte su credulidad para la prueba de las circunstancias alegadas, se concederá un término de diez días y, cuando sea testimonial no podrán presentar mas de tres testigos sobre cada circunstancia, el dicho de estos testigos ya no puede impugnarse por medio de prueba, sin perjuicio de las acciones penales que procedan, y su valor se apreciara en la sentencia según el resultado de la discusión en la audiencia final del juicio.

Artículo 151 Ter. 21.- Al valorar la prueba testimonial, el Tribunal apreciara las justificaciones relativas a las circunstancias a que se refiere el artículo anterior, ya sea que estas hayan sido alegadas, o que aparezcan en autos.

Estos artículos que a continuación se citan tiene relación con el artículo 151 de la Ley de Amparo y se refieren a la prueba pericial.

## PRUEBA PERICIAL

Artículo 151 Quater. La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones de un negocio relativas a algunas ciencia o arte, y en los casos en que expresamente lo prevenga la Ley.

Artículo 151 Quater-1.- Los peritos deben tener título en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre que ha de oírse su parecer, si la profesión o el arte estuviere legalmente reglamentado.

Si la profesión o el arte no estuviere legalmente reglamentado, o, estándolo no hubiere peritos en el lugar podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas, a juicio del tribunal, aun cuando no tengan título.

Artículo 151 Quater-2. Cada parte nombrará un perito a no ser que se pudieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo.

Si fueren mas de dos los litigantes, nombrarán un perito los que sostuvieren unas mismas pretensiones, y otro los que las contradigan.

Si los que deben nombrar un perito no pudieren ponerse de acuerdo, el Tribunal designará uno de entre los que propongan los interesados.



Artículo 151 Quater-3. La parte que desee rendir prueba pericial, deberá promoverla, por medio de un escrito en que formulara las preguntas o precisara los puntos sobre que debe versar; hará la designación del perito de su parte, y propondrá un tercero para el caso de desacuerdo.

El Tribunal concederá, a las demás partes el termino de cinco días para que adicionen el cuestionario con lo que les interese, previniéndolas que, en el mismo termino, nombren el perito que les corresponda y manifiesten si están o no conformes con que se tenga como perito tercero al propuesto por el promovente.

Si pasados los cinco días no hicieren las demás partes el nombramiento que les corresponde, ni manifestaren estar conformes con la proposición del perito tercero, el tribunal de oficio hará el o los nombramientos pertinentes, observándose lo dispuesto en la parte final del artículo 151 Quater 2, en su caso.

Artículo 151 Quater-4. Los peritos nombrados por las partes presentados por estas al Tribunal, dentro de los tres días siguientes de habérseles tenido como tales a manifestar la aceptación y protesta de desempeñar su encargo con arreglo a la ley. Si no lo hicieren o no aceptaren, el Tribunal hará, de oficio, desde luego, los nombramientos que a aquellas correspondía. Los peritos nombrados por el Tribunal serán notificados personalmente de su designación; para que manifiesten si aceptan y protestan desempeñar el cargo.

ARTÍCULO 151 Quater 5.- El Tribunal señalará lugar, día y hora para que la diligencia se practique, si el debe presidirla.

En cualquier otro caso, señalará a los peritos un término prudente para que presenten su dictamen.

El Tribunal deberá presidir la diligencia cuando así lo juzguen conveniente o lo solicite alguna de las partes y lo permita la naturaleza del reconocimiento, pudiendo pedir, a los peritos, todas las aclaraciones que estime conducentes y exigirles la práctica de nuevas diligencias.

ARTÍCULO 151 Quater -6.- En el caso del párrafo final del artículo anterior, se observarán las reglas siguientes:

I.- El perito que dejare de concurrir, sin causa justa, calificada por el Tribunal, será responsable de los daños y perjuicios que, por su falta, se causaren;

II.- Los peritos practicarán unidos la diligencia, pudiendo concurrir los interesados al acto, y hacerles cuantas observaciones quieran; pero deberán retirarse para que los peritos discutan y deliberen solos. Los peritos estarán obligados a considerar, en su dictamen, las observaciones de los interesados y del Tribunal, y

III.- Los peritos darán inmediatamente su dictamen, siempre que lo permita la naturaleza del reconocimiento; de lo contrario, se les señalará un término no prudente para que lo rindan.

ARTÍCULO 151 Quater-7.- Cuando el Tribunal, no asista a la diligencia, los peritos practicarán sus peritajes conjunta o separadamente, con asistencia o no de las partes según ellos lo estimaren conveniente.

ARTÍCULO 151 Quater-8.- Si los peritos están conformes, extenderán su dictamen en un mismo escrito que presentaren, o en una acta que harán asentar por el secretario del Tribunal, firmando lo dos, si no lo estuvieren, formularán su dictamen en escrito por separado, del que acompañarán una copia.

ARTÍCULO 151 Quater-9.- Rendidos los dictámenes, dentro de los tres días siguientes del últimamente presentado, los examinará el Tribunal, y, si discordaren en alguno o algunos de los puntos esenciales sobre que debe versar el parecer pericial, mandará de oficio que, por notificación personal, se hagan del conocimiento del perito tercero, entregándole las copias de ellas y previniéndole que, dentro del término que le señale, rinda el suyo si el término fijado no bastare, el Tribunal, podrá acordar, a petición del perito, que se le amplíe.

El perito tercero no está obligado a adoptar alguna de las opiniones de los otros peritos.

ARTÍCULO 151 Quater-10.- Si el perito nombrado por una parte no rinde su dictamen, sin causa justificada, designará el Tribunal nuevo perito, en sustitución del omiso, e impondrá a este una multa de mil pesos. La

omisión hará, además responsable, al perito, de los daños y perjuicios que por ella se ocasionen a la parte que lo nombró.

Si el perito de que se trata no rinde su dictamen dentro del plazo que se le fijó, pero si antes de que se haya hecho el nuevo nombramiento, solo se le aplicará la multa señalada en el párrafo precedente.

ARTÍCULO 151 Quater-11.- Los peritos se sujetarán, en su dictamen, a las bases que, en su caso, fije la ley.

ARTÍCULO 151 Quater-12.- Si el objeto del dictamen pericial fuere la práctica de un avalúo, los peritos tenderán a fijar el valor comercial, teniendo en cuenta los precios de plaza, los frutos que, en su caso, produjere o fuere capaz de producir la cosa objeto del avalúo, y todas las circunstancias que puedan influir en la determinación del valor comercial, salvo que, por convenio o por disposición de la ley, sean otras las bases para el valúo.

ARTÍCULO 151 Quater-13.- El perito tercero que nombre el Tribunal, puede ser señalado impedido dentro de los tres días siguientes al en que cause estado la notificación de su nombramiento a los litigantes, por las mismas causas que pueden serlo los jueces; pero si se tratare de perito nombrado en rebeldía de una de las partes, solo esta podrá hacer uso del impedimento.

ARTÍCULO 151 Quater-14.- El impedimento se resolverá por el procedimiento incidental, a menos que el perito confesare la causa, caso en

el cual se admitirá desde luego el impedimento y se procederá el nombramiento de nuevo perito.

ARTÍCULO 151 Quater-15. Contra el auto en que se admita o deseche el impedimento, no procede recurso alguno.

ARTÍCULO 151 Quater-16.- Los honorarios de cada perito serán pagados por la parte que lo nombró o en cuya rebeldía lo hubiere nombrado el Tribunal, y los del tercero, por ambas partes.

Después de formuladas las anteriores propuestas de reformas para una nueva Ley de Amparo, expongo lo siguiente:

Considero que los artículos que propongo pueden agregarse después de los artículos de la Ley de amparo que les anteceden, es decir se puede recorrer la numeración de los artículos de la Ley de Amparo sin que se pierda el orden, a fin de que la nueva Ley de Amparo sea mas completa y clara en sus temas relativos.

El motivo que tiene el suscrito para hacer las propuestas señaladas obedece a que durante la función de juez de Distrito es necesario tener una Ley de Amparo que sea mas completa, clara y precisa, y mas acorde con la realidad y las materias que comprende, a fin de no estar aplicando tanto la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Finalmente considero que la redacción de la nueva Ley de Amparo al incorporar los artículos propuestos con la redacción señalada de acuerdo a

la materia de amparo desde mi punto de vista, sería beneficio que incluyera mas capítulos y artículos que expliquen la forma y trámite de cada etapa procesal del juicio de amparo como se propone. **(Guillermo Arturo Medel García, Tomo II, páginas 1232 a 1244)**

---

**SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO.** Artículo 151: A l letra dice: "Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar un hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional". Se propone que el término para anunciar la prueba testimonial y pericial sea derogado, y se apruebe que dichas probanzas puedan ser anunciadas dentro del término correspondiente a la admisión de la demanda y antes de la fecha de la celebración de la audiencia constitucional.

Tal consideración se debe a que la experiencia profesional de quienes ejercen la defensa de particulares, han percibido que tal circunstancia ha dejado en estado de indefensión a los impetrantes del amparo, vulnerándose con ello sus garantías individuales. **(Reynaldo Herrera Aké, Tomo II, página 1285)**

---

En materia de pruebas también es inequitativo lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Amparo, pues el oferente de la testimonial, sólo puede formular preguntas por escrito al testigo, mismas que se exhiben antes de que la prueba se desahogue, mientras que las demás partes pueden formular sus preguntas de manera verbal u oral.

Quién ha litigado o tenido experiencia como juzgador dirigiendo las audiencias, sabe que la pregunta previa y por escrito no es la técnica más adecuada para el desahogo de la prueba testimonial, pues si bien es cierto que el contenido de la pregunta lo dará el objeto de la prueba, la pregunta y la forma en que se realice dependerá de las respuestas que vaya dando el testigo y no obstante que el Código Federal Procesal acepta esta técnica al igual que lo hace el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y más recientemente el Código de Comercio, la reglamentación de dicha probanza en la Ley de Amparo esencialmente ha quedado obsoleta, por lo que en la nueva ley o la reforma que se haga a la vigente, se podrá remediar esta situación y buscar la equidad entre las partes. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, página 1661)**

---

"artículo 151.- las pruebas ofrecidas por las partes, deberán desahogarse en forma previa a la audiencia constitucional y dentro de un término que no exceda de quince días; si con motivo de las constancias exhibidas por las autoridades responsables en su informe con justificación, las partes ofrecen nuevas pruebas, éstas deberán desahogarse también en forma previa a la audiencia constitucional y dentro de un término que no exceda de diez días.

....

....

....

....". **(Jesús González Moreno, Tomo III, página 1815)**

La regla que establece el artículo 151 de la Ley de Amparo respecto de la oportunidad para anunciar las pruebas testimonial y pericial, puede ser clarificada si se establece que las mismas deberán ser anunciadas con una anticipación de 7 días a la celebración de la audiencia constitucional. (Olga Hernández Espíndola, Tomo III, página 2070)

---

**ARTÍCULO 151.** Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez o el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial ,pericial o de inspección judicial para acreditar algún hecho, deberán ofrecerla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El Juez o el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. \* ( se suprime)

Al promoverse la prueba pericial, el Juez de Distrito o magistrado del Tribunal Unitario de Circuito hará la designación de un perito, o de los que



estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado.

Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Juez de Distrito o magistrado del Tribunal Unitario de Circuito deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta ley. A ese efecto, al aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los impedimentos legales.

Las pruebas pericial y testimonial serán calificadas por el Juez de Distrito o magistrado del Tribunal Unitario de Circuito según prudente estimación. (Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2236 y 2237)

---

Por otra parte, se propone que en el segundo párrafo del artículo 151 se precise que la prueba testimonial o pericial debe anunciarse en el término que el propio precepto establece, independientemente de que la audiencia constitucional no se haya llevado a cabo en la fecha primeramente señalada, ello en aras de una equidad procesal entre las partes y de preservar el orden y la expedites en la tramitación del juicio de garantías ya que, por un lado, existe a veces un desconocimiento de las partes acerca de los criterios jurisprudenciales sobre el particular y, por otro lado, en muchas ocasiones tales probanzas se ofrecen después de uno o más diferimientos de la audiencia constitucional aún cuando se traten de

probar hechos de los que ya se tenía conocimiento desde la presentación de la demanda.

Además, se estima conveniente se establezca un término para que las partes puedan designar perito que se asocie al nombrado por el juez, toda vez que la falta de dicho término ocasiona que tal designación se efectúe en algunas ocasiones cuando ya transcurrió un término considerable desde que el tribunal nombró perito, retardando con ello en ocasiones la pronta solución del asunto.

Al respecto se propone la siguiente redacción:

Artículo 151.- ...

Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial, deben anunciarla cinco días hábiles antes del que se haya fijado para la celebración de la audiencia constitucional, independientemente de que ésta se haya diferido si es que se pretende acreditar algún hecho del que se tuvo conocimiento con posterioridad a la presentación de la demanda, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorio al tenor de los cuales deben ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos...

Al promoverse la prueba pericial, el juez hará la designación del o los peritos que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar perito dentro de los tres días, siguientes a la notificación del auto en que el juez efectúe tal designación,

para que se asocie con aquél o rinda dictamen por separado. (**Graciela M. Landa Durán, Tomo IV, páginas 2687 a 2689**).

---

Artículo 150 BIS.- En los juicios de amparo promovidos por las entidades o individuos que especifica la fracción IV del artículo 22, las autoridades responsables deberán acompañar copias certificadas de las resoluciones a que se refiera el juicio y de las demás constancias necesarias para determinar con precisión los derechos agrarios del quejoso y del tercero perjudicado, en su caso, así como los actos reclamados. (**Gilberto J. Hershberger Reyes, Tomo IV, página 2731**).

---

Artículo 151. En el Juicio de Amparo es admisible toda clase de pruebas excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho. (**Javier Herrera Anaya, Tomo V, páginas 207**)

---

**LAS RELACIONADAS CON EL TITULO SEGUNDO, CAPITULO IV,  
ARTICULO 151 DE LA VIGENTE LEY DE AMPARO.**

#### **CONSIDERACIONES Y MOTIVOS DE LA PROPUESTA**

La vigente Ley de Amparo, prevé expresamente la tramitación de las pruebas supervenientes, por lo que toca al incidente de suspensión; sin embargo, la misma, no contempla la posibilidad de que las partes aporten

pruebas con carácter de supervenientes durante el procedimiento del juicio de amparo indirecto, cualquiera que sea su estado, y antes de la celebración de la audiencia constitucional del mismo.

En relación con lo anterior, es de estimarse, que la falta de reglamentación para el ofrecimiento de pruebas supervenientes en el cuaderno principal del juicio de amparo, causa perjuicios a los intereses jurídicos de las partes que intervienen en el proceso, al no existir en la Ley de Amparo, disposición expresa que obliguen a los jueces de Distrito a proveer la admisión o desechamiento de tales probanzas.

Toda vez que la prueba superveniente normalmente es conocida por las partes con posterioridad a los términos establecidos por la Ley de Amparo para el ofrecimiento de pruebas, resultaría imposible ofrecerla dentro de esos períodos con la debida oportunidad procesal. Ahora bien, dada la importancia que podría tener en algunos casos el anunciar la prueba testimonial fuera de los citados términos para lograr la convicción del juzgador respecto de los hechos controvertidos en el juicio, sería importante que esté prevista en la ley su admisión y desahogo.

En este orden de ideas, las partes estarán en posibilidad de ofrecer la prueba testimonial superveniente para buscar la certeza del juzgador respecto de los hechos controvertidos en la litis, sin tener más limitaciones de tiempo que el que no se hubiere celebrado la audiencia constitucional.

Hechas las consideraciones anteriores, estimamos necesario e improrrogable que el proyecto de la nueva Ley de Amparo, contemple en

forma expresa el anuncio, desahogo y valoración de pruebas supervenientes de carácter testimonial dentro del juicio de amparo indirecto.

REDACCION QUE SE PROPONE AL ARTICULO QUE  
CORRESPONDA, EN EL PROYECTO DE LA NUEVA LEY DE AMPARO.

Artículo 151 . . . . .

...

...

...

...

Con independencia de los plazos señalados para las pruebas, las partes podrán aportar las testimoniales supervenientes que hayan de servir como prueba contra las excepciones alegadas por la parte contraria, mismas que deberán ser recibidas, siempre y cuando el que las anuncie, bajo protesta de decir verdad, asevere que no tenía conocimiento de ellas. Dicha probanza podrá recibirse inclusive antes de la hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, a la cual deberá acompañarse copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos.

En el supuesto anterior, el Juez que conozca del asunto, deberá acordar en el mismo día y hora señalados para la celebración de la audiencia, sobre el diferimiento de ésta, y sobre la admisión de la prueba o pruebas testimoniales supervenientes, dando vista a las demás partes por el

término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga, acompañándoles copia del interrogatorio, a efecto de que puedan formular por escrito o verbalmente, repreguntas al verificarse la audiencia.

No se admitirán más de tres testigos de la prueba superveniente por cada hecho.

Si la citada probanza no fuera desahogada por la oferente, se le impondrá una multa equivalente a ciento ochenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. **(Marino Castillo Vallejo, Tomo V, páginas 214 a 216)**

---

Reformar el segundo y tercer párrafo del artículo 151 para quedar como sigue:

"Art. 151.- ...

"Al promoverse la prueba pericial, el oferente proporcionará el nombre y domicilio de su perito y deberá presentarlo dentro del término de cuarenta y ocho horas para la aceptación y protesta del cargo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se declarará desierta dicha probanza. En caso de dar cumplimiento a lo anterior, se dará vista a las demás partes para que designen perito de su parte, apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por conformes con las conclusiones a que arribara el perito de la parte quejosa. En el caso de que nombren oportunamente su perito, deberán presentarlo dentro del término de cuarenta y ocho horas para la protesta y aceptación

del cargo conferido. El Juez o Tribunal que conozca del asunto, concederá a los peritos un término perentorio de acuerdo a la naturaleza del caso para que rindan sus dictámenes y los ratifiquen. De resultar contradictorios los dictámenes el Juez o Tribunal nombrará un Tercer Perito, quien deberá también rendir su dictamen en el término que para tal efecto se le fije.

No obstante lo anterior, cuando las pruebas testimonial, pericial o de inspección ocular que sean anunciadas, sean notoriamente inconducentes por contravenir lo dispuesto por el artículo 78 de ésta Ley, el Juez de Distrito o la autoridad que conozca del Juicio de Amparo, podrá desecharlas de plano en el mismo auto en que se admita la demanda. Esta resolución constituirá en todo caso, una violación procesal que podrá reclamarse en el Recurso de Revisión que se llegare a promover en contra de la resolución que se dicte en la audiencia constitucional". **(Gustavo Aquiles Gasca, Tomo V, páginas 241 y 242)**

**Artículo 152.** A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquellas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieron con esa obligación, la parte interesada solicitará del juez que requiera a los omisos. El juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.

### **PROPUESTAS**

El artículo 152 debe ser más drástico, porque es muy frecuente que las autoridades en especial las administrativas, no entreguen en tiempo las copias que se les solicitan y lo drástico podrá ser apercibir, en el primer requerimiento que se haga a la autoridad, de imponerle una sanción económica fuerte y si hay omisión, apercibirla de que se tendrán por ciertas las afirmaciones que el quejoso trata de demostrar mediante las pruebas que no se le entregan. Y, para mayor seguridad, ordenar que los documentos se envíen directamente al Juzgado requirente. (Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1071)



---

Por último, congruente con la proposición de que se elimine la jurisdicción concurrente, deberá eliminarse el artículo 144.

En el artículo 152 cabría agregar un párrafo que dijera que las copias que solicitan las partes como prueba, deberán remitirse, una vez expedidas, al Juez de Distrito que conozca del juicio, con objeto de evitar abusos. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1093)**

---

Artículo 152: (párrafo segundo de...) a la letra dice: "El juez hará un requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero si no obstante de dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieran las copias o documentos, el juez a petición de parte, si lo estima indispensable podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan, y hará uso de los medios de apremio consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato"

La propuesta es: Que en atención a todos los adelantos tecnológicos de comunicación y debido a las facilidades que existen hoy en día, tal aplazamiento, al que se refiere la audiencia constitucional, no deberá exceder de cinco días para que la justicia sea mas pronta y expedita". **(Reynaldo Herrera Aké, Tomo II, página 1286)**

El artículo 152 de la Ley de Amparo establece las reglas a seguir para que las partes en el juicio puedan obtener copia certificada de los documentos que obren en poder de las responsables o de las autoridades en general, y qué sucedería si las autoridades no entregaran las copias certificadas a la parte que las solicitó.

Un sistema más eficaz sería que el peticionario de las copias estuviera obligado a señalar en su petición el número de expediente, el nombre del quejoso y el tribunal ante quien se lleva el juicio de garantías, para que la autoridad quedará obligada a presentar directamente las copias al tribunal de amparo, dentro de un plazo prudente, que podría ser de 5 días a partir de que recibió la petición, pues así se evitaría la indebida práctica de algunos litigantes de pedir copias certificadas a última hora con el sólo objeto de diferir la celebración de la audiencia constitucional, situación que se da en los amparos promovidos por litigantes de dudosa reputación, con el sólo objeto de alargar el juicio y en consecuencia retardar la ejecución del acto de autoridad que de antemano saben que no es ilegal ni inconstitucional. Por otro lado se obligaría a las responsables y a las autoridades en general a expedir inmediatamente las copias certificadas y a exhibirlas al juez de amparo, pues en muchas ocasiones la autoridad a pesar de ordenar la expedición de las copias, materialmente no las expide, simplemente por indolencia, o a veces por exceso de trabajo, ya que no tienen tiempo de sacar las copias y hacer la certificación. Pero en todo caso ambas conductas dilatan el procedimiento, por ello creo que debe aceptarse la propuesta que hago. **(Jorge Antonio Galindo Monroy, Tomo III, páginas 1661 y 1662)**

---

"artículo 152.- a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en los juicios de amparo, los funcionarios o autoridades tienen obligación

.....

....

....". (Jesús González Moreno, Tomo III, página 1816)

---

Ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que las autoridades tienen obligación de expedir a las partes las copias o documentos que les soliciten para ser ofrecidas como prueba en el juicio de garantías, siempre y cuando la solicitud correspondiente se haga con anticipación debida, estableciendo como parámetro un término de 5 días previos a la celebración de la audiencia constitucional; no obstante, se considera que no existiría inconveniente alguno para que en el artículo 152 se especificara dicho término para que haya oportunidad de expedirlas. (Olga Hernández Espíndola, Tomo III, página 2070)

---

ARTÍCULO 152. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquéllas las copias o documentos que soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obligación, la parte interesada solicitará del Juez que requiera a los omisos. El Juez de Distrito o magistrado del Tribunal Unitario de Circuito hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de diez días; pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la

expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el Juez de Distrito o magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se expidan y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.

Al interesado que informe al Juez que se le ha negado una copia o documento que no hubiese solicitado, o que ya le hubiese sido expedido, se le impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario.

Cuando se trate de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales, a instancia de cualquiera de las partes. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, páginas 2237 y 2238)**

---

Se destaca la finalidad del actual texto del artículo 152, esto es, que se exhiba copia de documentos existentes y no que se de la posibilidad de generar nuevos documentos a través de solicitudes de información que los quejosos hagan a las autoridades.

Se establece la posibilidad de que las autoridades invoquen los impedimentos legales que tengan para exhibir las copias y documentos que les hayan sido solicitados, así como de que dichos impedimentos sean atendidos y valorados por el juzgador con audiencia de las partes. Lo anterior, a fin de evitar el perfeccionamiento de una prueba contraria a la ley o a la moral, mediante la cual se genere responsabilidad a las autoridades.

## TEXTO PROPUESTO

Art. 152 A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas...

...

...

La obligación prevista en el presente artículo, no constriñe a las autoridades a rendir informes a las partes para ser ofrecidos como prueba en juicio.

Tampoco estarán obligadas las autoridades a proporcionar documentos o copias cuya presentación en juicio pueda generarles responsabilidad en términos de la legislación aplicable. En este caso, las autoridades deberán manifestar el fundamento y la causa de su impedimento, los cuales deberán ser valorados por el Juez, quien oyendo a las partes resolverá lo conducente. **(Francisco Moreno y Gutiérrez, Tomo IV, páginas 2755 y 2756).**

---

Artículo 152. La prueba documental deberá ofrecerse dentro de los 10 días siguientes al en que se tenga por rendido el informe con justificación o se levante certificación de que no fue rendido en tiempo.

El Juez calificará y en su caso mandará desahogar la prueba documental haciéndola saber a los interesados.

Dentro de los tres días siguientes a que se tengan por desahogadas la prueba documental procederá la objeción de falsedad de documento, debiéndose en el escrito que se haga indicar las causas en que se funde la misma y en su caso el ofrecimiento de la prueba pericial que se deberá desahogar a una audiencia que se convocará dentro de los cinco días siguientes.

La objeción de falsedad acreditada, solo tendrá efectos exclusivos en el Juicio de Amparo.

Cuando el Juez desechare la objeción presentada, podrá aplicar al promovente de la propuesta una multa de diez a ciento ochenta días de salario mínimo general. (Javier Herrera Anaya, Tomo V, páginas 207 y 208)

**Artículo 153.** Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el juez suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia, se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento.

Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, de la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio.

Cuando el juez desechare la objeción presentada, podrá aplicar al promovente de (sic) la propuso una multa de diez a ciento ochenta días de salario.

## **PROPUESTAS**

**ARTÍCULO 153.** Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el Juez de Distrito o magistrado del Tribunal Unitario de Circuito suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia, se presentarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento.

Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al Juez de Distrito o magistrado del Tribunal Unitario de Circuito para apreciar, dentro del juicio de amparo, de la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio.

Cuando el Juez desechare la objeción presentada, podrá aplicar al promovente de (sic) la propuso una multa de diez a ciento ochenta días de salario. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2238)**

---

Artículo 153. A fin de que las partes puedan rendir la prueba documental en el juicio de amparo, los funcionarios o autoridades tienen la obligación de expedir a la brevedad posible aquellas copias o documentos que le soliciten.

Si no se cumple con esta obligación, se solicitará del Juez que requiera a los omisos apercibiéndoles por vez primera en que se les impondrá una multa equivalente al importe de cincuenta días de salario mínimo, si no cumplieren por segunda ocasión se consignará a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.

Cuando se trate de actuaciones concluidas podrán pedirse originales, a instancias de cualquiera de las partes. **(Javier Herrera Anaya, Tomo V, páginas 208 y 209)**



**Artículo 154.** La audiencia a que se refiere el artículo siguiente y la recepción de las pruebas, serán públicas.

### **PROPUESTAS**

Artículo 154. Las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial deberán de ofrecerse dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente en que se tenga por rendido el informe con justificación o en su caso se levante la certificación de que no se rindió el mismo.

En el escrito de ofrecimiento se deberá exhibir, los interrogatorios al tenor de los cuales deberán de ser examinados los testigos, el cuestionario para los peritos o los puntos en que constará la inspección ocular. El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan formular las repreguntas o las aclaraciones a la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.

Al promoverse la prueba pericial, el juez hará la designación de un perito, o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también un perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por separado. (Javier Herrera Anaya, Tomo V, página 209)

**Artículo 155. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.**

Que la sentencia se dicte en la audiencia, o en un plazo máximo improrrogable de 15 días hábiles a la celebración de la misma, o pena de que incurran en responsabilidad los Jueces, Magistrados y Ministros de los Tribunales Federales. (Fernando Sánchez Ugarte, Tomo III, página 1795)

---

**El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare.**

**En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente, pero sin exigir que sus alegaciones se hagan constar en autos, y sin que los alegatos puedan exceder de media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas.**

**El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que**

**se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la demanda.**

## **PROPUESTAS**

Es urgente verdaderamente la capacitación de los Secretarios de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Colegiado. De preferencia tomar personas con experiencia porque, desgraciadamente, con raras excepciones, los Jueces de Distrito y los Magistrados no revisan el trabajo de los Secretarios y salen verdaderos monstruos jurídicos.

Es necesario que los Secretarios, Jueces de Distrito, Magistrados y Ministros entiendan que cuando se va a tener plática es por ser quejoso o tercero perjudicado, se deben oír los puntos de vista conforme el siguiente punto.

Los proyectos que elaboran los Secretarios y que se les pasan a los Señores Magistrados o Ministros para su discusión constituyen un "secreto", que no pueden conocer los litigantes y porque muchas veces no estudian los expedientes, no tienen experiencia en la materia o simplemente no saben Derecho, las ejecutorias resultan verdaderas monstruosidades jurídicas.

Para evitar lo anterior, propongo que dejen de ser misterio, secreto, los proyectos de sentencia y que se les entreguen a los litigantes para que en el término de 3 días, por escrito den sus puntos de vista, que los conozcan los Secretario, Magistrados y Ministros; que sean concretos y

señalen los errores de los Proyectos de ejecutoria, para que realmente los cotejen los Secretarios, Jueces de Distrito, Magistrados y Ministros.

Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de gran brillantez, entregaba en mano los proyectos con gran sencillez diciendo: "Este es mi proyecto, atáquenlo y denme sus puntos de vista", el Ministro decía: "uno dice una muchas tonterías en sus proyectos y el hecho de que le señalen los errores le hacen estudiar y pensar". Realmente tenía un gran sentido de Justicia.

Lo anterior lo hacía el Ministro Alfonso López Aparicio. Por lo anterior propongo ese trámite, que haría estudiar realmente los puntos correspondientes para que las sentencias fueran lo más apegadas a la realidad. Lo que no sucede actualmente. El Instituto de Capacitación que dirige el Maestro César Esquinca Muñoa, a pesar de su esfuerzo no ha podido complementar la preparación del personal, para que podamos decir que las sentencias en la amparo son jurídicas y justas.

La calidad, experiencia, capacidad y preparación de los Señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desperdicia al otorgarles las facultades únicamente que les concede la Ley de Amparo y que en mi forma personal no determina la importancia del máximo Tribunal. **(Jorge Manuel Garizurieta González, Tomo I, página 167 y 168)**

El carácter de parte del Ministerio Público que actúa en el proceso penal del cual emana el acto reclamado no entraña el ejercicio de todas las facultades conferidas a las demás partes, en sentido material, dentro del juicio constitucional, ya que su participación se limita a la formulación de alegatos, entendiéndose entonces que la interpretación de este párrafo es restrictiva, atendiendo para ello a la intención del legislador, lo que se evidencia si se toma en cuenta que en la iniciativa de ley la redacción del citado párrafo era en los términos siguientes: "El Ministerio Público que actúa en el proceso penal, podrá intervenir en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales, con la única atribución de formular alegatos. Para tal efecto, el órgano de control deberá notificarle la presentación de la demanda".

No cabe duda que el Ministerio Público que actúa en el proceso penal del que emana el acto reclamado sólo está facultado para formular alegatos por escrito en el caso de que así lo estime pertinente y que no podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, solicitar la suspensión o diferimiento de las audiencias, ni nombrar delegados que concurren a las audiencias.

La diferencia apuntada tiene especial relevancia pues aunque se reconoce que el Ministerio Público adscrito al juzgado en el que se ventila el proceso penal puede formular alegatos en el juicio de amparo, sin embargo no se le incluyó en el artículo 5º de la Ley de Amparo que enunciativamente establece quiénes son partes en el juicio de amparo, lo que se explica, ya que en este precepto en su fracción IV señala que el Ministerio Público Federal es parte en el juicio de amparo, quien podrá intervenir en todos los

juicios e interponer los recursos que señala esta ley, inclusive para interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia.

Las diferencias apuntadas conducen a concluir que las facultades del Ministerio Público Federal adscrito al órgano de control constitucional no sufrió merma con motivo de la adición del párrafo segundo del artículo 155 de la Ley de Amparo, ya que su intervención en el juicio constitucional sigue teniendo la amplitud prevista en la fracción IV del artículo 5° de la ley reglamentaria, misma intervención que radicalmente es distinta a la del Ministerio Público adscrito al Juez del proceso penal del que emana el acto reclamado, ya que éste únicamente puede formular alegatos por escrito. **(José Atanacio Alpuche Marrufo, Tomo I, páginas 232 a 234)**

---

Este precepto también resulta ser desafortunado para la estructura del derecho procesal, si tomamos en cuenta que un proceso penal puede tener dos instancias, y que en ambas pueden emitirse resoluciones jurisdiccionales impugnables en vía de amparo indirecto, y que por lo general el Ministerio Público adscrito a cada órgano de instancia es distinto, esto es, que no siempre coincide en la misma persona física, sin que la reforma aclare a cuál de los dos se debe notificar la presentación de la demanda; por otro lado, al menos en la teoría general del proceso, es inconcebible dar participación, aunque sea para formular alegatos, a alguien que no es parte en el juicio, puesto que el artículo 5° de la Ley de Amparo establece cuáles son las partes en el juicio de garantías, sin que haga

mención al "Ministerio Público que actúe en el proceso penal"; además no se indica si se le debe remitir copia de la demanda o tan sólo notificar su presentación, pues en el primer caso se requeriría de una copia más, amén de las que establece el artículo 120 de la Ley de Amparo; por otro lado, la jurisprudencia de los tribunales de la Federación, ha establecido que los alegatos no forman parte de la litis constitucional; además, si como parte permanente de todos los juicios de amparo está el agente del Ministerio Público de la Federación, no tiene caso llamar a un tercer representante social, quien tan sólo puede formular alegatos, pero privado de ofrecer pruebas.

Cabe agregar como último comentario a este precepto legal, que el amparo puede ser promovido por la parte ofendida en contra de una resolución jurisdiccional, y el espíritu del precepto legal es dar intervención sólo en los amparos promovidos por el inculpado, pues así se manifestó prácticamente en la iniciativa de reforma. **(Horacio Armando Hernández Orozco, Tomo I, página 252)**

---

La Ley de Amparo, que en el mismo artículo 107 de la Constitución es señalada como su ley reglamentaria, en ninguna parte alude al Tribunal Unitario de Circuito respecto a su competencia en los casos que de esa fracción VII le corresponde, pues el artículo 114 de dicha ley, refiriéndose a tales casos, señala únicamente al juez de distrito ante quien se pedirá el amparo, y en cuanto a la tramitación del juicio, que también indica la propia fracción VII, que se reglamenta en los numerales 151 al 155 de la Ley de Amparo, también aluden sólo al juez de distrito, pero en ningún

precepto de esta ley, de los que reglamentan esa clase de juicios biinstanciales, menciona a los Tribunales Unitarios de Circuito, todos se refieren al juez de distrito.

Es el artículo 29, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es el único que da las atribuciones correspondientes a los Tribunales Unitarios de Circuito, del modo siguiente:

"Art. 29.- Los tribunales unitarios de circuito conocerán: 1.- De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado".

En mi particular punto de vista, estimo que esa sola reglamentación a manera de atribución a los tribunales unitarios de circuito para conocer de los juicios de amparo indirecto de su competencia, no es suficiente, menos aun, que se encuentra introducida sólo en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, atendiendo además, y fundamentalmente, a que por principios constitucionales correspondía estar específicamente determinada su regulación en la Ley de Amparo, que es la reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la propia Carta Magna, como incluso se indica en el segundo de esos preceptos, y la Ley Orgánica no es reglamentaria, ya que su función legal esta inmersa en su propia denominación.



Por lo anterior resumido estimo que existe una deficiente regulación legal del amparo indirecto de la competencia de los Tribunales Unitarios de Circuito, pues hasta podría aventurarse a pensar que saldría de la constitucionalidad, y debiera corregirse tal deficiencia, en mi concepto, agregándose en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal y en los artículos 114 y 151 a 155, así como en los demás que corresponda de la Ley de Amparo.

Sin otro particular, y esperando no estar equivocado, de que el tema expuesto pudiera tener algún interés real, jurídico y constitucional en la institución del amparo, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. (Adolfo Olguín García, Tomo I, páginas 530 a 532)

---

Tomando en cuenta que con fecha 8 de febrero del presente año se agregó al artículo 155 de la Ley de Amparo vigente un párrafo para dar oportunidad al Agente del Ministerio Público en el Proceso Penal para que formule alegatos en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales pero sin que tenga mayor intervención, mi propuesta al respecto es que también pueda recurrir las resoluciones definitivas que se dicten en dichos juicios de amparo, dado que como se está reconociendo en dicha reforma, es importante su intervención por el interés que representa por lo que es necesaria también que con dichos recursos, en particular el de revisión, pueda continuar interviniendo en el

trámite de tales amparos y de esa forma coadyuvar con el Ministerio Público Federal en el seguimiento de los juicios de amparo en materia penal.

En tal virtud, mi propuesta es que se amplíe ese último párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo o se tome en cuenta en el caso en que se expida una nueva ley en la materia.

Tal párrafo quedaría redactado en la siguiente forma:

Artículo 155...

El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto deberá notificársele la presentación de la demanda. En caso de que formule alegatos, tendrá también derecho a interponer el recurso de revisión contra las resoluciones que se dicten en tales juicios. **(José Antonio Sam López, Tomo II, páginas 793 y 794)**

---

Artículo 155.-...

El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá intervenir en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales, con la única atribución de formular alegatos. Para tal efecto, el órgano de control deberá notificarle la presentación de la demanda. **(Ricardo Ojeda Bohórquez, Tomo II, páginas 824 y 825)**

Por último, se propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 155, estableciéndose como parte en el juicio de amparo al Ministerio Público que actúe en el proceso ordinario con la única facultad de formular alegatos. Es decir, no podrá interponer recursos ni intervenir en el juicio de otra manera. A mi juicio que es positiva la adición, pues éste servidor público desde luego tiene interés en que se niegue el amparo al quejoso y hay que oírlo. **(Ricardo Ojeda Bohórquez, Tomo II, páginas 827 y 828)**

---

La última reforma que se hizo al artículo 155 de la Ley de Amparo es una demostración, objetiva y palpable, de la necesidad de que el Ministerio Público del proceso sea el tercero perjudicado en el amparo en que se impugnan resoluciones jurisdiccionales en materia penal y si se acepta que sea tercero el Ministerio Público, esta reforma debe derogarse. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1071)**

---

"artículo 155.- una vez desahogado en sus términos el periodo de prueba, se citará para la celebración de la audiencia constitucional. abierta la audiencia constitucional, .....

el quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de demandas promovidas en términos del artículo 116 bis de esta ley, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, .....". **(Jesús González Moreno, Tomo III, página 1816)**

ARTICULO 150.- Con texto igual al vigente del artículo 155, excepto que se propone derogar su último párrafo, ya que ahora se propone incluir como parte al ofendido o víctima del delito. **(David Ancira Martínez, Tomo III, página 1932)**

---

ARTÍCULO 155. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare.

En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente, pero sin exigir que sus alegaciones se hagan constar en autos, y sin que los alegatos puedan exceder de media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas.

El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la demanda. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2239)**

El artículo 155 de la Ley de Amparo dispone: "Abierta la audiencia (del juicio) se procederá a recibir por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda." En mi concepto esta disposición es una ficción legal o bien un precepto que no se ha cumplido en muchas ocasiones por múltiples motivos. Y sí ha causado bastantes problemas con el consiguiente detrimento de la función de los órganos jurisdiccionales de la Federación, por reposiciones de procedimiento, criterios contradictorios, aunque ya resueltos por una jurisprudencia que muchos pudieran no conocer.

En la práctica considero casi imposible que todas las resoluciones puedan dictarse "en la audiencia" a continuación de la recepción del pedimento del Ministerio Público. Baste señalar que la recepción de probanzas en la misma audiencia origina que deba hacerse un análisis de esas probanzas, aunque ya se tuviera una debida precisión de la litis. Ese análisis en muchas ocasiones requiere de una gran reflexión.

Además, considero que el pedimento del Ministerio Público debe recibirse luego de las pruebas, con el objeto de que el quejoso, las autoridades responsables y en su caso el tercero perjudicado, puedan expresar en sus alegatos lo que a su derecho convenga en relación con el pedimento, que yo lo considero propiamente también como unos alegatos.

PROPONGO así, que la nueva disposición correlativa al actual artículo 155, diga: "Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, en su caso el pedimento del Ministerio Público y los alegatos.

La sentencia se dictará dentro del término de quince días...” (o en el lapso que se estime conveniente de acuerdo a las diversas propuestas que se recaben).**(José Manuel Mojica Hernández, Tomo IV, páginas 2295 y 2296).**

---

Otra propuesta es relativa al último párrafo del artículo 155, que se ubica en el capítulo IV, título segundo, libro primero. Este párrafo refiere: El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la demanda. Aquí sería conveniente adicionar que para efecto de que esté en aptitud de alegar, se le debe correr traslado con copia simple de la demanda. Y en este orden de ideas, también se debe adicionar en el artículo 120 de la propia ley, que el quejoso deberá exhibir una copia de la demanda para que el Ministerio Público formule alegatos.

El sustento de esta propuesta lo encontramos en el hecho de que en la actualidad los jueces de amparo únicamente notifican al Ministerio Público que actúa en el proceso penal, la prestación de la demanda (porque así lo señala la ley), sin embargo, el representante social del fuero común se encuentra imposibilitado para alegar pues desconoce el contenido de lo demandado por el quejoso. **(Flor de María López González, Tomo IV, páginas 2623 y 2624).**

SEGUNDA: MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 155 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO.

SEGUNDA: Adicionar a la nueva Ley de Amparo, un término perentorio dentro del cual y sin rebasarlo el Juez Federal deba fallar el juicio constitucional.

En la práctica y como Secretario y Juzgador me he dado cuenta de los inconvenientes que reviste el señalamiento de términos utópicos que nunca se cumplen y que lejos de ser una regla se convierte en excepción. En ese concepto debo señalar se encierra el relativo a que la sentencia de amparo debe pronunciarse una vez celebrada la audiencia constitucional pues ello como excepción se cumple.

Por ello, propongo que en lo sucesivo, se señale de modo expreso un término prudente dentro del cual el Juez debe fallar la instancia. Por lo que a modo de propuesta, credo debería disponerse que la sentencia de amparo deberá pronunciarse dentro del término de quince días hábiles siguientes a la celebración de la susodicha audiencia, esto permitirá que todo quejoso tendrá ya la seguridad jurídica de que su asunto no se prolongará por mayor término del propuesto y además para el juzgador sería un aliciente poder proponer el dictado de sus resoluciones sin tener la preocupación de que un asunto no lo ha fallado dentro del término legal. Pudiendo con ello, efectuar una adecuada programación de sus dictados. El término que se propone quince días obviamente, lo tomo en base a mi experiencia personal siendo funcionario de Juzgados Mixtos pero el mismo tendrá que determinarse en base a un consenso general del País, tomando además en cuenta que

existen asuntos que por su volumen o complejidad requieren de un mayor análisis. Pero lo que sí considero debe existir es un término prudente para el dictado de aquellas sentencias. **(José Waldemar Alvarado Ríos, Tomo IV, páginas 2698 y 2699).**

---

Artículo 155 BIS.- Deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos en los juicios de amparo en que sean parte como quejosos o como terceros, los núcleos agrarios o ejidatarios o comuneros en lo individual, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios. **(Gilberto J. Hershberger Reyes, Tomo IV, página 2732).**

---

#### Artículo 155 de la Ley de Amparo

Se considera que debe ser reformado, en virtud de que ordena se le haga del conocimiento del Agente del Ministerio Público adscrito a los juzgados en Materia de Procesos, de los juicios de garantías en materia penal, en donde se señale como acto reclamado algún mandamiento judicial para que formule alegatos.

Dicho artículo se refiere al representante social que conozca del proceso pero no especifica de que fuero, ya que también los órganos jurisdiccionales del fuero común tienen facultades de librar órdenes de aprehensión y cuentan con un Agente del Ministerio Público adscrito, o con varios; por otra parte, tampoco dispone por conducto de quien, el Ministerio



Público del Fuero Común puede allegar sus alegatos ante el juez de amparo en estos casos, pues la misma Ley de Amparo no lo reconoce personalidad jurídica como parte en el juicio de garantías. (Josefina Mondragón Lerma, Tomo V, páginas 36 y 37)

---

Artículo 155, último párrafo

Artículo 180

b) Consideraciones o motivos que explican la aportación

En el Diario Oficial de la Federación publicado el día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, se adicionó un último párrafo al artículo 155 de la Ley de Amparo. Tal precepto legal prevé:

"[...] - ...

El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la demanda"

Dicha disposición, en apariencia de no mayor complejidad, en la práctica diaria ha generado diversos criterios acerca de su aplicación, pero fundamentalmente propicia el cuestionar la utilidad de esa reforma, esto es, si trajo algún resultado favorable a los gobernados en la tramitación del juicio de garantías.

En el Congreso Nacional de Jueces de Distrito, celebrado en la ciudad de México, los días seis al nueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, tuve el honor de poner a consideración de los asistentes la ponencia intitulada: "El carácter de parte del Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado penal responsable; su notificación e intervención, artículo 155 de la Ley de Amparo". Dicho trabajo buscaba unificar la forma en que debe notificarse a la Representación Social adscrita a la responsable, por estar vigente la norma y ante la urgencia de compartir criterios a nivel nacional, en beneficio del propio gobernado, con independencia de que en su oportunidad se pudiera cuestionar la utilidad de ese precepto legal.

A la fecha de presentación de esta propuesta, cerca de un año de la entrada en vigor de la disposición, reiteramos que la inclusión de la hipótesis prevista en el artículo 155, último párrafo, de la Ley de Amparo, ha ocasionado disparidad en la forma de realizar la notificación al Agente del Ministerio Público adscrito a la responsable, entre ellas:

1ª. Opción: Enviar oficio en forma directa al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal de donde deriva el acto reclamado, haciendo de su conocimiento la presentación de la demanda y la posibilidad de formular alegatos por escrito.

2ª. Opción: Notificar mediante oficio al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal al que se atribuye el acto reclamado, con copia de la demanda de amparo

3ª. Opción. Dependiendo del número de autoridades señaladas como responsables (ejemplo: todos los jueces comunes y federales en el Distrito Federal), esperar a que llegue el informe y obtenida la certeza del acto, notificar exclusivamente al Ministerio Público adscrito al juzgado que emitió el acto reclamado, o de ser un solo juez responsable, notificarle mediante oficio al Representante Social .

4ª. Opción: Solicitar al juez penal responsable que, en caso de ser cierto el acto reclamado, notifique en el expediente de donde deriva dicho acto al Ministerio Público la presentación de la demanda de amparo, y que se encuentra en posibilidad de formular alegatos por escrito. Debe enviar el juez penal la constancia de notificación al juez de Distrito.

En el Congreso Nacional de Jueces se sentó como conclusión de la ponencia que, mientras continuara vigente la disposición, adecuado resulta el notificar por conducto de la responsable a dicho Fiscal en forma personal, siempre y cuando aquella autoridad acepte el acto reclamado, sin que fuera necesario acompañar copia de la demanda, pues tal Representación no fue incluida como parte expresa en el artículo 5º de la Ley de Amparo, y no hubo reforma al artículo 120 de la Ley Reglamentaria, en cuanto al número de copias a adjuntar con la petición de garantías; puntos que sin duda generaron un debate entre los asistentes y votación mayoritaria.

Empero, ¿qué resultado práctico genera la notificación de la presentación de la demanda al Agente del Ministerio Público adscrito a la autoridad responsable?

Desde el punto de vista de la teoría general del proceso, resulta difícil sostener que si ese Representante Social no es parte sea un auxiliar, como los testigos o los peritos, pues sí tiene interés en que se dicte sentencia que le beneficie. Será entonces una parte secundaria con sólo la posibilidad de alegar por escrito. De lo contrario habría que entregarle copia de la demanda, interrogatorios, cuestionarios, notificarle la sentencia y todas las demás obligaciones inherentes a las partes en el juicio.

El último párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo sólo brinda al Ministerio Público que actúa ante el juzgado penal responsable la oportunidad de formular alegatos por escrito en los juicios en los cuales se reclamen resoluciones jurisdiccionales.

Sin embargo, en la práctica diaria en los Juzgados de Distrito, pocos son los casos en que el Ministerio Público adscrito al tribunal responsable presenta alegatos por escrito, casi al límite de considerar excepcional que se presenten, pues la regla general es la no intervención del Agente adscrito a la autoridad responsable.

En estos juicios de amparo, si bien no obligatoriamente, en los muy contados casos es preciso dar contestación a los alegatos que plantee el Ministerio Público adscrito al juzgado penal responsable, dando así cumplimiento a la finalidad del artículo 155, último párrafo, de la Ley de Amparo: brindar una posibilidad más al ofendido por un delito, que ordinariamente no se le considera tercero perjudicado acorde con el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria en consulta.

No obstante lo anterior, esa misma finalidad se cumple con la posibilidad del ofendido de tener acceso al expediente a través del Representante Social Federal adscrito al Juzgado de Distrito.

Más, ¿cuáles fueron los motivos que inspiraron al Legislador a incluir el último párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo?

En la Decimonovena Reforma a la Ley Reglamentaria de referencia, en el Diario de los Debates de la Cámara de Senadores, consta que en la Iniciativa presentada por el Presidente de la República se sostuvo:

“...Finalmente, es necesario que en aquellos juicios de amparo en que se impugnen resoluciones jurisdiccionales dictadas en procesos penales, se garantice la intervención del ministerio público que participa en el proceso penal respectivo, pues es dicha institución la que puede manifestar con mayor claridad el interés que representa en relación a los juicios en que interviene...”

Una vez turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Decreto, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, previo dictamen en primera y segunda lectura se efectuaron las Modificaciones a la Iniciativa, que fueron sometidas a la Asamblea; en el considerando décimo quedó establecido:

“...[...].- En los artículos 138 y 155 de la reforma, se establecen condiciones que el juez impone al quejoso, por lo que se refiere a su

comparecencia ante la autoridad que lo reclama –esto ocurre en el primero de ellos- y, en el segundo, a una de las facultades que tiene el Ministerio Público como parte en el amparo en el proceso penal, que se hace extensiva al amparo. Las comisiones unidas de dictamen, están de acuerdo con estas reformas. En consecuencia, estos artículos quedarían: ...

Artículo 155.- ...

El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la demanda”.

En la discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto propuesto a la Asamblea por la Comisión de Justicia, el Diputado Orlando Alberto Paredes Lara expresó:

“...Por último, en relación al 155, sentimos que al darle la oportunidad al Ministerio Público para participar en el juicio constitucional en el que se impugnen resoluciones jurisdiccionales, se redundará en una mayor certeza de las resoluciones que se dicten, ya que el Ministerio Público como institución, como parte en el proceso penal, puede aportar mayores elementos que permitirán combatir a la delincuencia dentro del proceso.

Así tenemos que a través de la reforma que ocupa a esta Cámara, todos pues, legisladores, abogados, jueces y ministerios públicos tenemos una meta común, proteger el interés de la sociedad, garantizar los derechos

del hombre, mantener la paz social; en una palabra, cumplir el ideal de la justicia...”

En una intervención posterior, el diputado sostuvo:

“...¿Qué podemos decir para apoyar nuestro artículo 155? Que se le está dando el espacio legal a quien representa a la sociedad, a quien ejerce la acción persecutoria y a quien pueda comparecer en el juicio de amparo en un proceso legal que se le siga al quejoso, de tal manera que eso dará mayor certeza a la resolución que se dicte por el juez de distrito que conozca la causa”

El Diputado Benito Mirón Lince externo:

“Efectivamente, no me referí concretamente al 155, porque el tiempo es muy corto. Lo que le podría decir que la propuesta, a fin de que el Ministerio Público del proceso tenga intervención en el juicio de amparo en el que se impugnen resoluciones jurisdiccionales dictadas en los procesos penales, de alguna manera ya está contemplada para los efectos del juicio de amparo indirecto en el artículo 155 y en el artículo 180. Nosotros no tenemos mayor objeción a esto, pero sí decimos que ya está, no es necesario instrumentarla nuevamente porque está aquí”.

El Diputado Miguel Sadot Sánchez Carreño realizó la siguiente manifestación:

“...Además de esta fracción y de este artículo, se ha señalado aquí que con relación al artículo 155 es innecesaria su incorporación, toda vez que ya aparece en el texto de la Ley de Amparo.

Yo quiero comentarle a nuestro amigo, el diputado Mirón Lince, que se trata de dos situaciones distintas: el artículo 55 (sic) está hablando de la sustanciación del juicio de amparo indirecto y el artículo 180, que está en el Capítulo IV, se refiere a la sustanciación del juicio de directo.

Por eso es que el artículo 180 dice textualmente: “el tercero perjudicado y el agente del Ministerio Público que hayan intervenido en el proceso en asuntos del orden penal, podrán presentar sus alegatos por escrito directamente ante el tribunal colegiado de circuito.

La reforma que estamos proponiendo o que se propone a través del dictamen que presenta la comisión, se encuentra referida al ministerio público que actúe en el proceso penal al juzgado en donde sea ventilado el proceso del cual se deriva el acto que se impugna.

Se busca con la intervención del ministerio público que está adscrito al juzgado penal, el juez amparista pueda tener una información directa. Bien pudiera haberse planteado que el ministerio público que está adscrito al juez, a través del ministerio público que está adscrito al juzgado que está conociendo el amparo, hubiera podido formular sus alegatos. Pero la inmediatez procesal que le permite al juez de amparo, lo va a llevar fundamentalmente al conocimiento de la verdad legal y a una resolución más justa, porque quien está impugnando, precisamente, es el



representante social que se encuentra adscrito al juez del cual se deriva el proceso penal.

Por eso creemos que no existe una incongruencia y que al contrario lo mismo que se está haciendo ya en el amparo directo ante el tribunal colegiado, nosotros lo hacemos ahora ante el juzgado de distrito...”

El Diputado Alberto López Rosas dijo:

“...Creo, compañeros diputados, que se está dando al Ministerio Público una amplitud de acción. El Ministerio Público actúa en primera instancia, en primer lugar, como investigador de los delitos, es quien integra la averiguación, es el órgano acusador. Cuando el inculcado o cuando el acusado llega ante su juez, ante el juez de la causa, ante el juez de la instancia, ya tiene también un agente del Ministerio Público adscrito y es éste, el Ministerio Público adscrito, quien representa a la sociedad.

Cuando el quejoso acude al amparo asiste también un agente del Ministerio Público Federal a dar seguimiento al trámite del juicio de garantías. Por tanto, la propuesta del artículo 155 nos parece inútil, ociosa y sin un verdadero sentido, porque el Tribunal de amparo no juzga los hechos del delito; juzga las violaciones a las garantías individuales y ésta es una demostración de que lo único que se está pretendiendo es restringir la esfera de libertad del ciudadano para ampliar la del Estado sobre el mismo ciudadano. Cuando éste es culpable es correcto, pero cuando éste es inocente creo que el Estado se está ensañando en el ámbito personal de ese ciudadano.

Creo que debemos preocuparnos más por el perfeccionamiento de las indagatorias y no alejar la Ley de Amparo de su verdadero espíritu y su verdadero sentido, ¡Esto es justicia!...”

El Diputado Paredes Lara opinó:

“...Por otro lado, se dice que el agente del Ministerio Público del proceso penal donde el inculcado ocurre al juicio de amparo que sería ocioso que interviniera. ¿Cómo es posible si en el artículo 180 se establece expresamente la intervención del Ministerio Público en el proceso de la causa, por qué no va a ser posible ya legalmente su intervención en el juicio de amparo y más aun cuando su intervención es únicamente para hacer los alegatos escritos?.

De tal forma que insistimos en que el dictamen relacionado con el artículo 155 deberá ser aprobado en sus términos”

La adición del último párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo se aprobó por 314 votos en pro y 102 en contra.

Podemos concluir entonces, los motivos que en principio impulsaron al legislador fueron el brindar la oportunidad al Ministerio Público adscrito al órgano jurisdiccional penal responsable para participar en el juicio de amparo, a efecto de dar mayor certeza en las resoluciones que dicten los jueces de Distrito, pues al ser parte la Representación Social en el proceso puede aportar al órgano de control constitucional mayores elementos en

contra de la delincuencia; que a pesar de la existencia de una institución similar en el artículo 180 de la Ley Reglamentaria, en el amparo directo, buscó dar esa misma posibilidad de alegar por escrito en la vía indirecta. En opinión de un sector de los legisladores se da mayor acción a la institución ministerial, a pesar de ya estar representada la sociedad, por el agente adscrito al juzgado de amparo, se da una mayor oportunidad al Estado; empero, aun ante las oposiciones fue aprobada la adición del último párrafo al artículo 155 de la Ley de Amparo.

“Dar mayor certeza en las resoluciones que dicten los jueces de Distrito, pues al ser parte la Representación Social en el proceso puede aportar al órgano de control constitucional mayores elementos en contra de la delincuencia”.

Dicha finalidad no se obtiene por el solo hecho de notificar al Agente adscrito a la autoridad responsable, pues claro resulta que el Juez de Distrito está obligado, en términos de los artículos 76 bis, fracción II y 77, de la Ley de Amparo, a analizar todas y cada una de las probanzas que obran en el expediente de donde deriva el acto reclamado en materia penal, y de existir algún motivo para conceder la tutela federal, hacerlo, aun cuando el Ministerio Público pudiera alegar lo contrario; porque las constancias se encuentran en el expediente, y por ende, la intervención del Representante Social que tuvo participación en el proceso de donde deriva el acto reclamado no genera por ese hecho la mayor certeza en el dictado de la resolución.

También se duplica la representación de la Institución Ministerial y en consecuencia del interés social, ya salvaguardado por el Agente adscrito al Juzgado de Distrito.

En consecuencia, cabe considerar que la notificación de la presentación de la demanda de amparo prevista por el artículo 155, último párrafo, de la Ley Reglamentaria, no tiene resultado práctico alguno. Que justifique mayores trámites para el juicio de garantías, que preferible sería contara con mayor celeridad, para brindar la posibilidad real de salvaguardar las garantías individuales del quejoso.

Por identidad de razón, el brindar la posibilidad de presentar alegatos por escrito al Agente del Ministerio Público que intervino ante la responsable en asuntos del orden penal, prevista por el artículo 180 de la Ley de Amparo, viene a ser por regla general innecesario en el amparo directo, pues acorde con el artículo 78 de ese ordenamiento legal, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca demostrado ante la responsable, y los alegatos no forman parte de la litis en el juicio.

La notificación de la presentación de la demanda al Agente del Ministerio Público adscrito a la responsable, que interviene en el proceso de donde deriva el acto reclamado, genera una carga adicional de trabajo a los órganos jurisdiccionales, que si bien en forma aislada en cada expediente no presenta mayor trascendencia, sí la tiene ante el número de asuntos que se tramitan en contra de resoluciones jurisdiccionales de índole penal.

La redacción que resultaría al incorporar los comentarios.

Por los anteriores razonamientos se propone suprimir el último párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo, que corresponde al trámite del amparo indirecto; así como la posibilidad del Agente del Ministerio Público que haya intervenido en el proceso en asuntos del orden penal de presentar alegatos por escrito directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito, en el amparo directo, prevista por el artículo 180 de la Ley Reglamentaria. **(José Eduardo Tellez Espinoza, Tomo V, página 58 a 69)**

---

Salvo los amparos en materia penal cuando se reclaman detenciones fuera de normatividad o maltratos, en todas las demás materias los actos reclamados constan en actuaciones documentadas, y por ello en un porcentaje considerable de amparos la prueba adecuada es la documental consistente en copias certificadas de Actuaciones.

Si la prueba documental se aporta en el momento de la celebración de la Audiencia Constitucional, lo que trae por resultado que cuando se quiere objetar algún documento se tenga que suspender la Audiencia para efecto que incidentalmente se acredite la objeción.

Pero cuando la prueba documental consiste en un considerable volumen de folios que deban ser materia de un cuidadoso análisis implica que sea materialmente imposible exigirle al Juez cumpla con lo dispuesto en el artículo 155 primer párrafo de dictar la sentencia de inmediato.

La experiencia jurisdiccional nos ha dicho que la idea de la simplicidad y rapidez en el trámite del Juicio de Amparo se ha perdido.

El Código Federal de Procedimientos Civiles al tratar el tema de las pruebas señala formas y plazos para el desahogo de cada una de ellas, por lo que se propone se reglamenten el ofrecimiento y desahogo de la documental, de la pericial, de la inspección judicial, y de la testimonial.

Vencido el término para que se rinda los informes con justificación sabrá el quejoso que probanzas debe aportar, así para el desahogo de la documental publica deberá hacerse dentro de los diez días siguientes al que se hubiere notificado el contenido de los informes con justificación o en su caso la certificación de que no se produjo el informe.

Aportada la documental dentro de los tres días siguientes a que se tengan por exhibida deberán presentarse las objeciones del caso y si para acreditar la objeción fuere menester desahogar la prueba pericial esta deberá hacerse mediante audiencia que se fije a realizar dentro de los siguientes cinco días.

Las pruebas pericial, testimonial e inspección judicial deberán también desahogarse en el término de diez días contados a partir de la fecha en que se da a conocer el informe con justificación o la certificación de que no se rindió.

Desahogadas las pruebas el Juez de Distrito deberá citar a la Audiencia Constitucional, donde realmente debe oír los alegatos verbales, que comparará con las actuaciones judiciales.

Considerando los sistemas de escritura por medio de computadora es posible que a cada negocio se vaya abriendo su archivo en la computadora y así conforme se vayan desahogando las pruebas se tengan ya hechas las valorizaciones correspondientes. Esto es, la Audiencia Constitucional será ya únicamente cerrar el "rompecabezas" por que el día de la celebración de la Audiencia ya debe estar preparado el juzgador y en el Archivo de su computadora tener la parte histórica o "los resultandos", si no encontró una causal de sobreseimiento, pasar a la valorización de las probanzas, los alegatos verbales de los interesados les serán de utilidad por si se le destaca algún punto que no se advirtió en el estudio del negocio y a continuación se firmará la resolución del caso. **(Javier Herrera Anaya, Tomo V, páginas 203 a 205)**

---

Artículo 155. Estando integradas las probanzas de las partes el Juez de Distrito citará a la Audiencia Constitucional que se deberá verificar dentro de los diez días siguientes.

Abierta la Audiencia el Juez oír los alegatos sin que puedan exceder de media hora cada parte, incluyendo las replicas y contrareplicas.

Cuando se reclamen actos que importen peligro de privación de la libertad, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de

los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, se asentarán en actuaciones extractos de los alegatos. **(Javier Herrera Anaya, Tomo V, página 210)**

---

6.- Derogar el último párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo, que dice:

"Art. 155.- ...

...

...

...

El Ministerio Público que actúen en el procedimiento penal, podrá formular alegatos por escrito en los juicios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificársele la presentación de la demanda".

Ello en atención a que en la práctica, nunca formulan alegatos, aunado a que en el caso de que la causa penal se ventile en algún Juzgado de Distrito, y en contra de alguna determinación de éste, se promueva Juicio de Garantías, el Represente Social adquiere una doble participación, ya que conforme al artículo 5º, fracción IV, es parte dentro del procedimiento constitucional. **(Gustavo Aquiles Gasca, Tomo V, página 240)**



**Artículo 156.** En los casos en que el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad o autoridades responsables de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia, o en aquellos otros a que se refiere el artículo 37, la substanciación del juicio de amparo se sujetará a las disposiciones precedentes, excepto en lo relativo al término para la rendición del informe con justificación, el cual se reducirá a tres días improrrogables, y a la celebración de la audiencia, la que se señalará dentro de diez días contados desde el siguiente al de la admisión de la demanda.

### **PROPUESTAS**

El artículo 156 debe derogarse por inútil, ya que para aplicarlo habría que estudiar el fondo del asunto, lo que se hará en la sentencia y no al admitir la demanda. Por otra parte, tres días para rendir el informe justificado es un plazo demasiado corto y 10 días para celebrar la audiencia, a partir del día siguiente a la admisión de la demanda, es un plazo breve que obligará a diferir la audiencia por más de un motivo, como puede ser la falta de emplazamiento a una de las partes, la no entrega de las copias certificadas solicitadas a una autoridad, etc.

Aquí hay que hacer un comentario: las reformas de escritorio no funcionan. Los tribunales tienen un ritmo de trabajo en ocasiones imposible de alterar; por ello disponer que la audiencia deba celebrarse en 10 días a partir de la fecha de admisión de la demanda es utópico. El auto admisorio

se fecha el primero de diciembre, teóricamente la audiencia deberá celebrarse 10 días después o sea el día 11, pero quitando los días inhábiles, que se supone son un sábado y un domingo, el décimo día es el día 13; pero el acuerdo de primero de diciembre se publica el día 2, surte sus efectos de notificación el día 3, y hay dos o tres terceros perjudicados que emplazar; pero además, pudiera ser que la materia implicará, para demostrar el interés jurídico, una pericial o una testimonial y en los días hábiles que quedan entre el día de la audiencia y el 13 de diciembre, no se podrán desahogar esas pruebas, con lo que el plazo de 10 días es puramente teórico. Por ello, repito, las reformas a una ley procesal hechas en el escritorio o por un teórico que carezca de práctica, no funcionan nunca. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1071 y 1072)**

---

El artículo 156 debe suprimirse por inútil, pues ya dije que la determinación de si el acto reclamado se fundó en una ley contraria a la Constitución, debe hacerse en la sentencia y no al admitir la demanda, como es el supuesto de este precepto. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1093)**

---

**ARTICULO 151.-** Se propone derogarse el artículo 156 vigente, dado que con la sugerencia que se hace se modifica la formula otero y además se deroga la jurisdicción concurrente pero sobre todo, porque el término para rendir informes y dictar resolución no se estima excesiva. **(David Ancira Martínez, Tomo III, página 1933)**

---

El presente trabajo se refiere a la competencia concurrente prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo relacionada a la fracción XII del artículo 107 Constitucional.

Este último artículo establece que cuando exista violación de garantías a los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 fracciones I, VIII y X Constitucionales, el quejoso podrá reclamar mediante amparo las violaciones de referencia, a su elección, ante el Juez de Distrito que corresponda o ante el Superior del Tribunal que cometa la violación.

A su vez, el artículo 156 de la Ley de Amparo establece el procedimiento que debe seguirse para la substanciación del juicio correspondiente ante el Superior del Tribunal que cometa la violación, precisando que se sujetará a las mismas disposiciones que para la tramitación del amparo indirecto ante el Juez de Distrito se establecen; haciendo la salvedad de que el plazo para la rendición del informe justificado se reducirá a tres días, y que la celebración de la audiencia constitucional tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes contados desde el siguiente al de su admisión.

Asimismo, por disposición de la fracción XII del artículo 17 Constitucional en relación al artículo 83 fracciones II y IV de la Ley de Amparo, las resoluciones que pronuncie el Superior del Tribunal que cometió la violación podrán impugnarse mediante el recurso de revisión, en el que en este caso ya no hace salvedad en cuanto al plazo que el artículo 86 establece para la interposición del recurso.

Así las cosas, es evidente que existe una marcada desproporción entre los plazos que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo, con el que a su vez establece el artículo 86 de la misma, dado que el término para la celebración de la audiencia constitucional y el que se establece para la interposición del recurso de revisión, es el mismo.

Lo anterior resulta ilógico dado que con el plazo que establece el artículo 156, en cita, para la celebración de la audiencia constitucional, se limita el derecho que tiene el quejoso para aportar pruebas en los juicios constitucionales que se tramiten ante el Superior de la autoridad que cometió la violación. Máxime si tomamos en consideración que algunas pruebas, tales como la testimonial, pericial e inspección ocular deben anticiparse, con cinco días cuando menos a la celebración de la audiencia.

El hecho de que se señalen sólo diez días de diferencia desde la admisión de la demanda, hasta la celebración de la audiencia constitucional, da motivo a innumerables violaciones procedimentales, que redundan en un notable retraso en la impartición de la justicia federal; ya que de hacerse valer dichas violaciones en los agravios que se expresen al interponer el recurso de revisión, tendrá por efecto la reposición del procedimiento.

Por lo anterior, considero que si el espíritu del legislador al establecer la competencia concurrente a que me refiero, fue el de dar oportunidad al quejoso, de tramitar el juicio de garantías indistintamente ante el Juez de Distrito o ante el Superior de la autoridad que cometió la violación, el de lograr justicia federal que lo favorezca, con la disposición contenida en el artículo 156, se contraviene dicho espíritu legislativo.

En consecuencia, y tomando en consideración que los gobernados de acuerdo al artículo 17 Constitucional, tienen derecho a que se les administre justicia de manera pronta, expedita e imparcial, y que además dicha justicia debe ser equitativa a todos los gobernados; propongo que los plazos que establece el artículo 156 de la Ley de Amparo, sean los mismos que la misma ley establece para la tramitación del amparo indirecto ante el Juez de Distrito. Ya que se insiste es notable la diferencia que existe entre este artículo (diez días para la celebración de la audiencia constitucional) y el 147 de la misma ley que establece el plazo de treinta días para que se celebre el mismo acto procesal, pero ante el Juez de Distrito. (Irma Ramírez Rivera, Tomo IV, páginas 2767 a 2769).

---

ARTÍCULO 156.- En los casos en que el quejoso impugne la inconstitucionalidad de una ley declarada así por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su aplicación, o en aquellos otros a que se refiere el artículo 37, la substanciación del juicio de amparo se sujetará a las disposiciones precedentes, excepto en lo relativo al término para la rendición del informe con justificación, el cual se reducirá a tres días improrrogables, y a la celebración de la audiencia, la que se señalará dentro de diez días contados desde el siguiente al de la admisión de la demanda. (Salvador Bravo Gómez, Tomo V, páginas 32 y 33)

**Artículo 157.** Los jueces de Distrito cuidarán de que los juicios de amparo no queden paralizados, especialmente cuando se alegue por los quejosos la aplicación por las autoridades de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, proveyendo lo que corresponda hasta dictar sentencia, salvo los casos en que esta ley disponga expresamente lo contrario.

El Ministerio Público cuidará del exacto cumplimiento de esta disposición, principalmente en los casos de aplicación de leyes declaradas jurisprudencialmente inconstitucionales, y cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, de la libertad, o entrañe deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal.

### **PROPUESTAS**

Hay casos, y son frecuentes, en que en los Juzgados de Distrito se mande aclarar la demanda por requisitos distintos de los señalados en el artículo 146 de la Ley de Amparo y hay ocasiones en que se puede pensar, ante la repetición constante de las aclaraciones de demanda, si el Juez no ésta apostando a que no se satisfaga la prevención, para desechar la promoción y no tener que tramitar los amparos. Y si esto es así cabría en el artículo 146 expresar, de alguna manera, que la demanda sólo podrá mandarse aclarar cuando no se satisfagan algunos requisitos del artículo 116 o que no se hubiera precisado el acto reclamado o no se hubieren

exhibido las copias correspondientes y que, fuera de estas tres hipótesis, en ninguna otra pudiera mandarse a aclarar la demanda.

Congruente con la proposición de que se elimine al Ministerio Público como parte, deberán suprimirse el párrafo tercero del artículo 146 y el párrafo segundo del artículo 157. **(Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, página 1067)**

---

Del artículo 157 habría que quitar el segundo párrafo por inconstitucional, pues como dije con anterioridad, la facultad otorgada al Ministerio Público Federal, órgano del Ejecutivo, implica una invasión a la independencia del Poder Judicial, ya que cuidar que el Juez cumpla exactamente con sus obligaciones, significa una autoridad sobre el Juez y esto no es posible, por lo que hay que eliminar este párrafo.

Del primer párrafo de este precepto debe eliminarse la siguiente frase: “especialmente cuando se alegue por los quejosos la aplicación por las autoridades de leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia” y digo que hay que eliminarla, porque el caso queda comprendido en la obligación general del Juez de cuidar que no queden paralizados los juicios de amparo, es decir, todos los juicios.

La frase final del primer párrafo, o sea la salvedad a la obligación del Juez de que no queden paralizados los juicios, carece de sentido y de objeto, porque la ley no dispone que se paraliquen los juicios, sin que pueda afirmarse, validamente, que esto ocurre cuando se suspende el

procedimiento, como en el caso de la acumulación, ya que la suspensión del procedimiento en lo principal sólo dura en tanto se tramita el incidente que, lógicamente, debe resolverse en breve término para que se levante la suspensión. Y en esta hipótesis, el juicio no queda paralizado, porque los incidentes forman parte de él. (Jesús A. Arroyo Moreno, Tomo II, páginas 1072 y 1073)

---

Enmienda.

SE PROPONE LA INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 157 BIS COMO SIGUE:

TÍTULO TERCERO.

DE LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

ART. 157 BIS.- LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO:

I.- CUANDO EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCIÓN EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LA FRACCIÓN IV INCISO D) SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 107 CONSTITUCIONAL Y,

II.- CUANDO SE TRATE DE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL.

Motivos.

SIENDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EL ÓRGANO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL FEDERAL, DEBE EXISTIR UN PRECEPTO ESPECIAL DONDE SE ESTABLEZCA EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. EL ASPECTO DE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE



UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL, POR TRATARSE DE LA BASE SOBRE LA QUE DESCANSA EL ORDEN JURÍDICO NACIONAL, ES NECESARIO QUE LE CORRESPONDA CONOCER DEL MISMO EXCLUSIVAMENTE AL MÁS ALTO TRIBUNAL DE LA NACIÓN. (Fidencio Ramírez y Fidel Herrera Beltrán , Tomo II, páginas 1162 y 1163)

---

Todos los seres humanos que llevamos a cabo en alguna forma decidir o resolver situaciones que afecten a otras, nos olvidamos de revisar su naturaleza personal, y creo que a veces el mismo juzgador atraviesa por esa situación, por lo que esta propuesta es con el ánimo que el órgano jurisdiccional se sensibilice al dictar su resolución y le otorgue a todas las personas, su derecho natural a la defensa de sus intereses, y los coloque en igualdad de condiciones no tan sólo jurídicas, sino también físicas y mentales.

PROYECTO.- ARTICULO 157 BIS.- Para el caso de que alguna de las partes del juicio de amparo fuera una de las personas a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, antes de dictar su resolución definitiva, el juez revisará minuciosamente el expediente, verificando que las personas de que se trate hayan sido representadas en el proceso con la debida diligencia, pudiendo desahogar cualquier diligencia, inclusive tratándose de pruebas, que a su juicio hayan quedado pendientes y que se consideren importantes para el resultado del juicio de amparo.(Alejandro V. Pintos Romero, Tomo II, página 1378)

"Artículo 157.- los jueces de distrito, bajo su más estricta responsabilidad, pondrán los juicios de amparo en estado de resolución en un término que no exceda, en ningún caso, de noventa días a partir de su radicación; deberán, en todo caso, dictar sentencia y publicarla dentro de los quince días siguientes a la fecha de celebración de la audiencia constitucional".

Por la atención y benevolencia que tengan a bien prestar a estos breves y modestos comentarios, me es grato expresarles mi más atenta y distinguida consideración. ". (Jesús González Moreno, Tomo III, página 1816)

---

ARTICULO.- Se propone reformar el artículo 157 de la Ley vigente, para excluir la referencia a leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia, por la modificación a la formula otero. (David Ancira Martínez, Tomo III, página 1933)

---

ARTÍCULO 157. Los Jueces de Distrito o magistrado del Tribunal Unitario de Circuito cuidarán de que los juicios de amparo no queden paralizados, especialmente cuando se alegue por los quejosos la aplicación por las autoridades de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, proveyendo lo que corresponda hasta dictar sentencia, salvo los casos en que esta ley disponga expresamente lo contrario.

El Ministerio Público cuidará del exacto cumplimiento de esta disposición, principalmente en los casos de aplicación de leyes declaradas jurisprudencialmente inconstitucionales, y cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, de la libertad, o entrañe deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. **(Oscar Barrera Garza, Tomo III, página 2240)**

---

ARTÍCULO 157.- Los jueces de Distrito cuidarán de que los juicios de amparo no queden paralizados, especialmente cuando se alegue por los quejosos la inconstitucionalidad de una ley declarada así por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su aplicación, proveyendo lo que corresponda hasta dictar sentencia, salvo los casos en que esta ley disponga expresamente lo contrario.

El Ministerio Público cuidará del exacto cumplimiento de esta disposición, principalmente en los casos en los cuales se impugne la inconstitucionalidad de una ley declarada así por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su aplicación y cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, de la libertad, o entrañe deportación, destierro o alguno de los prohibidos artículos 22 de la Constitución Federal. **(Salvador Bravo Gómez, Tomo V, página 33)**



